



UNIVERSITAT DE  
BARCELONA

**MÁSTER EN CRIMINOLOGÍA, POLÍTICA CRIMINAL Y SOCIOLOGÍA JURÍDICO-PENAL**

**TRABAJO DE FIN DE MÁSTER:**

**“LA VOZ DE LA POBLACIÓN VICTIMIZADA”: UN ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE  
LOS MECANISMOS DE JUSTICIA EN TIEMPOS DE TRANSICIÓN EN EL NORTE DEL  
CAUCA COLOMBIANO”.**

**AUTORA:**

ANGIE LORENA GRACIA RAMÍREZ.

**TUTOR:**

DR. DAVID BONDIA GARCÍA.

**28 DE MAYO DEL 2021**

Quiero conmemorar a cada uno/a de las/os líderes/as sociales y defensoras/es de DDHH que han sido asesinados/as desde la firma del Acuerdo de Paz. Sus voces en el territorio han sido testimonio de vida, de lucha incasable y de resistencia por sus comunidades, y su ausencia deja entrever no solo la violencia, sino la falta de voluntad para lograr verdaderos consensos en pro de una paz estable y duradera.

El posacuerdo ha significado un recrudecimiento del conflicto, donde la vida -de quienes propenden acabar con esos patrones de injusticia, desigualdad e inequidad- está en constante riesgo, y donde alzar la voz y resistir con valentía tristemente termina significando convertirse en un cifra, en una estadística más, que denota no solo la indolencia e ineficiencia estatal, sino una completa omisión a la hora de reconocer las historias de vida y de resiliencia que hay detrás de cada una las personas que han sido asesinadas y victimizadas en su inagotable lucha por la paz de Colombia.

*A mi familia, Leo, David, Gloris, son el motor de cada lucha  
y de cada sueño que se va materializando en mi vida  
a pesar de las adversidades. Gracias.*

## ÍNDICE:

INTRODUCCIÓN .....	1
1. Objetivos de la investigación:.....	3
1.1. Objetivo general: .....	3
1.2. Objetivos específicos:.....	3
2. Pregunta de investigación.....	3
3. Metodología.....	3
4. Estructura de la Investigación .....	5
CAPÍTULO 1: JUSTICIA Y CATEGORÍA DE VÍCTIMA.....	8
1. ¿Justicia transicional o “justicia” en tiempos de transición?.....	8
1.1. Concepto general .....	8
1.2. Mecanismos de justicia en tiempos de transición .....	15
2. Justicia Restaurativa.....	17
2.1. Concepto general .....	17
2.1. Justicia restaurativa en tiempos de transición .....	19
3. La categoría de víctima .....	21
CAPITULO 2. LAS FASES DE LA JUSTICIA EN TIEMPOS DE TRANSICIÓN EN COLOMBIA.	
26	
1. Desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) .....	27
2. Ley de Víctimas y Restitución de Tierras .....	31
3. Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.....	36
CAPÍTULO 3: MECANISMOS DE JUSTICIA EN TIEMPOS DE TRANSICIÓN PREVISTOS PARA COLOMBIA EN EL ACUERDO FINAL DE PAZ: EL SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN.....	39
1. La centralidad de la población victimizada.....	40
2. Enfoque Diferencial.....	42
3. Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.....	44
3.1. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) .....	45
3.2. Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y con Razón del Conflicto Armado (UBPD) .....	48
3.3. Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) .....	50

3.3.01.	<i>Generalidades</i> .....	50
3.3.02.	<i>Enfoque restaurativo de la JEP</i> .....	52
3.4.	Medidas de Reparación Integral .....	53
3.5.	Garantías de No Repetición .....	55
CAPÍTULO 4: CONTEXTO HISTÓRICO Y SOCIAL DE LA SITUACIÓN EN EL NORTE DEL CAUCA. ....		57
1.	Generalidades.....	57
2.	Dinámicas de la violencia en el Norte del Cauca.....	60
3.	Presencia de Grupos Armados .....	67
3.1.	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). 68	
3.2.	Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) .....	71
3.3.	Movimiento diecinueve de abril (M-19) .....	74
3.4.	Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) .....	74
3.5.	Fuerza Pública.....	77
4.	Población victimizada en el Norte del Cauca: Organización y movilización social.....	78
4.1.	Comunidades Indígenas .....	80
4.2.	Comunidades afrodescendientes .....	84
4.3.	Comunidades Campesinas.....	85
CAPITULO 5: PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN VICTIMIZADA: UN ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE JUSTICIA EN TIEMPOS DE TRANSICIÓN DESDE LA REALIDAD TERRITORIAL DEL NORTE DEL CAUCA. ....		88
1.	Participación en los componentes de Verdad .....	90
1.1.	¿Cómo se planteó?.....	90
1.1.1.	<i>En la CEV</i> .....	90
1.1.2.	<i>En la UBPD</i> .....	92
1.2.	¿Cómo se está llevando a cabo en el territorio Nortecaucano? .....	93
1.2.1.	<i>En la CEV</i> .....	93
1.2.2.	<i>En la UBPD</i> .....	100
2.	Participación en el componente de Justicia .....	102
2.1.	¿Cómo se planteó?.....	102
2.2.	¿Cómo se está llevando a cabo en el territorio Nortecaucano? .....	105
3.	Participación en la Reparación Integral .....	114
3.1.	¿Cómo se planteó?.....	115

3.2. ¿Cómo se está llevando a cabo en el territorio Nortecaucano? .....	116
4. Participación en las Garantías de No Repetición.....	121
4.1. ¿Cómo se planteó? .....	121
4.2. ¿Cómo se está llevando a cabo en el territorio Nortecaucano? .....	123
CONCLUSIONES.....	127
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	132
ANEXO 1 .....	150
1. Base de datos Norte del Cauca .....	150
ANEXO 2 .....	154
1. Entrevista 1 .....	154
2. Entrevista 2 .....	173
3. Entrevista 3 .....	178
4. Entrevista 4 .....	184
5. Entrevista 5 .....	185

**TABLA DE MAPAS Y GRÁFICOS**

**Tabla de mapas**

**Mapa 1** ..... 58

**Mapa 2** ..... 66

**Mapa 3** ..... 71

**Mapa 4** ..... 73

**Mapa 5** ..... 76

**Tabla de gráficos**

**Gráfico 1** ..... 59

**Gráfico 2** ..... 60

**Gráfico 3** ..... 65

**Gráfico 4** ..... 79

## TABLA DE ABREVIATURAS

**ACIN** – Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.

**ACCU** – Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.

**ACONC** – Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca.

**AGC** – Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

**AUC** – Autodefensas Unidas de Colombia.

**BACRIM** – Bandas Criminales.

**CEV** – Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

**CNMH** – Centro Nacional de Memoria Histórica.

**CONPA** – Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano

**CRIC** – Consejo Regional Indígena del Cauca.

**DANE** – Departamento Nacional de Estadística.

**DIH** – Derecho Internacional Humanitario.

**DDHH** – Derechos Humanos.

**DNP** – Departamento Nacional de Planeación.

**ELN** – Ejército de Liberación Nacional.

**EPL** – Ejército Popular de Liberación.

**ETCR** – Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación.

**FARC-EP** – Fuerza Armadas Revolucionarias – Ejército del Pueblo.

**FIP** – Fundación Ideas para la Paz.

**FTA** – Fuerza de Tarea Apolo.

**GAPF** – Grupo Armado Post Farc.

**MAQL** – Movimiento Armado Quintín Lame.

**M-19** – Movimiento Diecinueve de Abril.

**JEP** – Jurisdicción Especial para la Paz.

**OIM** – Organización Internacional para las Migraciones.

**ONIC** – Organización Nacional Indígena de Colombia.

**ONU** – Organización de Naciones Unidas.

**PCN** – Proceso de Comunidades Negras.

**PDET** – Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

**PNIS** – Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos.

**RUV** – Registro Único de Víctimas.

**SIVJNR** – Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

**TOAR** – Trabajos, Obras y Actividad con contenido Reparador – Restaurador.

**UARIV** – Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

**UBPD** – Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en Motivo y en Razón del Conflicto Armado.

**USAID** – United States Agency for International Development.

## INTRODUCCIÓN

La población victimizada en el marco del conflicto armado en Colombia ha sido considerada el eje central dentro de los ámbitos normativo, político y social, configurados en torno a la justicia en tiempos de transición desarrollada en Colombia en lo que va del siglo XXI. Sin embargo, vale la pena hacer un análisis más profundo sobre la veracidad que dicho propósito refleja en realidad, porque a nivel macro se les ofrecen y prometen muchas cosas a esta población, pero ¿qué se hace realmente por ellas? Existen muchos pronunciamientos en donde ellas mismas señalan que no creen en el Estado, que el incumplimiento ha sido tan grande, que no confían en que exista realmente una política enfocada en trabajar por y para ellas.

La realidad de la población victimizada es compleja, sobre todo en un país tan polarizado y donde el alcance estatal en ciertas zonas -donde el conflicto armado y la violencia han sido tan crudos- es nulo. Por eso, hablar de ellas, sin hacer un análisis de lo que ellas dicen y piensan, resulta no solo un despropósito, sino también hace parte de ese patrón de incumplimiento y de olvido, que además ha llevado a que exista una “mercantilización” de la población que ha sido victimizada en el marco del conflicto armado, porque tanto el gobierno, como algunas organizaciones nacionales, internacionales e incluso organizaciones de la sociedad civil, se han encargado de deshumanizar a la población victimizada, convirtiéndola en una mera estadística que refleja hechos victimizantes, donde sus situaciones y vivencias reales prácticamente se desconocen. El apoyo en sus procesos personales y de verdadera reconciliación ha sido muy poco y los patrones de violencia continúan afectándolas de manera directa y constante.

Por lo anterior, en el presente Trabajo de Fin de Máster [TFM] se pretende investigar cómo se está llevando a cabo la implementación del acuerdo de paz en Colombia, específicamente lo establecido en el punto cinco (5), que insta el principio de que las *víctimas* son el eje central del acuerdo, esto, con el fin de verificar no solo si han tenido voz y capacidad de agencia, sino también dar cuenta de la implementación de los mecanismos de justicia en tiempos de transición pactados y que desarrollan sus derechos a la Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

La razón por la cual se quiere ahondar en el tema surge de la poca claridad que existe con relación a si este tipo de mecanismos que en principio se caracterizan por dejar a un lado



el punitivismo exacerbado e inverosímil en el marco de procesos de paz, utilizando herramientas de justicia restaurativa, que propenden por una construcción dialógica de los hechos acaecidos en el marco del conflicto armado, y que busca una verdadera contribución a la construcción de paz, realmente funcionan y son aplicables al contexto colombiano. Es claro que dichos mecanismos actualmente se están *implementando*, sin embargo, vale la pena escudriñar si esa implantación se ha venido realizando con la participación de la población victimizada, sobre todo, en zonas rurales fuertemente afectadas por el conflicto armado, como es el caso del Norte del Cauca, territorio que se analiza en la presente investigación.

Colombia no está en una etapa de posconflicto, está en una etapa de posacuerdo, que incluye sólo una parte de la multiplicidad de actores que siguen operando bajo la consigna de la violencia y del control territorial, lo que ha significado que en la actualidad (2018-2021) haya surgido una suerte de incertidumbre en lo que respecta al proceso de paz en Colombia, ya que su implementación se está dando en el marco de un cambio de gobierno, el cual no está de acuerdo con la premisa de la paz, incluso, desde que empezaron las negociaciones en la Habana (2012-2016). por esta razón, es importante hacerle veeduría al cumplimiento y a la implementación, porque la paz de un país no puede depender de un cambio de gobierno, sino que tiene que constituir una política de Estado, que refleje el añoro que tiene la sociedad civil, específicamente aquella que ha sido directamente afectada por el conflicto armado.

Cabe resaltar que a pesar de que en el año 2016 se llegó a un acuerdo directamente con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), esto no obsta para que los demás actores del conflicto contribuyan y hagan parte del proceso de transición. En ese sentido, tanto los grupos paramilitares y guerrilleros -que hoy en día perviven- así como la Fuerza Pública del Estado, están en su deber de contribuir en el curso de la transición a que las personas que victimizaron obtengan Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

El estudio de caso que se realiza en la presente investigación está focalizado en una zona ubicada al suroccidente de Colombia, la cual ha sido fuertemente afectada por el conflicto armado: el Norte del Cauca. Región donde no sólo han confluído diversos actores armados del conflicto armado, sino también distinguida por ser el asentamiento de comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, que han sido altamente victimizadas no solo por la violencia fruto del conflicto armado, sino también por dinámicas de injusticia social que se convierten en violencia estructural, derivadas de un evidente e histórico abandono estatal. Esta región, debido

a su ubicación geográfica, ha sido un punto estratégico para las guerrillas, los paramilitares, los cárteles del narcotráfico y la Fuerza Pública.

A continuación se da cuenta de la forma en la que se estructuró el trabajo investigativo, que incluye los objetivos de la investigación, la pregunta de investigación, la metodología utilizada y la estructura del trabajo, todo esto fue planteado de manera previa y es el cimiento de lo que se desarrolló a partir del capítulo primero. Adicionalmente, se pone de presente que el marco teórico/conceptual se planteó de manera independiente, corresponde al primer capítulo de la presente investigación.

## **1. Objetivos de la investigación:**

### **1.1. Objetivo general:**

Evidenciar si se han implementado los mecanismos de justicia en tiempos de transición planteados en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto colombiano, y cómo ha sido la participación de las víctimas del conflicto armado en dichos mecanismos, lo anterior, se realizará analizando el caso de la subregión del Norte del departamento del Cauca.

### **1.2. Objetivos específicos:**

- 1.2.1.** Determinar qué mecanismos de justicia en tiempos de transición se han implementado efectivamente en el Norte del Cauca.
- 1.2.2.** Establecer en qué medida están participando las personas victimizadas del Norte del Cauca en dichos mecanismos.

## **2. Pregunta de investigación**

¿Están participando las víctimas del conflicto armado del Norte del Cauca en los mecanismos de justicia en tiempos de transición implementados?

## **3. Metodología**

La metodología empleada en la presente investigación es de corte cualitativo. Con el objetivo de analizar si la población victimizada ha participado en los mecanismos de justicia en tiempos de transición, se realizó en un primer momento una revisión bibliográfica de fuentes

primarias y secundarias sobre el sujeto de estudio, teniendo como base autores/as que han planteado posiciones críticas respecto de la justicia en tiempos de transición, de la población victimizada y del conflicto armado en Colombia. Para el estudio de caso, además de revisar fuentes primarias se llevó a cabo un trabajo de campo -el cual se vio sujeto a modificaciones con la llegada de la pandemia- que consistió en la realización de una entrevista en profundidad a un líder campesino del Norte del Cauca antes de la pandemia, en el 2019, y cuatro entrevistas semiestructuradas que se realizaron a líderes/as de las comunidades indígenas y afrocolombianas que habitan la zona, en el 2021.

Esta metodología permitió ofrecer respuesta a la pregunta de investigación, donde la teoría crítica que se planteó en un principio sentó las bases y posteriormente se complementó con la información que ofrecieron los líderes/as en sus entrevistas.

En líneas generales, la investigación está basada en material bibliográfico proveniente de diferentes disciplinas, como las Ciencia Política, la Criminología, la Sociología, la Antropología y el Derecho. Dicho material bibliográfico es la base del primer capítulo, donde se revisaron fuentes primarias y secundarias sobre justicia en tiempos de transición, mecanismos de justicia en tiempos de transición, justicia restaurativa y categoría de víctima.

Para el análisis del caso se utilizaron como fuentes documentales, publicaciones institucionales y académicas sobre la justicia en tiempos de transición que se ha venido implementando en Colombia, así como sobre la descripción y análisis de la población que ha sido victimizada en el Norte del Cauca, teniendo en cuentas las características diferenciales que tienen. También se utilizó documentación publicada por los componentes del SIVJRNR que consistió en documentales, escritos, entrevistas, comunicados, jurisprudencia, así como documentos y material audiovisual publicado por diversas organizaciones de la sociedad civil que han tenido incidencia en la implementación del Acuerdo de Paz colombiano.

Cabe resaltar, que en un principio el estudio de caso se había planteado de manera diferente, versaba sobre un solo municipio del Norte del Cauca -Caldono- pero ante la imposibilidad de viajar a territorio, no solo por la llegada de la pandemia, sino también por un incremento desproporcionado de la violencia contra líderes y lideresas sociales y Defensores/as de DDHH; la determinación que se tomó fue abarcar una zona más amplia -el Norte del Cauca- ante la dificultad de encontrar información específica sobre ese municipio en particular y tener claridad sobre las dinámicas de violencia específicas del territorio. Sobre el

Norte del Cauca, se encontró más información y era viable lograr contacto con diferentes liderazgos para realizar las entrevistas.

Con ese aliciente, se recuperó parte del trabajo de campo que se realizó en el 2019, con la entrevista en profundidad a un líder campesino de la zona. Cabe resaltar que para el momento en el que se realizó la entrevista la situación del SIVJRNR y de Colombia eran otras. Finalmente, avanzada la pandemia este año (2021) se logra hacer el trabajo de campo de manera virtual, que consistió en cuatro entrevistas semiestructuradas realizadas a dos líderes y una lideresa afro, y a una lideresa indígena. Vale destacar que se agotaron varias vías de comunicación para entrevistar personas clave en el territorio y que pudieran dar cuenta de la participación que sus comunidades han tenido en los diferentes componentes del SIVJRNR, hay que resaltar que la población no fue muy receptiva en un principio, no solo por el contacto telemático, sino por el temor constate al que están sometidas/os por las amenazas que reciben, ellas/os intentan tener un perfil discreto con las personas que hablan, para evitar problemas. En este sentido se acudió a modo de complemento, a material audiovisual publicado por organizaciones de la sociedad civil y por las mismas instituciones del SIVJRNR, donde las personas victimizadas dan cuenta del proceso de participación que han tenido.

Todas la entrevistas fueron consentidas por los/as líderes/as de manera verbal, debido a que no tenían facilidad de imprimir y diligenciar un formato, así mismo, a lo largo de la investigación y del trabajo de campo, se ha optado por preservar su anonimato con el fin de protegerlos/as. En el anexo 2 se encuentran relacionadas las transcripciones de las entrevistas, se omiten los nombres de las personas que fueron entrevistadas con el fin de proteger sus identidades, cabe resaltar que respecto de las entrevista 4 y 5, tanto el líder como la lideresa no permitieron la grabación de la misma, razón por la cual solo se pondrán de presente las preguntas que se les realizaron durante la entrevista.

#### **4. Estructura de la Investigación**

La presente investigación se encuentra dividida en cinco capítulos. En el primer capítulo se construye el marco teórico y conceptual de la investigación, donde se ahonda en la construcción teórica y conceptual que se ha dado sobre justicia transicional, asumiendo una posición crítica sobre la misma, que parte de la necesidad de hablar de “justicia en tiempos de transición”, más que de justicia transicional. A renglón seguido, se abordan los mecanismos de justicia en tiempos de transición que se ha contemplado de manera genérica pueden ser

implementados en escenarios transicionales; así mismo, se destaca también el concepto de justicia restaurativa y las implicaciones que tiene su aplicación en contextos de transición; para finalmente hacer un análisis sobre el concepto de víctima, sobre la “categoría de” víctima.

En el segundo capítulo, se traen a colación la fases de la justicia en tiempos de transición que se han desarrollado en Colombia en lo que va del siglo XXI, y que son las siguientes: i) la desmovilización de las AUC; ii) la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras; y iii). El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de Una Paz Estable y Duradera. Se explica cada una de estas de manera sucinta, precisando los temas fundamentales que abarcaron y que permiten contextualizar la forma en la que se ha venido haciendo la transición en Colombia.

En el tercer capítulo, se refieren los mecanismos de justicia en tiempos de transición que se pactaron en el punto cinco (5) del Acuerdo Final de Paz firmado en el 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC-EP -el cual desarrolla el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición- se hace un análisis de la forma en la que se estipuló deben funcionar cada uno de estos mecanismos.

En el cuarto capítulo, se contextualiza la situación de Norte del Cauca, desde una perspectiva histórica y social. En una primera parte se hace referencia a las dinámicas de la violencia que han afectado a la zona nortecaucana, desde una perspectiva híbrida, desde la violencia estructural y desde la violencia que deviene del conflicto; en una segunda parte, se traen a colación los grupos armados que históricamente han hecho presencia en la zona y que se caracterizaron y han caracterizado por su actuar violento; para finalmente, en una tercera parte, profundizar en la población que ha sido victimizada en la zona, haciendo especial énfasis en las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, y en la forma en la que estas han resistido al conflicto.

Finalmente, el quinto capítulo recoge las experiencias de la población victimizada en el Norte del Cauca, respecto de la forma en la que han podido participar en los mecanismos y medidas que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Aquí se pone en evidencia en un primer lugar la forma en que se planteó debía participar la población victimizada, y en un segundo lugar, la forma como se han venido implementando los mecanismos en tiempos de transición en el territorio desde la perspectiva directa de liderazgos

representativos de la población que ha sido victimizada en el marco del conflicto: indígenas, campesinos y afrodescendientes.

## CAPÍTULO 1: JUSTICIA Y CATEGORÍA DE VÍCTIMA.

“En la medida en que realmente  
pueda llegarse a superar el pasado,  
esa superación consistiría  
en narrar lo que sucedió.”

**H. Arendt.**

El presente capítulo corresponde al marco teórico/conceptual base de la investigación, donde en un primer momento se pone de manifiesto la diferencia conceptual que existe entre los conceptos de *justicia transicional* y de justicia en tiempos de transición, así como se explican los mecanismos de justicia -que genéricamente se ha propuesto a nivel internacional- deberían ser implementados en procesos transicionales; en un segundo momento, se hace referencia al concepto de justicia restaurativa, así como a la percepción que se tiene de esta en periodos de transición; para finalmente, indagar en la categoría de víctima y en cómo esta pone de presente la necesidad de deconstruir la utilización de la palabra “víctima” dada la carga que tiene en los procesos de victimización de las comunidades, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, con la invitación a pensar desde su agencia y no desde la imposición de una categoría que funciona para poder acceder a beneficios jurídicos o derivados de la implementación de políticas públicas. Todos y cada uno de estos conceptos tienen una incidencia importante en el desarrollo de la presente investigación y son la base para entender el proceso transicional colombiano sobre el que se entrará a hablar a partir del capítulo segundo.

### **1. ¿Justicia transicional o “justicia” en tiempos de transición?**

#### **1.1. Concepto general**

Hablar de *justicia transicional* se ha vuelto todo un reto, no solo por las múltiples concepciones que se han construido en torno al fenómeno que esta entraña, sino también por la crítica que se ha generado respecto de su utilización como un campo donde todo cabe, donde se unen una serie de cuestiones heterogéneas y cambiantes, convirtiéndose así en lo que denominaría Laclau (2005) “un significante vacío”<sup>1</sup>. Por esa razón, es importante hacer un

---

<sup>1</sup> Este hace referencia a una cuestión que no tiene una definición conceptual sino que hace referencia a un proceso de nominación.

análisis de las diferentes teorizaciones que la academia desde diferentes disciplinas se ha encargado de construir sobre la *justicia transicional*, en la medida en la que esto ayudará a entender el panorama general, antes de entrar a estudiar la *justicia transicional* que se ha aplicado en el caso objeto de estudio en la presente investigación.

La acepción más conocida de justicia transicional se le reconoce a Teitel (2000) quien la concibe como la justicia asociada a periodos de cambio político, donde el ideal genérico de justicia debe ser desestimado, con el fin de lograr transitar hacia un sistema más liberal y democrático. Otros autores como Ambos (2009), Crocker (1999) y Uprimny (2006) concuerdan en que la *justicia transicional* es una forma mediante la cual las sociedades que han vivido periodos de totalitarismo, dictadura, autoritarismo o guerra, caracterizados por violaciones sistemáticas a los DDHH e infracciones al DIH, buscan transitar hacia la democracia o la paz, haciéndose cargo de lo sucedido en el pasado y lidiando con los efectos de las violaciones sistemáticas de derechos, mediante la implementación de una serie de mecanismos, medidas o procesos (Rincón Covelli, 2012).

Rincón Covelli (2012) abre el debate sobre la necesidad de replantear la definición que genéricamente se ha concebido sobre *justicia transicional*, haciendo referencia a un aspecto muy importante, y es que las definiciones que incluyen elementos -como la que se planteó previamente- se centran en describir y analizar los mecanismos, medidas y procedimientos que se consideran propios de esta justicia; así como también sus elementos (verdad, responsabilidades penales, reparación, memoria, reformas institucionales, entre otras), pero no explican en el fondo esta qué es en sí. De modo que estas dos cuestiones han servido de referente para que diferentes autores, cada uno desde su propia lógica definan la *justicia transicional*, siempre en función de la existencia de ciertos elementos, mecanismos o procesos, pero en general, falta analizar qué significa esta en profundidad.

Nos encontramos entonces con definiciones como la de De Greiff (2012) citado en Chaves Romero (2019), en donde el autor define la *Justicia transicional* como aquella que:

(...) se encuentra constituida por un conjunto de procesos de transformación social y política profunda, en los cuales es necesario utilizar una gran variedad de mecanismos con el objetivo de lograr la reconciliación y la paz, realizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, restablecer la confianza en el Estado y fortalecer la democracia, entre otros importantes valores y principios constitucionales (p.48).



La anterior concepción guarda estrecha relación con la definición planteada por el Consejo de Seguridad de la ONU (2004), donde se señala que la *justicia transicional* es “toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación” (p. 6).

Ahora bien, dada la importancia que se le ha dado a dichos mecanismos, medidas y procesos a la hora de construir una definición de *justicia transicional*, es crucial tener en consideración el surgimiento histórico de esta, ya que permite entrar a revisar lo que se ha entendido por *justicia transicional* a lo largo del tiempo y qué hitos históricos marcaron su aplicación. En ese sentido, es pertinente traer a colación el estudio sobre la generalología de la *Justicia Transicional* que realizó Teitel (2003) donde da cuenta de tres fases históricas fundamentales, la cuales son:

La primera, hace referencia a una fase histórica que corresponde a la terminación de la segunda guerra mundial en 1945 y a la implementación de los juicios de Núremberg. Esta primera fase concebía a la *Justicia Transicional* como un mecanismo para delinear la injusticia de la guerra y crear los parámetros necesarios para constituir un castigo justificable impuesto por la Comunidad Internacional -los aliados- a quienes cometieron crímenes de guerra -los vencidos- (Teitel, 2003).

La segunda, explica una fase de transición ubicada temporalmente en las dos últimas décadas del siglo XX, que encuentra relevancia al tener en cuenta los diversos procesos de democratización que surgieron como respuesta al colapso y posterior disolución de la Unión Soviética (Teitel, 2003). Lo anterior, tuvo impacto en el sur global y en Europa del Este, toda vez que dichos territorios se vieron afectados por esas dinámicas bipolares que fueron impulsadas por Estados Unidos y la Unión Soviética. En ese sentido, la *justicia transicional* que se concibe en esta fase hace referencia a la terminación de regímenes dictatoriales; es decir, en palabras textuales de Teitel (2003) “la modernización y el Estado de Derecho fueron equiparados con someter a proceso criminal, por parte del Estado-Nación, a los inculpados, para legitimar el nuevo régimen y hacer avanzar la reconstrucción de la Nación” (p.8). Con todo esto, se tiene que la fase dos utiliza elementos del paradigma transicional internacional<sup>2</sup> que se

---

<sup>2</sup> En el paradigma transicional internacional los Estados tienen cuatro obligaciones inderogables aplicables en procesos de transición: (1) la satisfacción del derecho a la justicia; (2) la satisfacción del derecho a la verdad; (3) la satisfacción del derecho a la reparación de las víctimas; y (4) la adopción de reformas institucionales y otras garantías de no repetición (Botero Marino y Restrepo Saldarriaga, 2005).

constituyen en la fase uno con los juicios de Núremberg, con el fin de implementarlos en contextos locales.

De acuerdo con lo señalado por Benavides (2011) la *justicia transicional* en sus orígenes se centraba en la sanción penal de las violaciones de DDHH, motivo por el cual, las discusiones legales que se generaban en torno a esta eran de derecho penal. Lo anterior se puede observar en las dos primeras fases que plantea Teitel (2003), en donde el principal objetivo que tiene la *Justicia Transicional* está muy ligado a la criminalización de quienes en algún punto rompieron el *statu quo* y cometieron graves violaciones a los DDHH.

La tercera, hace referencia a una fase más contemporánea, que surge a finales del siglo XX. Esta se encuentra caracterizada por un auge en la globalización que conlleva a situaciones de violencia extrema y de inestabilidad política. En este caso, la noción que se configura de *Justicia Transicional* es totalmente divergente, ya que pasa de ser considerada una excepción a la norma, para convertirse en un paradigma del Estado de Derecho<sup>3</sup>, es decir, se empieza a presentar una normalización de la *Justicia Transicional*, en donde se deja a un lado la concepción de la justicia ligada a cambios políticos, para transformarse en una forma de justicia que puede ser aplicada a otro tipo de contextos (Teitel, 2010; Forer, 2012).

Sahuí Maldonado (2012) coincide con De Greiff (2012) en que a nivel conceptual la *justicia transicional* y los DDHH están estrechamente relacionados, razón por la cual, sugiere una genealogía de la *justicia transicional* alternativa a la planteada por Teitel (2003), donde esta es puesta en paralelo con la genealogía de los DDHH, así: una primera fase que se asocia con la violación de derechos civiles; otra con la violación de derechos políticos; y una más con la violación de los derechos económicos y sociales. Como se puede observar, esta genealogía alternativa no necesariamente se contrapone a la que plantea Teitel (2003), de hecho es posible traslaparlas y analizarlas en conjunto.

No obstante, en contraposición a aquellos autores que consideran que la *justicia transicional* tiene su génesis en el siglo XX, Elster (2003, 2004) plantea que esta tiene sus orígenes en la antigua Grecia, cuando se hace una transición de regímenes oligárquicos a regímenes democráticos, la cual evoluciona y con posterioridad se puede ubicar en las

---

<sup>3</sup> El paradigma explica en qué forma se organizan los principios del Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales, a fin de que se puedan cumplir en una sociedad determinada la función política que normativamente se les adscribe. Un paradigma funciona como un modelo de precomprensión del derecho que posibilita la previsibilidad de las decisiones. (Rojas Amandi, 2010).

transiciones que se hicieron en siglo XV en Inglaterra, con la instauración de regímenes monárquicos. Lo anterior significa que Elster (2003, 2004) no ve un vínculo inquebrantable entre justicia transicional y democracia, considera que la justicia transicional se puede dar en cualquier tipo de transición política (Rincón Covelli, 2012).

Tras analizar cómo evolutivamente se ha venido transformando la *justicia transicional* y las coincidencias y disidencias que se han sentido con respecto a su aparición, se traerá a colación un análisis crítico de esta, que precisamente busca desmarcar esa idea de que la *justicia transicional* es un tipo de justicia que se apalanca en la mera utilización de una serie de mecanismos que tienen un antecedente de aplicación previo, que surgió con el fin de lidiar con situaciones de violencia extrema. Motivo por el cual, es muy valioso el aporte que hace Rincón Covelli (2012) al analizar la *justicia transicional* como una concepción de la justicia, donde los principios y dimensiones universales de justicia<sup>4</sup> forman la base que busca dar respuesta a los reclamos que se hacen de justicia en un contexto determinado, donde los mecanismos y procedimientos son una herramienta, pero no el epicentro de lo que conceptualmente representa la justicia que se aplica en periodos de transición.

Esta idea de que la *justicia transicional* se debe entender como aplicación de principios universales de justicia la plantea De Greiff (2012), quien se contrapone a esa concepción de que la *justicia transicional* es aquella que se aplica en periodos de cambios políticos radicales, donde existe una imposibilidad a la hora de distinguir los principios de justicia aplicables a las diferentes realidades transicionales que se pueden presentar. Así las cosas, De Greiff (2012) plantea una concepción teórica normativa de la *justicia transicional*, la cual la considera como una noción “holística” de la justicia, que articula los requerimientos de un entendimiento general de justicia cuando se aplica a situaciones que acontecen en un “mundo imperfecto”, es decir, en un mundo donde las reglas son violadas e incumplidas de forma sistemática y masiva.

Si bien es indiscutible la aplicación de los principios universales de justicia, también es relevante - como propone Teitel (2003) - rescatar la idea de que en el marco de la justicia transicional se tengan en cuenta los contextos en los que esta se pretende desarrollar; cuestión

---

<sup>4</sup> En la teoría de la justicia de Rawls (2012) se ofrecen dos formulaciones teóricas fundamentales que refieren a los principios de justicia: 1. “Cada persona ha de tener derecho igual a la más extensa libertad básica compatible con una libertad similar para todos” (p.270); y 2. “las desigualdades económicas y sociales han de ser estructuradas de tal forma que sean para: a) mayor beneficio de los menos aventajados, de acuerdo con un principio de ahorro justo, y b) unidos a los cargos y las funciones asequibles a todos, en condiciones de justa igualdad de oportunidades”. (p. 270). Lo anterior se enmarca en el ámbito del liberalismo político.

que lleva a Rincón Covelli (2012) a señalar que “se trata no solo de contar con principios de justicia que guíen nuestra acción y sean a su vez sensibles al contexto, sino también de encontrar esos principios en los propios contextos transicionales” (p. 68).

En ese orden de ideas, Rincón Covelli (2012) realiza un estudio expedito de lo que significa la atrocidad<sup>5</sup> y de cómo está ha sido interpretada por diversos autores, con el objetivo de distinguir desde ese punto cuáles son los principios de justicia que surgen en contextos transicionales. La autora, hace alusión a tres principios fundamentales: “i) No permitir el olvido ni la impunidad de la atrocidad”; ii) El restablecimiento del valor intrínseco de la víctima; y iii) El reconocimiento de la dignidad humana y de la ciudadanía de la víctima”. (p.103). De estos principios se desprenden elementos de la *justicia transicional* tales como: verdad, responsabilidades penales, reparación, memoria, reformas institucionales, entre otros.

Si bien los principios constituyen uno de los cimientos del constructo de *justicia transicional*, las dimensiones de justicia contribuyen al propósito de irle dando contenido a esta. En tal sentido, es de suma relevancia profundizar en las tres dimensiones de justicia que fueron planteadas inicialmente por Fraser (2008): i) la justicia de reconocimiento; ii) la justicia distributiva; y iii) la justicia de representación. Dichas dimensiones fueron complementadas con posterioridad por Rincón Covelli (2012) en su aspiración de enmarcar todas las dimensiones que integrarían a la *justicia transicional*, incluyendo entonces la justicia de reparación y la justicia retributiva. A continuación se explicará brevemente cual es el contenido que tiene cada una de estas dimensiones y cuál es el alcance que representan a la hora de hacerlas parte dentro de la *justicia transicional*.

La teoría de las tres dimensiones de la justicia adoptada por Fraser (2008) parte de un concepto genérico de justicia que la misma autora plantea: “el significado más general de justicia es la paridad de participación” (p. 39), al considerar que la justicia requiere “acuerdos sociales que permitan a todos participar como pares en la vida social” (p. 39). Por lo anterior, Fraser (2008) alude la existencia de tres tipos de injusticias<sup>6</sup> que se dan en el seno de las sociedades contemporáneas: i) distributiva; ii) de reconocimiento y iii) de representación. La

---

<sup>5</sup> Rincón Covelli (2012) citando a Card (2002) arguye que “un acto atroz, es un acto que de manera intencional (deliberada) produce un daño intolerable en otro ser humano (al arruinar su vida o una parte significativa de ella y al expresar un falta de respeto por su humanidad y por sus libertades) o que pudiendo evitar ese daño, no lo hace” (p. 86).

<sup>6</sup> Desde la perspectiva de la injusticia es que se logra edificar algunas teorías de la justicia. En palabras de De Zubiría Samper (2015) “la justicia es memoria redimida de todas las injusticias y de cada caso de injusticia”(p.4).

primera se asienta en una dimensión económica o de reivindicaciones de distribución socioeconómica<sup>7</sup>; la segunda implica una dimensión cultural o de reivindicaciones de carácter cultural o legal; y la tercera, entraña una dimensión de lo político o de reivindicaciones de representación política (Fraser, 2008; Rincón Covelli, 2012).

Si bien esa concepción contemporánea tridimensional de la justicia que plantea Fraser (2008) tiene vigencia y es aplicable a la *justicia transicional*, resulta insuficiente de acuerdo con las demandas y reclamos que se hacen en un marco de esta, principalmente en lo que atañe al papel que las *víctimas* empezaron a tener en los periodos que le sucedieron a la barbarie y a la atrocidad, donde se abre una puerta de reivindicaciones necesarias y que fueron invisibilizadas por mucho tiempo, como son la lucha contra la impunidad y la reparación del daño extremo ocasionado (Rincón Covelli, 2012). En tal razón, resulta forzoso incluir dos dimensiones adicionales de justicia: la retributiva, y la reparativa.

La justicia retributiva es comúnmente reconocida en las teorías de la pena del derecho penal, dónde es concebida como un castigo, compensación, reacción o retribución por la comisión de un delito (Rey Navas, 2018; Ferrajoli, 2018). Sin embargo, Hampton (2007) plantea una concepción amplia de la justicia retributiva que no se circunscribe solamente a la referida previamente, considerando que esta dimensión de la justicia cobija a “las malas acciones” en sí mismas, y no solo a los “perjuicios” que surgen con ocasión a estas; es decir, la finalidad de la justicia retributiva para el autor se centra en “corregir” las malas acciones, haciéndole caer en cuenta que no debió haber tratado así a la *víctima* y que su conducta el reprochable, en ese sentido, se propone que la pena tenga un carácter pedagógico para el ofensor (Rincón Covelli, 2012; De Gamboa Tapias, 2020). Ahora bien, la justicia reparativa se acerca conceptualmente a lo que se entiende como justicia restaurativa<sup>8</sup>, sin embargo, esta se limita específicamente a sanar el daño causado a la *víctima*.

En síntesis, tras compilar y analizar los diversos conceptos que han surgido en torno a la “justicia transicional”, en lo que respecta a la presente investigación se tomará como punto de partida lo propuesto por autores como Benavides (2011), De Greiff (2012), Rincón Covelli

---

<sup>7</sup> Rincón Covelli (2012) señala la importancia de complementar el concepto de “reconocimiento” en la medida en la que a nivel de justicia en tiempos de transición, este abarca circunstancias que van más allá de una mera problemática de justicia distributiva centrada en el plano socioeconómico, incluyendo el reconocimiento de la atrocidad, del daño que se le ocasionó a la *víctimas* y de la necesidad de repararla.

<sup>8</sup> Dimensión que se abordará más adelante de manera independiente, debido a la necesidad de hacer un análisis más profundo, por las implicaciones que tiene en procesos transicionales de construcción de paz, sobre todo en lo atinente a las *víctimas*.

(2012) y Bengoetxea (2017), quienes coinciden en que resulta más adecuado hablar de justicia en tiempos de transición – que puede ser una transición de un régimen dictatorial a uno democrático, o, de la guerra a la paz - que *de justicia transicional*.

La justicia en tiempos de transición entonces se centra en el pasado de las injusticias, esto la hace necesaria, sobre todo, por el compromiso que tiene de establecer un nuevo orden moral o político. Trabajar con los hechos ocurridos en el pasado, le permite contribuir a la construcción de un futuro diferente. Rincón Covelli (2012) hace referencia a otras situaciones que hacen que la justicia - y no solo la justicia en tiempos de transición - solo pueda cumplirse si se revisan las injusticias del pasado, por ejemplo, aquellas que se suscitaron en torno al colonialismo, la discriminación racial, la discriminación étnica; se trata de injusticias históricas y estructurales y que hacen necesario que más adelante -en el capítulo tercero- se ahonde en el enfoque diferencial, como presupuesto para reconciliar esos puntos en los que se intercepta la justicia en tiempos de transición con las injusticias históricas, sistémicas. Esto con el fin de señalar que la justicia en tiempos de transición – como se ha venido insistiendo - hace parte de un concepto mucho más amplio de justicia, pero que cuenta con sus propias especificidades, enfocadas en enfrentar el pasado injusto y en asumir la deuda que se tiene con las *víctimas*.

## 1.2. Mecanismos de justicia en tiempos de transición

Si bien de manera genérica se entiende por mecanismo la forma o la manera en la que se realiza una actividad o una función (Ucha, 2012). Cuando se habla de mecanismos de justicia en tiempos de transición se hace referencia a una cuestión mucho más específica. Se trata pues de los enfoques judiciales y no judiciales adoptados por las sociedades, los cuales se institucionalizan con el fin de dar respuesta a las violaciones generalizadas de los DDHH, luego de que se hace el tránsito de un conflicto armado continuado al establecimiento de una paz estable y duradera (ONU MUJERES. Centro virtual de conocimiento para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas, 2013). Así, los mecanismos de justicia en tiempos de transición se encargan de determinar la verdad y sancionar a los responsables con el fin de alcanzar la paz y la reconciliación en una sociedad determinada (Benavides, 2011).

Como se mencionó previamente, por un lado, parte de estos mecanismos tienen un carácter jurídico, el cual hace referencia a la aplicación de penas o al cumplimiento de acuerdos jurisdiccionales para situaciones en las que se tienen que abordar las violaciones sistemáticas a los DDHH y las infracciones al DIH (Ardila, s.f.). Mientras que por otro lado, hay

mecanismos que resultan de “acuerdos políticos y sociales, los cuales atienden de manera prioritaria a procesos de reconciliación, transformación y educación en valores para la convivencia y la paz” (Ardila, s.f., p.3).

Como sugieren autoras como Chaves (2019) y Minow (1998) los mecanismos más comunes que se aplican en procesos de transición son los enjuiciamientos penales, las comisiones de la verdad, los programas de reparación y las reformas institucionales. Sin embargo, cabe anotar que cada país debe construir su modelo de acuerdo con las particularidades propias del contexto vivido. Como se ha mencionado preliminarmente, no es correcto hacer un mero trasplante o adopción de mecanismos o instituciones creadas en otros lugares del mundo para aplicarlas sin más, en “pro” de la transición, toda vez que esto puede ser contraproducente y llevar a que los mecanismos simplemente no funcionen y por tanto no den los resultados esperados. De igual forma, hay que tener cuidado con los objetivos que se proponen lograr dichos mecanismos, en la medida en la que cuando estos son excesivos, en la práctica pueden traer consigo un alto nivel de frustración (Benavides, 2011).

Adicionalmente, dichos mecanismos deben ser implementados de manera coordinada con las *víctimas* y los ofensores; donde el esclarecimiento de la verdad logre su cometido de promover la reconciliación de la sociedad y así, dar por terminado los ciclos de violencia sistemática; dando paso al afianzamiento de una memoria colectiva<sup>9</sup>, que se consolide como un espacio de reconstrucción del pasado, orientado siempre hacia la reivindicación de las víctimas y el ejercicio de sus derechos; específicamente en lo que atañe al ejercicio y goce del derecho a la verdad, de tal forma que sea posible superar los escenarios de violencia y violación de las normas internacionales de DDHH (Lasso, 2018 ).

---

<sup>9</sup> Utilizar el concepto de memoria histórica constituye un pleonismo, en tal sentido, Halbwachs (2010) considera que la memoria colectiva se distigue de la histórica “porque solo retiene del pasado aquello que está todavía vivo, o que es capaz de vivir en el grupo de que la conserva”(p. 121). Por su parte Bergalli entiende por memoria colectiva “la capacidad que se atribuye y, en ocasiones de ella disponen, las sociedades o los grupos sociales a los que se les reconoce la aptitud de rememorar hechos, situaciones o fenómenos en torno o respecto a los cuales se concentra un recuerdo específico hasta el punto de haber éste impactado en el colectivo o en buena parte de él con la fuerza necesaria de forma que en su contexto el conjunto se identifica o caracteriza por ese dato de afinidad” (OSPDH; Universidad de Barcelona, 2011, p. 175)

## 2. Justicia Restaurativa

### 2.1. Concepto general

Es una dimensión de justicia que se creó como mecanismo de solución de conflictos alternativo al paradigma retributivo<sup>10</sup> tradicional del sistema penal (Rey Navas, 2018). Si bien esta surge en el ámbito del derecho penal, no se centra únicamente en este, sino que afecta todos los espacios en los que interviene la justicia (Francés Lecumberri y Restrepo Rodríguez, 2019). En palabras de Reyes-Mate (2013) “la justicia restaurativa no es solo una variante del derecho penal, sino también una cultura, una variante de la <<filosofía práctica>>, de esa teoría de la justicia que se sitúa entre la política y la moral” (p. 13).

Para Tamarit Sumalla (2013) “la justicia restaurativa es concebida como un conjunto de prácticas que responden a unos principios comunes, entre los que destacan las ideas de restauración de las relaciones sociales, pacificación, reparación y respuesta no punitiva al conflicto” (p. 317), en donde las *víctimas* entran a ser el epicentro; bajo el entendido que estas son una realidad presente que se remite a las injusticias del pasado, de ahí la importancia de poner en la palestra sus derechos, siempre teniendo en la mira la construcción de una sociedad más humana (Sampedro-Arrubla, 2010).

El origen de la justicia restaurativa actual se debe sobre todo, a la insatisfacción e ineficiencia del modelo de justicia penal tradicional, donde han sido criticadas sus instituciones, sus procedimientos, la poca importancia que se le ha dado a construir soluciones partiendo del contexto social y cultural en el que se comenten las conductas (Francés Lecumberri y Restrepo Rodríguez, 2019; Rojas Andrade, 2017; Crawford y Newburn, 2005); así como también, por la forma en la que son tratados los sujetos que intervienen dentro del proceso penal.

Como bien menciona Christie (1992), el sistema penal se ha encargado de arrebatarse a la *víctima* su propio conflicto, donde es un intermediario quien intercede por ella, de esta forma se le deniega la plena participación en lo que podría ser uno de los encuentros “rituales” más importantes de su vida. La misma situación se replica con relación al infractor, este cede el derecho que tiene sobre el conflicto, porque la terminología no le permite tener una apropiación adecuada de lo que sucede, o porque ya refleja en sí mismo ese etiquetamiento y

---

<sup>10</sup> Este paradigma percibe el delito como una violación de la norma jurídica que requiere la imposición de un apropiado y objetivo castigo (Clamp, 2014).



estigmatización que lo configura como “menos persona”. En definitiva, el manejo del conflicto se sale de la esfera de control de los interesados.

Desde el punto de vista institucional, la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (2002) ha definido la justicia restaurativa como una “respuesta evolutiva al delito que respeta la dignidad y la igualdad de todas la personas, favorece el entendimiento y promueve la armonía social mediante la recuperación de las víctimas, los delincuentes y las comunidades” (p. 15). Esto significa que esta dimensión de la justicia se ha encargado de abordar el delito como un conflicto entre las partes, el cual es susceptible de ser tratado desde lugares diferentes al castigo, la culpa o la pena; prefiriendo hacer uso de herramientas como el diálogo y la reparación (Francés Lecumberri, 2018).

Ambos (2009) plantea que la justicia restaurativa tiene un arraigo comunitario y reconoce una dimensión humana del delito; en una línea similar, Britto Ruiz (2010) sugiere que el concepto de justicia restaurativa trasciende, en la medida en la que lo que busca es introducir una nueva concepción de justicia, direccionada a convertir a las *víctimas* en protagonistas, para que junto con el infractor y con el apoyo de la comunidad, se reparen los daños ocasionados y se restauren las relaciones sociales.

Resulta pertinente entonces, traer a colación la definición de justicia restaurativa que construye Britto Ruiz (2010):

La justicia restaurativa es una justicia de arraigo comunitario, que entiende que el delito y los conflicto suceden en el contexto social, y que por ende sus consecuencias y claves para la búsqueda de resolución están en la comunidad. Reconoce así una dimensión humana del delito y procura hacer, en materia jurídica, un acercamiento al sistema reconociendo la normatividad, y en materia social la recomposición del tejido social roto, buscando salidas creativas al delito, buscando que la víctima sea reparada, pero sobre todo, que las relaciones sociales sean restauradas. (pp. 19-20).

Desde dicha óptica, la justicia restaurativa tiene la mirada puesta en el futuro, va marcando el camino por el que las partes encontradas en el conflicto y toda la sociedad deben transitar con la idea de alejarse del pasado. No solo se centra en los hechos pasados, sino que busca la reconstrucción de relaciones que permitan la futura convivencia pacífica de las personas por medio de la restauración de los daños sufridos por las partes involucradas (Francés Lecumberri y Restrepo Rodríguez, 2019).

En un sentido amplio y que trasciende la concepción meramente penal, la justicia restaurativa no se focaliza únicamente en la conducta penal, sino que tiene en cuenta también procesos de formación de comunidad, de la niñez, de resolución de conflictos, todo esto dentro del marco de los DDHH, con el fin de crear ambientes en los cuales la interacción entre la víctima y el ofensor sea más sana (Choconta Solano y Mora Cuervo, 2020). La justicia restaurativa también tiene como fin “dar tratamiento en términos de igualdad a todas las partes, tanto *víctimas*, ofensor y comunidad, con el fin de lograr la reintegración, la restauración y con ello evitar la coerción y el aislamiento, esta dimensión de la justicia sienta las bases de una transformación desde los valores y los principios de la justicia social, donde el delito muta y se reconocen los problemas de víctimas, ofensores y comunidad” (Choconta Solano y Mora Cuervo, 2020, pp. 331-332)

## 2.1. Justicia restaurativa en tiempos de transición

Ahora bien, en lo que corresponde a la presente investigación, es necesario analizar la justicia restaurativa desde el punto de vista de la justicia en tiempos de transición, cuestión que resulta retadora, ya que la incidencia que tiene el paradigma restaurativo en procesos transicionales es de gran trascendencia a la hora de implementar los mecanismos propuestos, en aras de que estos funcionen y sean susceptibles de ser aplicados. Sin embargo, cabe resaltar que el uso de la justicia restaurativa en contextos transicionales también ha sido objeto de críticas por parte de algunos sectores políticos y sociales, al considerar que esta dimensión de la justicia puede traer consigo una suerte de “impunidad”<sup>11</sup>. Por esta razón, es indispensable ahondar de manera sucinta en la representación teórica de la justicia restaurativa que se ha construido para ser aplicada en procesos transicionales de construcción de paz.

Uprimny y Saffon, (2005) indican que el paradigma restaurativo fue aplicado por primera vez en un proceso transicional en el caso sudafricano. Respecto de este, Tutu (2006) explica que en la transición sudafricana la justicia restaurativa y el ubuntu<sup>12</sup> surgen como una alternativa a la justicia del castigo, a la meramente punitiva; y se centra en la restitución de la paz social que ha sido quebrantada por la comisión de hechos atroces, donde lo que se busca es la verdad, y no condenar al ostracismo social al infractor, sino todo lo contrario, reintegrarlo a la sociedad. Para los sudafricanos, la justicia restaurativa y el ubuntu están basados en el

---

<sup>11</sup> Entendida esta como el no castigo para quien comete un hecho punible.

<sup>12</sup> Su significado en castellano sería “yo soy porque nosotros somos”.

reconocimiento de la humanidad, incluso del peor de los ofensores. Todo el modelo transicional planteado en Sudáfrica fue construido con base en el paradigma restaurativo (Tutu, 2006).

Dicho modelo transicional ha sido objeto de críticas, sobre todo, porque prescindió de la utilización de la dimensión retributiva de la justicia, cuestión que conflictuó asiduamente con la petición que hacían las *víctimas* de que hubiera una determinación de responsabilidades en aras de sentirse resarcidas. Argumentos como los señalados por Uprimny y Saffon (2005), explican que la justicia restaurativa debe considerarse como un complemento de lo que se configure -dependiendo del contexto- como justicia en tiempos de transición, pero no como un sustituto de la misma, es decir, teniendo en cuenta que por un lado la justicia en procesos de transición surge en circunstancias excepcionales y enfrenta la atrocidad -caracterizada por la vulneración de la dignidad humana- mientras que la justicia restaurativa fue diseñada como un mecanismo alternativo para hacerle frente a la criminalidad a pequeña escala (Uprimny y Saffon, 2005).

De ahí, la pertinencia de la propuesta que hace Rincón Covelli (2012) sobre la necesidad de verificar las dimensiones de la justicia que le aplican a la justicia en tiempos de transición a la hora de “teorizar” sobre esta. Es así como, según su perspectiva y en correlación con el planteamiento realizado por Uprimny y Saffon (2005), la justicia restaurativa sola, no es suficiente ni completamente adecuada para enfrentar lo que presupone una transición, sobre todo, en lo que respecta a las exigencias de justicia y paz. Tampoco es suficiente para darle un tratamiento adecuado a las secuelas que ocasionaron tanto a nivel individual como a nivel comunitario las violaciones sistemáticas a los DDHH. En esa medida, la justicia restaurativa entraría a complementar de forma positiva a las demás dimensiones que conforman la justicia en tiempos de transición, pero nunca a sustituirlas.

Como se ha venido recalcando, uno de los ejes fundamentales de la justicia restaurativa es la participación de las *víctimas*. Empero, autores como Sánchez León y Parra Vera (2018) indican que para que esta participación sea plausible y suficiente es ineludible resolver algunas falencias que pueden darse en el marco de procesos restaurativos, como son: la deficiencia de comunicación asertiva con la población victimizada y la revictimización que puede emanar de la sobreprotección institucional. Dichas cuestiones dificultan la participación efectiva de las víctimas dentro de la apropiación del conflicto que se pretende que tengan, haciendo uso de la justicia restaurativa (Sánchez León y Parra Vera, 2018; Christie, 1992).

Cuando se realizan análisis comparados de justicia restaurativa aplicada a procesos transicionales, se ha logrado establecer que esta ha funcionado como una forma de construir narrativas e institucionalidad en torno a la verdad, en el entendido en el que ha funcionado como dispositivo para rendir cuentas, presentar disculpas, reconocer responsabilidades y afianzar procesos de reconciliación y reparación. De igual modo, a nivel comunitario, el espectro restaurativo ha empoderado y devuelto el poder a las personas victimizadas, impulsándolas a que participen y asuman agencia sobre esos conflictos que generalmente les son expropiados (Sánchez León y Parra Vera, 2018; Christie, 1992).

La justicia restaurativa debe apuntarle a la transformación social, tanto del pasado violento donde se promovió la injusticia, como del presente donde la injusticia se continúa perpetuando. Así las cosas, se trata no solamente de que se dé una reparación del daño causado, sino de reparar y reconstruir una situación social en la que dicha injusticia no sea susceptible de ser cometida nuevamente. Se acuña el término de justicia restaurativa transformadora, la cual además de otorgarle centralidad a la población victimizada se la debe otorgar a la categoría de memoria, ya que permite rescatar una noción de justicia más allá del derecho (De Zubiría Samper, 2015).

Con base en lo anterior y analizando la justicia restaurativa desde una perspectiva de justicia en procesos de transición, puede señalarse que sus ámbitos de aplicación más comunes son: i) el papel de las víctimas; ii) el rol de la comunidad; iii) la reintegración criminal y iv) la función que desempeña el Estado como garante de los derechos de todas las partes (Rojas Andrade, 2017). Cabe señalar que en lo que respecta al caso colombiano en el marco del Acuerdo de Final para la Terminación del Conflicto, la justicia restaurativa se ve reflejada fundamentalmente en el punto cinco, específicamente en los principios que sistematizan la Jurisdicción Especial para la Paz. (Vega Dueñas y Olalde Altarejos, 2018; Rojas Andrade, 2017).

### **3. La categoría de víctima**

La categoría *víctima* en su concepción más básica se ha utilizado con el fin de identificar a las personas vulneradas por un tercero, sin embargo, hoy por hoy ha sido configurada también como una atribución identitaria de presentación en el espacio público, como es el caso de la demanda de derechos y garantías ante el Estado (Guglielmucci, 2018).

Reyes Mate (2008) sugiere que son *víctimas* quienes “sufren violencia, causada por el hombre<sup>13</sup> sin razón alguna” (p. 35); y que además, tienen como característica fundamental ser inocentes<sup>14</sup>. La perspectiva desde la cual habla el autor se remonta principalmente al devenir de las *víctimas* de la segunda guerra mundial, donde se entiende que estas dejaron de ser invisibles y lograron que su sufrimiento significara injusticia. Sin embargo, esa visibilidad que lograron no puede ser interpretada desde la óptica de que las *víctimas* son el precio necesario de la historia o de la política, sino que el discurso debe ser proyectado desde “la memoria como arma hermenéutica” (Reyes Mate, 2016. p. 105), es decir, entendiendo que ocurrió lo inconcebible, y que al ocurrir, esto se transforma en lo que hay que pensar (Reyes Mate, 2016).

En virtud de lo anterior, es claro que el concepto de *víctima* no es estático, sino que depende del momento histórico y de los contextos políticos y normativos propios de cada sociedad (Acevedo Arango, 2017; Guglielmucci, 2018). Esto llevó a que en el pasado la posibilidad de manifestación de las *víctimas* se circunscribiera a un ideal sacrificial religioso donde su nivel de empoderamiento era mínimo. Hoy por hoy, este modelo se ha ido superando y les ha permitido inscribirse en un régimen de visibilidad, donde han ido fortalecido su capacidad de agencia para luchar contra las injusticias a las que han sido sometidas (Acevedo Arango, 2017).

Desde el punto de vista normativo — utilizado con mayor frecuencia — la Asamblea General de las Naciones Unidas (1985) definió a las *víctimas* de la siguiente forma:

1. son víctimas las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.
2. Podrá considerarse "víctima" a una persona, con arreglo a la presente Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión "víctima" se incluye, además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas

---

<sup>13</sup> Acevedo Arango (2017) señala que los discursos de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y de la justicia transicional surgen para hacerle frente “al daño ocasionado contra los seres humanos por causa de otros seres humanos” (p.36).

<sup>14</sup> Dicha inocencia es puesta en duda por autores como Primo Levi (1958; 1963; 1989), quien en su Trilogía de Auschwitz explica como una parte de la población judía victimizada en el holocausto, se convirtió en verdugo de sus propios compañeros dentro del régimen nazi, con el fin de sufrir menos o de sobrevivir.

que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

Dicho concepto tuvo una variación en la Resolución 60/147, la cual se refiere de manera directa a las víctimas de violaciones graves de DDHH y de DIH, incluyendo dentro de la definición previamente esbozada “a la familia inmediata o a las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2005).

Las definiciones que vienen de la institucionalidad han sido fuertemente criticadas por algunos sectores de las ciencias sociales, en el entendido en el que tienden a imponer y a generalizar ciertas representaciones en torno a lo que se considera violentado o vulnerado, perfilando a las víctimas a partir del hecho violento al que fueron sometidas; cuestión que ha sido de reiterada aplicación en contextos de implementación de mecanismos de justicia en tiempos de transición, porque se supedita su participación a que “quepan” dentro de la categoría institucional de “*víctima*” (Guglielmucci, 2018). La cuestión es tan clara, que incluso en el caso de la definición que plantean las Naciones Unidas (previamente esbozada) es claro que la *víctima* es definida a través de lo que le ha sucedido (Acebedo Pérez, 2017).

Desde el punto de vista de la victimología y de la psicología social, Díaz Pérez (2009) plantea que “Una *víctima* es la persona que individual o colectivamente ha sido afectada de manera directa o indirecta por un daño psicológico, físico, económico o en detrimento de sus derechos fundamentales, por un incidente que le ha ocasionado daño” (p.43). Al respecto, Acevedo Arango (2017) considera que la sujeción al daño va más allá del daño real, de la violación al derecho. Motivo por el cual es necesario incluir también el daño ontológico<sup>15</sup>, el daño por impunidad<sup>16</sup> y el daño político<sup>17</sup>. Triada que en palabras del autor “implica tres duelos en el doble sentido del dolor y la lucha: duelo psicológico, duelo por y contra lo injusto, y duelo por una sociedad mejor” (p. 39).

---

<sup>15</sup> “Daño vital, material, psicológico, a la vida en relación, al proyecto de vida, el daño psicosocial al vínculo, el daño colectivo al capital organizacional, el daño cultural a la identidad, a los saberes y las prácticas habituales” (Acevedo Arango, 2017, p. 39).

<sup>16</sup> “Inoperancia de la justicia para lograr la verdad, la sanción y la reparación” (Acevedo Arango, 2017, p. 39).

<sup>17</sup> “Sociedad indiferente. Indolente, de pobres liderazgos, baja participación comunitaria y social, incapacitada para acoger, apoyar. Acompañar y solidarizarse con las víctimas” (Acevedo Arango, 2017, p. 39).

Sin embargo, de acuerdo con Cobb (1997), ponerle nombre al daño y construir a la “*víctima*” como tal, no significa *per se* una recuperación de los efectos de la violencia. La autora considera que la condición de *víctima* puede poner en marcha toda una maquinaria discursiva que termina teniendo a las personas cautivas en una identidad de *víctima*,<sup>18</sup> que implica la asunción de unos roles sociales que impiden y retardan el desarrollo de su propia voz y pormenorizan su potencialidad como agentes de sus propias vidas. Resulta paradójico, pero se ven sumergidas en una situación en la que si no alegan su condición de *víctimas*, se perpetua la situación de violencia; y si se mantienen en su posición de víctimas, difícilmente se vuelven agentes.

Como corolario de lo anterior, surge la necesidad de trabajar desde la construcción de las narrativas de las personas victimizadas, teniendo en cuenta por un lado el hecho de que han pasado por situaciones violentas (como víctimas), pero fundamentalmente incentivándolas a construir un relato acerca de cómo sobrevivieron (como sobrevivientes o agentes). Es preciso revisar la evolución que tienen las *víctimas*, concibiéndose en un primer momento como objeto de la acción del otro, para lograr constituirse como sujetos activos. Lo que quiere decir que para desdibujar esa construcción social que hay respecto de la *víctima* (pasiva), *a priori* hay que prestarle atención a aquellas situaciones que discursivamente contribuyen a la pasividad de la *víctima* y la mantiene en dicha posición (Cobb, 1997).

Lo que se quiere transmitir es que muchas *víctimas* han trascendido la posición del “sufrimiento” en la que han sido puestas, y han ido desarrollando una apropiación de identidad renovada, en la que su voz, tanto individual como colectiva representa una crítica a la sociedad que se ha encargado de revictimizarlas y excluirlas (Acebedo Pérez, 2017). Así las cosas, La victimización va más allá de la identificación de hechos de violencia, y en ese sentido, la categoría *víctima* resulta limitante, ya que la población que ha sido victimizada en muchos de los casos -como por ejemplo el de las comunidades étnicas y campesinas- quiere ser reconocida como protagonista de la historia o superviviente; y no por el nivel de sufrimiento al que fueron sometidos/as. Esto les permite apropiarse del contexto por el que transitan, ya que encuentran formas alternativas para denotar un hecho y poder darle sentido, de acuerdo a sus experiencias individuales y colectivas; reflejando valentía y entereza, que el hecho de haber pasado por contextos atroces no los/las ha abatido, sino que les ha permitido seguir trabajando porque la violencia no se perpetúe (Guglielmucci, 2018).

---

<sup>18</sup> Para la autora, la identidad de las víctimas es una construcción social.

De esta manera, es indispensable poder establecer el verdadero límite entre ser *víctima* y haber sido victimizado, partiendo de la base de que ser *víctima* no es un estado permanente (Guglielmucci, 2017). En ese sentido, no se debe acoger una teoría única o institucionalizada de la categoría víctima, sino que se debe tener en cuenta que dentro del espectro de la victimización cada sujeto que sufrió un daño lo asume de una forma diferente. Tristemente el asistencialismo por parte de los expertos *socorristas* de los que habla Acevedo Arango (2017) ha hecho que sujetos victimizados no superen o resignifiquen su posición de *víctima*. Mientras que otros sujetos están hastiados de ser encasillados o clasificados en términos de *víctimas* y deciden autorepresentarse como “sujetos políticos victimizados”, donde pueden resignificarse sin tener que desconocer la condición de violación de sus derechos, reinventando a la vez su rol político (Acevedo Arango, 2017).

Esta proyección que interpela la categoría de víctima tiene un peso importante en contextos transicionales, debido a que la forma como las personas que han sido victimizadas asumen su agencia -luego de haber vivido sus procesos de duelo y de sufrimiento- incide fuertemente en la participación que van a tener en los escenarios que se han dispuesto para que ellas pueden interactuar, aportar, opinar y reclamar sus derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Dicha participación las dota de legitimidad, no solo a ellas, sino también a los mecanismos de justicia en tiempos de transición que se vayan implementando, porque su grado y forma de participación es un insumo importante a la hora de evaluar el grado de incidencia y de efectividad de estos mecanismos (Saffon y Tacha, 2019).



## CAPITULO 2. LAS FASES DE LA JUSTICIA EN TIEMPOS DE TRANSICIÓN EN COLOMBIA.

“Si por cada víctima del conflicto colombiano  
tuviéramos que guardar un minuto de silencio,  
tendríamos que callar dieciséis años”

**F. De Roux.**

Colombia es un país que ha sido fuertemente azotado por la violencia, viviendo un conflicto armado de más de medio de siglo, del cual han hecho parte diversos actores armados, algunos se han ido desmovilizando o dejando las armas, mientras otros nuevos han ido apareciendo. A pesar de que se ha intentado la transición incluso desde finales del siglo XX, aún quedan muchos actores activos, los cuales no permiten que el conflicto termine en su totalidad y se sigan perpetuando las vulneraciones de DDHH y las infracciones al DIH.

El manejo que se le ha dado a la transición en el Estado colombiano ha cobrado fuerza a partir de la expedición de la Constitución Política de 1991, donde se establece que la paz es un fin esencial del Estado. Cabe destacar, que la carta política colombiana incluye el deber de “justicia”, que se refleja en la investigación, juzgamiento, sanción y reparación de las graves violaciones a los DDHH e infracciones al DIH (Gaona Cifuentes, 2018). En ese sentido, el esquema de justicia en tiempos de transición que se ha ido adoptando en Colombia, para pasar de la guerra a la pacificación real, ha puesto de manifiesto la necesidad de realizar una ponderación entre los principios de justicia y paz, que consiste en verificar, hasta qué punto está dispuesta a ceder la justicia, con el objetivo de lograr la paz y la reconciliación en un país que lleva más de medio siglo en conflicto. Este ejercicio de ponderación fue avalado por la Corte Constitucional en sentencia C-370 de 2006, donde se puso de manifiesto la posibilidad de establecer un régimen alternativo de penas, cuya efectividad dependería del cumplimiento de las obligaciones de aportar a la verdad, so pena de endurecimiento punitivo (Gaona Cifuentes, 2018).

Con el pasar de los años, y tras las reiteradas iniciativas legislativas que se han dado entorno a tratar el dilema entre justicia y paz fruto del conflicto armado, la Corte Constitucional ha señalado que la justicia en tiempos de transición “busca solucionar las fuerte tensiones que se presentan entre justicia y paz” (Sentencia C-579/13, 2013) y que para lograrlo “es necesario conseguir un delicado balance entre ponerle fin a las hostilidades y prevenir la vuelta de la

violencia (paz negativa) y consolidar la paz mediante reformas estructurales y políticas incluyentes” (Sentencia C-579/13, 2013). Así mismo, esta corporación ha concebido la justicia en tiempos de transición, como:

Una institución jurídica a través de la cual se pretende integrar diversos esfuerzos, que aplican las sociedades para enfrentar las consecuencias de violaciones masivas y abusos generalizados o sistemáticos en materia de derechos humanos, sufridos en un conflicto, hacia una etapa constructiva de paz, respeto, reconciliación y consolidación de la democracia, situaciones de excepción frente a lo que resultaría de la aplicación de las instituciones penales corrientes (Sentencia C-052/12, 2012; Sentencia C-771/11, 2011).

Así las cosas, la respuesta al dilema de la implementación de la justicia en tiempos de transición en Colombia ha empezado a aflorar desde el 2005, y ha supuesto el cumplimiento de unos requerimientos mínimos en términos de investigación, juzgamiento, sanción y reparación, que la comunidad internacional ha determinado son imprescindibles para evitar la impunidad y para poder garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición.

Es por esto, que el presente capítulo tratará de manera somera las fases que se han dado en materia de Justicia en tiempos de transición en lo que va del siglo XXI en Colombia, estas son fundamentalmente tres: (i) la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia; (ii) la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras; y (iii) el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto.

## **1. Desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)**

Tras múltiples masacres y asesinatos perpetrados desde los años ochenta por las autodefensas, el gobierno nacional, suscribió el 15 de julio de 2003 el “Acuerdo Santafé de Ralito para contribuir con la Paz de Colombia”, con este, se marcó el inicio del proceso de desmovilización de 34 bloques de las AUC. El desarme de este grupo armado ilegal estuvo regulado por la Ley 782 de 2002 y una serie de decretos, no obstante, su reglamentación hito fue la Ley 975 de 2005, expedida por el Congreso de la República y que versa sobre la reincorporación de los desmovilizados a la vida civil<sup>19</sup>, esta Ley buscó materializar la paz en el

---

<sup>19</sup> Coloquialmente conocida como Ley de Justicia y Paz la cual dicta “disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios” (Ley 975, 2005).

país, teniendo como fin específico la superación del conflicto armado (Forer, 2012; Verdad Abierta, 2008).

Así las cosas, en el año 2005, Colombia inicia un proceso transicional que busca dar respuesta a las masivas violaciones de DDHH en el marco del conflicto armado. Cuestión que se deja en manos de los Tribunales de Justicia y Paz y de la Fiscalía de Justicia y Paz. Organizaciones que debido a la cantidad de casos registrados -para dar abasto- se vieron obligadas a diseñar un nuevo método de investigación basado en el crimen de sistema, el cual consiste en el estudio de una pluralidad de hechos delictivos/victimizantes, cometidos por un grupo armado en determinado territorio y en una línea de tiempo específica, cuyo análisis, permite establecer los modus operandi y los patrones comunes de victimización (Ley 975, 2005).

En teoría, el objetivo fundamental de esta Ley fue establecer un balance entre los principios de “justicia” y “paz”, con el fin de asegurar que los autores que se sometieran al proceso transicional rindieran cuentas de sus actos, reconocieran responsabilidades y contribuyeran con la reparación de las víctimas; así como también, se comprometieran con el desmantelamiento militar del aparato armado y la no repetición de acciones violatorias de DDHH, teniendo como base siempre la consecución de la paz. Reguló también todo lo relacionado con la investigación, el proceso, la sanción y el otorgamiento de beneficios judiciales a los excombatientes de las AUC (Ley 975, 2005).

Se dice que es la primera fase de la Justicia en Tiempos de Transición porque con esta se crearon herramientas que no habían sido previstas en las desmovilizaciones que tuvieron lugar en los años 90. Algunas de estas fueron: i) se estableció un “deber de memoria” por parte de los distintos actores sociales, empresariales y estatales que habían sido parte del conflicto armado (González-Chavarría, 2017); ii), se logró la construcción de un procedimiento penal especial al que se sometieron los desmovilizados, que, pese a su complejo funcionamiento y pocas sentencias condenatorias, otorgó a las personas victimizadas un ápice de verdad judicial<sup>20</sup>, con relación a los hechos ocurridos (Forer, 2012); y iii) trajo consigo un modelo de programas restaurativos para la reconciliación nacional, encaminado a restablecer los vínculos sociales entre víctimas, comunidades y ofensores.

---

<sup>20</sup> Se trata de la verdad oficial de lo sucedido alcanzada a través de un proceso judicial, ya sea porque fue declarada por éste, o porque se puede inferir del mismo (Uprimny y Saffón, 2007).

Sin embargo, su nivel de aceptación fue exiguo, en la medida en la que el esquema penal propuesto fue catalogado como un “sistema de impunidad” por varias organizaciones de DDHH, al no cumplir con los estándares mínimos establecidos por la comunidad internacional para garantizar los derechos de las víctimas (Ley 975, 2005; Gaona Cifuentes, 2018). En palabras de Barbosa (2017), la ley 975 de 2005 terminó siendo:

Un instrumento de sometimiento que no produjo resultados en el ámbito de la justicia transicional en términos de verdad, de garantías de no repetición, ni de reparación integral a las víctimas. De hecho, gran parte de los líderes de estos grupos terminaron siendo extraditados a Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico (p. 65).

En un sentido similar se pronunció Álvaro Villaraga<sup>21</sup> en una entrevista con Verdad Abierta (2015), al señalar que desde su perspectiva y con base en la investigación realizada por el Centro Nacional de Memoria Histórica (2015), el proceso con las AUC tuvo varios puntos críticos: i) de transparencia por parte de ambos actores, ya que por un lado, los paramilitares inflaron las cifras de desmovilizados para tener mayor peso en las negociaciones, mientras que por otro, el gobierno no creó una política pública rigurosa con relación a quiénes se iban a desmovilizar; ii) la duración de la desmovilización fue muy larga; iii) no se generaron medidas de atención para las víctimas ni para las comunidades, mientras que para los desmovilizados sí; y iv) no se evitó el rearme, lo que puso en riesgo a las víctimas al no existir garantías de no repetición.

En el marco de la implementación de la ley 975 de 2005 se suscitaron una serie de cuestionamientos por parte de organizaciones sociales de DDHH y de *víctimas*, donde ponían de manifiesto que la voluntad de los desmovilizados de contribuir a la verdad, a la justicia y a la reparación, era nimia, debido a que en el marco de las audiencias de “versión libre”, no se estaba dando un reconocimiento de los hechos por parte de estos; aunado a que las personas victimizadas no tuvieron desde el inicio de estas audiencias el lugar que merecían a la hora de intervenir en estos escenarios. Su participación estaba prevista de manera marginal; no se establecieron los mecanismos necesarios para su representación, ni para la garantía de un equilibrio de fuerzas entre ellas y los desmovilizados (Uprimny y Saffón, 2006). Finalmente, tras varias peticiones a la Fiscalía -que no dieron resultado- y gracias a la movilización social y a la interposición de tutelas se les reconoce a las personas que fueron victimizadas su derecho a participar en estos espacios (Saffon y Tacha, 2019).

---

<sup>21</sup> Director del programa Acuerdos de la Verdad del CNMH.

De forma complementaria a la Ley de Justicia y Paz se expidió la ley 1424 de 2010, la cual promovió la reintegración de los desmovilizados de las AUC que no fueron cobijados por la ley 975 de 2005. Esta ley les ofreció a los excombatientes la resolución de su situación jurídica y el otorgamiento de beneficios penales, siempre y cuando se cumplieran una serie de requisitos, en especial que no hubieran cometido graves violaciones a los DDHH o infracciones al DIH (Ministerio de Justicia, 2015). Este instrumento legal buscó la consecución de dos objetivos esenciales: por un lado, la reintegración de los desmovilizados a la sociedad y la promoción de mecanismos de no repetición de los hechos violentos; y por otro, la contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas y de la sociedad a la Verdad, Justicia y Reparación (Agencia Colombiana para la Reintegración, Ministerio de Justicia, USAID y OIM, s.f.).

Ante las imprecisiones que trajo consigo la ley 975 de 2005 se introdujo una modificación mediante la ley 1592 de 2012. Esta planteó varios cambios en lo concerniente al proceso penal especial de Justicia y Paz, que se puede resumir de la siguiente forma: i) un enfoque investigativo y de juzgamiento nuevo encaminado a develar patrones de macrocriminalidad partiendo del análisis de contexto; ii) coherencia entre el proceso penal de Justicia y Paz y el programa de reparaciones establecido en la ley 1448 de 2011; iii) celeridad en los procesos; iv) seguridad jurídica para los desmovilizados; v) establecimiento de un cierre total y definitivo de las postulaciones para la aplicación al proceso de Justicia y Paz; y vi) impulsar la política de resocialización de excombatientes privados de la libertad (Ministerio de Justicia, s.f.a; Ministerio de Justicia, 2015).

En lo atinente a las investigaciones que venía adelantando la Fiscalía, dentro de esta Ley se incluyen una serie de disposiciones específicas que esta tiene que implementar a la hora de realizar las investigaciones, imputaciones y acusaciones: i) la priorización de los delitos a investigar, focalizándose en la identificación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en aras de contribuir al esclarecimiento de la verdad y a revelar los patrones de macrocriminalidad; y ii) la concentración en la persecución de máximos responsables, entendidos estos como aquellos individuos que dentro de la estructura de mando y control de la organización delictiva sabían o podían prever la perpetración de violaciones graves a los DDHH e infracciones al DIH. En términos de justicia en tiempos de transición, la investigación de los máximos responsables, resultó ser una estrategia muy útil a la hora de entender tanto las motivaciones que llevaron a la ejecución de los hechos victimizantes, como a la jerarquía que habían dentro de estos grupos armados ilegales (Ministerio de Justicia, 2015).

## 2. Ley de Víctimas y Restitución de Tierras

Hay que destacar que esta Ley se encuentra dividida en dos partes, una que hace referencia a la población victimizada en el marco del conflicto armado, donde el norte trazado consistió en incrementar la participación real y efectiva de las *víctimas*<sup>22</sup>, reconociéndolas y escuchándolas, cuestión que se había omitido en los procesos de la Ley de Justicia y Paz; y otra, sobre la restitución de tierras, la Ley reconoció la relación que tuvo la tenencia de la tierra en las dinámicas violentas que se vivieron en algunas zonas del país, y propuso una serie de figuras jurídicas para solventar dicha victimización.

En el primer capítulo de la presente investigación se expuso la crítica que se le ha hecho desde la academia a la categoría de víctima, especialmente cuando esta se aborda en procesos de justicia en tiempos de transición, y efectivamente, esta Ley -a pesar de que reconoce la victimización a partir del hecho y no del agente (Uprimny Yepes y Sánchez León, 2011)- encasilla a la población victimizada, ya que solo le otorga reconocimiento y beneficios a aquellas personas que “caben” dentro de la definición de *víctima* que propone la Ley, dejando por fuera un espectro amplio de personas que fueron violentadas en sus DDHH fundamentales en ocasión al conflicto armado. La acepción de *víctima* que trae la ley es la siguiente:

Se consideran víctimas, para los efectos de esta Ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente.

De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima (Ley 1448, 2011, art. 3).

---

<sup>22</sup> Esta participación se concreta en la creación de las “Mesas de Participación de Víctimas”, espacios de trabajo en los que las personas victimizadas pueden participar para discutir, retroalimentar y hacerle seguimiento a lo que se pactó en la ley 1448, fundamentalmente, en materia de reparaciones.

Esta definición pese a que ha sido fuertemente acogida por diferentes sectores académicos y legislativos, también ha sido objeto de fuertes críticas, principalmente porque optó por homogenizar el carácter de *víctima*, es decir, a la hora de establecer quienes deberían ser reconocidos/as como *víctimas* la tendencia es a tratarlos/as a todos/as como iguales, desconociendo características como el sexo, la orientación sexual, la etnicidad, entre otros. Cuestión que de cierta forma impide que se identifique de manera correcta la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estas personas (Fuentes Becerra y Atehortúa Arredondo, 2015).

De todas forma, esa crítica que se le hace a la Ley, se solventa parcialmente -al menos respecto del capítulo étnico- con la expedición de los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011<sup>23</sup>, donde el primero dicta medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las *víctimas* pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas; y el segundo, dicta disposiciones similares, pero respecto de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Con base en lo anterior, el Decreto 4633 propone la siguiente definición de víctima:

Se consideran víctimas a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos colectivos y a sus integrantes individualmente considerados que hayan sufrido daños como consecuencia de violaciones graves y manifiestas de normas internacionales de derechos humanos, derechos fundamentales y colectivos, crímenes de lesa humanidad o infracciones al derecho internacional humanitario por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985 y que guarden relación con factores subyacentes y vinculados al conflicto armado interno.

Los pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes que hayan sido víctimas por hechos ocurridos con anterioridad al 1º de enero de 1985 serán sujetos de medidas de reparación simbólica consistentes en la eliminación de todas las formas de discriminación estructural, de no repetición de los hechos victimizantes, de la aceptación pública de los hechos, del perdón público y del restablecimiento de la dignidad de las víctimas y de los pueblos y comunidades indígenas que promuevan la reparación histórica, sin perjuicio de lo contemplado en parágrafo del artículo 2º del presente decreto.

La condición de víctima se adquiere con independencia de quien causare el daño y de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación de parentesco o filiación que pueda existir entre el autor y la víctima, sin

---

<sup>23</sup> Ambos decretos se sustentan en el derecho fundamental a la consulta previa que tienen los pueblos étnicos, que encuentra sustento en el Convenio 169 de la OIT, incluido dentro del bloque de constitucionalidad colombiano.

perjuicio de la responsabilidad del Estado de adelantar todas las medidas conducentes al esclarecimiento de la verdad.

Para los pueblos indígenas el territorio es víctima, teniendo en cuenta su cosmovisión y el vínculo especial y colectivo que los une con la madre tierra. Sin perjuicio de lo anterior, se entenderá que los titulares de derechos en el marco del presente decreto son los pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes individualmente considerados (Decreto 4633, 2011, art. 3).

Por su parte, el Decreto Ley 4635 de 2011 propone una definición muy similar a la planteada en el Decreto Ley 4633 de 2011, pero con la diferencia de que en lugar de referirse a las comunidades indígenas, se refiere a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, como sujetos victimizados colectiva e individualmente en el marco del conflicto armado colombiano.

Partiendo de la base de que la Ley aunque propuso cuestiones novedosas y muy necesarias para la población victimizada por dinámicas del conflicto, Uprimny Yepes y Sánchez León (2011) establecen tres razones que fundamentan las polémicas que ha generado con relación a la definición de *víctima* que planteó, la cuales son: i) se excluyeron de la condición de víctima a las personas que pertenecieron a grupos armados, interpretando la Ley se entiende que estos solo pueden ser concebidos como perpetradores; ii) no existe claridad sobre si la ley cubre los hechos victimizantes cometidos por las BACRIM; y iii) la Ley solo tiene en cuenta las victimizaciones cometidas con posterioridad a 1985. Estas razones han sido fundamentales a la hora de decidir la no inclusión en el Registro Único de Víctimas de personas que efectivamente fueron victimizadas, pero que no son cobijadas por la legislación precitada.

Analizando en mayor detalle algunas de las disposiciones que reglamenta la Ley 1448 de 2011, se evidencian varias cuestiones *sui generis* que no fueron tenidas en cuentas con la expedición de la ley 975 de 2005: i) se instauró un sistema de *Justicia Transicional* civil<sup>24</sup>, por medio del cual se buscó la restitución de tierras ante violaciones de DDHH e infracciones al DIH. Este sistema cuenta con una etapa administrativa y con otra de carácter judicial, donde se les otorga a quienes logran probar su condición de *víctima* las plenas garantías de sus derechos, teniendo en cuenta su condición de vulnerabilidad (Garay Salamanca y Vargas Valencia, 2012); ii) se puso en la lupa la necesidad de construir memoria histórica en Colombia como un deber de Estado, con la creación del Centro Nacional de Memoria Histórica como

---

<sup>24</sup> Se le denomina civil, toda vez que lo que busca es resarcir daños de contenido material a las víctimas (generalmente se trata de restitución de bienes inmuebles).



mecanismo de reparación simbólica colectiva, cuyo propósito es reconstruir la memoria para la realización del derecho a la verdad tanto individual como colectiva (ICJT, 2011); y iii) se establecieron medidas de atención, asistencia y reparación integral a las *víctimas* del conflicto armado, centrando su atención en el reconocimiento de los derechos que tienen estas a la verdad, a la reparación, a la justicia y a la no repetición (Ministerio de Justicia y del Derecho, s.f.a).

Las personas que cumplen con los requisitos para ser incluidas como “víctimas” pueden acceder a las medidas que prevé la Ley siempre y cuando se encuentren inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV). Para ser incorporadas en dicho registro, deben rendir una declaración de los hechos frente a entidades como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo o las Personerías municipales, las cuales posteriormente remiten las respectivas declaraciones a la UARIV cuya misión consiste en verificar los hechos relatados y decidir sobre su inclusión o no en el RUV. Las personas incluidas en el RUV, son acreedoras de medidas de atención, asistencia y reparación integral (Ministerio de Justicia, s.f.b.; Ley 1448, 2011).

Cabe destacar que la norma contempló cinco medidas de reparación integral: i) **Restitución:** busca el restablecimiento de las víctimas a la situación en la que se encontraban antes de su victimización (incluye restituciones de tierras, de vivienda, etc); ii) **indemnización administrativa:** consiste en una compensación económica, teniendo en cuenta el hecho victimizante y el estado de vulnerabilidad de la víctima; iii) **Rehabilitación:** son un conjunto de estrategias, planes y acciones de carácter jurídico, médico y psicosocial encaminadas al establecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas; iv) **Satisfacción:** son medidas que propenden por la búsqueda de la verdad, la recopilación y publicación de la memoria histórica y la implementación de medidas de reparación simbólica; y v) **Garantías de No Repetición:** la ley establece 17 medidas que buscan evitar que las violaciones sistemáticas de derechos humanos vuelvan a suceder (Ministerio de Justicia, s.f.b; Ley 1448, 2011).

Como se mencionó previamente, la Ley 1448 de 2011 trató una temática que se considera neurálgica en procesos de victimización: la tenencia de la tierra. En el capítulo cuarto se hará referencia a la incidencia que tuvo el despojo de la tierra por parte de grupos armados legales e ilegales en el Norte del Cauca, el cual en general se constituyó de manera sistemática, vulnerando DDHH a poblaciones donde el Estado no hacía presencia. En tal sentido, el desplazamiento forzado afectó a gran parte de las poblaciones rurales, que además fueron revictimizadas al enfrentarse en el proceso transicional con las AUC a reparaciones

materiales vagas, frente al verdadero despojo que hubo (Garay Salamanca y Vargas Valencia, 2012).

Es por esto, que con expedición de la Ley 1448 de 2011 la población victimizada por dinámicas del conflicto armado encontró una posibilidad de retornar a casa y de reconstruir identidades y modos de vida nuevos, que les permitieran poder sobrellevar la atrocidad a la que fueron sometidas/os en el marco de sus procesos de victimización que en muchos de los casos implicaron enfrentarse no con uno, sino con varios grupos armados legales o ilegales (Garay Salamanca y Vargas Valencia, 2012). Si bien esos procesos en la práctica han sido prácticamente inexistentes no solo por el manejo institucional que se les ha dado, sino también debido a que el conflicto armado aún no cesa y el retorno puede convertirse en una nueva victimización por parte de los grupos armados que estén ejerciendo control territorial en la zona.

Así las cosas, con la restitución de tierras se buscó que a las *víctimas* les fueran devueltos los predios de los cuales fueron despojadas o que tuvieron que abandonar por motivo y en razón del conflicto armado (Ministerio de Justicia, s.f.b). La restitución no hace énfasis en si la persona que reclama tiene títulos o no, ya que muchos de estos documentos fueron falsificados y otorgados a diferentes actores legales o ilegales del conflicto. Por eso, la ley prevé que se devuelva la tierra creando e inscribiendo un título de propiedad nuevo, propendiendo así por mejorar las condiciones socioeconómicas de las personas que se vean beneficiadas, con el objetivo de garantizarles dignidad humana (Ministerio de Justicia, s.f.b; Ley 1448, 2011).

El proceso de restitución se encuentra a cargo de la Unidad de Restitución de Tierras, en el caso en el que no haya un punto de atención de la Unidad cercano, la *víctima* se puede dirigir a las Personerías o a la Defensoría del Pueblo para dar inicio al proceso, mediante la solicitud de la inscripción del predio. Con posterioridad, la Unidad de Restitución de Tierras recogerá las pruebas y si la persona lo decide, será la Unidad quien la represente en el marco del proceso judicial que se adelante. Este proceso es realizado frente a jueces especializados. (Ministerio de Justicia, s.f.b; Ley 1448, 2011).

En el año 2019 la Corte Constitucional mediante sentencia C-588 de 2019, estableció la necesidad de prorrogar la vigencia de la ley de Víctimas y Restitución de Tierras. El mandato

de la Corte, finalmente se materializa en la Ley 2078 de 2021, la cual prorroga la vigencia de la ley por 10 años más, hasta el 2031.

### **3. Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera**

El Acuerdo Final de Paz, tiene como antecedente principal -además de la Ley de 1448 de 2011- lo que se denominó como Marco Jurídico para la paz -Acto Legislativo 01 de 2012-, impulsado por el Gobierno Nacional y declarado exequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-579 de 2013<sup>25</sup>; en este se sientan las bases necesarias para modificar la Constitución Política, permitiendo la creación de tres artículos transitorios, los cuales promovieron la implementación de la justicia en tiempos de transición en Colombia, con el fin de dar por terminado el conflicto armado interno y lograr una pacificación real (Ministerio de Justicia, s.f.c). Como se puede observar, a diferencia de la legislación previamente planteada, este marco jurídico adquiere rango constitucional.

El proceso de negociación entre las FARC-EP y el gobierno nacional fue largo, incluso se había intentado realizar a finales de los años noventa en el gobierno de Andrés Pastrana, pero dicha iniciativa no tuvo solución de continuidad debido a que la guerrilla no asumió en ningún momento una disposición de negociación real, de hecho, se habla incluso de lo desastroso que fue haber permitido la zona de despeje en San Vicente del Caguán. Pese a lo anterior, el proceso impulsado por el gobierno de Juan Manuel Santos planteó manejar las negociaciones de manera diferente y paulatina y en una zona neutral: La Habana (Cuba). Los diálogos exploratorios iniciaron en el 2012 y terminaron con el acuerdo constituido en el 2016.

Cabe destacar que el Acuerdo fue firmado en un primer momento el 24 de septiembre de 2016 en Cartagena, esperando ser refrendado mediante plebiscito el 02 de octubre de ese mismo año. Sin embargo, hubo ausencia de voluntad refrendataria, ya que el número de votos por el “No” superó los del “Sí”<sup>26</sup>. Como bien mencionan Martínez y Ferrajoli (2017) la paz es la prevalencia de la convivencia civil, motivo por el cual era innecesario someter a votación la paz. Ante esta situación se abrió un proceso de renegociación, el cual llevó a que se reestructuraran algunos puntos del Acuerdo para ser firmado con las enmiendas el 26 de noviembre de 2016

---

<sup>25</sup> “se adopta la visión de un “sistema complejo de justicia transicional”, y no un sistema constituido por disposiciones jurídicas dispersas, con lo cual se reivindica en cierta medida el concepto de estrategia de justicia transicional, echado de menos en revisiones anteriores” (Gaona Cifuentes, 2018, p. 124)

<sup>26</sup> En el plebiscito el “No” obtuvo 6'431.376 votos (50.21%); y el “Sí” 6'377.482 votos (49.78%) (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2016).

en el Teatro Colón de Bogotá y refrendado los días 29 y 30 de noviembre de 2016 por parte del Congreso de la República (Barbosa, 2017).

La naturaleza jurídica que tiene este acuerdo es *sui generis* en el sistema jurídico colombiano, ya que no se encuentra dispuesto en su totalidad en una sola Ley Nacional, sino que se ha venido desarrollando mediante la implementación de varios Actos Legislativos, que han introducido disposiciones transitorias en la Constitución Política colombiana, las cuales han sido revisadas mediante control de constitucionalidad por la Corte Constitucional. Dichos Actos legislativos han reglamentado los diferentes puntos del acuerdo mediante la expedición de Leyes y Decretos.

Con base en lo anterior, Núñez Marín y Claros Hernández (2017) realizan un análisis desde la normativa internacional que tiene incidencia en cómo deberían ser concebidos los Acuerdos en la normativa interna colombiana. En ese sentido, se deben seguir las bases conceptuales que prevé el DIH en materia de Acuerdos Especiales<sup>27</sup>. En los Convenios de Ginebra de 1949, se hace referencia en dos disposiciones a los acuerdos especiales: por un lado, en el artículo 3 común a los convenios de Ginebra, donde son concebidos como un instrumento para la entrada en vigencia de obligaciones adicionales en materia de DIH en conflictos armados de carácter no internacional; y en el artículo 6 común<sup>28</sup>, donde se entienden como una posibilidad de las partes de ponerse de acuerdo en ciertos puntos respecto al desarrollo de las hostilidades (Comité Internacional de la Cruz Roja [CICR], 2014).

Con lo anterior, el Acuerdo de Paz firmado en el teatro Colón el 24 de noviembre de 2016, por su contenido, adquiere la connotación de Acuerdo Especial, según las normas del DIH, específicamente en el marco del artículo 3 común, el artículo 6 del Convenio III de 1949 y del protocolo II adicional del 1977 (CICR, 1948). Con la suscripción de estos se beneficia principalmente a las personal victimizadas en el marco del conflicto armado.

Ahora bien, en el plano del derecho nacional es importante tener en cuenta lo que se denomina “bloque de constitucionalidad”<sup>29</sup>, ya que es gracias a este que el Acuerdo Final para

---

<sup>27</sup> los cuales tienen como objetivo ampliar las obligaciones en cabeza de las partes en el marco del conflicto armado, sea este de carácter internacional o no internacional, así como también en concertar ciertos puntos relevantes en el desarrollo de las hostilidades.

<sup>28</sup> Artículo 7 del convenio IV.

<sup>29</sup> El bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuando han sido normativamente integrados a la Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel

la Terminación del Conflicto -concebido como un Acuerdo Especial con arreglo al DIH- tiene validez dentro del ordenamiento jurídico interno, principalmente en asuntos como el cese al fuego y a las hostilidades de manera definitiva, la búsqueda de personas desaparecidas, la protección de los civiles, entre otros (Núñez Marín y Claros Hernández, 2017).

El acuerdo que se logró consta a grandes rasgos de seis puntos, los cuales tratan cuestiones cruciales en pro de lograr y mantener la paz en Colombia, estos son: (i) reforma rural integral; (ii) participación política: apertura democrática para construir paz; (iii) Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de armas; (iv) solución al problema de las drogas ilícitas; (v) víctimas; y (vi) mecanismos de implementación y verificación (Gobierno Nacional y FARC-EP, 2016).

Cabe resaltar que en lo que respecta a la presente investigación, se tendrá en cuenta de manera fundamental el punto cinco (5) que trata el tema de las persona que fueron victimizadas, esencialmente lo que corresponde a la implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, sobre el cual se ahondará en el siguiente capítulo. Este sistema lucha a grandes rasgos contra la impunidad que se pueda llegar a dar con relación a violaciones sistemáticas y masivas de DDHH e infracciones al DIH, utilizando medidas y mecanismos tanto judiciales como extrajudiciales para garantizar a las personas victimizadas sus derechos a la Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

---

constitucional, a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos al de las normas constitucional strictu sensu. (Sentencia C-225/95, 1995)

### **CAPÍTULO 3: MECANISMOS DE JUSTICIA EN TIEMPOS DE TRANSICIÓN PREVISTOS PARA COLOMBIA EN EL ACUERDO FINAL DE PAZ: EL SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN.**

" Cuanto más se desvíe  
una sociedad de la verdad,  
más odiará a aquellos que la proclaman".  
**G. Orwell.**

Como señala la Magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz, Gómez Díaz (2020), el Acuerdo de Paz firmado en el 2016 entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP significó un punto de inflexión en materia de justicia en tiempos de transición en Colombia, en el entendido en que se puede catalogar este proceso de paz como el primero en el que se estableció un "conjunto articulado de mecanismos extrajudiciales y judiciales de justicia transicional (...) y un foro especial donde se atribuye responsabilidad penal individual" (p. 179), en dicha materia, el Acuerdo colombiano es pionero.

Puede decirse entonces que el establecimiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, representa no solo la materialización comúnmente establecida por la academia, la doctrina y las diferentes experiencias alrededor del mundo, sobre la forma en la que se debería concretar la justicia en tiempos de transición, sino que además, por la integralidad con la que fue pensado, constituye una fórmula para resolver ese dilema entre justicia y paz (Gómez Díaz, 2020), que es tan común en el marco de procesos transicionales, donde se ha puesto en el epicentro de su desarrollo a las personas victimizadas, estableciendo además, la necesidad de implementar un enfoque diferencial, porque no toda la población ha sido golpeada por el conflicto de la misma forma.

Este sistema está enfocado específicamente en la población que ha sido victimizada por hechos violentos, en su resarcimiento y en la protección y en la garantía de sus derechos fundamentales. En aras de darle cumplimiento a lo anterior, se crean tres mecanismos transicionales fundamentales: La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, La Jurisdicción Especial para la Paz y La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto; así como también, se establecen una serie de medidas específicas de reparación y garantías de no

repetición, que se complementan con lo dispuesto en la ley 1448 de 2011. Cada uno de estos mecanismos y medidas será explicado con mayor profundidad más adelante.

Es importante señalar que durante las negociaciones en la Habana la discusión del punto cinco (5) “sobre la *víctimas*”, tuvo una complejidad tremenda por las implicaciones que iba a tener a futuro para estas personas. A tal nivel, que mientras los puntos preliminares a este se negociaron en un periodo aproximado de seis meses cada uno, el acuerdo sobre las *víctimas* tardó más de año y medio en poder concretarse. Incluso, los negociadores con el fin de acelerar la cuestión se vieron en la necesidad de conformar una Comisión de Juristas para lograr consensos de manera más eficiente (Gómez Díaz, 2020).

### **1. La centralidad de la población victimizada**

Desde el inicio de las negociaciones en la Habana en el 2012 las partes promovieron la idea de que las *víctimas* estaban en el centro del acuerdo de paz (Gómez Díaz, 2020). Hubo dos puntos neurálgicos que se encargaron de dar cuenta de que las personas victimizadas debían estar en el centro de todo:

El primero, fue la declaración de diez principios que hizo la FARC-EP, previamente a iniciar la negociación del punto cinco (5), donde a grandes rasgos se hizo hincapié en los siguientes supuestos: i) reconocimiento de las víctimas; ii) reconocimiento de responsabilidad; iii) satisfacción de los derechos de las víctimas; iv) participación de las víctimas; v) esclarecimiento de la verdad; vi) reparación de las víctimas; vii) garantías de protección y de seguridad; viii) garantías de no repetición; ix) reconciliación; x) enfoque de derechos (Alto Comisionado para la Paz, 2014). Esta iniciativa tuvo mucho peso de cara a la credibilidad que iba teniendo el proceso de paz tanto en el ámbito interno, como en el ámbito internacional, porque significó un verdadero compromiso por la no impunidad (Gómez Díaz, 2020); y dio paso para que por un lado, las personas victimizadas pudieran participar expresando sus reflexiones sobre este punto del acuerdo en los diferentes foros que se realizaron a nivel regional y nacional, y por otro, para que se constituyera la Comisión Histórica del Conflicto que realizó un informe interpretativo sobre la historia y el impacto del conflicto armado en Colombia (Saffon y Tacha, 2019; Fundación Ideas para la Paz [FIP], s.f.; Gómez Díaz, 2020).

El segundo, tiene relación con las participaciones que se suscitaron en los territorios, toda vez que llevaron a que las partes llegaran a un acuerdo sobre la participación directa de las personas victimizadas, en las negociaciones, reconociendo que sus voces eran un insumo

fundamental en las discusiones que se iban a tratar en este punto. Bajo esa lógica, participaron sesenta personas, divididas en cinco delegaciones -que fueron victimizadas por la guerrilla, por agentes del Estado y por paramilitares- quienes viajaron a la Habana a dar sus testimonios y recomendaciones en el marco de la negociación del punto cinco. Las cinco delegaciones que viajaron comprendieron personas de varias regiones del país, incluyendo a las comunidades étnicas<sup>30</sup>, poniendo de presente la multiplicidad de victimizaciones a las que ha sido sometida la población colombiana. La iniciativa fue apoyada por la Conferencia Episcopal, la ONU y la Universidad Nacional de Colombia (PNUD Colombia, 2014; Saffon y Tacha, 2019).

Como resultado de la participación que tuvo la población victimizada en las negociaciones, se logró establecer en el punto cinco del Acuerdo de Paz para la Terminación del Conflicto, que uno de los criterios orientadores del SIVJNR debía ser precisamente la centralidad de las *víctimas*, este se ve reflejado en su reconocimiento y en la satisfacción de sus derechos a la Verdad, Justicia y Reparación (IFIT, FIP, CEJ y MOE, 2017). Es esa medida, se hace indispensable que ese enfoque central que tiene la población victimizada sea la piedra angular del Sistema, en aras de que sus voces sean escuchadas en el marco de cada uno de los mecanismos y medidas que lo componen.

Con la firma del Acuerdo de Paz para la terminación del conflicto, el Estado colombiano asumió la responsabilidad de garantizar y satisfacer los derechos de la población victimizada como presupuesto para consolidar la no repetición de hechos violentos, cumpliendo con el objetivo de lograr una paz estable y duradera, teniendo como base la no impunidad (Comisión Colombiana de Juristas y Deutsche Gesellschaft für Internationale, 2019).

Es claro, que este planteamiento que pone en el núcleo del Acuerdo a la población victimizada deviene de la inclusión de un enfoque restaurativo de la justicia, que se puso de manifiesto desde las negociaciones, y el cual escuchó a todos los actores del conflicto: población victimizada, ofensores y sociedad en general, apostándole a que en el marco de la implementación se logren los siguientes presupuestos: i). El reconocimiento del daño; ii). La generación de espacios para que se dé el “perdón”; y iii). La reconciliación Nacional. La inclusión de este enfoque permite que el Estado colombiano oriente sus esfuerzos en pro de

---

<sup>30</sup> Hay que destacar que el capítulo étnico se desarrolló cuando las negociaciones estaban por terminar, lo cual fue objeto de críticas por parte de las comunidades, teniendo en cuenta que ellas pueden hacer ejercicio de su derecho a la consulta previa, que fue el móvil para que esa interacción finalmente se desarrollara a pesar de la precaria deliberación que se tuvo en dichos espacios.



reparar a las víctimas, reconstruir tejido social y dignificar a las personas que fueron victimizadas por hechos violentos.

## **2. Enfoque Diferencial**

Este enfoque surge bajo la perspectiva de que a pesar de que en un Estado Social de Derecho todas las personas son iguales ante la ley, dadas las condiciones de vulnerabilidad en las que vive un porcentaje de la población, se hace necesario incorporar una serie de acciones diferenciales de acuerdo con sus necesidades, diferencias y desigualdades (Ministerio del Interior, s.f).

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2014):

El enfoque diferencial tiene un doble significado: es a la vez un método de análisis y una guía para la acción. En el primer caso, emplea una lectura de la realidad que pretende hacer visibles las formas de discriminación contra aquellos grupos o pobladores considerados diferentes por una mayoría o por un grupo hegemónico. En el segundo caso, toma en cuenta dicho análisis para brindar adecuada atención y protección de los derechos de la población.

En ese sentido, el enfoque diferencial se refiere a una serie de acciones que les son ofrecidas a ciertos grupos vulnerados y que contribuyen a la reducción de las brechas que existen entre los diferentes estamentos de la población, lo cual impulsa la superación “de la exclusión social, la marginalidad política, la desigualdad económica, la condición especial de vulnerabilidad y el riesgo de estas poblaciones ante el conflicto armado, lo que genera igualdad en el acceso a las oportunidades sociales” (Ministerio del Interior, s.f, p. 7).

Como ha expuesto la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2014), el enfoque diferencial está compuesto principalmente por dos enfoques específicos: el enfoque de género y el enfoque étnico, ambos han sido incluidos en la Ley 1448 de 2011, en los Decretos Ley 4633 de 2011 y 4635 de 2011 y en el SIVJRNR. El primero, se fundamenta en que las desigualdades de género necesitan atención y visibilización con el fin de superar esquemas patriarcales y machistas, interpelando la concepción del género y entendiendo que este es “una construcción social de patrones culturales relacionado con la subjetividad” (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2014). El segundo, hace referencia a la diversidad étnica y cultural, donde se pone de presente la latente diversidad de identidades existentes, tanto en el plano individual como en

el colectivo y la necesidad de ofrecerles mayor protección por la riqueza que representan para la humanidad (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2014).

El enfoque diferencial étnico resulta crucial en la presente investigación, toda vez que la mayor parte de la población que habita en el Norte del Cauca tiene pertenencia étnica, como se podrá ver en el próximo capítulo y como reposa en el Anexo 1 (de elaboración propia), lo que ha significado que tanto la violencia causada por inequidades y asimetrías sociales, así como las graves violaciones a los DDHH e infracciones al DIH perpetradas en su contra, han sido históricas y sistemáticas y en tal sentido, urge la necesidad de visibilizar su situación con criterios diferenciadores, evitando a toda costa que se sigan invisibilizando sus procesos de victimización y de resistencia (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2014).

Tanto en el Acuerdo Final de Paz como en el Acto Legislativo 01 de 2017 se hace referencia a los enfoques diferenciales -de género, étnicos y territoriales- con la constitución del SIVJNR, los cuales deben ser armónicos con los postulados del artículo 13 de la Constitución Política (Jurisdicción Especial para la Paz y OEA-MAPP, 2020). Estos enfoques deben abordar las “características particulares de victimización de los distintos territorios y las características de victimización específicas de grupos diferenciados (mujeres, niñas y niños, comunidades étnicas, entre otros)” (Gómez Díaz, 2020, p. 186).

De esta forma, con la constitución del SIVJNR los enfoques diferenciales entraron a hacer parte transversal de cada uno de los componentes del sistema, reconociendo el rol que han tenido los grupos étnicos en el conflicto armado, así como la violencia histórica que han padecido. De igual forma, se hace un reconocimiento sobre la afectación que han tenido sus territorios, sus lugares sagrados y todo aquello que constituye parte fundamental de su reconocimiento y de su idiosincrasia. De esta forma, el SIVJNR busca hacer una identificación de los impactos que han tenido estas poblaciones con la finalidad de poder aportar mediante la implementación de acciones afirmativas a un cambio estructural respecto de las condiciones de marginalización y destrucción que han padecido con motivo de los hechos que las han victimizado de manera sistemática (Comisión de la Verdad y DeJusticia, 2019).

### **3. Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición**

El SIVJNR además de haber sido establecido en el Acuerdo para la Terminación del Conflicto en el marco del punto 05, fue creado por el Congreso de la República de Colombia mediante el Acto Legislativo 01 de 2017<sup>31</sup>. El SIVJNR tiene como cimiento -además de la centralidad de la población victimizada- el enfoque territorial, diferencial y de género, lo que quiere decir que tiene en cuenta que la guerra ha afectado de forma principal y diferenciada a las mujeres, a las niñas y a los niños, así como también a las comunidades étnicas y campesinas, quienes además se han ubicado ancestralmente en territorios en donde el Estado no ha hecho presencia y ha incumplido con su deber de ser garante de los derechos fundamentales de las personas (Barbosa, 2017).

La pretensión máxima del SIVJNR es ofrecerle a las personas victimizadas y a la sociedad en general, una respuesta integral sobre los hechos que en el marco del conflicto armado generaron graves violaciones de DDHH e infracciones al DIH. Se trata de un Sistema Integral, en el entendido de que tanto los mecanismos judiciales y extrajudiciales, como las medidas, están interconectados de tal forma que ninguno prima sobre el otro y no pueden operar de manera aislada, a pesar de que cada uno tiene funciones independientes y específicas (Ávila Alférez y Cardona Pachón, 2018a). Esta noción de complementariedad según plantea Gómez Díaz (2020) surge con el fin de evitar cometer los mismos errores que tuvo la “ley de Justicia y paz”, razón por la cual, los mecanismos de justicia en tiempos de transición deben apoyarse entre sí con el fin de potencializar sus fortalezas y de cubrir sus debilidades.

Hay que resaltar que la exhaustividad del SIVJNR dependerá no sólo del trabajo mancomunado que realicen sus mecanismos y medidas, sino también de la sujeción -de quienes se acojan al tratamiento penal especial- a un régimen de condicionalidad, que busca la real satisfacción de los derechos de las personas victimizadas (Gómez Díaz, 2020). Este régimen de condicionalidad lo regula la JEP, ya que por un lado es un requisito para que esta jurisdicción mantenga competencia sobre los casos concretos, y por otro, este régimen es el que le da vía libre a que entren en consideración recortes punitivos, sanciones leves, además

---

<sup>31</sup> “por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de las Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera” (Acto Legislativo 01, 2017)

de plantear los términos en los que se otorgarán los tratamientos especiales, beneficios e incentivos (Zuluaga y Vargas, 2019).

Como corolario de lo anterior, los artículos 14 y 50 de la Ley 1820 de 2016 enfatizan en que si durante la vigencia de la JEP, los beneficiarios de amnistías, indultos o tratamientos penales especiales se rehúsan de manera reiterada e injustificada a cumplir con los requerimientos que les haga el Tribunal para la Paz en lo que atañe a la participación en los programas de reparación a las *víctimas*, o a acudir a la CEV, o a la UBPD (en los eventos en los que sean requeridos por estas), perderán el derecho a acceder a la imposición de sanciones propias de la JEP (sobre estas se hablará en el numeral 3.3. del presente capítulo) y a cualquier beneficio que prevea el tratamiento penal especial (Ley 1820, 2016, art. 14 y 50).

A continuación se ahondará en cada uno de los mecanismos que conforman el SIVJNRN, así como en las medidas de Reparación Integral y las Garantías de No Repetición que quedaron consignadas en el Acuerdo de Paz y en los Actos Legislativos, Leyes y Decretos que lo han ido reglamentando.

### 3.1. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV)

En el marco de las negociaciones de paz en la Habana, la CEV se convirtió en un punto difícil de conciliar, no solo por las implicaciones que tenía para la guerrilla, sino sobre todo, para la Fuerza Pública, de cara al reconocimiento que como entidades del Estado deben tener a la verdad, respecto de aquellas situaciones en las que a manos de ellos/as se vulneraron DDHH y se infringió el DIH en el marco del conflicto armado en Colombia. Esto hizo que en un principio pusieran muchas trabas para darle luz verde a la configuración de la CEV, sin embargo, se logró consensuar y en junio de 2015 se publicó el primer borrador sobre lo acordado respecto de este mecanismo (Gómez Díaz, 2020).

La CEV fue reglamentada por el Decreto Ley 588 de 2017, partiendo de experiencias previas que se suscitaron alrededor del mundo, teniendo en cuenta los puntos positivos que se lograron en materia de verdad, así como verificando y reconstruyendo aquellos puntos que fueron desventajosos para la población victimizada o para la sociedad en general, y que era menester evitar incluir en la formulación de una Comisión de la Verdad para Colombia. Para construirla, fue necesario tener en cuenta las particularidades del contexto colombiano y los retos que existen en materia de paz (Gómez Díaz, 2020).

Este mecanismo se constituye como una instancia de orden nacional que cuenta con autonomía e independencia; tiene carácter constitucional, temporal y extrajudicial. Se encuentra conformada por once comisionados/as, quienes fueron escogidos/as con base en sus competencias y capacidades, así como en criterios de equidad de género, pluralismos, representación regional, etc. (Ávila Alférez y Cardona Pachón, 2018b). Su objetivo fundamental es el esclarecimiento y reconocimiento de la verdad en términos de causas políticas, económicas, geográficas, históricas, de lo ocurrido durante el conflicto armado en Colombia; cuestión que nutrirá y aportará a la construcción y preservación de la memoria colectiva, e intentará darles entendimiento a las múltiples dimensiones de la verdad del conflicto. Así mismo, con ella se buscan reconstituir las bases de la convivencia, la reconciliación y la no repetición (Decreto 588, 2017, Art. 1; Gómez Díaz, 2020).

Las actividades que se adelanten en la CEV no tienen carácter judicial, por tanto, las intervenciones que en esta se efectúen no servirán para realizar imputaciones ante ninguna autoridad jurisdiccional; tampoco se podrá hacer traslado de la información que reciba o produzca la CEV a autoridades judiciales para ser utilizada a la hora de atribuir responsabilidades en procesos judiciales (Decreto 588, 2017. Art. 4). En contrario sensu, la CEV si puede “solicitar a los demás componentes del SIVJNR el traslado de información aportada por las víctimas, las organizaciones de víctimas y las organizaciones de derechos humanos” (Decreto 588, 2017. Art. 15). Incluso, puede solicitar información reservada, especialmente cuando se trata de indagar sobre graves violaciones de DDHH e infracciones al DIH, sin embargo, dicha información bajo ningún motivo puede ser publicada.

El carácter temporal de la CEV hace que tenga una vigencia de tres años, los cuales empezaron a contar a partir del 28 de noviembre de 2018, fecha en la que la CEV inició su mandato con el primer Encuentro por la Verdad (Comisión de la Verdad, 2018). Esa duración que se estima debe tener la CEV genera dudas en cuanto a su eficacia, ya que lo que tiene que investigar corresponde a casi 60 años de conflicto armado interno y tres años parecen insuficientes. En ese sentido, debido a su corta duración, su objeto de estudio tiene que estar debidamente delimitado, lo que hace necesaria la priorización temporal y geográfica de los hechos victimizantes -se ha venido haciendo por macrorregiones- ante la imposibilidad de investigar todos los casos individuales que contemplan graves violaciones de DDHH e infracciones al DIH. Dentro de ese espectro cabe la posibilidad de que no toda la población victimizada se sienta incluida y resarcida en términos de verdad; en ese sentido, el reto que tiene la CEV es muy grande.

El enfoque que se le ha dado a la CEV a los dos años de su mandato ha sido el de hacer una exploración y una investigación no en términos de llegar a una “verdad oficial”, sino de tener un sentido comprensivo de lo que pasó. Lo que quiere decir que la CEV va más allá de esclarecer la verdad y se centra también en escuchar a la diversidad de sujetos que han tenido alguna incidencia en el marco del conflicto armado en Colombia, implementando además un enfoque territorial, que da cuenta de las complejidades particulares y características propias de cada región, así como de las formas diferenciales en que vivieron el conflicto armado; donde además se deben tener en cuenta los enfoques diferenciales que incluyan la diversidad cultural y étnica, la pluralidad y las cosmovisiones. Esto con la idea de comprender por qué pasó lo que pasó y trabajar arduamente en materia de reconstrucción de tejido social y de identidades, para evitar que los hechos atroces se vuelvan a repetir. MOOC CEV Edx (comunicación personal, 07 de junio, 2020).

Adicionalmente, la CEV ha utilizado el dialogo social como herramienta para reflexionar y comprender las diversas verdades, lo que ha significado un intento por construir e identificar los patrones y contextos que llevan a la verdad, donde la sociedad en general ha sido interpelada e impulsada a reflexionar sobre el conflicto y sobre las posibles transformaciones estructurales y culturales que se deben dar para la construcción de paz. Lo que se resumen en que la sociedad civil debe tener una apropiación de la verdad, así como un afianzamiento de las recomendaciones que se van generando para la no repetición. MOOC CEV Edx (comunicación personal, 07 de junio, 2020).

Todo el trabajo que ha venido realizando la CEV quedará condensado en un informe final que debe tener en cuenta los diferentes contextos, debe reflejar todas las investigaciones que se realizaron durante los tres años de su mandato y debe contener las conclusiones y recomendaciones a las que se llegaron, esto como medida de satisfacción a las víctimas. Este informe debe ser presentado de manera oficial mediante acto público a las ramas del poder público y a la sociedad colombiana. Se espera que este sea entregado el 28 noviembre del 2021 y que sea difundido de manera masiva y pedagógica una vez se haya hecho la entrega pública. Una vez finalizado el mandato de la CEV, entrará en funcionamiento un Comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones hechas por esta entidad. (Decreto Ley 588, 2017).

### 3.2. Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y con Razón del Conflicto Armado (UBPD)

En contextos internacionales la función de búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en situaciones de conflicto se le ha encomendado a las Comisiones de la Verdad, sin embargo, en el caso colombiano se tomó la determinación de crear un mecanismo específico que cumpliera dicho propósito: La UBPD. Esta institución hace parte del sector justicia, es autónoma e independiente, tiene carácter constitucional, temporal, humanitario y extrajudicial. Fue reglamentada en el Decreto Ley 589 de 2017. Su objetivo fundamental se encuentra focalizado en dirigir, coordinar y contribuir en la implementación de acciones humanitarias de búsqueda y localización de personas vivas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; y en caso de que estas hubieran fallecido, el objetivo de la UBPD se redirige a recuperar, identificar y hacer entrega digna de los cuerpos de estas personas a sus familiares (Gómez Díaz, 2020; Acto Legislativo 01, 2017).

Hay que tener claro, que la UBPD no se encarga únicamente de realizar la búsqueda de personas desaparecidas forzosamente, sino también de aquellas personas que por diferentes circunstancias han desaparecido. Dentro del espectro de personas que pueden ser concebidas como desaparecidas están aquellas que fueron secuestradas, reclutadas forzosamente, personas que hicieron parte de las filas de los grupos armados sean legales o ilegales, que pudieron morir en el curso de las hostilidades y que están desaparecidas para sus familias, en la medida en la que nunca volvieron a saber de su paradero y nunca recibieron sus restos (Gómez Díaz, 2020). La UBPD hará la búsqueda de estas personas siempre y cuando los hechos hayan ocurrido antes del 01 de diciembre de 2016, según quedó establecido en el Acuerdo de Paz (Unidad Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, s.f.).

La UBPD implica un cambio de paradigma en materia de búsqueda de personas desaparecidas, ya que se sale de la esfera del proceso penal y se hace un tránsito hacia la configuración de un proceso de búsqueda humanitaria y extrajudicial (Unidad Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, s.f.). Ese carácter humanitario se refleja de la siguiente forma: i) con la activa y consciente participación de los familiares de las víctimas, se busca contribuir a satisfacer en la medida de lo posible sus derechos a la verdad y a la reparación, pero ante todo a aliviar su sufrimiento; y ii) permite asegurar que la búsqueda de las personas desaparecidas tendrá como eje principal la respuesta sobre su muerte, su paradero y la

posterior información a los familiares, más allá de la identificación y sanción a los responsables (CICR, 2018; Decreto Ley 589, 2017, Art. 3).

Este mecanismo se encuentra enmarcado en la consecución de dos cuestiones, por un lado, lograr establecer el “¿por qué?” y el “¿qué les paso?” a las personas que fueron desaparecidas como resultado del accionar de la Fuerza Pública, de integrantes de las FARC-EP o de cualquier otra organización que haya participado en el conflicto armado; y por otro, a contribuir en la satisfacción de los derechos de las y los buscadoras/es a la verdad y a la reparación, sumando esfuerzos para lograr establecer las coordenadas donde pueden estar estas personas que fueron desaparecidas. Cabe destacar que la información que recibe la UBPD es confidencial y solo contribuye a la búsqueda, no puede ser utilizada en procesos jurisdiccionales (Unidad Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, s.f.).

La vigencia de la UBPD se estableció que sería por 20 años, los cuales pueden ser prorrogados mediante ley. Durante su vigencia esta debe informar de forma periódica y publica, al menos cada seis meses sobre las actividades que ha adelantado en materia de búsqueda y localización de personas vivas; y la recuperación, identificación y entrega digna de los cuerpos en caso de fallecimiento, respetando siempre el derecho a la privacidad de las familias (Decreto Ley 589, 2017).

Las principales funciones que le fueron asignadas a las UBPD son las siguientes: i) adelantar procesos de búsqueda y localización de personas vivas; y la recuperación, identificación y entrega digna de los cuerpos en caso de fallecimiento. Del resultado de esta actividad debe expedir reportes oficiales; ii) Con apoyo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forenses debe asignar un capítulo especial en el Registro Nacional de Desaparecidos, para el universo de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, así como fortalecer los procedimientos de identificación y llevar a cabo acciones que permitan la recolección y aporte de muestras biológicas de los familiares al Banco de Personas Genéticas; iii) Diseñar y poner en marcha un Plan Nacional y Planes Regionales con colaboración de organizaciones de víctimas y de Derechos Humanos para la búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas y; iv) promover con las demás instancias competentes la orientación y atención psicosocial a los familiares de las personas dadas por desaparecidas (Decreto Ley 589, 2017).



### 3.3. Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

#### 3.3.01. *Generalidades*

La JEP es el componente de justicia del SIVJRN, tiene un enfoque esencialmente restaurativo, ha sido reglamentada por un serie de normas, dentro de las cuales la más relevante es la Ley Estatutaria 1957 de 2019. Este mecanismo de justicia surge ante la imposibilidad de amnistiar o indultar aquellos hechos que constituyen crímenes de guerra y graves violaciones a los DDHH. Es una jurisdicción completamente nueva, tiene carácter especial y transitorio, “está conformada por el Tribunal para la Paz, la Unidad de Investigación y Acusación, la Secretaría Ejecutiva y tres Salas: la Sala de Amnistía o Indulto (SAI), la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVRDH) y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ)” (Gómez Díaz, 2020, p. 193).

Su propósito principal es la lucha contra la impunidad, que se ve reflejado en el deber que tiene el Estado de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los DDHH y las infracciones al DIH. Así mismo, al ser un ente jurisdiccional busca otorgar garantías procesales y seguridad jurídica integral, a todas aquellas personas que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno (Gómez Díaz, 2020). De manera preliminar, esta jurisdicción tendrá un mandato inicial por 10 años que pueden ser prorrogados hasta por un máximo de 20 años (Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, 2018).

La existencia de la JEP es consecuencia directa del análisis y aplicación de la normativa del derecho internacional de los DDHH que estipula que la “responsabilidad individual por los crímenes internacionales y las graves violaciones de los DDHH debe ser atribuida por un tribunal de justicia, incluso en el contexto de una negociación política para poner fin a un conflicto armado” (Gómez Díaz, 2020, p. 194). En ese sentido, ante las dificultades que presentó la efectiva aplicación del modelo de justicia penal establecido en la Ley de Justicia y Paz, en las negociaciones de la Habana, se planteó la necesidad de crear un tribunal nuevo e independiente de la justicia ordinaria colombiana, que debía contar con características especiales y cuya naturaleza debe seguir siendo de orden penal (Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 1998; Gómez Díaz, 2020).

La JEP tiene una triple competencia: i) **temporal**: conoce sobre las conductas cometidas con anterioridad al primero de diciembre del 2016; ii) **personal**: su competencia se extiende a los exmiembros de las FARC-EP, a los miembros de la Fuerza Pública, a los terceros (agentes del Estado y civiles)<sup>32</sup> y a las personas procesadas por protesta social; y iii) **material**: la JEP tiene competencia sobre delitos políticos o conexos, así como sobre las graves violaciones a los DDHH y las graves infracciones al DIH cometidas en el marco del conflicto armado en Colombia (JEP, s.f.a).

El sometimiento de los combatientes a esta nueva jurisdicción -como se mencionó al inicio de este capítulo- depende de la suscripción de un acta de compromiso en donde acepten su sumisión al régimen de condicionalidades, el cual los/as obliga a aportar verdad plena, a reparar a la población que victimizaron, a no repetir los delitos que perpetraron y a acudir al SIVJNR cuando sean llamados por alguno de los mecanismos que lo componen, en caso de incumplir dichas obligaciones perderán los beneficios jurídicos a los que pueden tener acceso (JEP, s.f.a).

Llegados a este punto, vale la pena hablar brevemente sobre los tipos de sanciones que contempla la JEP, que van a depender del reconocimiento de la verdad que realicen los comparecientes. Así, cuando hay un reconocimiento pleno, se aplica una sanción propia, la cual es restaurativa y reparadora del daño, que puede durar entre 5 y 8 años en establecimientos no carcelarios (ETCR), o de 2 a 5 años si hubo participación indirecta en el delito. En los casos en los que se reconozca la verdad justo antes de que se emita sentencia, se aplicará una sanción alternativa que consiste en pena privativa de la libertad entre 5 y 8 años. Y finalmente, en los casos en los que definitivamente no haya un reconocimiento de verdad y además se logre probar responsabilidad, se aplicarán sanciones ordinarias, que corresponden a pena privativa de la libertad de hasta 20 años (Ley Estatutaria 1957, 2019, Arts. 126, 128, 129, 130; Jurisdicción Especial para la Paz, 2020).

A la fecha, la JEP ha venido realizando un arduo trabajo que se ha concentrado en la apertura de siete macrocasos<sup>33</sup>, las bases de estos fueron puestas en conocimiento de la JEP por parte de la Fiscalía General de la Nación y de otras entidades del Estado. Cabe anotar, que

---

<sup>32</sup> Estos acuden de manera voluntaria.

<sup>33</sup> 1. Tomas de rehenes y otras privaciones de la libertad cometidas por las FARC-EP; 2. Prioriza la situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas; 3. Muerte ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado; 4. Situación territorial de la región del Urabá; 5. Prioriza la situación territorial en la región del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca; 6. Victimización de miembros de la Unión Patriótica; 7. Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado (JEP, s.f.b).

la población victimizada de manera individual y colectiva puede presentar informes para los casos que se encuentran abiertos, así como solicitar su acreditación como *víctimas* en la JEP por hechos que se contemplen en estos. Adicionalmente, también es posible presentar informes sobre situaciones y hechos victimizantes que hoy por hoy no han sido contemplados por esta jurisdicción dentro de los macrocasos, en ese sentido, se busca que dichos sucesos sean tenidos en cuenta y cimienten la apertura de nuevos macrocasos. La fecha límite de recepción de informes que estableció la JEP es el 22 de septiembre de 2021.

### 3.3.02. *Enfoque restaurativo de la JEP*

Como se mencionó en el primer capítulo de la presente investigación, la justicia en tiempos de transición contempla la inclusión de un enfoque restaurativo, que para el caso colombiano se materializó con la creación del SIVJNR, en especial de la JEP. Así las cosas, el enfoque restaurador es un paradigma orientador que guía la actuación que se debe adelantar ante esta jurisdicción desde el primer momento. Empero, en sentencia C-080 de 2018, si bien la Corte Constitucional califica a la JEP como una jurisdicción cuya esencia es restaurativa, las normas que la han venido regulando no logran dar cuenta del alcance que tiene esta, más allá de los procedimientos que se realizan en la Sala de Reconocimiento de la Verdad, de Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas, así como de momentos procesales específicos como las audiencias de reconocimiento de la verdad y las audiencias restaurativas (Vargas Trujillo y Galindo Villareal, 2020).

Cabe aclarar que lo anterior no significa que la JEP carezca de una aproximación retributiva, porque en efecto la tiene, el quid del asunto se encuentra en que la reparación del daño se analiza desde el punto de vista de la justicia restaurativa, supeditada -en principio- a que los comparecientes reconozcan la verdad y se responsabilicen de los hechos victimizantes cometidos (De Gamboa Tapias, 2020). Sin embargo, dentro de las recomendaciones que realizó el Instituto para la Transiciones Integrales (2019) citado por De Gamboa Tapias (2020) sobre la incidencia que debe tener la justicia restaurativa cuando se trata de casos en los que no hay reconocimiento de la verdad o lo hay, pero parcial, es preciso tener en cuenta que el enfoque restaurativo de las sanciones sigue estando vigente, en la medida en la que el efecto resocializador del sancionado debe ser valorado, no solo de cara a las cuestiones propias del sujeto, sino principalmente garantizando el derecho a la reparación que tienen las personas victimizadas. Este supuesto resulta complejo sobre todo, porque puede existir reticencia a aceptar la comisión del daño, de ahí la necesidad de blindar el sistema ideando y aplicando

medidas restaurativas que comprendan un enfoque pedagógico que lleve al infractor al reconocimiento y a la reparación, como bien lo plantea Hampton (2007).

Además de permear todo el tema sancionatorio, el paradigma restaurador debe ser aplicado de manera transversal en todas las actuaciones procesales que se susciten en la JEP, especialmente en las primeras etapas que se desarrollan en la Sala de Reconocimiento de la Verdad<sup>34</sup>. Lemaitre Ripoll y Rondón Daza (2020) consideran importante revisar la aplicación que se da del paradigma restaurador de manera previa a la imposición de la sanción propia, por tres razones: i). porque en los macrocasos la inmediatez de la sanción no es plausible, no solo por el número de sujetos que intervienen en el proceso, sino también por el sentido dialógico y de escucha que es pilar fundamental de la JEP; ii). Porque para poder sugerir una sanción es importante que se realice un análisis expedito de las victimizaciones y de los daños, especialmente cuando el espectro de personas victimizadas es tan amplio; y iii). Porque es necesario preparar desde las etapas tempranas del proceso a las personas victimizadas para el reconocimiento del daño que debe hacer el perpetrador.

Una vez se trabaja en esos aspectos, la JEP ha señalado la necesidad que existe de que se empiecen a desarrollar de manera previa a la efectiva imposición de la sanción propia, las consecuencias que esta tendrá, mediante la implementación de Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador – Restaurador (TOAR). Las personas victimizadas tienen derecho a conocer y opinar sobre lo que se formula en cuanto a estos. Así las cosas, estos TOAR que fueron adoptados por la sección de Reconocimiento y Responsabilidad del Tribunal para la Paz en sesión ordinaria celebrada el 14 de abril de 2020, se nutren de un proyecto que presentan los comparecientes o la Sala de Reconocimiento de la Verdad en caso de que los comparecientes no lo hagan, se les consulta a las personas victimizadas y se consensua con ellas, para finalmente ser puestos a disposición del Tribunal para la Paz, quien los revisará a nivel de pertinencia y los incluirá en las sentencias en las que se impongan sanciones propias (Jurisdicción Especial para la Paz , 2020),

### 3.4. Medidas de Reparación Integral

Lo primero que se planteó en el Acuerdo de Paz en materia de reparación fue la realización de actos tempranos de reconocimiento y de perdón, en los que tanto el gobierno

---

<sup>34</sup> Esta Sala es la encargada de hacer la instrucción de los casos, al finalizar dicha instrucción presenta una resolución de conclusiones al Tribunal para la Paz (luego de haber escuchado a todas las partes). Hasta el momento, no se ha expedido ninguna resolución de conclusiones.

nacional como las desmovilizadas FARC-EP se comprometieron a asumir el reconocimiento de su responsabilidad colectiva por las victimizaciones cometidas en el marco del conflicto armado. Cabe destacar que el Acto Legislativo 01 de 2017 establece que el Estado debe garantizar este derecho de reparación a las personas que fueron victimizadas de manera integral, diferenciada y efectiva, teniendo en cuenta el universo de personas a las que se les violentaron sus DDHH en el marco del conflicto armado colombiano (Acto Legislativo 01, 2017; Gobierno Nacional y FARC-EP, 2016).

Con relación a las acciones concretas que se pactaron en materia de reparación, el gobierno se comprometió a adoptar medidas que promovieran y aseguraran acciones colectivas de reparación desplegadas por agentes del Estado que hubieran tenido responsabilidad por hechos violentos cometidos con ocasión del conflicto armado. Por su parte, las FARC-EP se comprometieron a contribuir a la reparación, desplegando acciones concretas como: participación en obras de construcción de infraestructura a nivel territorial, participación en programas de limpieza y descontaminación de minas antipersonales, artefactos explosivos, municiones sin explotar o restos de material bélico, participación en programas de sustitución de cultivos ilícitos, contribución en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas y participación en programas de reparación de daño ambiental (Gobierno Nacional y FARC-EP, 2016).

En el Acuerdo se hizo especial énfasis en la reparación colectiva y en el compromiso que asumió el Estado colombiano de fortalecer estos procesos donde se transversaliza la reparación integral en los demás puntos del Acuerdo de Paz. En líneas generales, se articularon los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET del punto 1 y los programas de sustitución de cultivos ilícitos del punto 4 con las medidas de reparación integral del punto 5. Pese a lo anterior, el Decreto Ley 893 de 2017 que crea los PDET, no establece cómo se debe incorporar el enfoque reparador en estos ni qué alcance tiene dicho enfoque (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento [CODHES], 2018).

Cabe resaltar que los PDET tienen como finalidad incidir a nivel estructural, implementando acciones que contribuyan al cierre de las brechas que existen entre las zonas rurales y las zona urbanas, aportando a la superación de la pobreza y exclusión del campo, así como también propendiendo porque se superen las condiciones de vulnerabilidad y desprotección en las que se encuentran las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, situaciones que además se han interceptado con los impactos que ha tenido en

conflicto armado en sus procesos vitales (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento [CODHES], 2018).

Adicionalmente, en este marco de reparaciones integrales se contemplaron medidas de rehabilitación enfocadas en la prestación de atención psicosocial, así como los procesos de retorno de las personas que fueron desplazadas de sus territorios, las medidas de restitución de tierras y la participación de las personas victimizadas en la deliberación e implementación de programas que son de su total incumbencia. Se establece que todas estas medidas deben ser articuladas con la normativa existente en la materia, es decir, con el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas (SNARIV), que sigue los postulados de la Ley de víctimas y restitución de tierras, con el fin de fortalecer e incluir cuestiones que no habían sido contemplados con anterioridad a la firma del Acuerdo de Paz y que son imprescindibles en términos de reparación integral (Gobierno Nacional y FARC-EP, 2016).

### 3.5. Garantías de No Repetición

La garantías de no repetición son un punto crucial en materia de reconocimiento de las personas que fueron victimizadas en el marco del conflicto armado, ya que su efectiva implementación prolonga en el tiempo el cese de la violencia que se ha cometido en contra de ellas. Sin embargo, es importante entender, que su margen de maniobra -al implicar cambios estructurales- es complejo, en tal razón, para su efectivo desarrollo es importante tener en cuenta dos cuestiones: i) la no repetición debe ser transversal al desarrollo de los demás puntos del Acuerdo de Paz, ya que así se blinda lo pactado y se le brinda legitimidad a los compromisos asumidos; y ii) los mecanismos y medidas que componen el SIVJRNR deben trabajar de forma interdependiente e integral, porque desde sus propios enfoques tienen incidencia importante en materia de no repetición (Barbosa, 2017; Gobierno Nacional y FARC-EP, 2016).

El cumplimiento cabal del punto 3 del acuerdo, referente al fin del conflicto, enmarca los compromisos que asumieron las partes sobre el desarme y el cese de hostilidades, per se constituyen garantías de no repetición. Así mismo también lo es la Unidad de Investigación para el desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales (adscrita a la Fiscalía General de la Nación) que fue pactada en el Acuerdo de Paz, ya que esta entidad asume un compromiso frente a los grupos que siguen operando en Colombia, sean guerrillas o paramilitares (Dajer, 2018).

Lo anterior debe funcionar de manera coordinada con el compromiso que asumió el Estado de poner en marcha una serie de medidas encaminadas a garantizar la no repetición, como son: i) el fortalecimiento de los mecanismos de promoción de DDHH; ii) fortalecimiento de los mecanismos de protección de los/as defensores/as de DDHH y de sus organizaciones; y iii) la prevención y protección de los derechos humanos (Gobierno Nacional y FARC-EP, 2016).

## CAPÍTULO 4: CONTEXTO HISTÓRICO Y SOCIAL DE LA SITUACIÓN EN EL NORTE DEL CAUCA.

“La palabra sin la acción es vacía,  
la acción sin la palabra es ciega,  
la palabra y la acción por fuera del espíritu  
de la comunidad son la muerte”.

**A. Ulcué**

En el presente capítulo se desarrollará de manera breve el contexto histórico y social que se ha presentado en la zona del Norte del Cauca. En este espacio se buscará dar a entender, que si bien el Norte del Cauca ha sido un territorio azotado por el conflicto armado, históricamente también ha sido un lugar, en el cual se le ha dado un *continuum* a la violencia estructural<sup>35</sup>, donde la dimensión distributiva de la justicia ha sido prácticamente inexistente, y donde han primado los intereses de las grandes empresas agroindustriales y mineras. Esta situación ha llevado a que los mismos actores armados actúen de conformidad y en muchos casos en connivencia con las empresas -a la hora de perpetrar hechos vulneratorios de los DDHH e infracciones al DIH- dejando de lado cualquier atisbo de humanidad, comprensión o entendimiento con la población civil tan diversa que habita ancestralmente estos territorios, y la cual, ha sido victimizada de múltiples formas y por múltiples actores armados

### 1. Generalidades

La zona del Norte del Cauca se encuentra ubicada al suroccidente de Colombia, entre las cordilleras central y occidental, y está conformada por los municipios de Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Puerto Tejada, Caloto, Guachené, Villa Rica, Corinto, Miranda, Padilla, Jambaló, Caldono y Toribío (ver mapa 1). Esta región se caracteriza por tener una confluencia étnica muy fuerte, con presencia afrocolombiana, indígena, mestiza y campesina mayoritariamente. Razón por la cual, sus luchas y resistencias han sido históricamente heterogéneas, pero que tienen como punto de convergencia ser un ejemplo de resiliencia y de reivindicación de DDHH individuales y colectivos.

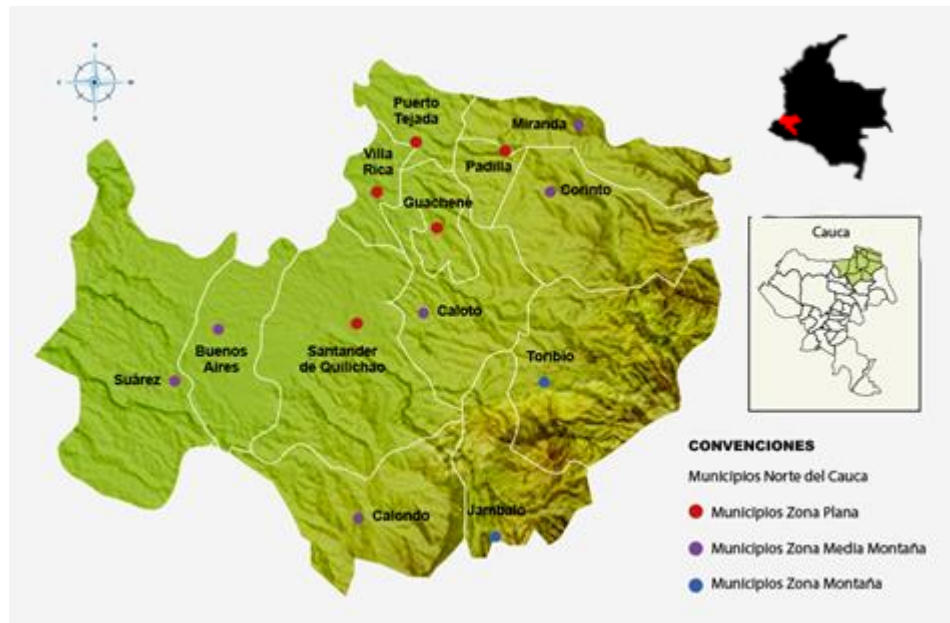
---

<sup>35</sup> Para Galtung (2016) esta se ve representada en situaciones en las que la clase dominante consigue más beneficios de la interacción en la estructura que el resto de la población, lo que reproduce un intercambio desigual, el cual en un extremo puede significar que las comunidades más desfavorecidas vivan en la pobreza y puedan llegar a morir de hambre.



## Mapa 1

### *Subregión del Norte del Cauca.*



**Fuente:** Centro Nacional de Memoria Histórica (2016); Castaneira (2017).

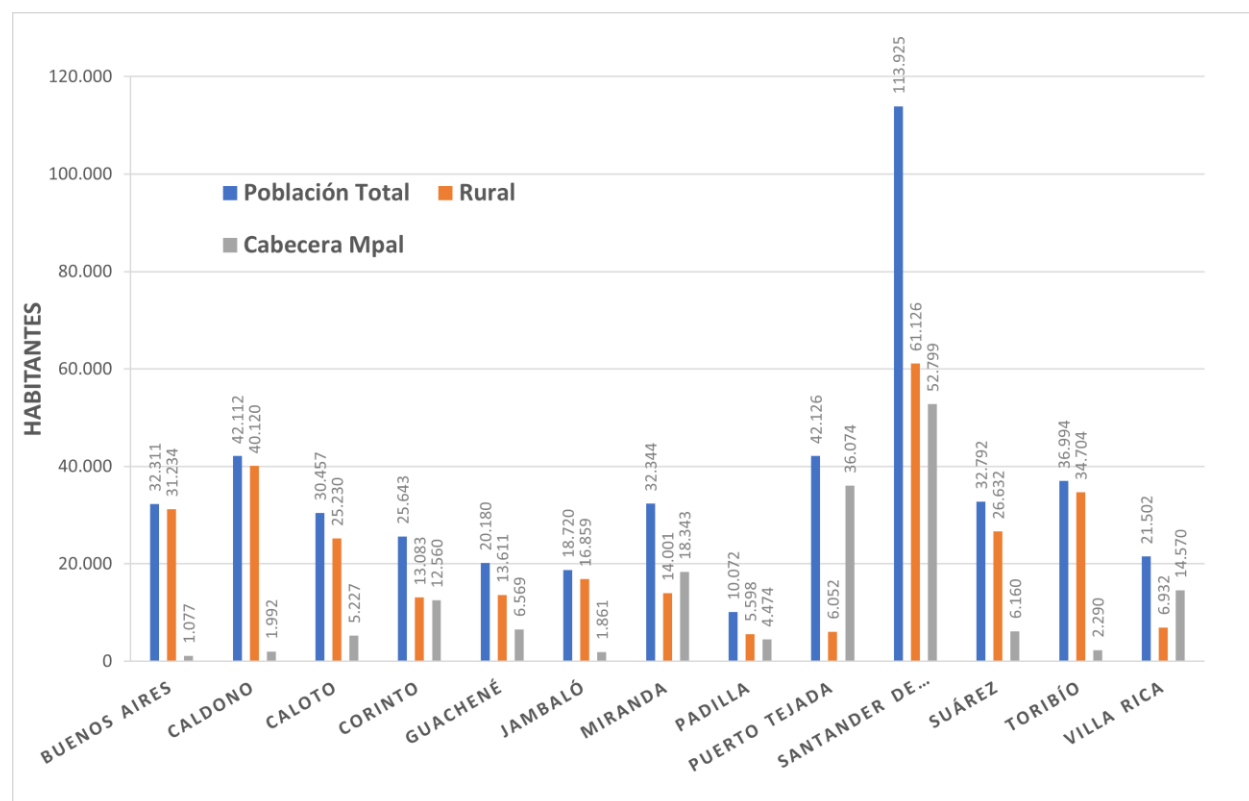
Los rasgos geográficos de la región y la fertilidad de sus suelos hicieron que la zona plana fuera objeto de constantes disputas de pertenencia desde la época de la colonia. Es por esto, que los indígenas que ancestralmente habitaban estos territorios se vieron obligados a desplazarse a las zonas de montaña, en aras de salvaguardar sus vidas; lo que permitió que los colonizadores utilizaran los terrenos despojados para la ganadería, la explotación de minerales y la constitución de la industria azucarera. Con el tiempo, las particularidades geográficas del territorio nortecaucano también fueron aprovechadas para la aplicación de diversas tácticas militares en el marco del conflicto armado, así como para la siembra de cultivos ilícitos, no solo porque la altura y el clima lo permiten, sino porque la zona es un corredor estratégico para las economías ilícitas, al conectar con el pacífico, el norte y el interior del país (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016a).

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (s.f.) el área total que ocupa la subregión del Norte del Cauca es de 3.403 kilómetros cuadrados, dentro de los cuales, a 2021, se proyectó que el 35,7% de la población habita en las cabeceras municipales, mientras

que el 64.3% se encuentra concentrada en las zonas rurales (Ver gráfico 1), donde se han constituido 117 centros poblados<sup>36</sup>(DANE, 2018).

### Gráfico 1

*Población rural y urbana en el Norte del Cauca.*



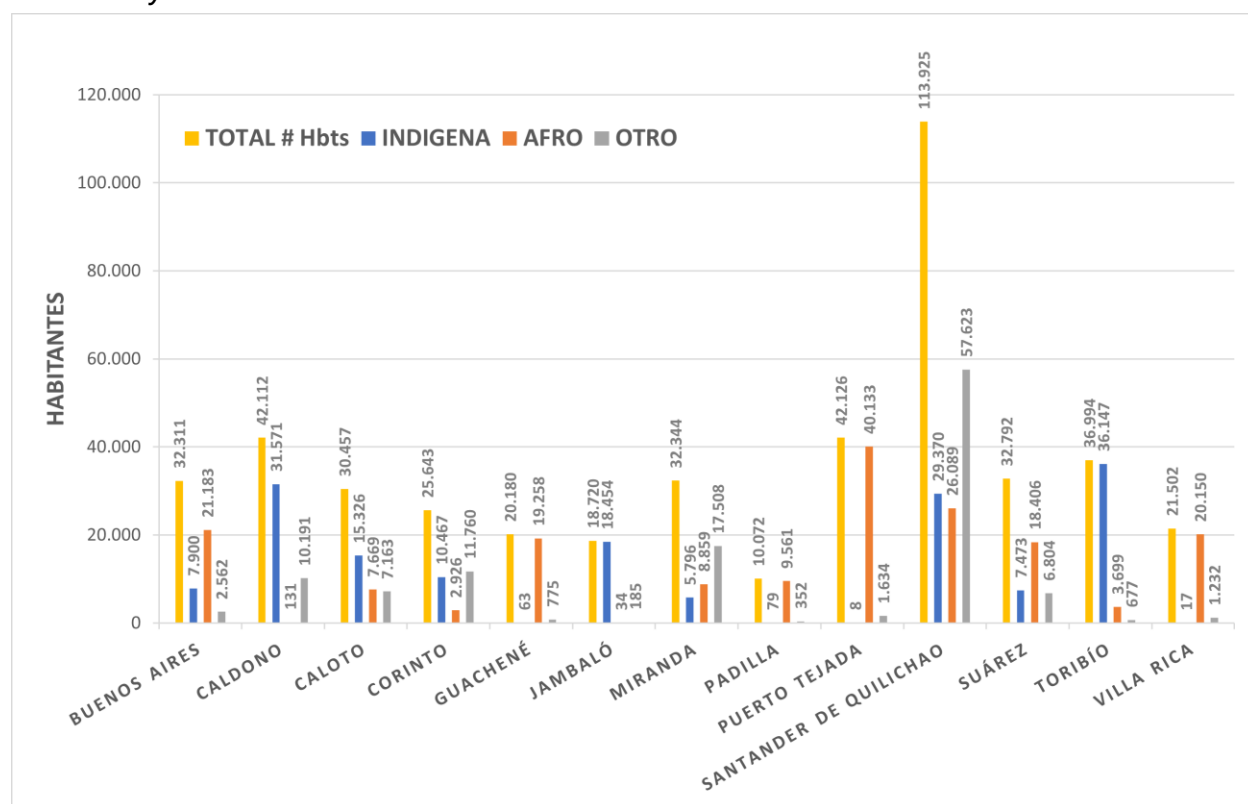
**Fuente:** Elaboración propia con información del DANE (2018).

Con respecto a la población étnica, cabe anotar que haciendo un análisis de las cifras presentadas por el DANE (2018) y por el Departamento Nacional de Planeación (s.f.) los municipios con mayor población afrocolombiana son Guachené, Villa Rica, Puerto Tejada, Padilla, Buenos Aires y Suárez; mientras que la población indígena -específicamente los pueblos Nasa y Misak- se concentra en los municipios de Jambaló, Toribío, Caldon, y Caloto. Por su parte, Santander de Quilichao, Corinto y Miranda tienen como característica diferencial que un porcentaje más alto de su población no se considera perteneciente a ningún grupo étnico (ver gráfico 2) (Hurtado Hurtado y Poveda Galeano, 2020; DANE, 2018).

<sup>36</sup> “concentración de mínimo veinte (20) viviendas contiguas, vecinas o adosadas entre sí, ubicada en el área rural de un municipio o de un Corregimiento Departamental. Dicha concentración presenta características urbanas tales como la delimitación de vías vehiculares y peatonales” (DANE, s.f).

## Gráfico 2

### Población y distribución étnica en el Norte del Cauca



**Fuente:** Elaboración propia con base en información de DANE (2018).

Llegados a este punto es importante destacar la carencia de información oficial que existe respecto de las comunidades campesinas. Aun cuando se creó la figura de las Zonas de Reserva Campesina hacia el año 2000, solo se han constituido 6 y el proceso de consolidación de las mismas es tan complejo que aunque las comunidades se han organizado, no cuentan con la resolución del INCODER que las constituye. Esta aclaración es de suma importancia de cara al rol que jugaron y hoy por hoy juegan las comunidades campesinas en el marco del conflicto y del posacuerdo.

## 2. Dinámicas de la violencia en el Norte del Cauca

Las dinámicas de la violencia en esta zona han sido fundamentalmente de dos tipos, las primeras, son de índole estructural, mientras que las segundas son las ocasionadas por el conflicto armado. Cabe resaltar que hay un punto en el que ambas convergen, lo que ocasiona una exacerbación de la violencia que entraña una comisión sistemática de hechos atroces, donde se victimiza a población civil, que además -como se explicó en el apartado anterior- es

mayoritariamente étnica, lo que implica que estas comunidades han sido sometidas también a procesos de violencia histórica muy fuertes.

Históricamente, la zona del Norte del Cauca se ha caracterizado por la concentración de la tierra en manos de unos pocos, según manifiesta el Entrevistado 1 (2019) “el detonante de la violencia en Caldonio y en el Norte del Cauca es la falta de tierra, entre paréntesis ‘falta de tierra’, porque la tierra está muy mal repartida diría yo”. Esta situación a pesar de que empieza a partir de la colonización indígena en el siglo XVI se incrementa con la aparición de los primeros ingenios azucareros a mediados del siglo XX. Dicha aparición trajo consigo un despojo masivo de tierras, donde los dueños de estos ingenios utilizaban tácticas como la quema de cultivos, las inundaciones, la ampliación de cercas e incluso la contratación de personal armado para que por medio de la fuerza, expropiara a las comunidades de sus tierras. (Hurtado Hurtado y Poveda Galeano, 2020; Instituto de Estudios Interculturales, 2018).

Las plantaciones de caña de azúcar se incrementaron particularmente en una porción importante de Padilla, Caloto, Miranda, Corinto y Santander de Quilichao a partir de 1995, con la expedición de la ley 218 de 1995<sup>37</sup> que buscó impulsar la economía de la región mediante la creación de empresa y la generación de empleo, para lo cual se otorgaron beneficios tributarios a la empresas agroindustriales -por diez años-, pensando en que su apoyo era clave para ofrecer empleo a los miembros de las comunidades afectadas por la catástrofe (Pares, 2019). Como señala el Instituto de Estudios Interculturales (2018), efectivamente hubo una mejora en la estructura económica de la región, empero, esta no fue integral, en la medida en la que primero, no tuvo en cuenta el componente social y se afectó de sobre manera la pequeña industria campesina; y segundo, no resolvió nada respecto a la distribución igualitaria de la tierra, que como se ha venido recalando es un tema problemático en la región.

Además de la violencia que trajo el cultivo industrializado de caña de azúcar, la minería del oro -que antes era una práctica ancestral exclusiva para las comunidades que habitan en la zona, principalmente en los municipios de Buenos Aires, Suárez y Santander de Quilichao- se convirtió en un baluarte para empresarios, gremios, élites políticas y grupos armados ilegales, quienes empezaron a invertir en esta industria tanto de forma legal como de forma ilegal (Hurtado Hurtado y Poveda Galeano, 2020). Según menciona el Entrevistado 1 (2019) “Ellos por ejemplo tienen la intención de coger las tierras productivas del norte del Cauca que es la

---

<sup>37</sup> Expedida para darle respuesta a la catástrofe natural ocurrida en el río Páez: “Un terremoto de 6,4 grados en la escala de Richter provocó una avalancha en la cuenca del río Páez, en el departamento de Cauca y parte del departamento del Huila, dejó 1.100 muertos y 500 desaparecidos (CRIC, 2020).

caña de azúcar, y son emporios, gente que tiene mucho poder económico, entonces ahí es que comienzan los paramilitares”.

Actualmente en el Norte del Cauca existen tres modelos de extracción minera: i) minería ilegal; ii) minería transnacional; y iii) minería tradicional (López, 2015 citado por Hurtado Hurtado y Poveda Galeano (2020). La minería ilegal desplaza casi que por completo a la minería tradicional, en la medida en la que crea políticas de miedo tendientes a controlar y constreñir a los/las mineros/as ancestrales, para lograr una extracción y comercialización más “eficiente” del oro. Por su lado, la minería transnacional, a pesar de que es legal, ha permitido que las multinacionales y las empresas nacionales mineras se instalen en la zona generando despojo, mediante la obtención de títulos mineros<sup>38</sup>. A este tipo de minería se le ha encontrado nexos con el paramilitarismo y las BACRIM<sup>39</sup>, ya que recurren a estas organizaciones para que les provean seguridad privada. Esto sumado a los impactos ambientales que generan en el ecosistema, así como a la desarticulación comunitaria que provocan -al no consultar ni beneficiar a las poblaciones afectadas-. (Hurtado Hurtado y Poveda Galeano, 2020; Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano "Francisco Isaías Cifuentes", 2011).

Otra de las grandes cuestiones que ha permitido que la violencia se perpetúe en la zona son los cultivos ilícitos. A pesar de que el cultivo de la hoja de coca hace parte de la idiosincrasia de las comunidades indígenas que habitan estos territorios, quienes la utilizan con fines medicinales y espirituales; en los años 80, dada la alta demanda de cocaína a nivel internacional, los capos del narcotráfico incentivaron a las comunidades indígenas y campesinas para que cultivaran coca con el fin de obtener una contraprestación económica. La propuesta era difícil de rechazar por varias razones, la primera, por las condiciones de marginación, de pobreza y de olvido estatal en las que viven estas comunidades; y la segunda, por las consecuencias y represalias que podía traer decirle que no a un cartel del narcotráfico, significaba poner la vida en juego (Hurtado Hurtado y Poveda Galeano, 2020).

Como corolario de lo anterior, la población nortecaucana ha sido estigmatizada constantemente con la etiqueta de “auspiciadores/as del narcotráfico” y no como población victimizada por economías ilegales y violencia estructural sistemática. Lamentablemente, estas

---

<sup>38</sup> “Un título minero es un instrumento a través del cual el Estado colombiano otorga a una persona, jurídica o natural, el derecho a realizar exploración y explotación de minerales de propiedad del Estado en un área determinada, de forma exclusiva y por cuenta y riesgo del titular, para que este último aproveche económicamente los minerales que extraiga” (Asuntos Legales, 2015).

<sup>39</sup> Bandas Criminales que surgen con posterioridad a la desmovilización de los paramilitares, son disidencias de estos grupos.

comunidades no cuentan con alternativas económicas que les generen ingresos para sobrevivir; y a pesar de que existen programas de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos como el Programa Nacional de Integral de Sustitución de Cultivo Ilícitos (PNIS) que se crearon con el Acuerdo de Paz, estos distan de ser ideales, en la medida en la que la “alta concentración de la tierra, la ausencia de una economía campesina sólida, los elevados costos de transporte y la primacía de los cultivos de caña, hacen que una hectárea cultivada de coca genere más del doble de ingresos de lo que produce una de caña de azúcar” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016a; Guzmán Barney y Rodríguez Pizarro, 2015).

La aparición y posterior expansión de los cultivos ilícitos encuentra coincidencia con las zonas de colonización armada, es decir, estratégicamente las zonas en las que se asentaron los cultivos ilícitos fueron zonas periféricas de montaña en donde la presencia estatal era prácticamente inexistente, lo que permitió que quienes ejercieran el control territorial fueran o los carteles del narcotráfico o los grupos armados ilegales (Gómez Rivas, Dávila Ladrón de Guevara, y Escobedo David, 2017). Hay que destacar que gran parte de estos cultivos se han hecho en territorios ancestrales indígenas y afrodescendientes y que incluso, el control territorial que han intentado realizar la guardia indígena y la guardia cimarrona, no ha sido suficiente, los grupos armados actúan de formas muy violentas.

Entre los años 80 y 90 los grupos guerrilleros y los terratenientes empezaron a tener diferencias irreconciliables con los indígenas del norte del Cauca por diversas razones, dentro de las que destacan el irrespeto por la organización indígena y campesina y la tenencia de la tierra. Estas diferencias y pleitos dieron pie para que los narcotraficantes, con los paramilitares al frente, aprovecharan y aceleraran los procesos de compra y despojo de la tierra utilizando la violencia (Gómez Rivas, Dávila Ladrón de Guevara y Escobedo David, 2017; Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016a; Centro Nacional de Memoria Histórica , 2014).

Un claro ejemplo de lo anterior es la Masacre de “El Nilo”<sup>40</sup>, ocurrida el 16 de diciembre de 1991 en el municipio de Caloto, en donde un grupo de 12 paramilitares quienes en connivencia con miembros de la Policía Nacional de Santander de Quilichao, llegaron a la Hacienda El Nilo, finca que había sido ocupada por indígenas de la etnia Nasa, al considerarla parte de sus territorios ancestrales. En principio la comunidad indígena fue citada a dialogar para llegar a un “acuerdo” sobre la tenencia de la tierra, sin embargo, fueron emboscados por

---

<sup>40</sup> En 1995 el Estado colombiano reconoció su responsabilidad por la masacre y en 1998 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que el Estado había incumplido sus obligaciones de reparación con la comunidad victimizada (Rutas del Conflicto, 2019).

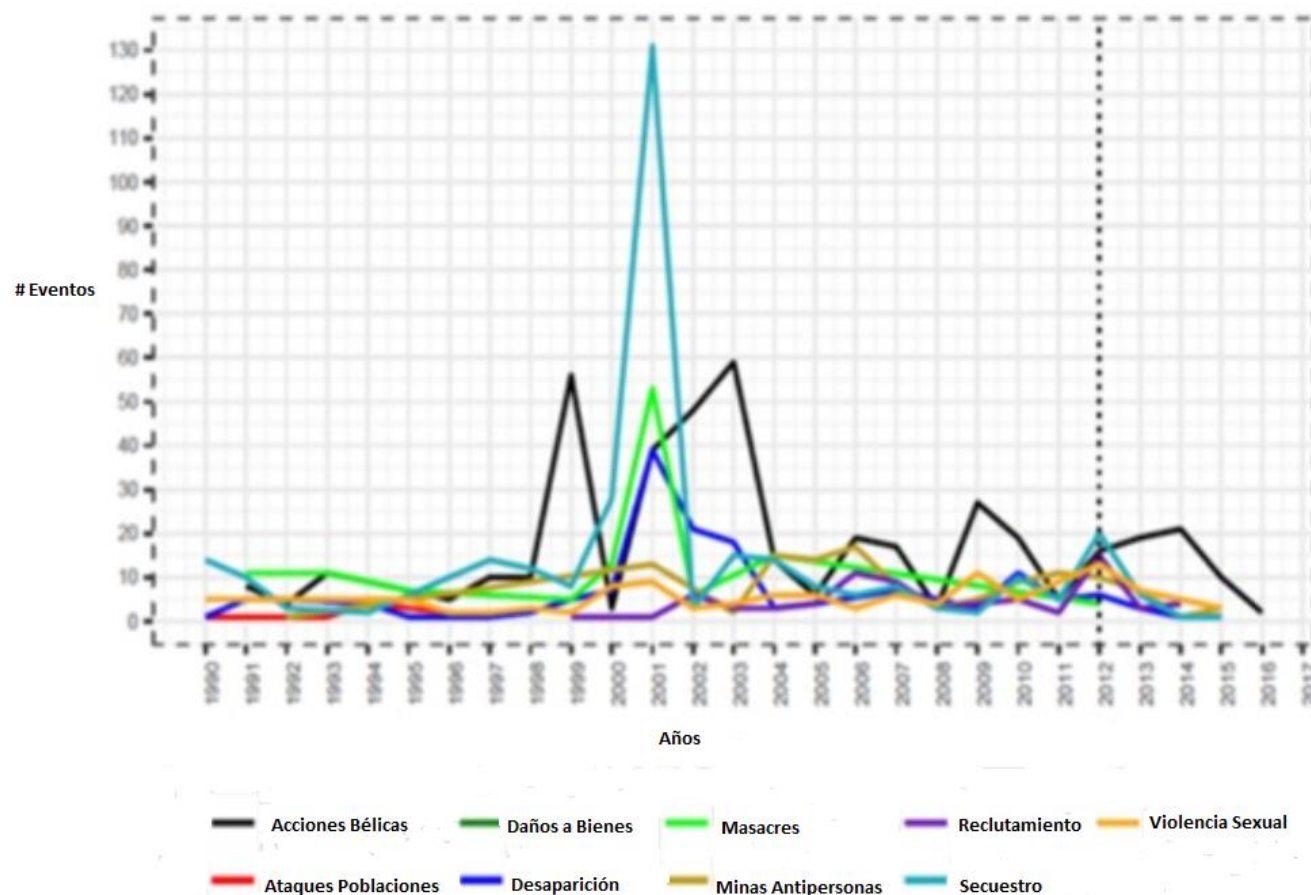
los paramilitares, quienes asesinaron a 21 indígenas. Según versiones de los excombatientes que participaron en la masacre, esta fue planeada por Fidel Castaño en complicidad con algunos terratenientes de la región, dentro de los cuales destacaba Jorge Valencia, propietario de la Hacienda El Nilo. Al día siguiente de la masacre y del desplazamiento al que fue sometida la comunidad, cinco mil indígenas ocuparon la hacienda y se quedaron permanentemente allí (Rutas del Conflicto, 2019).

En la década de los años 90 guerrillas como las FARC-EP habían logrado arraigarse en las zonas altas de la cordillera central, principalmente en los municipios de Miranda, Corinto, Caldono y Toribío. Ese control territorial que ejercían significó un recrudecimiento de la violencia, ya que el Estado en aras de recuperarlo, empezó a implementar lo que se denominó el Plan Colombia (Instituto de Estudios Interculturales, 2019). De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (2005), el “Plan para la Paz y el Fortalecimiento del Estado”, se trató de un acuerdo bilateral constituido entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, cuyo objetivo principal radicaba en combatir las drogas ilícitas y el crimen organizado, con el fin de contribuir a la reactivación económica y la consecución de la paz en Colombia.

En virtud de lo anterior, según datos presentados por el Instituto de Estudios Interculturales (2019) las acciones violentas en la región aumentaron a partir de 1995 y estuvieron en su punto más álgido hasta 2004. De igual forma, entre los años 2006 y 2011 las variables asociadas al conflicto armado fueron menores que las que se presentaron en el periodo inmediatamente anterior. Y finalmente, entre el 2012 y el 2016 que fue el periodo de negociaciones con las FARC-EP, hubo una desescalada del conflicto (ver gráfico 3).

### Gráfico 3

*Manifestaciones violentas del conflicto armado en el Norte del Cauca.*



**Fuente:** Instituto de estudio interculturales (2019) con base en los datos del banco de datos del CNMH (2018).

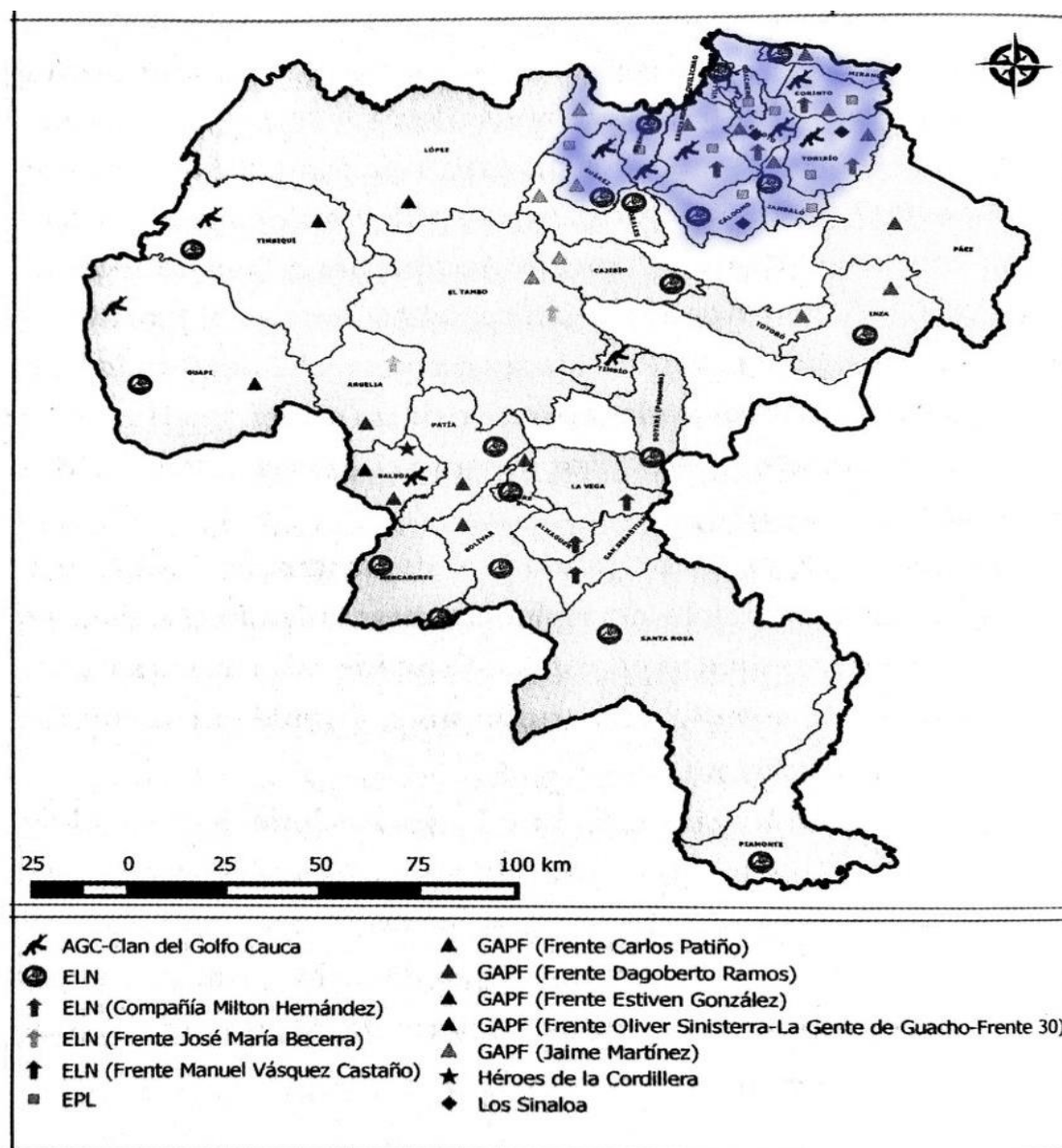
Sin embargo, a cuatro años de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, se puede evidenciar que ha habido un recrudecimiento de la violencia en la región, el cual se debe a disputas entre diferentes actores armados que quieren hacerse con las zonas que históricamente dominaba las FARC-EP. Lo anterior, ha ocasionado una redistribución geográfica y una reconfiguración territorial del poder por parte de los demás grupos armados ilegales que operan en el territorio, de tal forma que los sectores que antes eran ocupados hegemonícamente por las FARC-EP ahora son ocupados también por estructuras paramilitares, ELN, EPL, cartel de Sinaloa y las disidencias de las FARC-EP, especialmente de los frente 6, 30 y las columnas móviles Miller Perdomo y Jacobo Arenas, quienes han replegado militarmente a algunos de estos grupos, para mantener el poder que ejercen sobre el territorio (Instituto de Estudios Interculturales, 2019; INDEPAZ, 2018; Ávila, 2020).



En el mapa número 2 se muestra la distribución que tenían estos grupos armados en el departamento del Cauca para el año 2019. La zona morada corresponde al Norte del Cauca, la cual, como se puede observar, con relación al resto del departamento tiene una alta concentración de grupos armados, especialmente de grupos disidentes de las FARC-EP (GAPF).

## Mapa 2

*Grupos armados ilegales en el departamento del Cauca - 2019.*



Fuente: Ariel (2020).

Aun cuando la violencia que se presenta en contra de líderes/as sociales y defensores/as de DDHH ha sido permanente, desde la firma del acuerdo de paz en el 2016, el departamento del Cauca ha presentado un incremento bastante diferencial con respecto a otras zonas del país por la intensidad de las acciones armadas que se han ejercido en contra de los/las líderes/as de las comunidades étnicas. Esta nueva dinámica que se está dando, evidencia, por su sistematicidad y forma de operar, que la violencia perpetrada no es aleatoria, sino que muestra patrones mucho más graves y planificados (Comisión Colombiana de Juristas, 2018).

La respuesta que le ha dado el gobierno nacional a la reactivación de la barbarie en la zona ha sido aumentar el pie de fuerza, cuestión que no tranquiliza a la población. Incluso, han señalado en reiteradas oportunidades que la presencia militar no ha significado una disminución ni en los índices de violencia ni en los de tráfico de drogas, esto en adición a que la confianza que tienen en la Fuerza Pública se ha visto socavada por episodios de violencia institucional en los que las comunidades étnicas y campesinas se han visto perjudicadas (La Liga contra el Silencio, 2019).

### **3. Presencia de Grupos Armados**

En la zona objeto de estudio en la presente investigación han confluído actores armados como las FARC-EP, las AUC, el Movimiento Armado Quintín Lame, el M-19, el Partido Revolucionario de Trabajadores, las BACRIM, la Fuerza Pública, entre otros. Cada uno de estos con ideologías y formas de operar diversas, y quienes en aras de ejercer el control territorial han victimizado fuertemente a los/las habitantes del territorio nortecaucano, fundamentalmente a miembros de las comunidades étnicas y campesinas. Cabe resaltar que la aparición y desaparición de grupos armados ha ido fluctuando desde finales de los años ochenta hasta hoy en día, gracias a procesos de desmovilización negociada. Algunos de estos procesos de desmovilización -como es el caso de las AUC y de las FARC-EP- han sido enmarcados dentro de las fases de la justicia en tiempos de transición colombiana, como se pudo constatar en el capítulo segundo. A continuación, se realizará un breve hilo sobre los actores armados que han tenido mayor influencia en el Norte del Cauca.

### 3.1. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP).

Las FARC-EP tienen presencia histórica en esta zona del Cauca desde los años sesenta. El primer frente que conformó las FARC-EP allí fue el sexto, localizado en la zona montañosa del nororiente del Cauca. Dicho frente se extendió territorialmente a finales de la década de los noventa y encontró arraigo en gran parte de los resguardos indígenas de la etnia Nasa, desde ese entonces se empiezan a marcar las diferencias entre este grupo armado y las comunidades indígenas. Además del frente sexto, para el periodo de 1997 a 2013 en la zona también hubo accionar del frente treinta y de las Columnas Móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis, ambas pertenecientes al Comando Conjunto de Occidente<sup>41</sup> de las FARC-EP (Gómez Rivas, Dávila Ladrón de Guevara, y Escobedo David, 2017; FIP, USAID y OIM, 2014).

Como menciona el Entrevistado 1 (2019):

(...) Las FARC llegaron y... todavía hay población indígena que dice que las FARC fueron como una bendición (...) Pero luego comienzan a hacer lo mismo, o sea, a secuestrar personas, a hacer las famosas pescas milagrosas, cuando le piden plata a la gente (...), se llevaban los niños. Entonces, también fueron un engaño a la entrada y después comenzaron igual que todos (...)

Por el año 2000 empezaron a regularizarse los enfrentamientos entre esta guerrilla y los grupos paramilitares, debido a la rápida expansión territorial que estaba teniendo el Bloque Calima de las AUC, lo que conllevó a una contraofensiva por parte de las FARC-EP, que se materializó en atacar bases e instalaciones que pertenecían a esta estructura paramilitar, con el objetivo de debilitarla. Sin embargo, esto no ocurrió, e incluso, llevó a que entre los años 2002 y 2003 los paramilitares logaran controlar una parte del Norte del Cauca (FIP, USAID y OIM, 2014).

La retoma de ese control hegemónico que había perdido en algunos sectores del Norte del Cauca las FARC-EP se logró en parte, gracias a la desmovilización paramilitar que empieza a materializarse desde finales del 2003. Sin embargo, en ese lapso inmediatamente posterior a la desmovilización de las AUC, las Fuerzas Militares se proponen retomar el control del suroccidente del país, lo que llevó a que los enfrentamientos entre estas y las FARC-EP aumentaran considerablemente. Las estructuras guerrilleras se vieron debilitadas gracias al accionar de las Fuerzas Militares, no obstante, ante la ofensiva militar, la respuesta de la

---

<sup>41</sup> Coloquialmente conocido como Bloque Alfonso Cano.

guerrilla era crear nuevos frentes, lo que dificultó la tarea de inteligencia de los militares y permitió que tanto los frentes 6 y 30 como las columnas móviles permanecieran incólumes. (FIP, USAID y OIM, 2014; Gómez Rivas, Dávila Ladrón de Guevara, y Escobedo David, 2017).

Con posterioridad a la desmovilización de las AUC, se forman una serie de bandas criminales cuyo objetivo era hacerse con el control territorial que tenía el bloque calima. Una de estas BACRIM fueron los “rastros” quienes consolidaron una alianza con el ELN, para ejercer control sobre los cultivos de coca, aprovechando por un lado, la desmovilización del bloque calima y por otro, que las FARC-EP habían sido arremetidas por las Fuerzas Militares mediante las operaciones Espada I, Espada II y Espada III (FIP, USAID y OIM, 2014). Según una investigación realizada por Ávila (2009), mientras la alianza entre rastros y ELN se tomaba parte del sur de Cauca, en el Norte, las FARC-EP había aumentado su capacidad militar ofensiva, lo que conllevó a que solo en el 2009 Toribío hubiese sido hostigado en 51 ocasiones y Caldono en 8. Situación que tuvo como consecuencia un desplazamiento masivo de la población civil. Según menciona el Entrevistado 1 (2019) “los desplazamientos masivos, fueron muy grandes, creo que unas seis veces el pueblo quedo vacío, porque ya cuando los desplazamientos eran a la madrugada la gente salía como estaba, no les importaba que estuvieran desnudos porque primero la vida y con los niños”.

Con la muerte del comandante de las FARC-EP alias “Manuel Marulanda”, las Fuerzas Militares empiezan a montar un serie de operativos con el objetivo de localizar a alias “Alfonso Cano”, nuevo comandante de esta guerrilla. Estos operativos se prolongan hasta entrado el 2011, año en el que el Ejército se acerca al anillo de seguridad de Cano, lo que incrementó las acciones bélicas en el Norte del Cauca, las cuales, además, utilizaban a la población civil para confundir al Ejército y para resguardarse de los ataques, infringiendo el DIH. Finalmente, a finales del 2011 en inmediaciones del municipio de Suárez fue abatido “Alfonso Cano” en el curso de lo que se denominó la “operación Odiseo” (FIP, USAID y OIM, 2014; Echandía Castilla, 2011).

Con la muerte de alias “Alfonso Cano” se esperaba una merma en la violencia en el Norte del Cauca, sin embargo, sucedió todo lo contrario, las acciones bélicas continuaron, afectando de manera indiscriminada y sistemática a la población civil. Como bien señala el Entrevistado 1 (2019), las FARC-EP tenían formas de ataque masivo que afectaban a la comunidad, algunas de estas fueron:

(...) Esos cilindros que uno utiliza del gas para cocinar, ellos los utilizan para eso. Cilindros de 100 libras y de 40. Estos de 100 libras cuando caían, toda la manzana la acababan (...) estos cilindros los llenaban de hierro, clavos, puntillas, piedra, thinner, porque si caía en una parte el thinner se prendía y pues causaba incendio, pero lo que más duro de todo esto que le echaban, era que le echaban el popó, o sea el popó de la gente, es que eso produce en una herida, produce gangrena. Esas armas no convencionales fueron muy violentas (...) el pueblo de Caldono se acostumbró, nos acostumbramos, a los disparos de fusil, no afecta, o sea pa pa pa (...) Nos acostumbramos después de tanto a los cilindros, también, porque uno oía cuando venían y decían: abran la boca y pum, porque si usted cierra la boca se estalla, si usted se tira al piso y pone el estómago en el piso estalla porque la onda explosiva lo estalla (...).

La zozobra a la que fueron sometidas las comunidades de los municipios de Jambaló, Caldono, Toribío, Corinto y Buenos Aires, fue desproporcionada, temían que las FARC-EP tomaran retaliaciones creyendo que ellos habían delatado a Cano, razón por la cual, una parte considerable de la población se desplazó a las cabeceras municipales, donde el riesgo también era inminente, al existir amenazas constantes de las FARC-EP de perpetrar tomas y hostigamientos, utilizando tatucos o carros bomba contra las estaciones de policía (Medina Uribe, 2011).

Los ataques por parte de este grupo guerrillero en el sector no cesaron sino hasta bien entradas las negociaciones de paz (2012-2016) con el gobierno de Juan Manuel Santos. Entre los años 2012 y 2014 se evidenciaron acciones violentas por parte de este grupo armado en la zona (ver mapa 3), lo que permite señalar, que formalmente, las hostilidades perpetradas por las FARC-EP disminuyeron por completo con la firma del Acuerdo de Paz en el 2016. Sin embargo, en palabras del Entrevistado 1 (2019), la situación aunque ha cambiado, no lo ha hecho del todo: “Todavía no ha terminado porque ahí hay disidencias (...) Eso es como las brujas, yo no las he visto, pero que las hay las hay. Entonces ahora es complicado por eso. Yo ahora no puedo andar tan tranquilo y la seguridad es pésima, entonces es eso” (Entrevistado 1, 2019).

### Mapa 3

*Presencia de las FARC-EP en el Norte del Cauca - 2013.*



**Fuente:** FIP, USAID y OIM (2013).

#### 3.2. Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)

En el departamento del Cauca el surgimiento de grupos privados de autodefensas (paramilitares) se registra desde la época en la que empezaron a suscitarse conflictos por la tierra entre hacendados e indígenas, empero, estas estructuras se fortalecieron con la llegada de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU)<sup>42</sup>, que gracias al despliegue territorial que tuvieron, en el corto plazo se convirtieron en las AUC. Desde las ACCU se promovió la creación del Bloque Calima, el cual tuvo dos propósitos fundamentales: i). servir como contrainsurgencia para proteger a sus financiadores<sup>43</sup> del acoso que sufrían por parte de la guerrilla; y ii). disputar el control económico del narcotráfico y el despojo de tierras en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca, así como en algunos municipios de Quindío y Huila. (Gómez Rivas, Dávila Ladrón de Guevara, y Escobedo David, 2017; Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018).

La llegada de los paramilitares del Bloque Calima al Norte del Cauca fue crónica de una muerte anunciada, ya que según información obtenida por el Centro Nacional de Memoria

<sup>42</sup> Al mando de Vicente Castaño.

<sup>43</sup> Según versiones de los desmovilizados, las AUC que operaron en el Cauca fueron financiadas por industriales, ganaderos, comerciantes, harineros, empresarios de los ingenios de azúcar, así como también por dineros producto del narcotráfico que aportaron alias “don Diego”, alias “rasguño” y alias “gordo lindo”, así como también del hurto de ganado y de hidrocarburos (Instituto de Estudios Interculturales, 2019; Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018)

Histórica (2018), en febrero del 2000 este bloque envió una carta a los alcaldes de los 13 municipios que conforman la subregión del Norte del Cauca, así como también al gobernador del Cauca, señalando que despojarían del control de la zona a la guerrilla, declarando objetivo militar a cualquier ciudadano/a o autoridad civil que brindara cualquier tipo de colaboración a la subversión a partir de la llegada del Bloque al departamento del Cauca (Human Rights Watch, 2001, p. 46 citado por Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018).

Dicho anuncio se repitió en mayo del año 2000, cuando las amenazas se comenzaron a materializar e instalaron un grupo de paramilitares en el corregimiento Timba del municipio de Buenos Aires. Fue en este municipio donde se empezó a escalar la comisión de hechos victimizantes, dirigidos contra supuestos milicianos y colaboradores de las FARC-EP. La realidad fue que las acciones violentas no escatimaban entre civiles e insurgentes, e incluso, llegaron al punto de realizar reuniones con las comunidades donde el propósito central era ejecutar acciones de exterminio social (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018). Buenos Aires, fue uno de los municipios donde la presencia de las AUC fue determinante, a tal punto, que en la vereda San Miguel instalaron una base de entrenamiento militar.

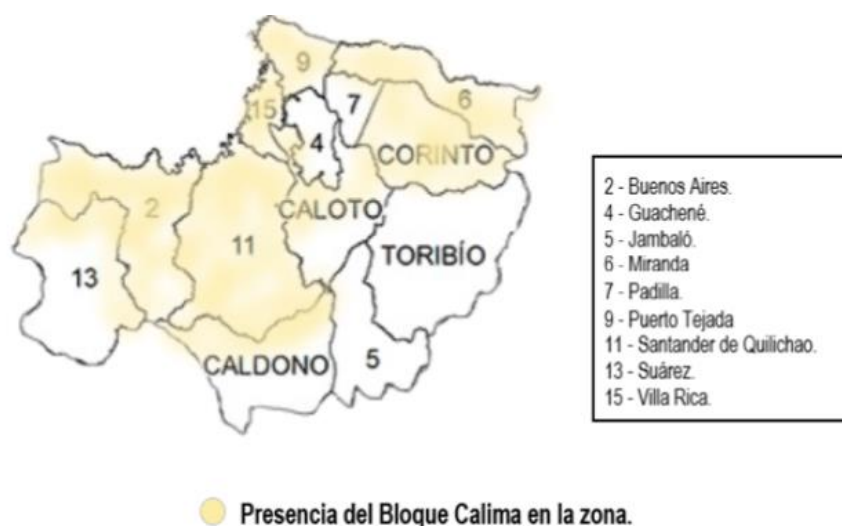
Con el pasar del tiempo, el Bloque Calima se desplegó y su comandancia en la zona objeto de estudio en la presente investigación la asumió el Frente Farallones, el cual, en agosto del 2000 incursionó en Santander de Quilichao, Suárez y Puerto Tejada. Según información recabada por Verdad Abierta (2012), para abrirse paso en la zona, tanto el Bloque Calima como el Frente Farallones, tuvieron apoyo y contacto permanente con miembros de la Fuerza Pública de los departamento del Cauca y Valle del Cauca, quienes facilitaron su avanzada en la región.

La presencia del Frente Farallones coincidió con zonas donde había presencia de propiedades de narcotraficantes, así como de cultivos ilícitos. En esa medida, el territorio nortecaucano constituyó un pilar fundamental en el accionar de las AUC, toda vez que lograron tener control sobre los municipios localizados en el eje de la carretera panamericana, lo que les permitía controlar la salida de la droga para exportación por el pacífico -utilizando el río Naya para llegar a las zonas de embarque- y hacia el interior del país por el departamento del Huila. De ahí la importancia que tuvo quitarle control territorial a las FARC-EP (FIP, USAID y OIM, 2014; Gómez Rivas, Dávila Ladrón de Guevara, y Escobedo David, 2017; Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018).

No obstante, las zonas de alta montaña de la subregión del Norte del Cauca se caracterizaron por la ausencia de las AUC, aparentemente porque la presencia de las FARC-EP allí era muy fuerte y a las autodefensas se les dificultó la ofensiva por desconocimiento de la zona. Sin embargo, Gómez Rivas, Dávila Ladrón de Guevara y Escobedo David (2017) sostienen que en zona planas y/o bajas entre las cordilleras central y occidental si hubo presencia del Bloque Calima y del Frente Farallones. Según informes de la Fiscalía, ambas estructuras paramilitares tuvieron presencia en nueve (09) de los trece (13) municipios que conforman la subregión del Norte del Cauca. Los municipios de la región que no registraron acciones violentas perpetradas por parte del Bloque Calima fueron: Guachené, Padilla, Jambaló y Toribío (ver mapa 4).

#### Mapa 4

*Registro de municipios del Norte del Cauca que presentaron acciones violentas por parte del Bloque Calima entre 1999 y 2004.*



**Fuente:** Elaboración propia con base en información del Centro Nacional de Memoria Histórica (2018) y del Instituto de Estudios Interculturales (2019).

Tanto el Bloque Calima como el Frente Farallones se desmovilizaron en diciembre del 2004. Sin embargo, las zonas desocupadas por estos posteriormente fueron acaparadas por BACRIM autodenominadas como los Rastrojos y los Urabeños, quienes buscaban hacerse con el control del negocio del narcotráfico en la zona, y cuyo modus operandi era muy similar al de las desmovilizadas AUC (FIP, USAID y OIM, 2014).



### 3.3. Movimiento diecinueve de abril (M-19)

La incidencia que tuvo en la zona el M-19 no fue prolongada y más bien se debió a una situación de fuerza mayor a la que se vieron enfrentados por la desarticulación de sus estructuras urbanas en el departamento del Valle del Cauca. Esta situación los debilitó y los obligó a replegarse en las montañas del departamento del Cauca donde tuvieron incidencia en algunas cabeceras municipales, pero no a gran escala porque el control territorial en el momento estaba en cabeza de las FARC-EP (FIP, USAID y OIM, 2014).

Como bien mencionó el Entrevistado 1 (2019),

(...) el M-19 llegó y cogía las tractomulas con leche y repartían la leche entre la gente, a toda la gente del pueblo, la gente salía con olla a recoger leche, entonces la gente decía que el grupo tenía unos ideales muy buenos, era chévere (...) luego cogían las tractomulas que traían enlatados, atunes, macarelas y también hacían lo mismo. La gente decía que qué chévere que el grupo hubiera llegado y así fue que se entraron. Después cuando empezaron los asesinatos y todo eso la gente se dio cuenta de que eran un grupo armado y pues que igual los ideales al principio fueron buenos, pero se les dañaron (...)

Finalmente, esta guerrilla termina realizando una negociación con el gobierno nacional y se desmoviliza en 1990 en el municipio de Caloto, su desmovilización los llevó a participar en la política a través del partido Alianza Democrática M-19, así como en la Asamblea Nacional Constituyente que dio lugar a la expedición de la Constitución Política de 1991 (FIP, USAID y OIM, 2014).

### 3.4. Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL)

Este grupo armado tiene su origen en 1984 con el Comando Quintín Lame, grupo que intenta asumir la vocería armada de las comunidades étnicas y que se caracteriza por estar compuesta exclusivamente por indígenas. Este nuevo grupo armado en sus inicios actuó hombro a hombro con el M-19, a tal punto, que incluso llegó a pensarse que se trataba de una facción de esta guerrilla. Sin embargo, demostraron su independencia con la toma del ingenio Castilla ubicado en el municipio de Corinto, el 29 de noviembre de 1984. Las razones de la

toma fueron fundamentalmente dos: i) el rechazo del desalojo de López-adentro<sup>44</sup> y; ii) el asesinato de Álvaro Ulcué<sup>45</sup> (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015).

Ante la negativa del M-19 de trabajar colaborativamente con el Quintín -debido a las negociaciones que estaba llevando a flote con el gobierno nacional para desmovilizarse- el Quintín decide aliarse con el Frente Ricardo Franco (una disidencia de las FARC-EP). El Entrevistado 1 (2019) comenta lo siguiente sobre el Frente Ricardo Franco:

(...) Ese grupo yo pienso que llegó como a actuar pagado por el mismo gobierno o por la sociedad y ellos, ese grupo era muy violento, sanguinario, hacia fosas comunes y ahí los mataba los enterraba (...) y si usted ve la historia del Cauca está la masacre de Tacueyó, una de las más conocidas de ese grupo, y en Pueblo Nuevo hay dos fosas comunes de ese grupo. Esas fosas yo me imagino que son entre soldados, guerrilleros y civiles (...)

Al MAQL dicha alianza le permitió estabilizarse económica y armamentísticamente. Gracias al acuerdo al que llegaron con este grupo disidente fue posible que se tomaran Santander de Quilichao el 04 de enero de 1985, operación que les permitió darse a conocer como grupo armado protector del movimiento indígena del Cauca (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015).

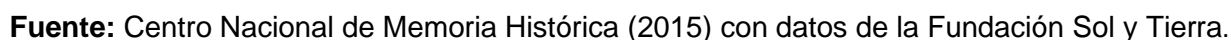
El núcleo armado del Quintín estaba conformado por aproximadamente 80 combatientes, los cuales se encontraban divididos en dos grupos móviles; el primero, operaba en la zona de Tierradentro; y el segundo, se desplegó hasta Corinto y se subdividió en dos frentes, el primer frente operó en los municipios de Caldono, Morales, Piendamó y Silvia; mientras que el segundo operó en Corinto, Tacueyó y Santander de Quilichao. Esta organización permitió que el Quintín tuviera presencia prácticamente en todos los municipios de zona indígena del departamento del Cauca (ver mapa 5) (Ríos Franco, 2017; Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015).

---

<sup>44</sup> Indígenas de la etnia Nasa habían ocupado 600 de las 1.300 hectáreas de tierra plana de La hacienda López Adentro, más de mil soldados y policías en buses y camiones, dirigidos por el alcalde de Caloto, Edgar Fajardo y por el dueño de la tierra, Salomón Vélez -con el objetivo de desalojarlos- arremetieron contra unas doscientas familias indígenas, se quemaron sus viviendas y con maquinaria se destruyeron todos sus cultivos. Los hechos sucedieron el 20 de enero de 1984 (Aguilar, 2014; Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015)

<sup>45</sup> Un día después del desalojo de López-Adentro fue asesinado el sacerdote, indígena paez y activista por los derechos de los pueblos indígenas Álvaro Ulcué, a manos de hombres armados en inmediaciones de Santander de Quilichao.

*Zonas de operación del Quintín Lame.*



A pesar de que el MAQL surge con un propósito social, que busca hacerle frente a la desigualdad e inequidad social que han sufrido desde tiempos inmemoriales las comunidades indígenas, con el paso del tiempo, esa delgada línea entre protectores e incitadores a la violencia se fue desdibujando, principalmente, cuando en el marco de enfrentamientos bélicos

en contra de la Fuerza Pública, de las FARC-EP, e incluso de grupos paramilitares, se afectó a la población civil (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015).

Este movimiento guerrillero se desmovilizó en el corregimiento de Pueblo Nuevo en el municipio de Caldonio en mayo de 1991, luego de acordar un programa de desarrollo para las comunidades indígenas con el gobierno nacional y de haber puesto en el ojo nacional la problemática indígena. El número de desmovilizados ascendió a los 157 combatientes (FIP, USAID y OIM, 2014).

### 3.5. Fuerza Pública

En términos generales, la Fuerza Pública colombiana está conformada por cuatro instituciones: i) el Ejército Nacional; ii) la Fuerza Aérea Colombiana; iii) la Armada Nacional; y iv) la Policía Nacional. En el Norte del Cauca las más activas han sido el Ejército y la Policía. Donde además han cobrado trascendencia instancias militares como la Tercera Brigada, la Vigésima Novena Brigada y la Fuerza de Tarea Apolo<sup>46</sup>. Cabe resaltar que la creación de la FTA -cuya base está localizada en el municipio de Miranda- significó un incremento en el número de acciones bélicas en la zona, cuestión que ha sido objeto de críticas por parte de las comunidades indígenas, toda vez que las instalaciones militares ubicadas allí convirtieron su territorio en objetivo militar para las FARC-EP y otros grupos armados ilegales (Instituto de Estudios Interculturales, 2019; FIP, USAID y OIM, 2014).

Las actuaciones de la Fuerza Pública en el territorio nortecaucano se pueden analizar desde dos perspectivas: la primera, respecto de aquellas acciones que implicaron violaciones a los DDHH e infracciones al DIH, abanderándose en la premisa de “detentar el monopolio de la fuerza”; y la segunda, con relación a los vínculos que ha tenido con grupos armados ilegales específicos como las AUC (Instituto de Estudios Interculturales, 2019).

Tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Militares han priorizado su accionar desde una perspectiva antisubversiva -debido a la presencia histórica de las FARC-EP en el territorio- así como en defensa de los proyectos económicos -azucareros y mineros- de la zona. En esa medida, se han denunciado vulneraciones a los DDHH de la población civil, que además, ha sido fuertemente estigmatizada, ya que la institucionalidad ha confundido de manera sistemática la protesta social liderada por las distintas comunidades -étnicas- con el accionar

---

<sup>46</sup> “creada en 2011 para agrupar varias Brigadas Móviles que existían desde el Plan Estratégico Espada de Honor” (Instituto de Estudios Interculturales, 2019)

de la insurgencia (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016a; Instituto de Estudios Interculturales, 2019).

Igualmente, la relación que la fuerza pública ha tenido con organizaciones paramilitares es innegable, de tal forma, que incluso, con base en lo expuesto por Pinilla Cogollo (2014) citado por el Instituto de Estudios Interculturales (2019) es posible afirmar que en cada municipio en el que hacían presencia los paramilitares, tras bambalinas, existía una coordinación con la Policía o el Ejército. Lo que quiere decir, que las violaciones a los DDHH cometidas en contra de la población civil no solo se hacían con la excusa de “ostentar el monopolio de la fuerza”, sino también permitiendo la incursión y consolidación de estructuras paramilitares en la zona, lo que implicó desplazamientos forzados y masacres que como sector defensa, estaban en su deber de evitar. Estos vínculos con organizaciones paramilitares se le endilgan principalmente a la Tercera Brigada del Ejército (Instituto de Estudios Interculturales, 2019).

#### **4. Población victimizada en el Norte del Cauca: Organización y movilización social**

El Cauca se caracteriza por ser un territorio que presenta una alta densidad organizativa a nivel rural. Esto se debe a la necesidad que ha tenido la población desde tiempos remotos de hacerle frente a las injusticias estructurales a las que han sido sometidos/as, así como también, a la multiculturalidad y pluralidad de cosmovisiones que se reflejan en la presencia de comunidades étnicas y campesinas en la zona (Centro de Estudios Interculturales, 2013). Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (2015) las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas han ido construyendo un nuevo discurso histórico, que les ha permitido mirar en retrospectiva y confiar en la movilización social del presente con la motivación de ir revirtiendo las atrocidades vividas en el pasado, para lo cual, han utilizado la resistencia civil como muro de contención frente a la barbarie.

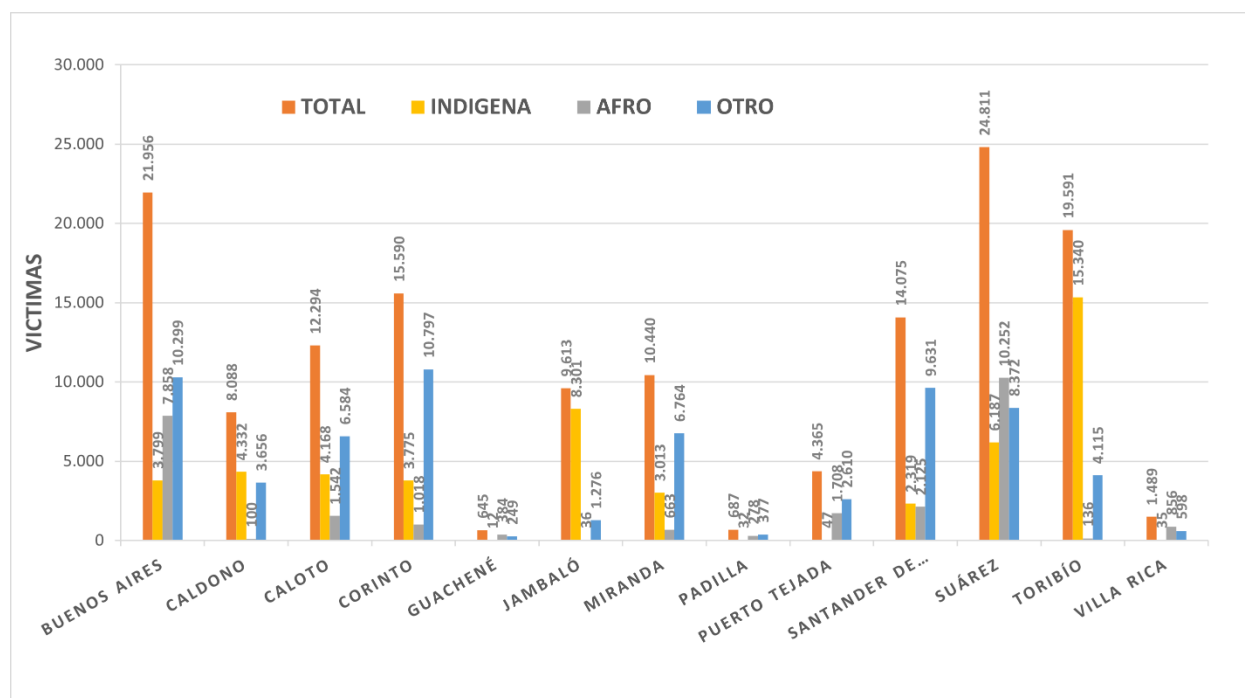
En el Norte del Cauca, la presencia de comunidades étnicas y campesinas ha generado una oleada de resistencias, que por un lado, le han hecho frente a la avanzada militar de grupos armados, y por otro, han luchado contra el acrecentamiento de economías -legales e ilegales- a gran escala. En tal razón, sus autoridades tradicionales y guardias han sido objeto de amenazas y asesinatos sistemáticos. Los/as líderes/as realizan constantemente control territorial con el fin de proteger sus territorios ancestrales, sin embargo, el panorama sigue

siendo desalentador y en los últimos años les ha cobrado la vida a muchas/os de ellas/os (Verdad Abierta, 2018).

A continuación, con el fin de ilustrar parte de la situación de victimización en el Norte del Cauca se presenta una gráfica, la cual compila la información presentada en el Registro Único de Víctimas, donde se sustraen los datos de las población étnica que ha sido victimizada en el marco del conflicto armado en el territorio (ver gráfica 4). Dentro de este punto, se tuvo en cuenta la categoría “víctimas de ocurrencia” incluida en el RUV, tanto a nivel general como en el marco del enfoque diferencial. En este punto, es pertinente hacer una aclaración que se había traído a colación previamente; la población campesina no ha tenido un reconocimiento explícito en el RUV, lo que ha significado que sus victimizaciones no han sido tratadas con enfoque diferencial, es importante mencionarlo porque los registros existentes no han tenido en cuenta la marginación que ha tenido el campesinado y aparentemente se les ha incluido directamente en la categoría “otros”, teniendo en cuenta los supuestos que plantea la gráfica.

#### Gráfico 4

*Población victimizada en el Norte del Cauca (distribución étnica) -"Víctimas Ocurrencia"*



**Fuente:** Elaboración propia con base en información de UARIV (2021).

Las comunidades étnicas y la población campesina han sido entonces sometidas a un sin número de amenazas que aparte de poner en constante riesgo sus vidas, también les ha

implicado defenderse para no desaparecer como cultura. Esta situación guarda estrecha relación con la reacción que han tenido frente al despojo histórico al que han sido sometidas, donde más que su territorio, han llegado a perder su espacio vital, el cual, mientras lo conserven, representa la supervivencia de sus cosmovisiones y tradiciones. Gracias a esa constante reivindicación de etnicidad, estas comunidades han podido defender a capa y espada su permanencia y su cultura, que se refleja en la unión y solidaridad que caracteriza sus organizaciones colectivas, sobre todo a la hora proteger y reclamar sus derechos y su autonomía frente al Estado y los grupos armados legales e ilegales que los/as han violentado (Hernández-Reyes, 2019; López, 2015 citado por Hurtado Hurtado y Poveda Galeano, 2020)

A continuación, se hará referencia a las tres comunidades que fueron altamente victimizadas en la zona por dinámicas de violencia estructural e histórica, así como por el conflicto armado: indígenas, afrodescendientes y campesinos/as, especificando sus situaciones particulares a nivel histórico, sus victimizaciones y sus resistencias.

#### 4.1. Comunidades Indígenas

Como se mencionó previamente, el Norte del Cauca se caracteriza porque una parte importante de su población es indígena perteneciente a los pueblos Nasa y Misak. Allí coexisten 24 resguardos indígenas<sup>47</sup>, distribuidos de la siguiente forma: (3) en Buenos Aires; (6) en Caldono; (3) en Caloto; (1) en Corinto; (1) en Jambaló; (1) en Miranda; (6) en Santander de Quilichao y (3) en Toribío (Departamento Nacional de Planeación, s.f.) (Ver anexo 1 de elaboración propia). Desde los resguardos, la población indígena ha podido ejercer resistencia como comunidad, especialmente en lo que atañe a su lucha histórica por la tierra, cuestión que también se ha impulsado desde los 19 cabildos indígenas<sup>48</sup> que alberga la zona.

Los 24 resguardos que se asientan en la zona cuentan con Guardias Indígenas que se encargan del control territorial. Estas están compuestas por comuneras/os que son seleccionadas/os por las autoridades del Cabildo para un periodo de uno a dos años. La Guardia es esencial, ya que facilita el ejercicio de la justicia ancestral indígena y contribuye a la

---

<sup>47</sup> Los resguardos indígenas son propiedad colectiva de las comunidades indígenas a favor de las cuales se constituyen y conforme a los artículos 63 y 329 de la Constitución Política, tienen el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables (Ministerio del Interior, 2013a).

<sup>48</sup> “Son entidades públicas especiales, cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por ésta, con una organización sociopolítica tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad” (Ministerio del Interior, 2013b).

construcción de autonomía. Según Caviedes (2007) su organización propone una “alternativa a los modelos de control territorial de los actores armado-insurgentes, paraestatales y estatales, desde el reconocimiento de la autoridad tradicional y no desde el uso de la fuerza” (p. 57). En esta zona, la Guardia ha incidido en temas como delincuencia común, promoción de la participación de la juventud en la organización, interlocución con la Fuerza Pública, mediación con grupos insurgentes para la liberación de secuestrados y acompañamiento en movilizaciones por la defensa y exigencia de DDHH de los pueblos indígenas (Caviedes, 2007)

La presencia indígena, mayoritariamente Nasa<sup>49</sup>, en los municipios del Norte del Cauca se remonta a las transformaciones que sufrió la población a raíz de la invasión española (Erazo Gómez y Espitia Pérez, 2018). Según establece Rojas Guerra (1993), la llegada de los paeces a municipios del norte responde a un proceso de migración de este grupo desde Tierradentro (donde ancestralmente se encontraban ubicados). Los Paeces son conocidos porque plantaron resistencia a la colonización por parte de los españoles, manifestando de manera inminente su rechazo político hacia el colonialismo mediante la lucha armada y la guerra contra el opresor (Bonilla, 2014). Sin embargo, pese a su fortaleza, en el Cauca la guerra fue larga y dura, parte de sus tierras fueron usurpadas y se vieron obligados/as a desplazarse a zonas más altas de la cordillera central (Erazo Gómez y Espitia Pérez, 2018).

Por su parte, el pueblo Misak<sup>50</sup> ha tenido presencia histórica en la zona, especialmente en los municipios de Silvia, Jambaló, Totoró, Caldono y Toribío, desde tiempos de la colonia, sin embargo, en contrario sensu al pueblo Nasa, el pueblo Misak fue prácticamente exterminado en ese entonces, lo que conllevó a que los sobrevivientes tuvieran que desplazarse masivamente a territorios que hacían parte del pueblo Nasa. Este hecho, ha sido objeto de conflictos por la tierra entre ambos pueblos indígenas, principalmente por la reticencia del pueblo Nasa de aceptar la presencia del resguardo indígena Misak de Siberia, ubicado en el municipio de Caldono, al considerar que esas tierras eran originalmente suyas (Ministerio de Cultura, s.f; Organización Nacional Indígena de Colombia [ONIC], 2018).

Algunos de los resguardos indígenas que hoy en día perviven en la zona fueron constituidos a nivel administrativo en la colonia mediante la figura política del cacicazgo, legitimada por autoridades españolas e indígenas. Hacia el año 1700, cinco cacicazgos Nasa conformaron una unidad política que ejercía autonomía e instaba a mantener la tradición

---

<sup>49</sup> También conocidos como Paeces.

<sup>50</sup> Denominado por los españoles como pueblo Guambiano.



cultural del pueblo en cabeza del Cacique (Erazo Gómez y Espitia Pérez, 2018). Se entiende que gracias a esto surge esa idea de reconocimiento estatal de la propiedad colectiva de los pueblos indígenas (Caviedes, 2007).

No obstante, en 1899, el título que había configurado los resguardos fue declarado apócrifo y la élite mestiza empieza a dismantelar los resguardos con la idea de “civilizar” a los indígenas e impulsarlos a hacer parte de la nación como ciudadanos leales al Estado. Por esta razón, en 1910 el cacique indígena Manuel Quintín Lame Chantre, empieza a defender las tierras de resguardo: buscando títulos, procurando la erradicación del terraje<sup>51</sup>, enviando memoriales a las autoridades del Estado y concientizando a la comunidad. Es en ese momento en el que emerge la protesta indígena Paez en Colombia (Erazo Gómez y Espitia Pérez, 2018).

Con el surgimiento del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en los años setenta -época de grandes represiones por parte del gobierno a las organizaciones y movimientos sociales- empieza la reconstrucción y recuperación del antiguo territorio de los resguardos. La exigencia más relevante que ha hecho la CRIC es el respeto y la aplicación de lo dispuesto en la Ley 89 de 1890, la cual determina la forma de gobierno territorial de los pueblos indígenas<sup>52</sup>. Esta organización, al día de hoy “agrupa 127 autoridades, 11 asociaciones, 10 zonas y 10 pueblos -dentro de los que se encuentran el pueblo Nasa y el pueblo Misak-, en 84 resguardos indígenas legalmente constituidos en el departamento del Cauca (CRIC, 2021).

Dentro de las asociaciones que hacen parte del CRIC, se encuentra la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), la cual surge con posterioridad a la proclamación de la constitución política de 1991, con el propósito de unificar los 19 cabildos que conforman el Çxhab Wala Kiwe<sup>53</sup>, tres de estos aún están el proceso de constitución. Esta asociación es una iniciativa que surge para hacer frente a las acciones violentas cometidas por paramilitares y terratenientes, y aunque sus acciones parecieran ser solo de defensa y resistencia, en realidad, su apuesta es política y cultural, en pro de su recuperación identitaria, evitando su extinción (ACIN, 2019, citado por Madiedo Sierra, 2019).

---

<sup>51</sup> Renta que paga el que labra una tierra (Definiciones-de.com, 2013).

<sup>52</sup> Hay que destacar que el nombre real de la ley es el siguiente: Por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada.

<sup>53</sup> Territorio del gran pueblo.

El despliegue de las guerrillas en el Cauca acrecentó el ímpetu con el que los indígenas mantenían su autoridad en los resguardos. Empero, hacia los años ochenta, debido a la proliferación de diversos grupos armados, la violencia se incrementó, sobre todo, en zonas rurales y zonas de resguardos, donde la constante incursión y desconfianza de la Fuerza Pública evitó que el movimiento indígena pudiera unificarse realmente (Erazo Gómez y Espitia Pérez, 2018; Caviedes, 2007). Por su parte, Rappaport (2000) señala que el Cauca fue una de las zonas donde diferentes grupos armados encontraron asentamiento permanente y el norte no fue la excepción, múltiples grupos armados legales e ilegales pretendieron adjudicarse el control político y militar de la zona a costa del bienestar de las comunidades.

Las comunidades indígenas tuvieron conflictos constantes con las FARC-EP -debido al control territorial que ejercían- donde las victimizaciones sufridas por estas comunidades a manos de esta guerrilla fueron esencialmente el reclutamiento de niñas/os, el asesinato de comuneros/os que hacían parte de la Guardia Indígena, el cultivo de coca por parte de la guerrilla dentro de los resguardos, y las tomas y los hostigamientos sistemáticos sobre las cabeceras municipales de municipios como Caldon, Corinto y Toribío en múltiples oportunidades. Ese cumulo de cosas llevó a que en Caldon el 12 de noviembre de 2001, las comunidades indígenas fueran protagonistas de un acto de resistencia civil pacífica que impidió la toma de la cabecera municipal por parte de las FARC-EP. Hernández Lara (2002) expone que se concentraron en la plaza del pueblo cerca de 4.500 indígenas que además contaron con el apoyo de las iglesias y de las comunidades campesinas, logrando la retirada de la guerrilla.

No obstante, este grupo insurgente no fue el único que ocasionó graves violaciones a los DDHH e infracciones al DIH. Las AUC -que alcanzaron a tener gran incidencia en una parte importante de la región- arremetieron de forma desmedida contra las comunidades indígenas y perpetraron con el Bloque Calima al mando un sin número de masacres como por ejemplo las del Nilo, Naya y Gualanday. El quid del asunto está en que para los paramilitares, los indígenas estaban aliados con la guerrilla y en ese sentido los resguardos terminaban convirtiéndose en objetivos militares. En los eventos en los que operaban en connivencia con terratenientes de la zona, los asesinatos y despojos se hacían bajo el entendido de que los pueblos indígenas eran enemigos del desarrollo y empobrecían la región. Los hechos victimizantes a los que fue sometida la comunidad por parte de las AUC fueron mucho más crueles, se destacan: tortura, lesiones personales, homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado, amenazas y privación de la libertad (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018; Hurtado Hurtado y Poveda Galeano, 2020).

Cabe recalcar que tanto con la desmovilización de las AUC en el 2003, como con la firma del acuerdo de paz cesaron la gran mayoría de hostilidades que afectaban de manera directa, no solo a los municipios del norte, sino en general a todo el departamento del Cauca. Sin embargo, con el cambio de gobierno en el 2018 empezó la crisis humanitaria en el Norte del Cauca, ya que se continúan reportando amenazas -las cuales se han materializado de formas muy violentas- por parte de nuevos grupos paramilitares y de disidencias de las FARC-EP dirigidas a defensores/as de DDHH y líderes/as sociales pertenecientes a comunidades étnicas. Específicamente indígenas. Aparentemente las intimidaciones se están haciendo como retaliación a su injerencia en la implementación del acuerdo de paz en la zona.

#### 4.2. Comunidades afrodescendientes

Las luchas de la población afrodescendiente empiezan con la resistencia a la esclavitud y se consolidan con la conformación de los cimarrones<sup>54</sup>. El pueblo afro estaba radicado principalmente en las zonas rurales y desde 1940 participó activamente en las luchas por la tierra junto con el pueblo campesino. Así mismo, también tuvieron incidencia en las luchas sindicales que se fueron conformando para hacerle frente a las extralimitaciones cometidas por la industria azucarera, en las cuales exigían mejores prestaciones salariales, condiciones de trabajo dignas y acceso a la tierra (Hurtado Hurtado y Poveda Galeano, 2020).

La comunidad afrodescendiente logró ser reconocida como grupo étnico en la constitución política de 1991, gracias al activismo que desde los años ochenta llevaron a cabo mediante el Proceso de Comunidades Negras, que tenía como lema “fortalecer la conciencia del ser negro y del ser comunidad negra, de luchar contra el racismo y la discriminación racial, la exclusión y la injusticia social estructural, la defensa de la autonomía, el territorio y la participación” (Hurtado Hurtado y Poveda Galeano, 2020, p. 29).

Ese reconocimiento inicial que se le dio a las comunidades afrodescendientes se reglamentó por medio de la ley 70 de 1993, la cual les concedió a los territorios de las comunidades afro el *estatus* de colectivos. Esta nueva normativa también creó los Consejos Comunitarios, organizaciones que sirven como mecanismo para legitimar y defender el territorio ocupado ancestralmente por el pueblo afrodescendiente y que tienen un carácter netamente organizativo y político, no territorial, en el sentido en el que no constituyen un título colectivo

---

<sup>54</sup> Se trataba de aquellos individuos africanos o afrodescendientes que huían del aberrante sistema de esclavitud, el cual estuvo activo durante casi cuatrocientos años (Serna, 2010).

sobre la propiedad de la tierra, como si sucede con los Resguardos indígenas (Hurtado Hurtado y Poveda Galeano, 2020).

En el Norte del Cauca, la creación de estos Consejos es reciente; a 2019, se habían conformado 43 Consejos Comunitarios de negritudes en la zona, la consolidación de estos ha significado un afianzamiento de la etnicidad y de la reivindicación de derechos sociales y territoriales de la comunidad afro (Hurtado Hurtado y Poveda Galeano, 2020). Cabe destacar que en el año 2003 se conformó la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca - en el municipio de Suárez- con la idea de homogeneizar las apuestas de todos los Consejos Comunitarios de la Región, a esta asociación se unieron 41 Consejos Comunitarios de 10 municipios (Hurtado Hurtado y Poveda Galeano, 2020).

Las asociaciones afro tienen una características particular, el rol que ocupan las mujeres ha sido prioritario, son ellas las que han interpelado dentro y fuera de su propia comunidad cuestiones como los derechos de las mujeres, el empoderamiento en ámbitos académicos, políticos y económicos. Dentro de sus reclamos no solo están aquellos que se derivan del conflicto armado, sino también las injusticias estructurales a las que han sido sometidas sus comunidades respecto de la tierra, la salud, el acceso a servicios básicos y la protección de su vida (Hurtado Hurtado y Poveda Galeano, 2020).

La violencia derivada por el conflicto armado en los municipios donde estas comunidades están radicadas fue perpetrada principalmente por el Bloque Calima de las AUC, especialmente en los municipios de Buenos Aires y Suárez, que fueron la puerta de entrada de los paramilitares al Norte del Cauca.

#### 4.3. Comunidades Campesinas

La presencia campesina en los municipios del Norte del Cauca se encuentra concentrada en la zona baja o plana, la cual cuenta con mejor acceso a carreteras para la comercialización de productos agropecuarios. El campesinado cuenta con el apoyo de importantes organizaciones a nivel regional y nacional, como son: la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y la Asociación Regional para el Desarrollo Campesino Nortecaucano (Ardecanc). La presencia de dichas organizaciones ha impulsado los niveles de productividad y organización del campesinado en el territorio (Erazo Gómez y Espitia Pérez, 2018).

Las comunidades campesinas nortecaucanas se caracterizan por su constante empeño en reivindicar el derecho que tienen de acceder a la tierra, razón por la cual han optado por movilizarse a nivel local y regional (Rojas, 2015). Las luchas del movimiento campesino a nivel local inician en los años ochenta con acciones focalizadas según las necesidades que tiene cada territorio en particular, encaminadas a exigir la garantía de derechos básicos de los que son titulares (Tocacipá-Falla, 2005 citado por Rojas, 2015). La pugna por la reivindicación de dichos derechos continuó a lo largo de esta década, pero realmente se rompen los esquemas en los años noventa con el Gran Paro del suroccidente colombiano, momento histórico que marca un hito, ya que articula no solamente organizaciones campesinas, sino también a diferentes organizaciones sindicales y étnicas. Dicho paro bloqueó por 27 días la vía panamericana que conecta Colombia con Ecuador en distintos puntos de los departamentos de Cauca y Nariño; y sirvió como ejemplo para posteriores movilizaciones que se realizaron entre los años 2000 y 2010.

El campesinado logra una primera apuesta por ser reconocido legalmente con la expedición de la Ley 160 de 1994, que plantea una reforma agraria y contempla las Zonas de Reserva Campesina<sup>55</sup>, sin embargo, esta ley se ha aplicado poco, lo que ha llevado a que los/as campesinas/os constantemente se estén movilizandando para poder legalizar estas zonas a las que por ley tienen derecho y que les ha sido pospuesto desde el año 2000, pese al sin número de movilizaciones que han ejecutado. Se espera que la constitución de las mismas en el Norte del Cauca tenga una planificación rigurosa, en la medida en la que al coexistir con Resguardos Indígenas y Consejos Comunitarios, su establecimiento debe hacerse por fuera de los límites de estos, para evitar futuras disputas territoriales entre las comunidades étnicas y los/as campesinos/as.

Según lo dispuesto por Moreno Quintero (2008), el comportamiento que tuvieron los miembros de las organizaciones campesinas frente a los grupos armados presentes en la zona del norte del Cauca se caracterizó por ser de tipo pasivo y obediente, cuestión que tenía incidencia directa en el desarrollo de sus actividades, toda vez que estos grupos armados podían incluso lograr ceses provisionales de la actividad agrícola campesina. Pese a lo anterior, el hecho que los campesinos estuvieran organizados ayudó de sobre manera a

---

<sup>55</sup> “Las zonas de Reserva Campesina tienen por objeto fomentar y estabilizar la economía campesina, superar las causas de los conflictos sociales que las afecten y, en general, crear las condiciones para el logro de la paz y la justicia social en las áreas respectivas” (Decreto 1777, 1996, art.5).

fortalecer los vínculos que tenían con el territorio que ocupaban y los lazos sociales entre ellos mismos para de una u otra forma hacerle frente a la violencia derivada del conflicto armado.

La afectación más cruda del conflicto para el campesinado empieza a partir del 2001, cuando las AUC llegan a las zonas planas de la región. Hubo una parte de la organización campesina que logró un vínculo más fuerte con el territorio, pese al incremento de la violencia, sobre todo a nivel de productividad, al contar con terrenos propios para el desarrollo de diferentes actividades agrícolas como la cría de pollos, trapiches para fabricar panela, entre otros. Cabe resaltar que ese no fue el común denominador, aquellos que no contaban con tierras o que fueron despojados a la fuerza se vieron obligados a desplazarse a las grandes ciudades en busca de oportunidades (Moreno Quintero, 2008).

A diferencia de las organizaciones indígenas y afrodescendientes, el campesinado asumió una posición diferente con relación a los actores armados que los/las afectaron en el transcurso del conflicto armado. Hay que destacar que con respecto a las guerrillas, su nivel de reclamo no fue tan amplio como si lo fue frente a organizaciones paramilitares. El miedo generalizado que le tenía este sector victimizado a los paramilitares era tan grande, que admiten haber participado muy poco en la reparación de *víctimas* que planteó la ley 975 de 2005, precisamente por miedo a ser tildados de informantes y de sufrir posibles retaliaciones a futuro (Moreno Quintero, 2008).

## **CAPITULO 5: PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN VICTIMIZADA: UN ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE JUSTICIA EN TIEMPOS DE TRANSICIÓN DESDE LA REALIDAD TERRITORIAL DEL NORTE DEL CAUCA.**

“Hay una manera de contribuir  
a la protección de la humanidad,  
y es no resignarse”.

**E. Sábato.**

En el presente capítulo se evidencia a gran escala lo que es el deber ser de la participación de la población victimizada en los mecanismos de justicia en tiempos de transición, y lo que está pasando en realidad respecto de dicha participación en el Norte del Cauca. En ese sentido, si bien en general se planteó la participación como una forma de transversalizar el principio de centralidad de la población victimizada, es crucial revisar hasta dónde llega esa participación en la implementación de los mecanismos de justicia en tiempos de transición que fueron planteados en el capítulo 3 de la presente investigación. Es por esto, que en el presente capítulo se traerán a colación las voces que provienen del territorio, de los liderazgos comunitarios que son los que pueden dar cuenta de cómo ha sido dicha implementación desde su propia vivencia y desde la perspectiva de las comunidades que representan: indígenas, afrocolombianos/as y campesinos/as.

La participación constituye la base de la aplicación del principio de la centralidad de la población victimizada, así como del enfoque restaurativo que se estableció debería ser transversal en todo el SIVJRNR, pese a su mayor influencia en el componente de Justicia. Así las cosas, la participación en la implementación cumple el propósito de darle legitimidad a lo pactado, al tener en cuenta las necesidades, las propuestas y los puntos de vista de las personas que han sido afectadas por hechos violentos acaecidos en el marco del conflicto armado (Saffon y Tacha, 2019).

En líneas generales, como señalan Saffon y Tacha (2019), la participación tiene tres finalidades fundamentales a la hora de legitimar los mecanismos de justicia en tiempos de transición: i) la expresión de puntos de vistas; ii) la incidencia y iii) la transformación de las relaciones de poder.

La primera finalidad, tiene que ver con que tanto la población victimizada como la sociedad civil deben ser escuchadas, cuestión que se logra mediante la apertura de espacios

para que expresen lo que están pensando y lo que les interpela desde sus propios contextos; en este caso la participación constituye un fin sí misma. Hay que destacar que la crítica que se le ha hecho a esta finalidad es que puede terminar mostrando como democratizadora la “inclusión” de esta población, sin que esto per se signifique que sus voces entren en la agenda y que sean consideradas a la hora de tomar decisiones que les incumben directamente. Este aspecto definitivamente puede significar un debilitamiento de la confianza que las personas puedan llegar a tener con la institucionalidad (Saffon y Tacha, 2019).

La segunda, va más allá de escuchar a los diferentes sectores que han sido violentados, centrándose en el impacto que tiene su participación en las decisiones que se tomen. La incidencia de esta finalidad es híbrida, por un lado busca que los mecanismos sean bien recibidos por la población, y por otro, busca mayor calidad, entendida esta como un aumento en la probabilidad de que se den mejores soluciones. Con esta finalidad, se garantiza que la participación no sea un saludo a la bandera. Hay que tener en cuenta que este punto es difícil de llevar a la práctica, ya que como se mostrará a lo largo del capítulo, las personas que han sido victimizadas y organizaciones de la sociedad civil de primera base, encuentran dificultades para poder participar en estos espacios, debido a que no cuentan con los recursos o los conocimientos a nivel de procedimiento para poder hacerlo (Saffon y Tacha, 2019).

La tercera finalidad está relacionada con la necesidad de realizar cambios en las relaciones de poder que han significado la exclusión o la vulnerabilidad de las comunidades que han sido victimizadas, con la intención de generar garantías de no repetición de los hechos atroces, así, como para impedir la proliferación de situaciones que constituyen injusticia estructural, ya que esta, por regla general ha estado presente desde tiempos remotos y se ha exacerbado en razón del conflicto armado. Lo anterior se logra no solo mediante el empoderamiento de las personas victimizadas y de la sociedad civil, sino también adoptando medidas que contribuyan a transformar las relaciones de poder en el ámbito político y en el ámbito social (Saffon y Tacha, 2019).

Teniendo en cuenta el contexto del Norte del Cauca, que como se explicó en el capítulo anterior, tiene un componente étnico y comunitario muy fuerte, surge la necesidad de que la participación se realice implementando el enfoque diferencial, con el fin de incluir cosmovisiones y puntos de vista que históricamente no han sido escuchados y que incluso, en el marco de las mismas negociaciones, por poco no son tenidos en cuenta.



Con todo lo anterior, a continuación se presenta la forma en la que fue concebida y la forma en la que se está dando la participación de las personas victimizadas en los mecanismos de justicia en tiempos de transición en el Norte del Cauca. Se analizará la participación partiendo de los derechos a: i) la Verdad; ii) Justicia; iii) Reparación; y iv) No Repetición, presentes en los diferentes componentes del SIVJNR.

## **1. Participación en los componentes de Verdad**

Como se estableció en el capítulo 3 de la presente investigación, el componente de verdad lo conforman la CEV y la UBPD fundamentalmente. A pesar de que la JEP también tiene un componente de verdad importante, vale aclarar que la verdad que se da en ese contexto es una verdad judicial, supeditada al funcionamiento procesal de la jurisdicción, que en últimas está sujeta a la imposición de una sanción o a la absolución de una determinada conducta.

Hay que partir por entender que el derecho a la verdad es inalienable, así como también lo son el deber de recordar y el derecho de las personas victimizadas a saber. El derecho a la verdad no debe ser concebido solamente como el derecho individual que tienen las víctimas y familiares a saber lo que sucedió; también debe ser tenido en cuenta como un derecho colectivo, toda vez que lo que se busca con esa verdad es enfocarse en la historia, con el objetivo de evitar que se repitan en el futuro hechos atroces (Botero Marino y Restrepo Saldarriaga, 2005).

Cabe aclarar que en términos de participación, ese derecho a la Verdad esta intrínsecamente relacionado con las realidad que ha vivido cada persona o cada grupo social respecto de ciertos sucesos, en ese sentido pude haber muchas verdades y muchas interpretaciones de la verdad y los mecanismos de justicia en tiempos de transición deben optar por ponerlos de presente y escucharlos para generar garantías de No Repetición.

### **1.1. ¿Cómo se planteó?**

#### **1.1.1. *En la CEV***

De acuerdo con las funciones establecidas en el artículo 13 del decreto ley 588 de 2017, la CEV tiene como deber la creación de espacios en los ámbitos internacional, nacional, regional y territorial, en los que busca escuchar las diferentes voces que tuvieron incidencia en el marco del conflicto armado en Colombia, haciendo hincapié en las voces de las personas victimizadas, tanto individuales como colectivas. Así mismo, también debe proveer orientación

a las personas y a las comunidades victimizadas y diseñar una estrategia que permita un relacionamiento activo con las *víctimas* y sus organizaciones, creando iniciativas de reconstrucción de la memoria (Decreto Ley 588, 2017).

Lo anterior, según los diferentes comunicados e informes presentados por la CEV se ha venido materializando con la puesta en marcha de una serie de estrategias dentro de las que se destacan: i) los encuentros por la verdad; ii) los espacios de escucha plural; y iii) los diálogos para la no repetición (Comisión de la Verdad, 2019), las cuales han tenido asidero gracias al apoyo de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de DDHH, organizaciones de *víctimas*, así como también de algunas instituciones del Estado.

Los Encuentros por la Verdad y los Espacios de Escucha Plural buscan darle mayor relevancia a las narrativas, a las voces y a las percepciones de la población victimizada. Los primeros, buscan incentivar la participación y la escucha de las voces que han sido silenciadas por la violencia, donde se pone de presente la necesidad de reconocer que hubo/hay conflicto armado, reflexionar sobre lo ocurrido para que exista una verdadera transformación social y crear herramientas para hacer más empática a la sociedad civil. Los segundos, busca acoger a todos los sectores de la sociedad incentivándolos a que sus voces sean escuchadas, la CEV asumió el compromiso de respetar las versiones y las formas por medio de las cuales cada sector decide presentar sus aportes a la verdad, estos espacios también permiten que la CEV indague para ampliar el espectro de comprensión del aporte que se esté dando. MOOC CEV Edx (comunicación personal, 07 de junio, 2020).

Los Diálogos para la No Repetición surgen como una estrategia que busca generar espacios de participación y reflexión para la no repetición, mediante estos se pretende profundizar en el “por qué” de aquellos hechos violentos que la sociedad civil debe revisar y analizar con el fin de poder enfrentarlos conjuntamente, evitando esos patrones de silencio y de olvido. El rol de la CEV en estos escenarios es promover la discusión sobre temas complejos, que no han sido encarados por la sociedad colombiana y que están relacionados -en su mayoría- con contribuir y sentar las bases para la no repetición de las violaciones de DDHH. Así mismo, también se pretende dar cuenta del fortalecimiento que han tenido los procesos de reconstrucción de tejido social en los territorios, así como de las experiencias de resiliencia que se han venido configurando a nivel individual y colectivo. MOOC CEV Edx (comunicación personal, 07 de junio, 2020).

Con el fin de garantizar una participación masiva por parte de los diferentes actores, principalmente a nivel territorial, el país fue dividido en 11 zonas<sup>56</sup> con el fin de facilitar una atención cercana. En cada región se crearon Casas de la Verdad, oficinas donde las comunidades pueden acudir y las cuales a nivel misional tienen un carácter participativo para la documentación de casos y activación de procesos de reconocimiento con un enfoque de no repetición (Comisión de la Verdad, 2019; Comisión de la Verdad, s.f.a). Cuestión que impulsa el fortalecimiento del dialogo y de la confianza que tienen las poblaciones sobre la implementación de lo acordado en términos de verdad.

Finalmente, la CEV también debe garantizar las condiciones de seguridad de quienes participen en los ejercicios de búsqueda y construcción de la verdad, para lo cual resulta crucial que se mantenga confidencial la versión de las víctimas y de los testigos, con el fin de protegerlos. De igual forma, en aquellas zonas en las que la seguridad es precaria habrá presencia de una oficina de análisis de riesgos, que de acuerdo con lo que se reporte establecerá el modo en el que se trabajará en cada lugar y el nivel de protección que se les ofrecerá a las comunidades (Comisión de la Verdad, s.f.a)

### *1.1.2. En la UBPD*

La población victimizada, las organizaciones de *víctimas* y organizaciones de DDHH pueden participar en este mecanismo mediante el diseño de los planes regionales, así como en los procesos de búsqueda y localización de personas vivas y la recuperación, identificación y entrega digna de los cuerpos en caso de fallecimiento (Decreto Ley 589, 2017). Es por esto, que la UBPD debe mantener permanente interacción con los familiares de las personas dadas por desaparecidas, siempre apuntando a ofrecer un reporte oficial y detallado en el que se constante lo sucedido.

Adicionalmente, las personas que se encuentren en proceso de búsqueda de sus seres queridos contarán con diferentes espacios de encuentro y diálogos en los cuales se les brindará apoyo y asesoría sobre el desarrollo de las fases de búsqueda, los avances y los retos de la misma, así como también sobre la manera en que pueden participar y en qué momentos pueden hacerlo (Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, s.f.). Para cumplir con esta misión la UBPD desarrollará herramientas pedagógicas que permitan entender

---

<sup>56</sup> 1. Caribe e Insular; 2. Antioquia y Eje Cafetero; 3. Magdalena Medio; 4. Nororiente; 5. Pacífico; 6. Centroandina; 7. Orinoquía; 8. Amazonía; 9. Surandina; 10. Bogotá y Soacha; 11. Internacional.

y reconocer el proceso de búsqueda partiendo de la construcción de confianza y de trabajo colectivo (Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, s.f.).

El rol de las/os buscadoras/es en el marco de los procesos de búsqueda es trascendental desde el momento de la denuncia hasta la entrega digna del cuerpo o del reencuentro con su ser querido. Para que esta participación se materialice de forma debida la UBPD debe garantizar varias cuestiones: i) Un enfoque regional incluyente; ii) una plataforma que brinde facilidad a las/os buscadoras/es a la hora de acceder al proceso de búsqueda; iii) una socialización y pedagogía encaminada a que las comunidades conozcan sus derechos; iv) un espacio público en medios de comunicación en el que se puedan difundir los datos de las personas desaparecidas o de los cuerpos identificados; y v) la conformación de una red de organizaciones de *víctimas* que facilite la circulación de la información desde las bases sociales, así como su retroalimentación (Comisión Colombiana de Juristas, 2017).

Dentro del proceso de búsqueda es necesario que de manera transversal exista un acompañamiento psicosocial individual, familiar y comunitario -que tenga un enfoque de acción sin daño<sup>57</sup>- en la medida en la que la desaparición al ser un delito de ejecución continuada presenta complejidades que afectan de manera diferenciada a estas familias, quienes han pasado por un sin número de instituciones del Estado buscando respuestas, que hasta hoy no han encontrado. En ese sentido, es fundamental que la UBPD preste ese apoyo y evite al máximo caer en la revictimización de estas personas, por lo cual tiene que trabajar de manera muy objetiva y bajo ese espectro de integralidad que le permite apoyarse en los demás mecanismos del SIVJNR, para realmente hacer un aporte en materia de búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en Colombia.

## 1.2. ¿Cómo se está llevando a cabo en el territorio Nortecaucano?

### 1.2.1. *En la CEV*

La CEV ha abierto diferentes espacios para que las comunidades del Norte del Cauca puedan participar, ya sea como aportantes a la verdad, o como receptoras de reconocimientos a la verdad, que se realicen a lo largo de su mandato, que finaliza en noviembre de este año

---

<sup>57</sup> Anderson (2009) plantea la necesidad de implementar un enfoque de acción sin daño o do no harm, sobre la base de que las organizaciones que actúan en el marco de conflicto no son neutrales y entran a hacer parte del contexto conflictivo, de ahí que la autora pone de presente la necesidad de que las agencias de ayuda humanitaria y desarrollo se responsabilicen por la forma en la que la asistencia que prestan termina afectando los conflictos.

(2021). Lo que se logra evidenciar es que la CEV si ha llegado a territorio, esto se ve reflejado en la presentación de informes que han realizado las comunidades. Sin embargo, en el marco de las entrevistas realizadas en la presente investigación, es necesario tener en cuenta varios puntos que dejan entrever cómo ha sido la forma en la que la CEV ha hecho presencia en la zona. Este análisis también se desarrolló teniendo en cuenta la documentación audiovisual que ha publicado la CEV tanto en su página web, su canal de YouTube y su página de Facebook, en la que se relaciona de manera específica al Norte del Cauca.

Antes que nada, es crucial traer a colación una reflexión que realizó Aida Quilqué, lideresa y defensora de DDHH del pueblo indígena Nasa, en el primer Encuentro por la Verdad organizado por la CEV en el 2018:

(...) Para los pueblos indígenas de Colombia, 102 pueblos indígenas, que somos víctimas milenarias y a que a raíz de la profundización de la guerra también la historia nos muestra que nosotros hemos resistido para pervivir en el tiempo y el espacio. De esta misma manera es muy importante e histórico para los pueblos indígenas conocer la verdad, pero una verdad donde empecemos a descolonizar esa mirada discriminatoria, racista, y en muchas ocasiones porque en el país nos conocen como rebeldes, revoltosos, salvajes, terroristas y queremos que esta verdad nos empiece a mostrar la verdad que necesitamos los pueblos indígenas y los pueblos étnicos en el país (...) la paz debería ser una política negociada en el marco de ese conflicto armado que se estaba viviendo, gracias a quienes escucharon este llamado, no solo de los pueblos indígenas, sino de la población civil. En ese sentido también decimos que es una oportunidad histórica para nosotros, para que nos cuenten la verdad de muchos de los hechos victimizantes, no solo a nosotros como pueblo, sino también las afectaciones a la madre tierra. Que nosotros desde la gobernabilidad y desde las cosmovisiones de los pueblos indígenas podamos contar nuestra propia verdad, por eso resalto que el SIVJNRN realizara la consulta previa, libre e informada en donde hoy vamos a coordinar ese ejercicio de la Verdad, el ejercicio de la Justicia y de la No Repetición (Comisión de la Verdad, 2018).

Esas eran las expectativas que tenía la población victimizada y la sociedad civil respecto de la CEV cuando esta apenas empezaba su mandato, empero, con el paso del tiempo y a medida que se iban escalando los primeros pinos en materia de implementación, la percepción que empiezan a tener las comunidades en el territorio es que la interlocución que iban a sostener con la institución iba a ser de corte “socializador”, no de consulta o de construcción conjunta, lo que en cierta medida ha significado un sentir de incomodidad, porque esperaban tener un papel mucho más activo en su paso por la CEV (Entrevistada 4, 2021). Esto se ve reflejado en la forma en la que la CEV llegó a los territorios y en la forma en la que se relacionó de manera directa con las comunidades:

(...) Tuve la oportunidad de ser parte del equipo del CONPA. Con recursos de cooperación que se hizo el informe a la CEV, por la confianza y por el trabajo que tengo, realicé 45 entrevistas, entre ellas como 37 a personas individuales y las otras fueron colectivas, entre grupos focales y algunos entrevistas a autoridades, o sea a las juntas de los Consejos Comunitarios que por un formato de la CEV se manejaba diferente. Mira, de este número de personas, que ese número de entrevistas ascendió como a unas 70 personas incluyendo los grupos focales, ninguno había sido entrevistado por la CEV de la Casa de la Verdad que para el caso del Cauca está en Popayán, nosotros por estar en el norte tenemos mucha más cercanía territorial e incluso de comunicación y de acceso a Cali que al mismo Popayán. Ni a mí, para decirte de esta forma, ni a mí que fui consejero mayor de ACONC durante 6 años y unos meses y fui integrante activo del CONPA y de la comisión de la verdad, ni siquiera me entrevistaron, modestia aparte, lo que te quiero decir es, ese enfoque étnico, en el caso del Norte del Cauca para las comunidades del pueblo negro para mí eso no fue tal cual, si, para mí eso no se dio, claro, la CEV puede justificarlo hoy con el trabajo que hicimos nosotros como CONPA y está bien, eso se integra al trabajo que ellos hicieron, pero como estructura central de la CEV, porque lo que nosotros hicimos lo hicimos por aparte, pero dándole la información a ellos (...) (Entrevistado 2, 2021).

Como se logra dilucidar, si bien la CEV se encargó de capacitar a las comunidades para que pudieran presentar los informes que iban a ser tenidos en cuenta en el informe final, ese aspecto ocasionó cierta inconformidad debido a que las comunidades no se sintieron parte de una ruta institucional. Claro, el trabajo de sistematización de la información es importante y sumamente complejo en escenarios transicionales y más cuando el conflicto ha sido tan crudo y extenso, pero los liderazgos comunitarios han hecho hincapié en que un escrito no tiene el mismo significado y nivel de dignificación que tiene una interlocución directa, ya sea con la CEV o con quienes voluntariamente reconocen la verdad (cuando se abren espacios para que así sea). Por eso es importante la forma en la que dichos informes son recibidos. Abrir espacios de entrega pública, hace que la dignificación cobre mayor relevancia.

Lo anterior, aunado a la tardanza que tuvo la CEV en hacer presencia en el territorio, a pesar de que desde el principio era claro que su mandato iba a ser por 3 años, el tiempo era una limitante muy grande y había que actuar con efectividad. Esta tardanza se evidencia en la entrevista más antigua que se realizó en el marco de la presente investigación, en septiembre del 2019, así:

(...) Antes de venirme, hace 15 días estuve reunido con la Comisión de la Verdad, o sea que es la primera vez que llega (...) O sea, mire la lentitud con la que se manejan las cosas en Caldonio (...) me llaman que tengo que organizar, de cada grupo de víctimas 5 representantes que digan, que cuenten. Y yo con eso no estoy de acuerdo, pienso que tiene que ser cada persona, así sean mil o 10 mil, porque cada uno tiene su verdad y yo

no puedo decir, yo soy, yo me creo un líder de Caldono o no soy que me crea, me volvieron líder (...) yo no puedo contar lo de 460 familias, ni siquiera de una de esas familias, ni de la mía porque cada uno siente o sintió la guerra de manera diferente y en sitios diferentes, entonces yo quiero es que eso lo hagan... entonces le ponen a uno el problema que la plata, a mí no me importa, que el tiempo. No, esa comisión de la verdad tiene que ir y es individualmente y con el tiempo necesario, y que también tenga un apoyo psicosocial porque es que no es fácil contar la verdad. En el grupo que yo tengo y es muy claro que los psicólogos, yo los felicito y son parte muy activa, pero un psicólogo pretende en dos minutos solucionar lo que la gente vivió en cincuenta y pico de años (Entrevistado 1, 2019).

He ahí otro de los puntos controversiales que tiene el manejo de los macrocasos, modelo tan generalizado en el ámbito de la justicia en tiempos de transición. Escuchar a todas la voces no solo iba a ser un reto, sino iba a ser prácticamente imposible, se tenía que contar con un despliegue territorial efectivo y en ese sentido, el Entrevistado 1 (2019) tiene razón, cada persona individualmente afectada tiene su propia vivencia y verdad, su propio nivel de resiliencia y sus formas propias de afrontar el sufrimiento y la atrocidad. Es un exabrupto pretender que entrevistando cinco (5) miembros, se logre extrapolar la verdad de una Asociación conformada por más de 200 personas, donde si bien todos tienen un patrón de victimización similar -muchas veces supeditado al perpetrador- este nunca será igual para todas/os, porque implica meter en una bolsa muchas realidades que pueden ser disidentes u opuestas. Es probable que ante la premura de la CEV para poder cumplir en tiempo récord con la recolección de información, que abarca más de 50 años de conflicto, se terminen por omitir múltiples realidades territoriales importantes. Habría que ver como se desarrollará ese despliegue territorial en lo que finalmente será el Informe Final que debe presentar la CEV en noviembre de este año (2021).

Cabe resaltar que frente a la situación de Caldono, la CEV el 20 de marzo del 2021 realizó un encuentro por la verdad en alianza con la Alcaldía de Caldono, el cual contó con la participación de diferentes sectores de la sociedad civil y cuya temática central fue el reconocimiento voluntario de responsabilidades de la antigua FARC-EP, donde se puso de presente la violación sistemática de DDHH que cometió este grupo armado (el frente sexto y la columna móvil Jacobo Arenas) y que evidentemente afectó los proyectos de vida de las comunidades que habitan en la zona. El encuentro se realizó de manera presencial y contó con la participación mayoritaria de los pueblos indígenas tanto Nasa Sath Tama Kiwe, como del cabildo Misak Ovejas Siberia, así como de comunidades campesinas. (Comisión de la Verdad, 2021).

En el marco de dicha jornada, el padre Francisco de Roux, presidente de la CEV hizo un llamado a ir más allá del esclarecimiento de la verdad, y apostarle a la dignificación de la población que ha sido victimizada en el territorio, destacó la importancia que tiene realizar un reconocimiento respetuoso, siempre admirando la valentía y la resistencia de las comunidades que fueron violentadas (Comisión de la Verdad, 2021). Dentro del trabajo exploratorio que hizo la CEV, a priori a la realización del Encuentro por la Verdad, se identificaron tres dimensiones que tuvieron mayor impacto en el territorio y que fueron discutidas en el marco de la jornada: i) afectaciones colectivas y comunitarias; ii) impacto en niñas, niños y jóvenes; y iii) afectaciones económicas. Estas dimensiones fueron identificadas a partir de encuentros con la comunidad realizados a modo de diagnóstico y son una prueba importante de participación de las personas victimizadas del municipio de Caldonio en este mecanismo.

Si bien este encuentro tiene un significado muy valioso para el pueblo de Caldonio, también es importante señalar que fue el único municipio del Norte del Cauca, que hasta la fecha ha sido puesto en la lupa de una manera tan contundente por la CEV en términos de reconocimiento de verdad y de participación activa de la población victimizada, al menos en ese nivel restaurativo tan potente. Como se mencionaba previamente, el trabajo territorial de la CEV tiene un despliegue que para las comunidades no ha sido tan eficiente, no se sabe si por un tema de recursos o por un tema de tiempo, que implicó dejar por fuera múltiples realidades, focalizándose en otras. Así mismo, hay que tener presente el sentir que tienen las comunidades étnicas de que si bien fueron tenidas en cuenta, hay que entender que el enfoque diferencial étnico aplicado va más allá de escuchar al colectivo o de convidarlo, debe propender por trabajar desde una perspectiva deconstruida y colaborativa con estas comunidades, desde un contexto que solo ellas y ellos han vivido de manera histórica. Más adelante se verá que algo similar sucedió con la participación de las comunidades étnicas en la implementación de los PDET.

Una de las críticas que hicieron algunos de los entrevistados, está relacionada con las Casas de la Verdad, si bien hay una en la capital del Cauca que es Popayán, el acceso a esta por parte de las comunidades ha sido complejo porque no tienen como acceder a esta debido a lo alejada que se encuentra de las zonas rurales:

(...) Pues acá hay un Casa de la Verdad, pero yo no la conozco, en el departamento del Cauca hay una que nos han invitado, pero no hemos ido, nosotros lo que hemos hecho es entregarles a ellos y a la JEP, lo hemos hecho directamente como resguardo y que se les entregó directamente porque vinieron de Bogotá (...) (Entrevistada 3, 2021).



De igual forma, se percibió un descontento frente a la participación, ligado al corto tiempo de funcionalidad que tiene la CEV, cuestión que se esbozó previamente, y que puede llegar a ser comprensible hasta un punto, dada la masificación de los casos y a la cantidad de información que recibe como institución, sin embargo, desde el primer momento se debió reconsiderar la temporalidad de este mecanismo, porque el hecho de que su existencia fuera tan limitada tuvo una incidencia grande en materia de participación de la población victimizada, sobre todo, teniendo en cuenta que prácticamente dos (2) años de los tres (3) años de su mandato se desarrollaron en un contexto de pandemia. De igual forma, no bastó la presencia de Casas de la Verdad en las capitales, hizo falta un despliegue territorial más amplio que llegara a las comunidades más empobrecidas y afectadas por el conflicto armado y que efectivamente no tenían posibilidad de acudir a una Casa de la Verdad por la lejanía, así como de ser representadas por falta de liderazgos comunitarios sólidos que pusieran de presente sus verdades mediante la presentación de informes.

(...) Pues la CEV ha trabajado con algunas compañeras de aquí del Cauca y ellas conocen el territorio y lo han caminado, ha habido algún acercamiento, pero el tiempo que ellas tienen es muy cortico y de igual forma ellas ya están diciendo que con ese tiempo que ya se acaba ahora en noviembre y ellas dicen que no van a alcanzar a hacer nada y tendríamos una verdad otra vez a medias porque el tiempo que le dieron a ellas no va a ser suficiente y fueron 50/60 años de guerra y apenas dieron como dos o tres añitos para la CEV que se cumplen ahora en noviembre, entonces imagínate no más el hecho y el trecho de la magnitud de lo que le estoy hablando. 50/ 60 años de guerra para 3 años de verdad eso es absolutamente nada (Entrevistada 3, 2021).

Ahora bien, pese a las críticas que se han venido realizando, como evidencian los testimonios de los entrevistados, la principal fuente de participación de la población victimizada se hizo a través de la presentación de informes, que además se complementó con la entrega de material audiovisual, en ese sentido, a continuación se mencionarán aquellos productos culturales que fueron presentados públicamente ante la CEV, que tienen relación con el Norte del Cauca y sobre los cuales hay registro.

- i. **Voces Valientes**, informe presentado el 10 de julio de 2019 por la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca (Asom) y Women's Link. Este informe analizó las graves violaciones a los DDHH cometidas contra las mujeres y niñas afrodescendientes del municipio de Buenos Aires en el Norte del Cauca (Comisión de la Verdad, 2019).
- ii. **El Árbol del Amor**, cortometraje presentado el 13 de septiembre de 2019, en el cual participaron 25 niñas, niños y jóvenes menores de edad pertenecientes a la

comunidad Nasa del Noroccidente del Cauca (municipio de Jambaló) que fueron reclutados forzosamente por actores armados (Charles, 2019).

- iii. **Gritos de mujeres negras por la libertad, la reparación y la memoria**, informe presentado el 21 de mayo de 2020, realizado por la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca (ASOM), la Asociación de Mujeres Afrodescendientes de Yolombó (ASOMUAFROYO), Mujeres Afrosantaneñas del Consejo Comunitario de la Zona Plana del municipio de Miranda (COMZOPLAN), el Palenque Mujer del Consejo Comunitario de El Barranco- Río Guengué y la Organización Women's Link Worldwide. En este documento se expone cómo las economías legales e ilegales que se impusieron a través de la violencia han ocasionado disrupciones en las actividades productivas de la población y han provocado una pérdida de sus derechos territoriales (Comisión de la Verdad, 2020).
- iv. **Tejemos la historia para sanar la memoria**, informe presentado el 28 de mayo de 2020 por el Tejido Mujer de la Cxhab Wala Kiwe Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). En este se narran las memorias de las mujeres indígenas del Norte del Cauca y la forma como el conflicto armado las ha impactado (Comisión de la Verdad, 2020).

Al filtrar el material que le ha sido presentado a la CEV en forma de informes y de material audiovisual, es muy interesante descubrir que existe un enfoque interseccional muy fuerte, que da cuenta de que las voces que han sido silenciadas de manera sistemática en el territorio no solo pertenecen a las comunidades étnicas, sino que además se trata de mujeres, niñas, niños y jóvenes pertenecientes a estas comunidades, quienes tuvieron la posibilidad de construir sus propias narrativas y presentarlas ante la CEV desmarcándose de esa retórica patriarcal y hegemónica que es la que sale con mayor facilidad a la luz. La violencia que ha sido perpetrada contra las mujeres en el marco del conflicto armado en este territorio ha sido muy marcada, y esto se evidencia en que la mayor parte de los informes presentados a la CEV por comunidades del Norte del Cauca sean de colectivos de mujeres. Se abrieron a la posibilidad de dar a conocer su realidad, su verdad y las formas en las que las ha impactado el conflicto no solo como pertenecientes a una etnia, sino como mujeres.

Finalmente, hay que tener en cuenta que hubo informes que se presentaron en el marco nacional y que relacionaron a una comunidad étnica en específico, que con seguridad metodológicamente caracterizaron la población afro o indígena y hablaron de manera generalizada de determinadas situaciones que no eran únicamente una cuestión específica de

la región nortecaucana, esto dependió un poco del enfoque que se les hubiera dado a determinados informes.

El reto que tiene ahora la CEV es reivindicar las críticas que se le hicieron en materia de participación y poner de presente en el Informe Final las narrativas de lo que sucedió en el Norte del Cauca, enfatizando en las comunidades étnicas y en las mujeres.

### *1.2.2. En la UBPD*

De acuerdo con las entrevistas realizadas, existe una coincidencia significativa en todas estas, que lleva a pensar que la institución del SIVJRNR que menor presencia ha tenido en el territorio es esta. La reacción que más llamó la atención fue la de la entrevistada 4 (2021), porque cuando se le pregunta si tiene conocimiento de la participación que han tenido las personas victimizadas en la UBPD entre risa e indignación contesta que con sinceridad no tiene conocimiento de que esta haya hecho presencia en el territorio, por lo menos en lo que respecta a las comunidades afrocolombianas y palenqueras. Ella trabaja en la instancia organizativa del Proceso de Comunidades Negras denominada Palenke Currulao y pone de manifiesto que no ha escuchado que desde este espacio se haya intentado hacer algún tipo de interlocución con esta institución. En una línea similar se refirió el Entrevistado 2 (2021) quien señaló que él ni como Consejero Mayor del ACONC en el 2020 ni como autoridad comunitaria ha tenido interlocución con esta entidad:

(...) Yo entiendo que la institucionalidad a veces coordina cosas directamente con los Consejos Comunitarios ¿no? Pero que yo conozca que se haya hecho en territorio ancestral de las comunidades negras de nosotros, que yo conozca, no se ha hecho. No sé si hayan coordinado algo de forma directa con los Consejos Comunitarios, pero no tengo ahorita tanta facilidad de averiguarlo, o sea hasta marzo del año pasado que yo fui Consejero Mayor de ACONC, nunca se me reportó sobre eso (...) me da la impresión de que eso no se ha hecho porque nuestra Guardia Cimarrona, que además es la que siempre se involucra en eso, algunos coordinadores y algunas autoridades no están prestas a apoyar en eso porque es que el conflicto del Norte del Cauca nunca se ha ido, entonces, también hay unos riesgos agarrados a eso, que las comunidades y los líderes y las autoridades también tienen sus propios riesgos y sus propios miedos (Entrevistado 2, 2021).

Así mismo, la Entrevistada 3 (2021) también señaló que desde su experiencia como lideresa de buscadoras/es,

(...) La UBPD no esta y decir que ha sido como tan efectivo, no sé, de pronto han hecho algunos ejercicios de pronto en Montes de María o en Medellín, pero pues acá en el

Cauca también ha sido muy poquita la búsqueda, de pronto porque no se hizo bien la caracterización y eso también ha sido muy mínima esa búsqueda y de hecho pues las familias están allí a la espera y de verdad que hay familias desaparecidas, hijos, papás, mamás, hermanos, entonces pues eso no ha sido posible (Entrevistada 3, 2021).

De igual forma, esta lideresa también puso de presente que ha habido una dificultad grande para que la UBPD entre a buscar en territorio indígena debido a que la institución ha condicionado la búsqueda:

(...) ellos dicen que entrarían con ejército, con la policía, pues como mecanismos de precaución y la comunidad indígena siempre les dijo, no, nosotros tenemos la Guardia, ustedes pueden llevar sus forenses, a Medicina Legal, ustedes los pueden llevar y nosotros hacemos el acompañamiento, la seguridad con la Guardia Indígena, pero pues ellos dicen que no, que tiene que ser con ejército y policía y entonces en eso tampoco hubo consenso, no hubo acuerdo y nos quedamos entonces como se dice a la espera (...) Aunque ahorita si pa que intentarlo si uno no sabe ni con quien anda ni con quien se cruza. Sino que cuando se le hizo la propuesta a ellos de que se fueran con la Guardia Indígena pues conocíamos el territorio, por lo que ellos hacen control territorial y no quisieron... entonces yo creo que eso ahorita está más difícil porque ahora se ha agudizado mucho la violencia en los territorios, entonces yo creo que sería más difícil entrar a buscar esos seres que están allá embolatados, los cuerpos. (Entrevistada 3, 2021).

Lo anterior evidencia que se han suscitado diferencias de orden territorial que han impedido que la UBPD entre a buscar a los/as desaparecidos/as que pueden estar en territorios indígenas y afrocolombianos del Cauca. Hay que tener en cuenta que según ha expresado la misma UBPD, uno de los departamentos que presenta mayor número de desapariciones es el Cauca, sin embargo, en el marco de los pactos regionales de búsqueda que se han construido hasta el momento, este departamento aún no ha sido tenido en cuenta; lo que significa que las personas que están buscando a sus familiares desaparecidos/as deben acudir a las oficinas regionales de la UBPD más cercanas, que para el suroccidente del país se encuentran en la ciudad de Cali (Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, 2021).

Con todo lo anterior, la UBPD por ahora no ha hecho una presencia significativa en la zona y no ha desplegado búsquedas allí, antes de hacerlo debe coordinar con las diversas entidades territoriales, así como con los territorios de las comunidades étnicas. Partiendo de esta realidad, la participación de las/os buscadores no se ha realizado de manera efectiva, no solo en la búsqueda como tal, sino tampoco en otros de los supuestos que plantea la normativa que regula la UBPD, como lo es el apoyo psicosocial.

## 2. Participación en el componente de Justicia

La justicia hace referencia a la posibilidad que tiene toda persona victimizada de hacer valer sus derechos, partiendo de la existencia de un recurso judicial equitativo y efectivo, en aras de que el victimario sea juzgado por un órgano jurisdiccional competente -en este caso la JEP- y permitiendo que las personas que han sido victimizadas obtengan una reparación integral por los daños ocasionados (Botero Marino y Restrepo Saldarriaga, 2005).

Botero y Restrepo (2005) plantean cinco (05) puntos fundamentales que deben tener en cuenta los Estados a la hora de cumplir con las obligaciones relacionadas con el derecho a la justicia en contextos de transición: i) el deber de sancionar a quienes hayan cometido graves violaciones de DDHH; ii) el deber del Estado de Investigar todos los asuntos relacionados con las graves violaciones a los DDHH; iii) el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo; iv) el deber de respetar en todos los juicios y las reglas del debido proceso; y v) el deber de imponer penas adecuadas a los responsables. Estos puntos en el caso de la JEP deben desarrollarse teniendo en cuenta el enfoque restaurativo de la justicia, así como los enfoques diferenciales y territoriales, donde se debe garantizar a toda costa la participación de las personas victimizadas en todos los momentos del proceso.

### 2.1. ¿Cómo se planteó?

Bajo la premisa de que las personas victimizadas son el centro del Acuerdo Final de Paz, la formulación del esquema de participación de estas en la JEP es un elemento que legitima el modelo de justicia en tiempos de transición que se ha venido adoptando, y en ese sentido, se debe velar porque a la población victimizada se le garantice su derecho a intervenir dentro de los procesos judiciales que sean competencia de la JEP, en aras de contribuir a un resarcimiento efectivo del daño ocasionado, partiendo de la base de que en esta jurisdicción no caben las reparaciones en forma económica o de restitución (estas fueron establecidas de forma independiente y no dentro del componente de justicia) (Vargas Trujillo y Galindo Villareal, 2020).

Las generalidades de los derechos y participación de la población victimizada en la JEP fueron contempladas en el artículo 12 del Acto Legislativo 01 de 2017 y en el artículo 14 de la ley estatutaria 1957 de 2019. En estos se expresa que las normas de procedimiento de la JEP deben tener en cuenta la participación de las *víctimas* en las actuaciones que se adelanten, garantizándoles como mínimo los derechos que tienen en su calidad de “intervinientes especiales”, con base en estándares nacionales e internacionales sobre garantías procesales,

sustanciales, tutela judicial efectiva y demás derechos aplicables (Acto Legislativo 01, 2017; Ley Estatutaria 1957, 2019).

Partiendo de lo expuesto en la Ley estatutaria de administración de justicia de la JEP, y teniendo en cuenta lo expuesto por la sección de apelación de la JEP en sentencia interpretativa TP-SA-SENIT 1 de 2019, la participación de las personas victimizadas debe tener en cuenta los siguientes principios: i) la población victimizada acude de manera voluntaria a la JEP; ii) los procedimientos que se adelanten ante la JEP son gratuitos; iii) debido a la masividad de personas que acuden a la JEP se determinó que como regla general dicha participación debería ser colectiva; y iv) se debe aplicar el enfoque de acción sin daño, para evitar la revictimización. A renglón seguido, la Sección de Apelación también dio a entender que las *víctimas* deberían tener mayor participación entre más avanzado estuviera el proceso (Sentencia interpretativa TP-SA-SENIT 1, 2019).

De acuerdo con lo anterior, la Sección de Apelación en la precitada sentencia instó a la Comisión de Participación -adscrita a la Secretaría Ejecutiva de la JEP– para que elaborara un manual de buenas prácticas de participación de las *víctimas*. Dicho manual fue publicado en diciembre de 2020, luego de un arduo trabajo de sistematización de las reglas de participación, en donde se evaluaron cuestiones como notificaciones, acreditaciones, representación individual y colectiva, participaciones orales y escritas, y sobre cómo iba a surtir el procedimiento de participación de la población victimizada en cada uno de los órganos que componen la JEP (Sentencia interpretativa TP-SA-SENIT 1, 2019; Comisión Colombiana de Juristas, 2020).

En este manual queda constatada que la principal vía de participación que tienen las personas victimizadas es la presentación de informes ante la JEP, derecho que se encuentra estipulado en artículo 79 de la Ley estatutaria 1957 de 2019 en su literal c, donde se expresa que los informes pueden ser presentados por “organizaciones de víctimas, indígenas, negras, raizales, palenqueras, Rrom y de DDHH, colombianas, relativos a las conductas cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, así como de fuentes judiciales o administrativas” (Ley Estatutaria 1957, 2019). La presentación de los informes por lo general va acompañada de un documento que solicita la acreditación de las personas victimizadas a la JEP.

Teniendo en cuenta el artículo 3 de la Ley 1922 de 2018, las personas que han sido victimizadas pueden acreditar su condición con el Registro Único de Víctimas (RUV); en caso de que no estén inscritas en este, deben contar al menos con prueba sumaria<sup>58</sup>, la cual puede consistir en un relato en el que se evidencien las razones por las cuales se consideran “víctimas”, especificando las circunstancias de tiempo y lugar en las que se dieron los hechos victimizantes (Ávila Alférez y Cardona Pachón, 2018a). La sala competente debe analizar de manera detallada el cumplimiento de los requisitos y verificar la documentación; si se cumplen los requisitos se profiere un Auto donde se resuelve la acreditación (Auto SRVBIT 079, 2019). Esta acreditación puede ser individual o colectiva y es la puerta de entrada para que las personas que han sido victimizadas obtengan el estatus de “intervinientes especiales” y puedan participar de manera efectiva en la JEP.

El procedimiento dialógico, establecido en la Ley de procedimiento de la JEP, recalca la importancia que tiene la participación de las víctimas en los casos de reconocimiento de la verdad, entendiendo que este debe ser deliberativo y preferente al procedimiento adversarial (Ley 1922, 2018, art. 1). Tanto el procedimiento dialógico como la construcción dialógica constituyen un espacio para que las personas victimizadas de manera directa o a través de sus representantes legales puedan expresar sus puntos de vista, observaciones o experiencias de vida ante los magistrados; de igual forma, se ha permitido que expresen la opinión que tienen sobre la verdad aportada por los comparecientes, lo que se traduce en que se ha creado el espacio para que las partes interactúen de forma restaurativa (Vargas Trujillo y Galindo Villareal, 2020).

En este sentido, las personas victimizadas que han sido acreditadas por la JEP pueden participar de las siguientes formas: i) siendo informadas sobre los avances que van teniendo las investigaciones ii) en el desarrollo de las audiencias; iii) siendo escuchadas en los supuestos de priorización y selección; v) aportando pruebas, vi) participando en las diligencias de versiones voluntarias de los comparecientes vii) presentando observaciones a las versiones voluntarias; viii) asistiendo a la audiencia pública de reconocimiento; ix) presentando observaciones sobre la resolución de conclusiones; x) interponiendo recursos contra las

---

<sup>58</sup> La Corte Constitucional en Sentencia C-523 de 2009, citando a Antonio Rocha Alvira, señala que “la prueba sumaria es aquella que aún no ha sido controvertida por aquel a quien puede perjudicar, y de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la prueba sumaria es plena prueba, lo que quiere decir que debe reunir las mismas condiciones de fondo de cualquier prueba, que sea pertinente o conducente, esto es, que sea la adecuada para demostrar un hecho o un acto jurídico concretos”.

decisiones judiciales que se profieran; xi) participando en la construcción de los TOAR y presentando observaciones sobre los mismos; xii) en las audiencias públicas para la decisión sobre amnistías e indultos; xiii) en los procesos dialógicos de aporte a la verdad; xiv) en las audiencias de seguimiento al régimen de condicionalidad y de aporte temprano a la verdad; xv) en los procesos adversariales que se lleven a cabo; xvi) en las acciones de revisión; xvii) en el incidente de incumplimiento; xviii) en la solicitud y seguimiento de medidas cautelares; entre otras (Ley 1922, 2018; Jurisdicción Especial para la Paz, s.f.c; Jurisdicción Especial para la Paz y OEA-MAPP, 2020).

Un punto que es relevante y que vale la pena traer a colación es la forma en la que se planteó debería ser la participación de las personas victimizadas en procedimientos escritos y orales. El manual para la participación de las *víctimas* ante la JEP, ha planteado una ruta para la presentación de escritos y otra para las diligencias orales, donde ambas propenden porque mediante el agotamiento de una serie de etapas se realice un acompañamiento previo, durante y después, tanto de la presentación de los escritos como de las diligencias orales, con el fin de que las personas victimizadas se sientan soportadas y apoyadas frente a los temas que se van a tratar en estos escenarios (JEP y OEA-MAPP, 2020).

Finalmente, hay que tener en cuenta la forma en la que se estableció la participación de los pueblos indígenas, rrom y negros (afrocolombianos, raizales y palenqueros), su acreditación es *sui generis* ya que se hace colectivamente como Pueblos Étnicos. Para esto es importante hacer una caracterización de estas comunidades con un enfoque de diálogo intercultural, que debe tener una plena interlocución entre las justicias propias de estos pueblos y la JEP y donde también es necesario identificar a las autoridades que los/as representan y que puedan dar cuenta de forma loable de los impactos diferenciales que han tenido como comunidad en razón del conflicto armado. Todo lo anterior guarda estrecha relación con lo que se planteó en el Capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz y es monitoreado por la Comisión étnica de la JEP<sup>59</sup>.

## 2.2. ¿Cómo se está llevando a cabo en el territorio Nortecaucano?

La JEP ha sido el mecanismo que más críticas ha tenido por parte de sectores que se oponen a que exista un tratamiento penal especial para los comparecientes. Esta realidad ha complejizado el trabajo de la jurisdicción, teniendo en cuenta que en su génesis tuvo que gastar

---

<sup>59</sup> La Comisión Étnica de la JEP es una instancia permanente, que se encarga de promover la efectiva implementación del enfoque étnico- racial en el componente de justicia del SIVJRNR y la efectividad de la coordinación entre la JEP y las diferentes justicias étnicas (Jurisdicción Especial para la Paz, 2019).



parte de su energía y concentración en defenderse de acusaciones y de objeciones, cuestiones que además dilataron la expedición de la Ley de Administración de Justicia de esta jurisdicción, que luego de innumerables traspiés logró salir a la luz en el 2019, cuando la JEP prácticamente empezó a funcionar en el 2017. Lo anterior, lo vivieron los territorios como una afrenta a la paz:

(...) Mire que la JEP, la JEP fue la primera que llegó a Caldon, o sea, yo me encargué de llevar un señor, él es amigo mío que trabaja allá en Popayán, se llama Álvaro. Yo creo que él lleva por ahí entre unos dos y tres años, él si ha estado conmigo allá (...) en las reuniones de víctimas y en el campamento, yo lo llevé allá, o sea él está muy pendiente. Cuando llegó el gobierno, este nuevo gobierno de Iván Duque, ¿se acuerda que había seis objeciones para la JEP? Yo denuncié eso (...) Yo sostengo que si se acaba la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, se acaba el proceso de paz. Y no puede acabarse (Entrevistado 1, 2019).

Hay que tener en cuenta que en el 2019 no se tenía mayor conocimiento de cómo iba a funcionar el proceso de acreditación de las personas que fueron victimizadas en esta zona, incluso, el entrevistado 1 (2019) en ningún momento hizo alusión al procedimiento que debían seguir allí dentro, la concentración estaba en lo preliminar, de hecho, habló muy someramente de que la JEP había hecho presencia en la zona, solo mencionó que se encontraban en contacto constante con un funcionario de la JEP y que además contaban con el apoyo de PAXColombia, una ONG holandesa. Hay que destacar que pese a que en el 2019 no había claridad sobre la forma en que iban a participar en la JEP, siguiendo el caso de Caldon, el 12 de noviembre del 2020 la comunidad entrega un informe a la JEP que da cuenta de los ataques y tomas guerrilleras a las que fueron sometidos/as de forma sistemática, especialmente las comunidades étnicas y campesinas (PAXColombia, 2020).

De todas formas, para la época en la que se habló con el Entrevistado 1 (2019), la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP ya había abierto el caso 05, aplicando el enfoque territorial como una estrategia para comprender mejor las dinámicas regionales que tuvo el conflicto armado en ciertas zonas, esta apertura sucede el 08 de noviembre de 2018, mediante Auto SRVR 078 de 2018, en este:

Se avoca conocimiento de la situación territorial en la región del Norte del Cauca, en los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío y Caldon; e incluye hechos victimizantes presuntamente cometidos por miembros de las FARC-EP y miembros de la Fuerza Pública, entre el 01 de enero de 1993 y el 01 de diciembre de 2016.

En dicho Auto, la JEP señala que este territorio fue priorizado y focalizado teniendo en cuenta la forma en la que se concentraron los actores armados y las comunidades vulneradas (étnicas y campesinas), al ser el epicentro de las acciones del bloque occidental o bloque Alfonso Cano de las FARC-EP, donde se aprovecharon de las características geoestratégicas del territorio para ocultarse de la Fuerza Pública, lo cual afectó de forma directa a la población, en especial a los pueblos indígenas y afrocolombianos y a las comunidades campesinas. Esta apertura se realiza con base en informes entregados por la Fiscalía General de la Nación, la Organización Indígena de Colombia y el Centro Nacional de Memoria Histórica (Auto SRVR 078/18, 2018).

Con el fin de priorizar los casos, la Sala de Reconocimiento de la Verdad construyó y agrupó diferentes categorías y universos de hechos que cumplieran con las competencias de la JEP: material, temporal y personal. Con relación al aspecto material se tuvieron en cuenta los sujetos pasivos, los sujetos activos, los factores geoestratégicos y económicos y la escala de comisión de hechos victimizantes. Sobre el aspecto temporal se tomaron los hechos violentos cometidos desde 1993, año en el que las FARC-EP se consolidó territorial y operacionalmente en la zona. Y sobre el aspecto personal se tuvo en cuenta que en la zona se concentran todos los actores del conflicto, lo que ha repercutido masivamente en las victimizaciones que han tenido los habitantes del área (Auto SRVR 078/18, 2018).

En un segundo momento, que corresponde a una etapa de concentración, la Sala de Reconocimiento recolectó y analizó la situación territorial de la región del Norte del Cauca, en esta se puso de presente el enfoque territorial étnico-racial, diferencial y de género de manera articulada, de igual forma se pusieron de presente algunas conductas que fueron especialmente graves en el territorio, como: i) el desplazamiento forzado; ii) las conductas que afectan la libertad; iii) la violencia sexual; iv) las muertes producto del conflicto; v) el confinamiento y la siembra de minas antipersonales; vi) el reclutamiento; vii) la desaparición; viii) los ataques a la población civil y amenazas; y ix) los atentados al medio ambiente (Auto SRVR 078/18, 2018).

Con posterioridad, se desarrolló una priorización estrictamente dicha, al contar con información suficiente que permitió establecer que existen hechos que cumplen con los factores de competencia que se relacionaron previamente. Lo anterior, permitió generar una estrategia encaminada a obtener verdad plena, detallada y exhaustiva, que satisfará los derechos de la población victimizada y de la sociedad civil (Auto SRVR 078/18, 2018).

Con todo esto, se decretó la etapa de reconocimiento de la verdad respecto de la situación en el Norte del Cauca y se procedió a acopiar información y a llamar a las versiones voluntarias a los comparecientes, estas se continúan realizando hoy en día. Con posterioridad, la JEP amplió el territorio abarcado en el caso 05, incluyendo 5 municipios del Valle del Cauca y a los municipios de Jambaló, Miranda, Padilla y Puerto Tejada del Norte del Cauca. Cabe resaltar que la JEP no incluyó dos municipios que hacen parte de esta subregión: Villa Rica y Guachené y no existe algún documento que explique por qué decidió dejarlos por fuera. Dicha adición se realizó mediante Auto SRV 032 de 2019, de ahí en adelante el caso paso a llamarse “situación territorial en la región del Norte del Cauca y el Sur del Valle del Cauca” (Jurisdicción Especial para la Paz, 2019a; Auto SRVR 032/19, 2019).

Ahora bien, revisando las relatorías de la JEP relacionadas con el Caso 05 se tiene que son muy pocos los pronunciamientos publicados de manera oficial por esta jurisdicción. Así las cosas, los últimos Autos proferidos en el marco de este caso versan sobre tres temas: i) la exclusión de un compareciente por incumplimiento del régimen de condicionalidad (Auto SRVR 194/19, 2019); ii) la acreditación como víctimas colectivas que se hizo del Consejo Regional Indígena del Cauca y de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Auto SRVR 02/20, 2020); y iii) la acreditación individual de un soldado profesional del Ejército (Auto SRVR 011/21, 2021). Hasta el momento, la JEP no ha publicado los Autos en los que realizó el reconocimiento colectivo de las comunidades afrocolombianas ni de las comunidades campesinas. Sin embargo, de las entrevistas que se realizaron, especialmente con el Entrevistado 5 (2021) se da cuenta de que dicha acreditación si se realizó porque actualmente, al menos las comunidades afro si están participando como intervinientes en la JEP<sup>60</sup>.

Revisando la información publicada por la JEP en su página web, sobre este macrocaso, queda demostrado que efectivamente la relatoría está incompleta, ya que “se han acreditado 83 sujetos colectivos que reúnen a 34 pueblos indígenas, 47 consejos comunitarios y 2 organizaciones de víctimas. Estas organizaciones reúnen a más de 180.000 víctimas. Entre los sujetos colectivos acreditados se encuentra el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y la Asociación de Consejos Comunitarios del norte del Cauca (ACONC)” (Jurisdicción Especial para la Paz, s.f.d).

---

<sup>60</sup> El 5 de marzo de 2021, con el apoyo de la Corporación Afrocolombiana Hileros y la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), se hizo la notificación de 41 consejos comunitarios del Norte del Cauca, 9 del Sur del Valle y ASOM. Ello se realizó mediante puntos de conectividad en los municipios de Santander de Quilichao, Florida, Buenos Aires, Miranda, Guachené, Villarica y Suárez (Jurisdicción Especial para la Paz, 2021).

Con todo lo anterior, la pregunta es cómo ha sido la participación que han tenido las personas victimizadas en el marco de este caso, para lo cual, se tendrán en cuenta las entrevistas que les fueron realizadas a los liderazgos étnicos y campesinos de la zona. Dentro de estas entrevistas se trajeron a colación temas como la interlocución que ha habido entre la justicia ancestral y la JEP, las dificultades que han tenido a la hora de participar en la JEP, la forma en la que han sido las intervenciones en las audiencias, entre otras.

Para comenzar a hablar de participación es importante traer a colación lo referente a la interlocución que ha habido entre la justicia ancestral tanto de los pueblos afrocolombianos como de los pueblos indígenas, la cual quedó consagrada en el capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz<sup>61</sup>, sobre esta, uno de los entrevistados menciona:

(...) no es ajeno al punto de justicia, de justicia transicional y en eso se logró que quedara una coordinación – bueno, en el papel quedó- que se debía coordinar con los diferentes sistemas de justicia étnica y ancestral, en el caso del norte del cauca, pues nosotros tenemos un sistema de justicia propia, ancestral como comunidades negras, las comunidades indígenas también tienen, y en el caso de nosotros pues tenemos el tribunal de ética y justicia ancestral regional, donde está adscrito la guardia cimarrona que también quedo mencionada en los acuerdos de paz (...) nuestro sistema de justicia ancestral en cabeza o liderado por el tribunal de ética y justicia ancestral de ACONC ha logrado resolver algunas situaciones en los territorios, pero también ha avanzado en la sistematización de las violaciones de derechos humanos y cómo las autoridades propias (autoridades étnicas) de los consejo comunitarios y de las comunidades negras de esa región han hecho el ejercicio con autonomía y han administrado justicia en los territorios, incluso, lograron resolver algunas situaciones en las comunidades que ni la Fiscalía ni la justicia occidental han logrado resolver, quería decirte eso en términos de nuestra justicia propia que para nosotros fue un eslabón importante al acceso de la justicia como comunidades (Entrevistado 2, 2021).

Si bien dicha coordinación interjusticia quedó consagrada tanto en el Acuerdo como en la normativa que reglamenta la JEP, el Entrevistado 5 (2021) señala que en algo se ha avanzado en esta materia, por ahora se están haciendo protocolos de relacionamiento, que han consistido en talleres dirigidos a la JEP que han desarrollado como comunidades étnicas, con el objetivo de ilustrarle a la jurisdicción cómo es el funcionamiento de la justicia ancestral en el

---

<sup>61</sup> “El Capítulo Étnico es el resultado del trabajo mancomunado de los pueblos étnicos por el reconocimiento en la mesa de conversaciones de las victimizaciones diferenciadas que padecieron por parte de los grupos armados, tanto legales como ilegales, en el marco del conflicto armado colombiano. Este esfuerzo marca un precedente en los pactos de paz en el país y en el mundo: es el único que ha exigido que la implementación de todo lo pactado cuente con la participación de las poblaciones étnicas y que se garantice el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, teniendo en cuenta sus intereses y cosmovisiones” (Bonilla Valencia, 2019)

Norte del Cauca. Han planteado ese diálogo interjusticia no solo desde la perspectiva de participación como población victimizada, sino también han podido construir algunos estaños con relación a los comparecientes que tienen pertenencia étnica, con el fin de que en el marco de las versiones voluntarias, como en el cumplimiento de la sentencia, se les garantice el enfoque étnico. Dicho acercamiento aún está siendo revisado de manera conjunta entre los pueblos étnicos y la Comisión Étnica de la JEP.

Adicionalmente, la puerta de entrada a la JEP que ha sido la presentación de informes ha sido bastante utilizada, las comunidades han tenido la posibilidad de realizar y presentar informes ante la jurisdicción; algunos de estos han sido entregados de manera pública, mediante actos públicos que respetan y tienen en cuenta sus cosmovisiones y sus culturas. Dentro de estos se encuentran algunos presentados por la mujeres afrocolombianas del Norte del Cauca, por la población campesina e indígena victimizada en Caldono, por la población LGBTIQ que fue victimizadas en el Norte del Cauca, entre otros (Jurisdicción Especial para la Paz, s.f.d).

Otro punto importante es la forma en la que han sido representadas estas comunidades en el marco de la JEP, porque de ahí se desprende la forma en la que van a empezar a intervenir en la jurisdicción:

(...) Con la JEP, hemos tenido una coordinación que ha llevado a tener, primero, un representante jurídico ante la jurisdicción, se ha logrado en el caso del norte del cauca (...) entrar en el caso 05 con la jurisdicción y nuestro representante jurídico es Hileros, que es la única corporación afrodescendiente que después de concursar quedó como encargada de hacer representación (...), en el caso nuestro en el norte del cauca pues nosotros como pueblo negro le dimos el poder a Hileros para que nos represente y eso ha garantizado la participación de las autoridades y sus delegados en varias audiencias donde se han presentado los comparecientes que han hecho parte de afectaciones por parte de las FARC al norte del cauca (Entrevistado 2, 2021).

Este tema de la representación ha tenido algunos puntos críticos derivados de la falta de recursos por parte de las organizaciones que representan a la población victimizada y que son financiadas por el Estado, lo que se ve reflejado en una sobrecarga de trabajo que tienen uno o dos abogados que está llevando un expediente sumamente amplio, donde hay cientos de personas victimizadas representadas, lo que dificulta poder darles respuesta a todas; en ese sentido, si bien se presta un apoyo grande, este se podría intensificar para poder trabajar con mayor calidad por los derechos de las personas que han sido victimizadas, si los recursos cubrieran mayor apoyo jurídico. Adicionalmente, como bien lo mencionó el Entrevistado 5

(2021), quien trabaja en una entidad que representa población afrocolombiana que ha sido victimizada en la JEP, con la pandemia se tuvieron que replantear las formas de llevar a cabo algunas diligencias, él, en su rol de representante siempre ha sido partidario de que se abran los espacios para que las comunidades puedan participar directamente. Señala que la virtualidad ayudó en ese aspecto, pero que antes de la pandemia se habían presentado algunas propuestas como por ejemplo la implementación de salas espejo en sitios más próximos a donde estaban las personas victimizadas, cosa que se logró realizar muy superficialmente.

La propuesta de las salas espejo fue importante, ya que por la forma en la que se estructuró serían las versiones voluntarias -por poner un ejemplo- se dificultaba la participación de la población victimizada, en el entendido de que tenían que dirigirse a espacios que eran cercanos a los comparecientes y no a ellas, lo que implicaba desplazamientos los cuales era difícil poder solventar y que llevaban a que no hubiera mucha participación directa de las personas victimizadas, sino apenas de sus representantes legales. En el concepto del entrevistado 5 (2021) si bien el rol del representante es importante, esto no debe invalidar el conocimiento de primera mano que de manera voluntaria quiere tener la población victimizada que ha sido acreditada en ese caso, no hay que denegarla sino trabajar porque el espacio no sea revictimizante, sino todo lo contrario, pueda darse un diálogo restaurativo en el que efectivamente las comunidades victimizadas puedan hacer presencia.

Teniendo en cuenta que este caso va en la etapa en la que se están realizando las versiones voluntarias de los comparecientes y donde las personas victimizadas están trabajando en las objeciones a dichas versiones, es crucial entender cuál ha sido la percepción que han tenido las personas que han participado en estos espacios de lo que sucede en estos. Por un lado, el Entrevistado 2 (2021) señala su percepción de estas diligencias de acuerdo a su identidad como autoridad de la comunidad afrocolombiana:

(...) En las audiencias en las que yo he estado, pero también lo que he escuchado de las otras autoridades que han asistido y de los delegados que he mandado, hay una queja generalizada que es, bueno, primero la JEP si está garantizando lo logístico y pues las condiciones básicas de conectividad porque se están haciendo virtuales, entonces por el lado de lo logístico yo no creo que haya que quejarse porque siento que ha funcionado, pero la mayoría de los comparecientes no reconocen hechos que han victimizado a las comunidades negras del norte del cauca, es decir, casi siempre hablan de cosas en las que han participado, solo para territorios de comunidades indígenas y de comunidades mestizas o de campesinos, en ese orden de ideas yo creo que eso no

ha ayudado a avanzar en que se conozca las versiones de lo que sucedió en los territorios de las comunidades negras (Entrevistado 2, 2021)

Por su parte, la Entrevistada 3 (2021) quien es lideresa indígena Nasa tiene un pronunciamiento muy similar en lo que respecta al sin sabor que han generado las versiones voluntarias para las comunidades indígenas:

(...) Hay unas versiones libres y eso lo maneja acá la organización, pero no es mucho lo que garantice porque ellos no quieren hacerse responsables, cuando uno les pregunta por tal hecho o por tal persona ellos dicen ay, no, es que al que le tocaba o el que estaba al mando pues ya se murió, lo mataron, o no lo han capturado, entonces los que están allí respondiendo no están diciendo absolutamente nada de lo que nosotros queremos saber, no están colaborando. De hecho nosotros ya le dijimos a la autoridad, a la changualadi que no están haciendo el reconocimiento de esas verdades (...) y que hay que buscar entonces el mecanismo para que ellos la digan. Y muchas veces cuando ellos están hablando pues la persona que fue testigo en el momento no está para decir, si aquí paso esto o esto, entonces ahí no hemos podido encontrar esa verdad, y esa verdad, mientras nosotros no encontremos, yo siempre lo digo, así: “esas verdades detrás de un espejo” y no se haga cara a cara con la gente, así no va a pasar nada, porque siempre se hace en esos audiovisuales que lo colocan a uno y que los colocan a ellos, en esa pantalla, allí no va haber ninguna verdad, porque ellos van a decir lo que ellos quieren (Entrevistada 3, 2021).

La Entrevistada 3 (2021) también menciona que las diligencias han estado a cargo de las autoridades ancestrales indígenas:

(...) la autoridad, nuestros abogados, los magistrados indígenas aquí en el territorio, las familias, bueno, ellos siempre han tratado de que este la representatividad allí, pero como te digo, cuando les tocan cierto puntos, ciertos temas ellos dicen “ah eso yo no lo sé, yo no lo tuve, fue en el año tal, pero ese alias se murió, o en otras no se sabe, está desaparecido”, entonces si ni ellos saben dónde está la persona pues imagínese nosotros menos vamos a saber dónde anda (Entrevistada 3, 2021).

Si bien esto no impide en nada la participación, si es una cuestión que desalienta a las comunidades que están participando en las diligencias y que al encontrarse con evasivas, como fue el caso de la Entrevistada 3 (2021), deciden apartarse para evitar sentirse engañadas y revictimizadas:

(...) yo me cansé de buscar, de mirar y no, y saber que eso no pasaba nada, como le digo, eso para mí era una decepción. Yo veía por las víctimas de desaparición que ellas preguntaban y uno les contaba y eso era lastimarles los sentimientos también a los compañeritos y uno salía más decepcionado, entonces nosotros no volvimos. Esta semana que nos están volviendo a llamar otra vez para que lleváramos, porque dicen - yo hace como dos meses no voy- que se están tocando algunos temas, como el Cauca

es tan grande, entonces ha hablado del Norte, del Sur, del Centro, oriente y nosotros estamos por la cordillera occidental que fue donde ocurrieron los hechos, entre Cauca y Valle, entonces esos temas como que apenas los van a volver a tocar estas semanas (Entrevistada 3, 2021).

Aquí es importante la participación que como pueblos, comunidades o como personas acreditadas individualmente, van a tener en las objeciones a las versiones voluntarias de los comparecientes, donde se les debe poner de presente a quienes comparecen a versión, lo que están omitiendo y lo que deben contar y aclarar. Es decir, no hay una validación por parte de las personas victimizadas de las versiones de los comparecientes, sienten que no se está diciendo la verdad en estos espacios.

Respecto de las versiones voluntarias, tanto la Entrevistada 4 (2021) como el Entrevistado 5 (2021) se pronunciaron y señalaron que han sido un mecanismo complejo, que para ellos como representantes de la población afro victimizada ante la JEP ha implicado un reto, porque cada persona igual tiene su hecho victimizante muy presente y cuando en las versiones no se reconoce nada, es mucho más el trabajo tanto jurídico como de socialización con la población que se tiene que hacer. A pesar de esto, ambos mencionan también que el enfoque restaurativo de la JEP se ha aplicado y que se va trabajando dentro de lo que va avanzando el caso, como son macrocasos todo se demora, y recalcan que hay que tener en cuenta que hasta ahora se está en una primera fase de diligencias, hasta el momento ningún caso de los que se encuentran abiertos en la JEP ha sacado resolución de conclusiones.

Así mismo, cuando se les preguntó sobre la participación que habían tenido en los TOAR, el Entrevistado 2 (2020) mencionó que no tenía un conocimiento directo sobre la forma en la que estos se estaban trabajando; la entrevistada 3 (2021) tampoco tenía una idea clara de lo que son los TOAR, sin embargo la Entrevistada 4 (2021) y el Entrevistado 5 (2021) mencionaron que desde su rol como representantes legales de las personas victimizadas en esta jurisdicción, si bien desde el 2020 la JEP ha venido trabajando en unos pilotos en algunas partes de Colombia, en el Norte del Cauca esto aún no se ha hecho, por ahora se ha avanzado en la consolidación de un diálogo interjusticia-intercultural que precisamente busca ser un abrebocas que sirva de sustento para el momento en el que se empiecen a construir los TOAR y se tengan más luces sobre cómo serían las sanciones propias, que igual siguen dependiendo del aporte que realicen los comparecientes a la verdad. Mencionan que el avance sobre este punto no ha sido grande porque la atención está puesta en las versiones de los comparecientes



y en las objeciones que han venido proyectando como representantes legales de su comunidad.

Un punto central que se ha tenido en cuenta en la JEP y que tiene relación directa con las garantías de no repetición, son las medidas cautelares. Como bien han expresado el Entrevistado 2 (2021) y la Entrevistada 3 (2021) los asesinatos de líderes/as de las comunidades no están relacionados directamente con el hecho de que estas personas estén participando en los mecanismos de justicia en tiempos de transición, sino que tienen relación con el incumplimiento que se ha dado de otros puntos del Acuerdo Final de Paz. El hecho de que haya una coincidencia tiene que ver con que los asesinatos se han perpetrado en contra los liderazgos comunitarios, de las personas que representan a sus comunidades y es muy común que hagan presencia en todos los espacios relaciones con el proceso de paz. Lo anterior, aunado al creciente número de excombatientes asesinados, ha significado un repunte en la violencia, por lo que las comunidades han pedido medidas cautelares a la JEP:

Nosotros también hemos tenido incidencias de ellos para avanzar en unas medidas cautelares, desafortunadamente eso no se ha hecho efectivo, pero se sigue insistiendo en que se concedan las medidas cautelares para seguir participando en la audiencias y en todo el proceso, por toda la crisis humanitaria que se vive en el departamento del Cauca y el Norte del Cauca. Entonces, eso en términos de participación con la justicia transicional (Entrevistada 3, 2021).

Hay que señalar que a nivel nacional la JEP si lleva un proceso de medidas cautelares sobre el asesinato sistemático de excombatientes.

Finalmente, es pertinente hacer una acotación sobre las comunidades campesinas, porque en lo que se pudo evidenciar, el tratamiento que se les ha venido dando sigue siendo muy similar al que se asumió con la Ley de víctimas y restitución de tierras. No es claro, hasta el momento si la JEP va a establecer con ellas/os directamente diálogos específicos que den cuenta de sus victimizaciones, realmente esto dependerá de la forma en la que sean presentados los informes antes la JEP por parte de esta comunidad, que hasta el momento no ha sonado tanto, como si lo han hecho las comunidades étnicas.

### **3. Participación en la Reparación Integral**

La Reparación Integral implica que toda violación de DDHH da lugar a que tanto las personas victimizadas de manera directa, como sus familiares obtengan una reparación, la cual implica por un lado el deber de reparar del Estado y por otro, el derecho de dirigirse en contra

del autor del hecho. La reparación debe ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Aun cuando de manera general la reparación se asimila fundamentalmente con la obtención de una indemnización, cuando se está dentro de procesos de justicia en tiempos de transición, el concepto puede ser un poco más amplio, siempre propendiendo por la restitución total del derecho, procurando el restablecimiento de las condiciones en las que se encontraban la persona victimizada o sus familiares antes de que fueran violentados/as; así como también, entendiendo la reparación como consecuencia del daño, ya sea a nivel simbólico o indemnizatorio (Botero Marino y Restrepo Saldarriaga, 2005).

En este punto, hay que tener en cuenta que para el caso colombiano con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, ya se contemplaron y se han ido implementando una serie de medidas de reparación integral (ver capítulo 2, numeral 2), las cuales deben continuar siendo aplicadas de manera conjunta con las nuevas medidas que se establecieron en el Acuerdo Final de Paz. Así las cosas, en este punto se hará referencia específica a la participación que han tenido las personas victimizadas en materia de Reparación Integral, partiendo de lo planteado en el Acuerdo Final de Paz.

### 3.1. ¿Cómo se planteó?

Como se estableció en el capítulo 3, numeral 3.4 de la presente investigación, las medidas de Reparación Integral que se incluyeron dentro del Acuerdo Final fueron variopintas, dentro de las que se destacan: los actos de reconocimiento público, los actos de contribución a los daños causados, los planes y programas de reforma y desarrollo rural con enfoque reparador, las reparaciones colectivas, la rehabilitación psicosocial, los procesos colectivos de retorno, la restitución de tierras, la formulación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), entre otras; desde el principio se dejó claro que las medidas precitadas deberían ser articuladas con las medidas de reparación integral contemplada en la Ley 1448 de 2011 (Comisión Colombiana de Juristas, 2017).

Hay que resaltar que hasta el momento, en la normativa que ha reglamentado los Acuerdos de paz, el universo de medidas de reparación integral ha sido tenido en cuenta de manera muy parcial, se le dio preponderancia a la formulación de los PDET (Decreto Ley 893 de 2017), cuestión que se traerá a colación más adelante en este punto.

En términos de participación, con el Acuerdo Final de Paz se puso de presente la necesidad que había de adecuar y fortalecer la participación en las medidas de reparación por parte de las personas victimizadas. Se plantea que esto debe hacerse mediante una serie de

ajustes y precisiones tanto normativas como administrativas/institucionales, encaminadas a facilitar una verdadera garantía de los elementos reparativos que cobijarían a quienes fueron violentados/as. Dichos ajustes y dichas prerrogativas deben plantearse y desarrollarse teniendo en cuenta la población que ha sido victimizada, ya que estas personas están en su derecho de aportar ideas respecto del diseño, la implementación y el seguimiento que se le hará a dichas medidas (Comisión Colombiana de Juristas, 2017).

Hay que tener presente que las reparaciones se crearon para ser aplicadas de forma transversal a la CEV, a la UBPD y a la JEP. En ese sentido, la participación se realizará de manera coordinada con cada uno de estos mecanismos, donde se espera se respeten los enfoques diferenciales y territoriales, de ahí que la expectativa está puesta en que los planes de reparación logren desarrollarse en los territorios de la mano de las comunidades étnicas y campesinas que fueron y han sido victimizadas en el marco del conflicto, y que hoy por hoy siguen a la espera de una Reparación Integral (Comisión Colombiana de Juristas, 2017).

Así las cosas, los planes de reparación que se formulen deben partir de lo que estas personas piensan y opinan, teniendo en cuenta las expectativas que tienen en materia de reparación. Apuntarle a esto puede significar que los planes de reparación sean eficaces y no se conviertan en promesas incumplidas y en fuente de revictimización, como ha venido sucediendo con las Reparaciones Integrales que se han hecho en el marco de la ley de víctimas y restitución de tierras (Comisión Colombiana de Juristas, 2017).

### 3.2. ¿Cómo se está llevando a cabo en el territorio Nortecaucano?

Como se pudo observar en el apartado anterior, no hay una normativa específica que dé cuenta de cómo debe ser la participación de la población victimizada en las medidas de Reparación Integral, esta no está consagrada directamente en alguna norma reglamentaria, simplemente es mencionada de manera muy sucinta en el Acuerdo de Paz; bajo el entendido de que a las personas victimizadas se les debe garantizar su participación en el diseño, implementación y seguimiento de estas medidas (Gobierno Nacional y FARC-EP, 2016), sin embargo, no se especifica de qué forma, lo cual vuelve volátiles estos escenarios porque van a depender de cómo la institucionalidad garantiza los espacios y mediante qué entidad piensa hacerlo.

Dicha complejidad que tienen las medidas de Reparación Integral guarda estrecha relación con lo que han planteado las personas victimizadas entrevistadas en la presente

investigación. El problema viene incluso desde antes de que se firmara el Acuerdo Final, lo cual también causa confusión porque no es claro cómo se está articulando lo que existía antes del Acuerdo de Paz con lo que se estableció en este. De hecho, durante el desarrollo de la investigación, se comprobó que existe una desarticulación entre ambos universos de reparación. En el marco del Simposio Nacional para la Protección y Defensa de los Derechos de las Víctimas del Conflicto Armado organizado por la Personería de Bogotá D.C., realizado el 26 de abril de 2021 se le preguntó a las Subdirectora de Reparación individual de la UARIV (Alexandra Borja) lo siguiente: “¿Cómo se están articulando las medidas de reparación integral que se establecieron en la ley 1448 de 2011 con las formas de reparación integral que fueron establecidas en el Acuerdo de Paz?”, a lo que ella respondió:

(...) No, mira la verdad no sabría cómo darte una respuesta a esa pregunta porque si ustedes revisan la ley ahí están los hechos, hablamos de topes, estamos revisando y nosotros siempre tratamos de estar integrando todo lo que involucra a la víctimas ¿no? Entonces en esos acuerdos de paz lo que se estableció fue la garantía a todas las medidas de reparación, que es lo que estamos haciendo, que es lo que venimos haciendo, ya sea de la ruta prioritaria o de la ruta general, pero nosotros estamos también avanzando en esa reparación psicosocial como se los mencioné iniciando la charla. Tenemos las cinco medidas, están también aquellas medidas en las que acompañamos a las víctimas a través del equipo psicosocial para esa reconstrucción de su proyecto, también tenemos el equipo de retornos y reubicaciones en el cual cuando las comunidades quieran retornar a sus lugares allí estamos con ellos acompañándolos, vigilando que puedan reestablecerse nuevamente en el territorio. Es que nuestro propósito definitivamente es garantizar precisamente que todas las medidas de reparación se den no solamente la indemnización, es la reconstrucción total de su proyecto de vida, es tratar de sanar esas heridas a través de estas actividades de conmemoración logrando que haya un reconocimiento por parte de los victimarios. Nuestro universo corresponde a las personas inscritas en el RUV. Nosotros estamos cumpliendo no solo económicamente sino también en todos los acompañamientos que les mencioné (Borja, 2021).

Dicha respuesta lo que deja entrever es que no hay una articulación entre lo que hace la UARIV y lo que se planteó en el Acuerdo de Paz, incluso, la respuesta lleva a pensar que la interlocución ha sido tan mínima que los mismos funcionarios de la UARIV desconocen qué fue lo que se pactó en términos de reparación en el Acuerdo de Paz, y es grave, porque si las personas victimizadas tienen confusiones al respecto, quienes deberían tener respuestas más claras para poder darles a ellas, desconocen el tema y solo pueden dar cuenta de su trabajo como entidades, pero no de un trabajo interinstitucional en la materia, que incluya también lo acordado en la Habana.

Dicha confusión entre ambos sistemas de Reparación Integral se vio muy marcada cuando se habló con la Entrevistada 3 (2021), quien por un lado tiene un conocimiento de lo que es el SIVJRN, pero cuando se le preguntó por la Reparación trajo a colación una cuestión relacionada con indemnizaciones administrativas que tienen que ver con la UARIV, que fue lo que se estableció con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras:

(...) Ahora están pidiendo tener 70, 80, 90 o estar enfermo como se dice rápidamente, pero si eres joven y no tiene dolencia y eso frente al conflicto armado pues tampoco te van a reparar porque si una persona presenta por ejemplo, cuando fueron los bombardeos y les dañaron los oídos, las vistas, tuvieron algún tema cardio y todos ellos presentaron certificados médicos, certificados por la salud porque así lo piden y ni así, entonces por eso yo te digo, eso es una norma, pero quedate allí esperando y ni se sabe hasta cuando, entonces ahorita algunos que han podido han tenido que meter abogado y el abogado no lo va a hacer gratis, porque la unidad de víctimas dice que no se necesita tener abogado, pero sin embargo ellos tampoco ayudan a sacar el proceso adelante, entonces hay muchos que han optado por contratar abogado y el abogado se ha encargado de que lo saca lo saca, entonces mira cómo es aprovechamiento de los dolores de las víctimas también que los tratan de esa forma. Entonces no, es que Colombia es otros cuento (Entrevistada 3, 2021).

La confusión es evidente y puede ocasionar falsas expectativas, acudir a las entidades incorrectas y más revictimización, por eso es importante que se configure una pedagogía específica sobre Reparación con el fin de explicarle a las comunidades las formas de Reparación Integral que están vigentes hoy en día y las diferencias y coincidencias que tienen entre sí. Ahora bien, En los eventos en los que las personas tienen claridad sobre la Reparación acordada en el Acuerdo de Paz, la respuesta también sigue siendo un poco desalentadora:

(...) El tema de las medidas de reparación simbólica y económica no se han visto en el norte del Cauca, más allá de las reparaciones individuales que hacían antes de todo el proceso de paz e incluso antes del mismo cumplimiento del decreto 4635 que reconoce 36 sujetos colectivos de reparación que son 36 consejos comunitarios de los 43 que existen, pero eso tampoco ha avanzado más allá de tener solamente la resolución de víctimas, entonces te concluyo así concreto que no ha habido ningún proceso de reparación colectiva ni económica ni simbólicamente (Entrevistado 2, 2021).

El recrudecimiento de la violencia en el territorio es mucho más fuerte y mirar reparación y eso pues no, yo lo veo un poquito lejos, no sé los que están ahí al frente porque cada uno hace su análisis, y uno también como víctima también pues se cansa, se cansa de ir y venir y voltear y averiguar y te dicen la misma cosa, entonces ya la gente se cansa y ya opta por no volver (Entrevistada 3, 2021).

Por lo que se pudo extraer de las conversaciones que se tuvieron con estos liderazgos étnicos comunitarios, la reparación que se acordó en la Habana hoy a más de 4 años de haber sido firmado el Acuerdo Final de Paz, aún está muy cruda, las personas no han participado ni en el diseño, ni en la implementación ni en el seguimiento, es más, por lo que se puede analizar aún no se ha hecho un diseño que incluya como se van a implementar y qué puntos se van a tener en cuenta, no se han escuchado a las personas victimizadas en ese aspecto. Habría que entrar a indagar si esto se piensa realizar en algún punto y cómo se piensa realizar la articulación entre los mecanismos del SIVJNRN y los del SNARIV, que hoy en día es prácticamente inexistente.

Finalmente, teniendo en cuenta que dentro del Acuerdo Final de Paz se planteó la formulación de los PDET como una forma de Reparación Colectiva, y que hoy por hoy se configuró uno en la zona “Norte del Cauca y Alto Patía” se le preguntó a la población entrevistada cómo había sido esa participación en la construcción de los PDET, a lo cual respondieron así:

(...) los PDET, en un inicio entre comillas diría yo hubo una participación de las comunidades negras y digo entre comillas porque nosotros tenemos como ACONC un plan de buen vivir que se discutió que se trabajó con los consejos comunitarios, pero a la hora de implementar el dialogo y decir que tuvieran en cuenta ese ejercicio de planificación, no se hizo, con el argumento de que tenía que hacerse un trabajo vereda a vereda donde el enfoque étnico realmente no estaba diseñado o bueno no, implementado, lo que ellos tenían diseñado en el papel. Con la IAMPE tampoco se cumplió y ya luego le dieron fue un enfoque veredal y cuando subió al nivel municipal, quedaba ya un tema de participación por veredas y por comunidades, mas no con las características propias del enfoque étnico, obvio, hay veredas que en 90% son afrodescendientes, entonces la excusa es que están participando como afro, pero la metodología no permitía ese enfoque y más teniendo en cuenta lo planificado y la cosmovisión propia de la gente, sino que nos llevaron a un nivel en donde sentaron a todo el mundo con empresarios, comunidades indígenas, incluso, muchos proyectos de los empresarios fueron los que tuvieron más fuerza a la hora de la discusión municipal y que decir en el nivel regional, cuando se trabajó todo el Norte del Cauca y del Alto Patía que cogen dos municipios del Valle, 5 de Nariño y 17 de Cauca, en el caso del nuestro, fue peor. Los empresarios volvieron a participar con más fuerza, los alcaldes con más fuerza y las comunidades solo eran para que dieran la venia a lo que se discutía allí, esa es mi reflexión. Hoy, en términos de implementación, incluso, de unas obras rápidas que había y eso, eso no se dio, se quedó en el papel y los proyectos que la gente priorizó también se desaparecieron en términos de que salieron priorizados otro tipo de proyectos pensados por otras comisiones y otros componentes de las sociedad y no netamente las comunidad negra, en el caso de nosotros, las comunidades indígenas creo que presentaron las mismas dificultades (Entrevistado 2, 2021).

En un sentido similar se pronunció la entrevistada 4 (2021), quien señala que la implementación de los PDET en parte se dio, pero no de la forma en la que las comunidades esperaban, se tenía la expectativa puesta en que estos planes de desarrollo apoyaran sobre todo a las comunidades victimizadas partiendo de un enfoque étnico real, pero por la forma en la que fue estructurada su construcción borró casi que por completo el enfoque diferencial, priorizó a poblaciones que nunca habían sido vulnerabilizadas y se encargó de mostrar una efectividad ficticia que consistió en algunos reparches en las vías y algunas obras de infraestructura, pero no más, de fondo todo se quedó en el papel, lo que ocasionó un descontento bastante grande por parte de las comunidades receptoras de los proyectos que emanan de los PDET.

Dicho descontento no solo fue por parte de las comunidades afro como es el caso de los dos testimonios anteriores, también estuvo presente en las comunidades indígenas:

los PDET pasaron por los municipios en los que fue más crudo el accionar del conflicto armado y cogió algunos municipios, pero en eso se han quedado, porque hubo muchos municipios que acá en el Norte del Cauca fueron muy golpeados por el conflicto armado y aun todavía, pero eso no ha pasado a grande ni decir ni reparación ni voltearlos a ver, ni siquiera que hayan dicho venga échele piedra a la vía para que por lo menos puedan andar, de eso absolutamente nada, es más si le contara que esos proceso hace unos días participé en uno y todo ese proceso lo único que ha dejado es hay gente que ha montado su oficina y luego le dicen, venga que trabajamos el tema del PDET, que no sé qué, qué esto por aquí y por allá, pero tienen tremenda oficina y están pues manejando este tema de los PDET, que por una parte uno dice bueno al menos se ve en los ojos de uno, pero por otro, ellos sacan como el recurso y a usted lo mandan bien empapelado para su casa, con cartillas, con todos los acuerdos, los cinco puntos que a usted le queda la cabeza grandota, y uno queda como bueno, pero y esto como se baja al territorio... pues no, resulta que uno lee la información y luego la oficinas desaparecen porque se acaba el recurso y eran oficinas con 8 10 personas allí mientras les dura el proyecto y luego las oficinas desaparecen. Y yo entonces no se ni como llamarle a eso, tal vez aprovechamiento de las personas que están metidas de lleno en ese proceso, y en cambio uno se queda con los papeles en la mano y pensando bueno y ahora qué. Eso ha sido algo muy terrible (Entrevistada 3, 2021).

Con todo lo anterior, las reparaciones aún están en entredicho, la institucionalidad tiene que buscar la forma de articular todo el universo de medidas que hay, enfocando todos sus esfuerzos en llegar a los territorios y explicar de forma ilustrativa cómo se piensa garantizar este derecho, porque la reparación del daño es un presupuesto indispensable en procesos de justicia en tiempos de transición, y el hecho de que exista confusión, desarticulación, carencia de diseño de los planes de reparación y descontento con lo poco que se ha hecho porque las

comunidades no se sienten incluidas, sienta un precedente muy grave, por lo que hay que concentrar todos los esfuerzos en concertar con las comunidades victimizadas, para poder tener una solución pronta y se implementen de manera efectiva las medidas con la participación de las personas victimizadas, respetando el enfoque diferencial.

#### **4. Participación en las Garantías de No Repetición**

A pesar de que varios autores establecen estas garantías dentro de la reparación, es claro que operan como un derecho autónomo que, aunque relacionado con la Reparación Integral, busca prevenir futuras violaciones de DDHH e infracciones al DIH, promoviendo la salvaguarda de los mismos. En contextos de transición de la guerra a la paz las Garantías de No Repetición dependen sustancialmente de la obtención de recursos jurídicos y de reparaciones (Botero Marino y Restrepo Saldarriaga, 2005; Saffon y Tacha, 2019).

En el marco de lo estipulado en el Acuerdo Final de Paz, las Garantías de No Repetición, además de hacer parte integral del SIVJNR, son el resultado de la implementación de la CEV, la JEP, la UBPD y las medidas de reparación integral, así como de los demás puntos de Acuerdo Final, especialmente las medidas de No Repetición que fueron acordadas en el punto 3 que versa sobre el “Fin del Conflicto”.

##### **4.1. ¿Cómo se planteó?**

Las Garantías de No Repetición, al igual que las medidas de reparación integral no han tenido una reglamentación normativa plena en el ordenamiento jurídico colombiano, como si lo han tenido la CEV, LA JEP y la UBPD. En términos generales, su aplicación es transversal tanto al SIVJNR, como a los demás puntos de Acuerdo Final de Paz.

Ahora bien, resulta necesario aludir la incidencia que tiene el punto 3 del Acuerdo, en el marco de las Garantías de No Repetición, ya que en este, además de tratarse cuestiones como el cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de armas, también se le otorgó trascendencia a:

(...) las garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdo y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que haya sido



denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo” (Gobierno Nacional y FARC-EP, 2016, p. 77).

Dichas Garantías de No Repetición establecidas en el punto 3 son una parte fundamental en el posacuerdo y como se verá en el siguiente punto, su aplicación por parte del gobierno ha sido insuficiente, pese a los reclamos que se han venido realizando no solo desde las organizaciones sociales, sino también desde organismos internacionales que le han hecho seguimiento a la implementación de los Acuerdos de Paz en Colombia.

Teóricamente, el Acuerdo Final concibe una participación ciudadana en la implementación de las Garantías de No Repetición, la cual debe apostarle a la materialización de los derechos fundamentales de todas/os las/os colombianas/os, aplicando un enfoque diferencial, territorial y de género; y asumiendo un compromiso veraz, basado en el respeto y promoción de DDHH que permitirá la reconciliación y la construcción de paz. En este sentido, la participación en la Garantías de No Repetición no corresponde de manera exclusiva a las personas que han sido victimizadas, sino a todas/os y cada uno/a de los/as colombianas/os, porque la no repetición es una cuestión que las/os afecta a todas/os (Gobierno Nacional y FARC-EP, 2016).

Lo anterior debe ser tenido en cuenta con cautela, porque el fortalecimiento de los mecanismos de promoción y protección de los DDHH sigue estando en cabeza del Estado, aun cuando la población tenga derecho a participar, a este le corresponde crear los espacios para que la participación ciudadana sea efectiva. De hecho, en el Acuerdo Final de Paz se establecieron tres medidas de prevención y protección de los DDHH que hacen parte de las Garantías de No Repetición y que hasta el día de hoy no han resonado en la formulación de la política pública para el “posconflicto”. La primera, es el “diseño, elaboración y ejecución de un Plan Nacional en Derechos Humanos con la participación efectiva de las organizaciones defensoras/es de DDHH y organizaciones y movimientos sociales que, teniendo en cuenta los diferentes esfuerzos de política existente, permita ajustarlos a las necesidades de un escenario de construcción de paz” (Gobierno Nacional y FARC-EP, 2016, pág. 63). La segunda, son “las medidas y ajustes normativos necesarios para dar garantías plenas a la movilización y a la protesta social, como parte del derecho constitucional a la libre expresión, a la reunión y a la oposición” (Gobierno Nacional y FARC-EP, 2016, pág. 63). Y la tercera, “la creación de una comisión asesora convocada por la Defensoría del Pueblo para asesorar y realizar recomendaciones al gobierno nacional, a las instituciones del Estado y a las organizaciones de DDHH, en materia de DDHH y paz” (Gobierno Nacional y FARC-EP, 2016, pág. 63).

Como se puede observar, el foco en materia de participación tanto de la población victimizada como de la sociedad civil en general respecto de las Garantías de No Repetición fue puesto en la construcción colaborativa de herramientas que contribuyan a la prevención y protección de DDHH.

#### 4.2. ¿Cómo se está llevando a cabo en el territorio Nortecaucano?

Tras escuchar a los líderes/as comunitarios/as entrevistados y analizar la situación de conflicto que hoy por hoy pervive en la zona del Norte del Cauca, es claro que las Garantías de No Repetición no han sido implementadas a cabalidad, incluso, cuesta entender si ha habido esfuerzos aunque sea mínimos por parte del Estado para materializarlas. La violencia se ha incrementado exponencialmente en el territorio colombiano -principalmente en esta región del Cauca- que incluso en octubre de 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación al respecto, mediante Comunicado de prensa No. 251/20 del 13 de octubre de 2020 (Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 2021).

Según información recabada por el Colectivo de Abogado José Alvear Restrepo (2021) la violencia se está concentrando en aquellas zonas en las que se están implementando los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Zonas, en las que además la violencia ha venido incrementando desde la firma del Acuerdo de Paz y las cuales son ocupadas mayoritariamente por grupos étnicos, campesinos y excombatientes, grupos históricamente victimizados de manera sistemática.

El punto de vista de los líderes/as de estas comunidades sobre la no repetición es el siguiente:

(..) Yo creo que hay que ser sincero, la mayoría de los casos de masacres y situaciones que se han presentado en los últimos días, no están relacionados directamente con la participación en los mecanismos de justicia transicional. Sin embargo, si han sido comuneras y comuneros de las comunidades que son representadas por su autoridades étnicas ante estas instancias, **pero como el acuerdo es integral y no se puede hablar de no repetición si no se trabajan todos los frentes**, muchas de esas cosas están asociadas a las los cultivos de uso ilícitos, a las economías ilegales en términos de incluso de personas que denuncia que no están de acuerdo con esto, pero también de personas que desafortunadamente han sido cautivadas y engañadas para que entren a este círculo de las economías ilegales, entonces, eso en términos de los cultivos de uso ilícito, si los PNIS no funcionaron, pues entonces esto se redunda en la sustitución (Entrevistado 2, 2021).

La falta de Garantías de No Repetición se ha visto presente en cuestiones estructurales que han estado ligadas con el incremento de la violencia y la proliferación de grupos armados ilegales en la zona, como por ejemplo los cultivos ilícitos:

(...) Mira, el monocultivo de uso ilícito de la coca se ha encendido más en los últimos 2 años, que incluso antes de los acuerdos de paz, y hoy se encuentra el sembrado en muchas partes que antes ni se imaginaba uno que pudiera estar sembrado, alrededor y cerca de las vías principales de acceso público a los municipios, en los casos de Buenos Aires y Suárez, eso se está viendo mucho. Entonces eso es muy preocupante porque como el gobierno no actuó pues la no repetición es lo que va de paseo porque **hoy se ha repetido incluso con mayor fuerza muchas de las situaciones que se vivían antes del acuerdo de paz**. El actual gobierno, corporativo ajeno a la realidad de los territorios, creyendo que todo se hace solo desde Bogotá, pues no, lo que ha hecho es por omisión y por acción agudizar esta situación, la crisis humanitaria, pero también agudizar esta situación de que se sigue repitiendo con mucha más fuerza lo que se vivía antes (Entrevistado 2, 2021).

Ahora bien, frente al compromiso que se asumió en el Acuerdo de Paz, respecto del fortalecimiento de los mecanismos de promoción de DDHH en el Norte del Cauca el sentir de las comunidades no solo es de incumplimiento, sino de preocupación por los riesgos que conlleva ser líder o lideresa, defensor/a de DDHH en Colombia:

(...) Si usted se va a la historia entre 2016-2020, cuantos líderes defensores y defensoras de derechos humanos no han muerto... ¿por qué? porque fueron los años en donde vino flaqueando el proceso de paz y comenzaron con los líderes y las lideresas, aquí también están pues los combatientes porque ellos ya habían entregado también pues sus armas, ya estaban apostándole a otro proceso de vida (...) entonces si usted mira en esos años fue donde más subieron muertes de líderes sociales y amenazas y hasta hoy en día continúa ¿por qué? Porque bueno, siempre se dice que la UNP es el encargado desde el gobierno para la protección y la seguridad de los líderes, defensores de derechos humanos, pero ellos siempre dicen no, es que eso es mucha gente, mucha amenaza y no se puede protegerlos a todos, y bueno, hasta razón tendrán, porque las medidas son muy, por no decirlo, mediocres, le dan un chaleco y un teléfono, así, como, o sino un botón de pánico, no se ese cómo funciona, pero está dentro de las medidas y entonces no, eso de la carrera y del susto no sabe si va a marca o no va a marcar, eso ha sido mejor dicho muy complicado, algunos han optado por, los que más han defendido su territorio, por defender su territorio ya sea de los cultivos ilícitos o de la minería, la gente se ha tenido que ir del país... u obrar por allá bien calladito. Y nosotros los que defendemos el territorio y queremos el buen vivir para nosotros los pueblos, pues mire no lo podemos hacer porque mire, el primero que levante la voz lo están matando, no importa que sea hombre o mujer. Ahora les están duro a las autoridades a nuestras autoridades indígenas y a los autoridades de estos años son todas han sido jóvenes y son los jóvenes que están cayendo en este conflicto

y por defender el territorio y no dejar que las disidencias sigan con los cultivos ilícitos, entonces mira esto cada día está más difícil en el territorio (Entrevistada 3, 2021).

Hay que destacar que la entrevista que se cita anteriormente fue realizada a una lideresa indígena Nasa el mismo día que fue atacada la guardia indígena por grupos armados ilegales, cuando estaban realizando un ejercicio de control territorial que ellos/as denominan “la minga hacia adentro”<sup>62</sup>, donde específicamente estaban desplantando y quemando cultivos ilícitos ubicados dentro de los resguardos indígenas. Dentro de la logística de ayuda humanitaria que ella estaba liderando ese día, se pudo percibir por un lado la indignación y el miedo constante en el que viven las comunidades en esta región, pero por otro, esa entereza de hacerle frente de manera pacífica, sin la utilización de las armas, a la violencia que arrecia en el territorio.

El poco interés que ha tenido el gobierno nacional de trabajar en la verdadera implementación de las medidas de No Repetición ha significado la pérdida de cerca de 1000 liderazgos comunitarios en todo el territorio nacional, situación completamente evitable, si las prioridades del gobierno desde que empezó su mandato en el 2019 hubieran sido otras. Sin embargo, ante las alarmantes cifra de líderes/as sociales asesinados/as desde la firma del Acuerdo de Paz, las reacciones que ha tenido el gobierno han sido encaminadas a responsabilizar a los grupos armados ilegales, especialmente a las disidencias de las FARC-EP, que si bien no dejan de estar presentes, echar culpas donde hay un omisión inminente en materia de implementación del Acuerdo de Paz es irresponsable; se ha olvidado por completo de que es deber del Estado preservar la vida e integridad de las/os colombianas/os.

Otrora, también es pertinente destacar la complejidad que representa hablar de Garantías de No Repetición cuando desde el principio se ha dejado claro que el Colombia no se está viviendo un posconflicto, si no un posacuerdo, el cual además solo se hizo con uno de los múltiples grupos armados ilegales que perviven y con la Fuerza Pública, pero que no incluye a aquellos grupos disidentes de los paramilitares, de las propias FARC-EP, así como otras guerrillas, que han continuado cometiendo violaciones a los DDHH. Lo que quiere decir que en la medida en la que Colombia siga en conflicto y no haya voluntad de negociación entre los grupos armados ilegales que hoy por hoy se encuentran activos y el gobierno, las cosas en los territorios difícilmente van a cambiar, lo cual permite un recrudecimiento de la violencia y

---

<sup>62</sup> Estos hechos ocurrieron específicamente el 22 de abril del 2021 en zona rural de municipio de Caldon, unos días después de que fuera asesinada la gobernadora del Resguardo de la Laguna-Siberia Sandra Liliana Peña Chocué.

una constante afrente a los derechos humanos de las personas, dificultando que se logre la No Repetición.

Finalmente, a modo de cuña, Colombia desde el 28 de abril de 2021 se encuentra en un paro nacional indefinido, donde se han suscitado cruentas violaciones a los DDHH en el marco las manifestaciones, ni siquiera este aspecto se ha garantizado como quedo consagrado en el Acuerdo de Paz, sino todo lo contrario, el nivel de represión es alto, pero la inconformidad de las personas es tan grande que el gobierno está en jaque, le ha dado un pésimo manejo a la implementación del Acuerdo, se ha olvidado por completo de los territorios y cuando pretende hacer presencia busca ganarse el respeto militarizando los pueblos y las comunidades en las que las manifestaciones son más fuertes. Por su parte, el Norte del Cauca al ser tan cercano a Cali -ciudad más violentada hasta ahora- ha prestado su apoyo, la minga se ha movilizado, las comunidades afro y campesinas se han movilizado y se espera que mediante una negociación social y política se trabaje de manera integral para la implementación del acuerdo y para que Colombia deje de repetir la historia de violencia estructural e histórica que por tanto tiempo la azotado.

## CONCLUSIONES

Partiendo del análisis crítico de lo que comúnmente es entendido como “justicia transicional”, se llega a que efectivamente ésta no puede ser vista como una justicia específica, *sui generis*, sino que encuentra complemento con enfoques y dimensiones generales de la justicia distributiva, retributiva, reparadora, restaurativa, que apoyan su funcionamiento en contextos de transición; en ese sentido, la validez de hablar de justicia en tiempos de transición es inminente y así es como se desarrolla a lo largo de la investigación. Cuando se hace énfasis en cada uno de los enfoques de justicia que se deben tener en cuenta en tiempos transicionales, el enfoque restaurativo es crucial, no solo porque realmente otorga a las personas victimizadas un margen de priorización y de centralidad mucho más alto, sino porque rompe con esquemas de justicia retributiva tradicional que son prácticamente imposibles de aplicar en las transiciones del conflicto armado a la paz.

Todos los enfoques de justicia que se tienen en cuenta cuando se habla de “justicia en tiempos de transición” les han otorgado un lugar significativo a las comunidades victimizadas, y es que de eso se trata, de que la justicia se haga desde ellas y con ellas, porque de lo contrario sería volver a esquemas transicionales retributivos que las dejan en la impunidad, en un olvido que no merecen; interpelando la categoría de víctima, porque se ha concebido como víctima al sufriente, a la persona debilitada, impidiéndole esa asunción de agencia social y política, de ahí la necesidad de preguntarse si realmente todas las “víctimas” -jurídicamente hablando- se sienten incluidas dentro de dicha categoría, o si por el contrario prefieren ser llamadas sobrevivientes, resistentes, resilientes, agentes de cambio. Es por esto que a lo largo de la investigación se evitó a toda costa hablar de “víctimas”, porque no todas las personas victimizadas están incluidas en esta categoría, al menos en el proceso de justicia transicional que se ha desplegado en Colombia desde el 2005.

Lo anterior se pudo corroborar con el trabajo de campo realizado en el marco de la presente investigación, es notorio que esta categoría va más allá de la víctima que sufrió y que continúa siendo victimizada, esta enlazada con ese camino que se ha recorrido para llegar a un Sistema Integral de mecanismos para exigir Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, de frente, con entereza y con ánimo de reconciliación y de construcción de paz. Estas personas tienen una fortaleza y una agencia de cambio impresionante, superan con creces la forma en la que las concibe la institucionalidad. De ahí que sea posible concluir que la categoría de víctima es una construcción social que dentro del ámbito jurídico se ha encargado de etiquetar

para incluir o excluir a ciertas personas a la hora de garantizarles sus derechos a la Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, pero que en sentido estricto han dejado de lado la subjetividad de cada persona, de cada victimización y de cada apropiación del dolor que han tenido.

Lo indicado anteriormente es la base para poder entender cómo ha sido el proceso transicional colombiano, si bien ha sido largo, también ha sido fuertemente criticado, porque precisamente esos preconceptos y esa necesidad de trasplantar modelos que vienen de la realidad de otros países, sin sentarse a establecer su aplicabilidad en el contexto local, en la recepción y el diálogo con las comunidades, está destinado al fracaso, como ocurrió con la Ley de Justicia y Paz, donde no hubo una concertación previa con la población victimizada, se prestó mayor atención a los desmovilizados/as y como consecuencia de esto los procesos hasta el día de hoy se han movido poco, los grupos se han vuelto a rearmar y ni las personas victimizadas ni la sociedad civil han encontrado realmente Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

De igual forma, la apuesta que planteó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fue enorme, sobre todo en términos de inclusión y de resarcimiento, funcionó, en un plano muy general, pero faltó coordinación, faltaron recursos, faltaron ganas institucionales de reconocer los derechos de quienes fueron victimizados/as, bueno, de los que fueron incluidos, porque como se explicó en el capítulo 2, no todas las personas victimizadas cupieron en la categoría jurídica de víctima que planteó esta ley, todo lo anterior llevó a que hoy en día, la misma UARIV sea uno de los órganos más revictimizantes del Sistema de Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, donde las reparaciones han sido lentas, peleadas, e incluso las personas han fallecido esperando respuestas.

Las falencias que presentaron tanto la Ley de Justicia y Paz como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fueron identificadas, estudiadas y desarrolladas durante la negociación y firma del Acuerdo de Paz en la Habana, de este proceso es importante resaltar que su negociación fue demorada, sí, pero tuvo en cuenta cada uno de los aspectos más importantes, no solo referentes a la población victimizada -que es el foco de atención en esta investigación- sino sobre temas estructurales muy complejos que han azotado a Colombia desde tiempos inmemoriales como por ejemplo la tierra, y lo que está ha significado en términos de victimización en los territorios, de ahí el valor que tiene cada una de las cuestiones que se lograron pactar.

Con relación al punto cinco (5), hay que decir que es bastante integral, no solo porque concentra esfuerzos en cada aspecto referente a la Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición de quienes fueron victimizadas/os, sino porque también se encarga de contextualizar, ya que muchas veces los hechos victimizantes cometidos guardan estrecha relación con violencias estructurales que tienen relación por ejemplo con la tenencia de la tierra (punto 1) o con los cultivos ilícitos (punto 4). Cada elemento que se incluyó allí se hizo con un propósito: la consecución de la paz y los derechos de las personas victimizadas.

De ahí que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición sea una pieza clave, porque con este se materializan muchas de las bases de los demás puntos del Acuerdo de Paz; según lo investigado, este Punto cinco (5) se ha venido implementando, con traspies, con críticas, con duraciones cortas, pero ha servido para que tanto la sociedad civil como las personas que fueron victimizadas puedan ser partícipes y tener una comprensión más completa de qué es lo que ha pasado verdaderamente en el territorio colombiano. Estamos tan centralizados como país, que la consciencia sobre la periferia es nimia, vista como algo lejano, de ahí que se tomara la decisión de elegir como zona objeto de estudio el Norte del Cauca, porque era surreal lo que se veía en las noticias, porque sus comunidades étnicas tienen una fortaleza que se critica mucho y que se entiende poco. Pensar ese contexto en específico permite ver la dimensión del conflicto y entender por qué el Acuerdo Final de Paz es tan importante para los territorios.

El Norte del Cauca es un ejemplo de resistencias étnicas, campesinas, culturales, que pese a su importancia geoestratégica, sumamente apetecida por grupos armados legales e ilegales, no se dejó desfallecer, de ahí la conveniencia de conectar esa justicia en tiempos de transición con las violencias históricas que se asocian al racismo, al clasismo, a la xenofobia, y que lo digan los pueblos indígenas y afrocolombianos, que de lejos han marcado la pauta y a pesar de que si, efectivamente han sido asesinados, reclutados, desaparecidos en esta guerra sangrienta que embarga a Colombia desde hace tantos años, hay que tener claro que estas poblaciones en particular la han sufrido y la han enfrentado desde la conquista, por eso es tan complejo hablar de una plana “justicia transicional”, por eso hay que tocar los enfoques y aristas que se necesitan para incluir todas las afrentas a los DDHH y al DIH en términos de justicia y que trascienden ese rellenar de ideas un concepto como el de “justicia transicional”, que realmente embarga un propósito más complejo y que implica un análisis comprensivo de cómo es vista LA justicia en un escenario de transición, de cambio.



Si bien es importante resaltar el significado que tiene la pertenencia étnica en la región, también es importante hacer una crítica respecto de la forma en la que se ha tratado al campesinado colombiano, cuando se hizo el estudio preliminar y se revisó el censo del 2018 y se revisó el Registro Único de Víctimas se descubrió un patrón de olvido, se pasó por alto un enfoque diferencial importante: el campesinado. La zona rural ha sido el campo de batalla en los territorios del Norte del Cauca y si bien un porcentaje alto tiene pertenencia étnica, hace falta incluir o poder determinar la pertenencia campesina, porque evidentemente estas personas fueron victimizadas y no hay claridad sobre cuál es la magnitud aproximada en cifras, según los datos aportados en el Anexo 1 de elaboración propia urge la necesidad de revisar dentro de ese porcentaje etiquetado como “otros” cuál corresponde a la población campesina del Norte del Cauca.

Como se confirma en el último capítulo, las comunidades étnicas y campesinas han venido teniendo espacios para participar en los mecanismos que se plantearon en el Acuerdo Final del Paz, fundamentalmente en la CEV y en JEP, pese a algunas críticas que se hicieron en cada punto, se trata de algo que con la ley de justicia y paz no se vio y que aporta en cierto modo a que la reconciliación sea sanadora y no revictimizante. Sin embargo, también hay que ser realistas, el hecho de que dos mecanismos estén funcionando en materia de participación, si bien es un paso, no es un logro, porque como se pudo observar escuchando a los/as líderes/as comunitarios/as, la UBPD, las medidas de Reparación Integral y las Garantías de No Repetición han hecho una presencia prácticamente nula en el territorio, donde el espacio para participar es inexistente dado que no se han garantizado las formas para hacerlo, es decir, sin implementación no hay participación.

Ahora, el punto más preocupante de todos es el relacionado con las Garantías de No Repetición, porque no las hay, la violencia se exacerbó, los/as líderes/as sociales y los/as defensores/as de DDHH han sido el blanco de toda la polarización que hay respecto del Acuerdo de Paz, y como bien mencionaban los/as entrevistados/as, es un tema que no tiene que ver directamente con la participación en el SIVJRNR, es un tema de incumplimiento de los demás puntos del Acuerdo, no hay seguridad ni para los liderazgos comunitarios ni para los excombatientes, la tierra sigue estando en manos de la oligarquía colombiana y de los grupos armados legales e ilegales, los cultivos ilícitos han aumentado exponencialmente, y el problema, es que quien se queje y reclame sobre cualquiera de estos puntos se vuelve un objetivo al que hay que darle de baja.

Eso está pasando en el Norte del Cauca, después de que las personas victimizadas fueran incluidas en la JEP, después de que presentaran informes a la CEV y que escucharan reconocimientos a la verdad por parte de los comparecientes, todo se desdibuja porque queda supeditado a que no se garantiza lo mínimo, no se garantiza la vida. Hoy por hoy Colombia atraviesa por una situación compleja y uno de los puntos de inconformidad está relacionado con eso, no se respetan los DDHH básicos de la población, ni siquiera en el marco de protestas sociales legítimas que han surgido tras el cansancio de pedirle al gobierno y que este no sea receptivo. Por poner un ejemplo, en territorio, el CRIC, con las mingas que realiza ha tomado una posición muy fuerte frente a la No Repetición, partiendo de que tienen control territorial sobre los resguardos indígenas, lo mismo sucede en las comunidades afro con los Consejos Comunitarios, el tema es que el rearme ha sido masivo y la forma de hacerle frente a la proliferación de grupos armados legales e ilegales ha sido por medio de la Guardia Indígena y de la Guardia Cimarrona, donde su autoridad no utiliza las armas, lo que lleva a que la violencia que se perpetra contra ellos/as sea desproporcionada y en muchas ocasiones letal.

Con todo esto, surge la necesidad de que la JEP siga haciendo su trabajo, sí, pero que también asuma un compromiso serio con las personas que participan dentro del SIVJNRN otorgando medidas cautelares que las/os protejan, porque al paso con el que arrecia la violencia en el territorio las personas van perdiendo la credibilidad y puede que se desincentive su participación, lo que pone en riesgo al Acuerdo de Paz.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

### 1. Libros y artículos

- Acebedo Pérez, L. (2017). Las víctimas de crímenes de Estado en Colombia: de la invisibilidad a la construcción de una identidad dignificada. En N. G. Pardo Abril, y J. Ruiz Celis (Ed.), *Víctimas, Memoria y Justicia: aproximaciones latinoamericanas al caso colombiano* (pp. 205-232). Editorial Universidad Nacional de Colombia.
- Acevedo Arango, O. F. (2017). *Episteme de la victimidad: Reposicionar al sobreviviente y reparar a la víctima*. Ediciones USTA.
- Ambos, K. (2009). El marco Jurídico de la justicia de transición. En K. Ambos, E. Malarino, y G. Elsner, *Justicia de transición, con informes de América Latina, Alemania, Italia y España* (pp. 23-129). Konrad-adenauer-Stiftung E-V.
- Anderson, M. (2009). *Acción sin daño: cómo la ayuda humanitaria puede apoyar la paz o la guerra*. (J. Mérat, Trad.). Ediciones Ántropos Ltda.
- Ávila Alférez, L. I., y Cardona Pachón, J. (2018a). *Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición*. Defensoría del Pueblo.
- Ávila Alférez, L. I., y Cardona Pachón, J. (2018b). Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición -CEV-. En L. I. Ávila Alférez, y J. Cardona Pachón, *Cuadernos de paz No 4* (pp. 27-46). Defensoría del Pueblo.
- Ávila, A. (2020) *¿Por qué los matan?* Editorial Planeta de Colombia S.A.
- Barbosa, F. (2017) *¿Justicia Transicional o impunidad?* Ediciones B Colombia S.A.
- Benavides, F. (2011). *Justicia en épocas de transición: conceptos, modelos, debates, experiencias*. Barcelona: Institut català internacional per la pau.
- Bengoetxea, J. (2017). Justicia transicional <<versus>> justicia tradicional: el caso vasco. En R. J. Aranguren, *Justicia transicional: historia actualidad* (págs. 371-402). Cizur Menor: Editorial Arazandi.
- Bonilla, V. D. (2014). *Historia Política del pueblo Nasa*. Tejido de Educación.
- Botero Marino, C., y Restrepo Saldarriaga, E. (2005). Estándares internacionales y procesos de transición en Colombia. En A. Rettberg, *Entre el perdón y el paredón: preguntas y dilemas de la justicia transicional*. International Development research.
- Britto Ruiz, D. (2010). *Justicia Restaurativa: Reflexiones sobre la experiencia de Colombia*. Loja: Editorial de la Universidad Técnica Particular de Loja.
- Bustamante Rúa, M., Pabón Giraldo, L., y Toro Garzón, L. (2017). La justicia en transición en Colombia: Breve estudio desde la dimensión procesal. En D. Agudelo Mejía, L. Pabón Giraldo, L. Toro Garzón, M. Bustamante Rúa, y O. Vargas Vélez (Ed.), *Justicia Transicional* (págs. 107-148). Sello editorial Universidad de Medellín.
- Card, C. (2002). *The Atrocity Paradigm: A Theory of Evil*. Oxford University Press.

- Chaves Romero, C. (2019). *Justicia Transicional: del laberinto a la esperanza*. Ícono Editorial.
- Choconta Solano, L. J., y Mora Cuervo, R. A. (2020). Justicia restaurativa hacia la formación de la comunidad, con fundamento en los derechos humanos. En R. Abello-Galvis, W. Arévalo-Ramírez, H. Olasolo, y A. Varó Mejía (Ed.), *Diálogos y casos iberoamericanos sobre derecho internacional penal, derecho internacional humanitario y justicia transicional* (pp. 321-332). Editorial Universidad del Rosario.
- Christie, N. (1992). Los conflictos como pertenencia. En *De los delitos y de las víctimas*. Editorial Ad-Hoc.
- Clamp, K. (2014). *Restorative Justice in Transition*. Routledge Taylor & Francis Group.
- Cobb, S. (1997). Dolor y paradoja: la fuerza de las narraciones de mujeres víctimas en un refugio para mujeres golpeadas. En M. Pakman, *Construcciones de la experiencia humana* (pp. 17-62). Editorial Gedisa.
- Crawford, A., & Newburn, T. (2005). *Youth Offending and Restorative Justice: Implementing Reform in Youth Justice*. Routledge Taylor & Francis Group.
- De Greiff, P. (2012). Theorizing Transitional Justice. En M. Williams, R. Nagy, & J. Elster (Ed.), *Transitional Justice* (pp. 31-77). NYU Press.
- Díaz Pérez, I. L. (2009). El rostro de los invisibles. Víctimas y su derecho a la verdad, justicia reparación y no repetición. En D. Bondia García, y M. Muñoz (Ed.), *Víctimas invisibles, conflicto armado y resistencia civil en Colombia* (pp. 37-74). Huygens Editorial.
- Elster, J. (2003). A Case of Study of Transitional Justice: Athens in 411 and 403 B.C. En L. Meyer (Ed.), *Justice in Time: Responding to Historical Injustice*. Nomos Verlagsgesellschaft.
- Elster, J. (2004). *Closing the books: Transitional Justice in Historical Perspective*. Cambridge University Press.
- Elster, J. (2012). Justice, Truth, Peace. En R. Nagy, M. Williams, y J. Elster (Ed.), *Transitional Justice* (pp. 78-97). NOMOS LI. NYU Press.
- Ferrajoli, L. (2018). *Derecho y Razón*. Editorial Trotta.
- Forer, A. (2012). *Justicia Transicional*. Grupo Editorial Ibañez.
- Francés Lecumberri, P., y Restrepo Rodríguez, D. (2019). *¿Se puede terminar con la prisión?: críticas y alternativas al sistema de justicia penal*. Los libros de la Catarata.
- Fraser, N. (2008). *Escalas de justicia*. (A. Martínez Rúa, Trad.) Herder Editorial.
- Garay Salamanca, L. J., y Vargas Valencia, F. (2012). *Memoria y reparación: elementos para una justicia transicional pro víctima*. Universidad Externado de Colombia.
- Gómez Rivas, D., Dávila Ladrón de Guevara, A., y Escobedo David, R. (2017). Informe de la región suroccidental. En A. Dávila Ladrón de Guevara, G. Salazar Arbeláez, y A. González-Chavarría (Ed.), *El conflicto en contexto: un análisis de las regiones suroriental y suroccidental colombianas, 1998-2016* (pp. 163-253). Editorial Pontificia Universidad Javeriana.

- González-Chavarría, A. (2017). Marco para el análisis de contexto multiescalar y multiagente. En A. Dávila Ladrón de Guevara, G. Salazar Arbeláez, y A. González-Chavarría (Ed.), *El conflicto en contexto. Un análisis de las regiones suroriental y suroccidental colombianas, 1998-2016* (pp. 33-44). Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- Guglielmucci, A. (2017). La categoría de víctima en la era de los derechos humanos: una aproximación etnográfica sobre sus definiciones y usos en Argentina. En N. Pardo Abril, y J. Ruiz Celis, *Víctimas, Memoria y Justicia: aproximaciones latinoamericanas al caso colombiano* (pp. 185-204). Bogotá D.C.: Editorial Universidad Nacional de Colombia.
- Guglielmucci, A. (2018). Yo (no) soy una víctima: categorización institucional y (des) marcación social durante procesos de justicia transicional en Argentina y en Colombia. En B. Londoño Toro, y L. C. Peralta González (Eds.), *La voz de las víctimas: reto para la academia ante el posconflicto* (pp. 11-44). Editorial Universidad del Rosario.
- Halbwachs, M. (2010). La memoria colectiva. Miño y Dávila.
- Hampton, J. (2007). Righting Wrongs: the Goal of Retribution. En Farnham, D (Ed.) *The Intrinsic Worth of Persons: Contractarianism in Moral and Political Philosophy*. Cambridge University Press.
- Laclau, E. (2005). *La razón populista*. FCE.
- Martínez, M., y Ferrajoli, L. (2017). *Los fundamentos de la justicia transicional*. Grupo editorial Ibáñez.
- Orozco, I. (2009). *Justicia transicional en tiempos del deber de memoria*. Temis/Universidad de los Andes.
- Rappaport, J. (2000). *La política de la memoria. Interpretación indígena de la historia de los andes colombianos*. Editorial Universidad del Cauca.
- Rawls, J. (2012). Teoría de la justicia. FCE - Fondo de Cultura Económica.
- Rey Navas, F. I. (2018). *La justicia restaurativa como un fin de la pena*. Grupo Editorial Ibáñez.
- Reyes Mate, M. (2008). *Justicia de las víctimas: terrorismo, memoria, reconciliación*. Editorial Anthropos.
- Reyes Mate, M. (2016). Violencia del terrorismo y superación de la violencia . En J. A. Zamora, M. Reyes Mate, y J. Maiso (Eds.), *Las víctimas como precio necesario* (pp. 103-114). Editorial Trotta.
- Rincón Covelli, T. (2012). La justicia transicional: una concepción de la justicia que se hace cargo de las atrocidades del pasado. En T. Rincón Covelli, y J. Rodríguez Zepeda (Eds.), *La justicia y las atrocidades del pasado: Teoría y análisis de la justicia transicional* (pp. 60-122). Editorial Miguel Ángel Porrúa.
- Ríos Franco, J. (2017). *Breve historia del conflicto armado en Colombia*. Catarata.
- Rojas Amandi, V. (2010). Teoría Discursiva del Derecho de Jurgen Habermas. En J. Arriola Cantero, y V. Rojas Amandi, *Filosofía del Derecho Hoy* (pp. 49-57). Editorial Porrúa.
- Rojas Guerra, J. M. (1993). *La Bipolaridad del poder local. Caldon en el Cauca indígena*. Cali: Universidad del Valle.

- Sahuí Maldonado, A. (2012). Justicia transicional y democracia. En T. Rincón Covelli, y J. Rodríguez Zepeda (Eds.), *La justicia y las atrocidades del pasado: Teoría y análisis de la justicia transicional* (págs. 369-388). Editorial Miguel Ángel Porrúa.
- Saffon, M. P., y Tacha, V. (2019). *La participación en las medidas de justicia transicional un estudio comparado*. DeJusticia.
- Sánchez León, N. C., y Parra Vera, O. (2018). *Elementos para una Justicia de Paz Restaurativa*. Ediciones USTA.
- Saura Estapá, J. (2009). A modo de conclusión: de víctimas invisibles a protagonistas de paz. En D. Bondía García, y M. Ramiro Muñoz (Eds.), *Víctimas invisibles, conflicto armado y resistencia civil en Colombia* (pp. 351-358). Huygens Editorial.
- Teitel, R. (2000). *Transitional Justice*. Oxford University Press.
- Uprimny, R., y Saffón, M. P. (2006). La ley de “justicia y paz”: ¿una garantía de justicia y paz y de no repetición de las atrocidades? En R. Uprimny, M. P. Saffón, C. Botero, y E. Restrepo (Eds.), *¿Justicia transicional sin transición? verdad, justicia y reparación para Colombia*, (pp. 174-197). Dejusticia.
- Uprimny, R., y Saffón, M. P. (2007). Derecho a la verdad: alcances y límites de la verdad judicial. En R. Uprimny, M. P. Saffón, C. Botero y E. Restrepo (Eds.), *¿Justicia Transicional sin transición? verdad, justicia y reparación para Colombia* (pp. 139-171). Dejusticia.

## 2. Webgrafía

### 2.1. Libros electrónicos

- Caviedes, M. (2007). Guardias Indígenas de la zona centro y Caldonó. En M. Caviedes (Ed.), *Paz y resistencia: experiencias indígenas desde la autonomía* (pp. 56-73). Cecoin.  
[https://www.academia.edu/30617273/Paz\\_y\\_Resistencia\\_Experiencias\\_desde\\_la\\_autonom%C3%ADa\\_pdf](https://www.academia.edu/30617273/Paz_y_Resistencia_Experiencias_desde_la_autonom%C3%ADa_pdf)
- Centro de Estudios Interculturales. (2013). *Análisis de la posesión territorial y situaciones de tensión interétnica e intercultural en el departamento del Cauca*. Pontificia Universidad Javeriana de Cali.  
[https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field\\_document\\_file/analisis\\_posesion\\_territorial\\_-\\_tensiones\\_interetnicas\\_e\\_interculturales\\_en\\_el\\_cauca\\_1.pdf](https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field_document_file/analisis_posesion_territorial_-_tensiones_interetnicas_e_interculturales_en_el_cauca_1.pdf)
- Comisión Colombiana de Juristas y Deutsche Gesellschaft für Internationale. (2019). *Desafíos y oportunidades del SIVJNR (Serie las víctimas en el centro del acuerdo)*.  
[https://www.coljuristas.org/documentos/tmp/desafios\\_y\\_oportunidades\\_del\\_sivjnr.pdf](https://www.coljuristas.org/documentos/tmp/desafios_y_oportunidades_del_sivjnr.pdf)
- Comisión Colombiana de Juristas. (2017). *La participación de las víctimas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (serie las víctimas en el centro del acuerdo)*. Editorial Códice S.A.S.  
[https://www.coljuristas.org/documentos/libros\\_e\\_informes/Libro\\_LA\\_PARTICIPACI%C3%93N\\_DE\\_LAS\\_V%C3%8DCTIMAS\\_CCJ\\_15\\_Marzo\\_2017.pdf](https://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/Libro_LA_PARTICIPACI%C3%93N_DE_LAS_V%C3%8DCTIMAS_CCJ_15_Marzo_2017.pdf)

- Dajer, D. (2018). Las garantías de no repetición en el acuerdo final: ¿El día después de mañana de la justicia transicional en Colombia? En I. E. Estratégicos (Eds), *Cuadernos de Estrategia 189. El posconflicto colombiano: una perspectiva transversal* (pp. 53-90). Ministerio de Defensa. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6304818>
- Gómez Díaz, C. (2020). La Jurisdicción Especial para la Paz: paz negociada, reconocimiento de las víctimas y rendición de cuentas. En J. E. Paz, *La JEP vista por sus jueces (2018-2019)* (págs. 179-226). Jurisdicción Especial para la Paz. Obtenido de <https://www.jep.gov.co/Documents/LA%20JEP%20VISTA%20POR%20SUS%20JUEVES.pdf>
- Guzmán Barney, Á., y Rodríguez Pizarro, A. N. (2015). *Orden Social y Conflicto Armado: El norte del Cauca 1990-2010*. Universidad del Valle. <http://www.scielo.org.co/pdf/soec/n26/n26a08.pdf>
- Hurtado Hurtado , C., y Poveda Galeano, S. L. (2020). *Defensa Del Territorio Étnico por Las Mujeres del Norte del Cauca: Análisis de su Situación Actual*. Fundación Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional. <https://www.alianzaporlasolidaridad.org/axs2020/wp-content/uploads/DEFENSA-TERRITORIO-ETNICO-MUJERES-CAUCA-ESP-online.pdf>
- Instituto de Estudios Interculturales. (2018). *La estructura de la propiedad rural en el Cauca: perspectivas sobre las necesidades de tierra en contextos interculturales*. Pontificia Universidad Javeriana. [https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field\\_document\\_file/ebook-la-estructura-de-la-propiedad-rural\\_0.pdf](https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field_document_file/ebook-la-estructura-de-la-propiedad-rural_0.pdf)
- Instituto de Estudios Interculturales. (2019). *Norte del Cauca: gobernanza territorial rural y heterogeneidad insurgente. Dinámicas históricas y territoriales del conflicto político, social y armado 1958-2016*. Pontificia Universidad Javeriana de Cali. [https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field\\_document\\_file/norte\\_del\\_cauca\\_parte\\_1.pdf](https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field_document_file/norte_del_cauca_parte_1.pdf)
- Lemaitre Ripoll , J., y Rondón Daza, L. (2020). La justicia restaurativa y la escucha: un análisis del componente oral de los informes mixtos y de las versiones voluntarias en el Caso 01. En JEP (Ed.), *La JEP vista por sus jueces (2018-2019)* (pp. 267-296) <https://www.jep.gov.co/Documents/LA%20JEP%20VISTA%20POR%20SUS%20JUEVES.pdf>
- López Díaz, C. (Ed.) (2009). *Manual de Procedimiento de Justicia y Paz*. ProFis-GTZ- Embajada de las República Federal del Alemania. <https://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/2790/Manualdeprocedimientoparala leydejusticiaypaz.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Serna, J. M. (2010). Los cimarrones en la sociedad novohispana. En J. M. Serna, *de la De la libertad y la abolición: Africanos y afrodescendientes in Iberoamérica*. Centro de estudios mexicanos y centroamericanos. <https://books.openedition.org/cemca/1624?lang=en>
- Tamarit Sumalla, J. (2013). Procesos restaurativos más allá de la mediación: perspectivas de futuro. En I. J. Subijana Zunzunegui, M. Reyes-Mate, G. Varona Martínez, H. Soletto Muñoz, J. ernández García, J. A. Díaz López, . . . Álvarez, *Cuadernos penales José María Lidón. Justicia restaurativa, una justicia para el siglo XXI: potencialidades y retos* (págs. 317-332). Publicaciones de la

Universidad de Deusto. Obtenido de <http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/pdfs/lidon/lidon09.pdf>

Vargas Trujillo, J., y Galindo Villareal, J. (2020). *Policy Brief 7-2020. ¿Cómo participan las víctimas ante la JEP? CAPAZ - CEDPAL*. <https://www.instituto-capaz.org/wp-content/uploads/2021/01/Policy-Brief-Azul-7-2020-Vargas-y-Galindo-Web.pdf>

Zuluaga, J., y Vargas, J. (2019). *Policiy Brief 2-2019. Régimen de condicionalidad y acceso a la Jurisdicción Especial para la Paz*. CAPAZ. Obtenido de <https://www.instituto-capaz.org/wp-content/uploads/2019/05/Policy-Brief-2-2019-WEB.pdf>

## 2.2. Artículos científicos electrónicos

Aponte-Cardona, A. (2008). Colombia, un caso sui generis en el marco de la justicia de transición. *International law: revista colombiana de derecho internacional*, 6(12), 395-433. <https://www.redalyc.org/pdf/824/82420300015.pdf>

Barreto Ardila, H. (2009). Las víctimas en el proceso de Justicia y paz. Carácter simbólico de la verdad, la justicia y la reparación en la transición hacia la convivencia. *Derecho Penal y Criminología*, 30(89), 17-36. Obtenido de <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpen/article/view/518>

Crocker, D. (1999, 28 de September). Reckoning with Past Wrongs: A Normative Framework. *Ethics & International Affairs*, 43-64. doi:10.1111/j.1747-7093.1999.tb00326.x

De Zubiría Samper, S. (Agosto de 2015). Hacia una justicia restaurativa y transformadora. *Revista Izquierda*(56), 4-11. Obtenido de [https://revistaizquierda.com/images/easyblog\\_articles/459/izq0056\\_a01.pdf](https://revistaizquierda.com/images/easyblog_articles/459/izq0056_a01.pdf)

Echandía Castilla, C. (2011). *Situación actual de las FARC: Un análisis de los cambios en las estrategias y la territorialidad (1990-2011)*. FIP. Obtenido de <http://www.ideaspaz.org/publications/posts/78>

Erazo Gómez, A., y Espitia Pérez, L. (2018). Caldono, territorio para la paz. Tensiones en el primer año de implementación del acuerdo final en los resguardos indígenas que acogieron excombatientes de las FARC. *Revista Controversia*, 45-83. Obtenido de <https://revistacontroversia.com/index.php?journal=controversia&page=article&op=view&path%5B%5D=1112>

Francés Lecumberri, P. (2018). La justicia restaurativa y el art. 15 del Estatuto de la víctima del delito ¿un modelo de justicia o un servicio para la víctima? *e-Eguzkilore Revista Electrónica de Ciencias Criminológicas*(3), 1-39. Obtenido de <https://ojs.ehu.eus/index.php/eguzkilore/article/view/20102/18045>

Fuentes Becerra, D., y Atehortúa Arredondo, C. (2015). Sobre el sujeto-víctima: configuraciones de una ciudadanía limitada. *Revista opinión jurídica*, 15(29), 65-77. <https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/17786/PDF5.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Galtung, J. (2016). La violencia: cultural, estructural y directa. En *Cuadernos de estrategia* (pp. 147-168.). <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5832797.pdf>



- Gaona Cifuentes, N. (2018). Evolución jurídica del contenido del deber de justicia en contextos transicionales en Colombia. *Razón Crítica*, (5), 107-138.  
doi:<http://dx.doi.org/10.21789/25007807.1348>
- Hernández Lara, J. (2002). La resistencia civil en caliente: una contribución a la pacificación del conflicto en Colombia. *Revista Sociedad y Economía*, (2), 25-46.  
<https://www.redalyc.org/pdf/996/99617937002.pdf>
- Lasso, S. D. (2018 ). Memoria de las Víctimas en el Acuerdo de Paz del gobierno colombiano y las FARC-EP. *Nova et Véteria*, 1(27), 30-47. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6750510.pdf>
- Minow, M. (1998). Between Vengeance and Forgiveness: South Africa's Truth and Reconciliation Commission. *Negotiation Journal*, 14, pp. 319-355. <https://doi.org/10.1023/A:1024641113751>
- Moreno Quintero, R. (2008). Las organizaciones indígenas y campesinas frente al conflicto armado en el Norte del Cauca. *Revista Sociedad y Economía*, (15), 145-167.  
<https://www.redalyc.org/pdf/996/99612494008.pdf>
- Núñez Marín, R. F., y Claros Hernández, D. A. (2017). Los acuerdos de paz del Teatro Colón y su carácter normativo: una aproximación desde el derecho internacional. *Revista Jurídica piélagus*, 16 (2), 25-38. <https://journalusco.edu.co/index.php/pielagus/article/view/1552>
- Reyes-Mate, M. (2013). Sobre la justicia restaurativa. En I. J. Subijana Zunzunegui, M. Reyes-Mate, G. Varona Martínez, H. Soleto Muñoz, J. Hernández García, J. Díaz López, J.A. Díaz López, J.I. Echano Basuldua, C. Casillas, A.L. Ortiz González, F. Álvarez Ramos, A.J. Olalde Altarejos y J. Tamarit Sumalla (Eds), *Cuadernos penales José María Lidón. Núm. 9. Justicia restaurativa, una justicia para el siglo XXI: potencialidades y retos* (pp. 13-19). Deusto Digital. Obtenido de <http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/pdfs/lidon/lidon09.pdf>
- Rojas, E. (2015). El movimiento campesino en el Cauca: organización y lucha territorial por el reconocimiento como sujeto de derechos. *Revista Controversia*, (205) 98- 124.  
[https://revistacontroversia.com/index.php?journal=controversia&page=article&op=view&path%5B%5D=392&path%5B%5D=pdf\\_177](https://revistacontroversia.com/index.php?journal=controversia&page=article&op=view&path%5B%5D=392&path%5B%5D=pdf_177)
- Sampedro-Arrubla, J. (2010). La justicia restaurativa: una nueva vía, desde las víctimas, en la solución al conflicto penal. *Revista Colombiana de Derechos Internacional*, (17), 87-124.  
<https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/internationallaw/article/view/13821/11115>
- Teitel, R. (2003). Genealogía de la Justicia Transicional. *Harvard Human Rights Journal*, 16, págs. 69-94. Obtenido de [https://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/2059/Teitel\\_Genealogia.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/2059/Teitel_Genealogia.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Teitel, R. (2010). Global Transitional Justice. *George Center University, Center for Global Studies*, Working paper No 8. Obtenido de [https://www.gmu.edu/centers/globalstudies/publications/hjd/hjd\\_wp\\_8.pdf](https://www.gmu.edu/centers/globalstudies/publications/hjd/hjd_wp_8.pdf)

Uprimny, R., y Saffon, M. (2005, 12 de diciembre). *Justicia transicional y justicia restaurativa: tensiones y complementariedades*. Dejusticia: <https://www.dejusticia.org/en/transitional-and-restorative-justice-complements-and-tensions/>

Vega Dueñas, L. C., y Olalde Altarejos, A. J. (2018). La justicia restaurativa como paradigma orientador de paz: los encuentros restaurativos. *icade núm. 103. (Revista cuatrimestral de las Facultades de Derecho y Ciencia Económicas y Empresariales)*, 1-22.

### 2.3. Páginas web y documentos de páginas web

Aguilar, M. (2014, 22 de febrero). *caliescribe.com*. Obtenido de López Adentro... 30 Años de Recuerdos y olvido <https://caliescribe.com/es/reporte-urbano/2014/02/22/5760-lopez-adentro%E2%80%A6-30-anos-recuerdos-y-olvido>

Ardila, D. (s.f.). *Justicia Transicional: principios básicos*. Escola Pau UAB. <https://escolapau.uab.cat/img/programas/derecho/justicia/doc004.pdf>

Asuntos Legales. (2015, 13 de septiembre). *Nociones básicas sobre títulos mineros*. <https://www.asuntoslegales.com.co/consultorio/nociones-basicas-sobre-titulos-mineros-2300396>

Ávila, A. (2009, 19 de octubre). *Cómo se está dando la guerra en el Cauca hoy*. Revista Semana. <https://www.semana.com/nacion/conflicto-armado/articulo/como-esta-dando-guerra-cauca-hoy/108875-3/>

Bonilla Valencia, S. (2019, 20 de diciembre). *Un Balance Del Capítulo Étnico Del Acuerdo De Paz*. <https://pares.com.co/2019/12/20/asi-va-la-implementacion-del-capitulo-etnico-del-acuerdo-de-paz/#:~:text=El%20Cap%C3%ADtulo%20%C3%89tnico%20es%20el,marco%20del%20conflicto%20armado%20colombiano.>

Borja, A. (2021, 26 de abril). Reparación Integral Individual. Simposio Nacional para la Protección y Defensa de los Derechos de las Víctimas del Conflicto Armado, Bogotá D.C., Colombia. <https://fb.watch/5IcQJMCDot/>

Castaneira, I. (2017, 1 de octubre). *Semana Rural*. La lucha del pueblo Nasa por la liberación de sus tierras <https://semanarural.com/web/articulo/la-lucha-del-pueblo-nasa-por-la-liberacion-de-sus-tierras-en-el-cauca/241>

CICR. (2018, 27 de enero). *Es tiempo de acelerar la búsqueda de las personas desaparecidas en Colombia*. <https://www.icrc.org/es/document/tiempo-de-cumplirles-las-familias-de-los-desaparecidos-en-colombia>

Charles, M. (Director). (2019). *El Árbol del Amor* [Película]. <https://vimeo.com/359893831>

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. (2021, 15 de febrero). *¿Es responsable el Estado por las masacres en Colombia?* <https://www.colectivodeabogados.org/es-responsable-el-estado-por-las-masacres-en-colombia/>

- Comisión Colombiana de Juristas. (2018, 08 de noviembre). *Elementos que configuran patrones en la violencia contra los pueblos indígenas del norte del Cauca y sus organizaciones*. [coljuristas.org/nuestro\\_quehacer/item.php?id=267](http://coljuristas.org/nuestro_quehacer/item.php?id=267)
- Comisión Colombiana de Juristas. (2020). *Boletín # 28. La JEP lanza el manual para la participación de las víctimas ante esta jurisdicción*. [https://www.coljuristas.org/observatorio\\_jep/documentos/boletines/boletin\\_28.pdf](https://www.coljuristas.org/observatorio_jep/documentos/boletines/boletin_28.pdf)
- Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal. (2002). *Informe sobre el undécimo período de sesiones (16 a 25 de abril de 2002)*. Naciones Unidas. <https://undocs.org/pdf?symbol=es/E/2002/30>
- Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento [CODHES]. (2018). *El enfoque reparador en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial*. <https://codhes.files.wordpress.com/2018/03/el-enfoque-reparador-en-los-programas-de-pdet-normal-final.pdf>
- Consejo Regional Indígena del Cauca[CRIC]. (2020, 06 de junio). *Belalcázar – Páez. 26 años del terremoto y posterior avalancha del Río Páez*. <https://www.cric-colombia.org/porta/belalcazar-paez-26-anos-del-terremoto-y-posterior-avalancha-del-rio-paez/#>
- CRIC. (2021, 21 de febrero). *La historia del CRIC desde 1971 hasta la actualidad se cuenta en el escenario central del Pital*. <https://www.cric-colombia.org/porta/la-historia-del-cric-desde-1971-hasta-la-actualidad-se-cuenta-en-el-escenario-central-del-pital/>
- De Gamboa Tapias, C. (2020). *Policy Brief 6-2020. El papel de la justicia restaurativa en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición colombiano*. <https://www.instituto-capaz.org/wp-content/uploads/2020/08/Policy-Brief-Azul-6-2020-v3.pdf>
- Definiciones-de.com. (2013, 1 de agosto). *Definición de terraje*. <https://www.definiciones-de.com/Definicion/de/terraje.php>
- Fundación Ideas para la Paz [FIP]. (s.f.). *La Habana paso a paso*. <http://www.ideaspaz.org/especiales/dialogos-habana/#>
- FIP, USAID y OIM. (2014). *Dinámicas del conflicto armado en el sur del Valle y norte del Cauca y su impacto humanitario*. Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz: Unidad De Análisis 'Siguiendo El Conflicto'. <http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/53b5910826062.pdf>
- International Center for Transitional Justice [ICTJ]. (2011, 1 de diciembre). *Memoria: política pública para la transformación*. <https://www.ictj.org/sites/default/files/subsites/colombia-memoria/es/memoria-historica-en-la-ley-1448-de-2011/index.html>
- IFIT; FIP; CEJ; MOE. (2017, 10 de Agosto). *Comunicado sobre la jep y la centralidad de las las víctimas en la implementación del acuerdo de paz*. <http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1555>
- INDEPAZ. (2018). *Conflictos armados focalizados. Informe Sobre Grupos Armados Ilegales Colombia 2017-2018. Revista Punto de Encuentro No 74*. <http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2019/08/Conflictos-Armados-Focalizados-Indepaz.pdf>

- Instituto de Estudios Interculturales. (2019, 19 de diciembre). *Reconfiguración del conflicto armado-Norte del Cauca y Buenaventura*. <https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-la-paz/reconfiguracion-del-conflicto-armado-norte-del-cauca-y-buenaventura-71908>
- La Liga contra el Silencio. (2019). *La lucha por el control territorial desangra el Cauca*. <https://ligacontraelsilencio.com/2019/12/17/la-lucha-por-el-control-territorial-que-desangra-al-cauca/>
- Madiedo Sierra, C. A. (2019). *La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca* [Tesis de maestría, Universidad del Rosario]. [https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/20270/license\\_rdf?sequence=3&isAllowed=y](https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/20270/license_rdf?sequence=3&isAllowed=y)
- Medina Uribe, P. (2011, 20 de noviembre). *El Cauca sin 'Cano'*. La Silla Vacía. <https://lasillavacia.com/historia/el-cauca-sin-cano-29721>
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2014). *¿Qué es el enfoque diferencial?* <https://www.hchr.org.co/index.php/76-boletin/recursos/2470-ique-es-el-enfoque-diferencial#:~:text=Si%20nos%20preguntamos%20por%20la,y%20culturalmente%20con%20critérios%20discriminatorios.>
- Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. (2018, Noviembre). *Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición*. <https://www.hchr.org.co/index.php/publicaciones/category/35-derecho-a-la-verdad?download=231:participacion-de-las-victimas-en-el-sistema-integral-de-verdad-justicia-reparacion-y-no-repeticion>
- Organización Nacional Indígena de Colombia [ONIC]. (2018, 29 de julio). *Conflicto Nasa-Misak: Cordura y sabiduría entre pueblos tendrán que estar por encima de oportunismos*. <https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2484-conflicto-nasa-misak-cordura-y-sabiduria-entre-pueblos-tendran-que-estar-por-encima-de-oportunismos>
- ONU MUJERES. Centro virtual de conocimiento para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas. (15 de Agosto de 2013). Recuperado el 19 de Febrero de 2020, de <http://www.endvawnow.org/es/articles/1673-mecanismos-de-justicia-transicional.html>
- OSPDH y Universidad de Barcelona. (2011). Recensión a "Memoria como deber social". *Revista Crítica Penal y Poder*, (1), 174-179. <https://revistes.ub.edu/index.php/CriticaPenalPoder/article/download/1992/2088>
- Pares. (2019). *Más Sombras que luces. La seguridad en Colombia a un año del gobierno de Iván Duque*. Fundación Paz y Reconciliación. Obtenido de [https://pares.com.co/wp-content/uploads/2019/08/Que%CC%81-paso%CC%81-con-la-seguridad-a-un-an%CC%83o-de-Duque-final-\\_compressed-Final.pdf](https://pares.com.co/wp-content/uploads/2019/08/Que%CC%81-paso%CC%81-con-la-seguridad-a-un-an%CC%83o-de-Duque-final-_compressed-Final.pdf)
- PAXColombia. (2020, 03 de diciembre). *Entrega de informe sobre Tomas y Ataques guerrilleros en Caldoño*. <https://paxencolombia.org/entrega-de-informe-a-la-jep-sobre-ataques-y-tomas-guerrilleras-en-caldono/>

- PNUD Colombia. (2014, 15 de agosto). *Primera delegación de víctimas viaja a La Habana a encuentro con la Mesa de Conversaciones*.  
<https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/presscenter/articles/2014/08/15/primer-a-delegaci-n-de-v-ctimas-viaja-a-la-habana-a-encuentro-con-la-mesa-de-conversaciones-.html>
- Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano "Francisco Isaías Cifuentes". (2011). *Contexto del departamento del Cauca*. [http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2011/06/640\\_CONTEXTO-DEPARTAMENTO-DEL-CAUCA-PRIMERA-AUDIENCIA-DE-DERECHOS-HUMANOS.pdf](http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2011/06/640_CONTEXTO-DEPARTAMENTO-DEL-CAUCA-PRIMERA-AUDIENCIA-DE-DERECHOS-HUMANOS.pdf)
- Rojas Andrade, G. (2017). *Hacia una justicia transicional crítica. La institución social del castigo en el Acuerdo final de paz entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP en Colombia* [Tesis de doctorado, Universidad de los Andes].  
<https://repositorio.uniandes.edu.co/handle/1992/38676?show=full>
- Rutas del Conflicto. (2019). *El Nilo*. <https://rutasdelconflicto.com/masacres/el-nilo>
- Tutu, D. (2006, June 16). *Justice Is Reconciliation*. Project Syndicate <https://www.project-syndicate.org/commentary/justice-is-reconciliation>
- Ucha, F. (2012, mayo). *Definición ABC*. <https://www.definicionabc.com/ciencia/mecanismo.php>
- Uprimny Yepes, R., y Sánchez León, N. C. (2011, 14 de agosto). *Ley de Víctimas: avances, limitaciones y retos*. <https://www.dejusticia.org/ley-de-victimas-avances-limitaciones-y-retos/>
- Verdad Abierta. (2008, 11 de febrero). *La desmovilización: el proceso de paz (2003-2006)*.  
<https://verdadabierta.com/periodo4/>
- Verdad Abierta. (2012, 25 de abril). *El recorrido sangriento del Bloque Calima por Cauca*.  
<https://verdadabierta.com/el-recorrido-sangriento-del-bloque-calima-por-cauca/>
- Verdad Abierta. (2015, 09 de noviembre). *Las amargas lecciones que dejó la desmovilización de las Auc*.  
<https://verdadabierta.com/las-amargas-lecciones-que-dejo-la-desmovilizacion-de-las-auc/>
- Verdad Abierta. (2018, 03 de septiembre). *La violencia arrecia en el norte de Cauca*.  
<https://verdadabierta.com/la-violencia-arrecia-en-el-norte-de-cauca/>
- Verdad Abierta. (2019, diciembre). *El PNIS sólo aterrizó en dos resguardos indígenas del norte del Cauca*.  
<https://verdadabierta.com/pnis-solo-aterrizo-dos-resguardos-indigenas-delnorte->

### 3. Documentación Oficial

- Agencia Colombiana para la Reintegración, Ministerio de Justicia, USAID y OIM. (s.f). *ABC de la Ley 1424 de 2010. Elementos esenciales para comprender el diseño y el funcionamiento de la Ley 1424 de 2010*. <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/ABC-Ley-1424-de-2010.pdf>
- Alto Comisionado para la Paz. (2014, 07 de junio). *10 principios para la discusión del punto 5 de la agenda: “víctimas”*.  
[http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Paginas/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-con-versaciones/proceso-de-paz-con-las-farc-ep/Documents/Principios\\_discusion\\_victimas.pdf](http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Paginas/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-con-versaciones/proceso-de-paz-con-las-farc-ep/Documents/Principios_discusion_victimas.pdf)

- Asamblea General de la ONU. (1985, 29 de noviembre). Resolución 40/34 . *“Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder”*.  
<https://undocs.org/es/A/RES/40/34>
- Asamblea General de las Naciones Unidas. (2005, 16 de diciembre). Resolución 60/147 . *“Principios y directrices básicas sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del d derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”*.  
<https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/remedyandrepairation.aspx>
- Centro Nacional de Memoria Histórica . (2014). *Guerrillera y Población Civil. Trayectoria de las FARC. 1949-2013*.  
<http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/farc/guerrilla-poblacion-civil.pdf>
- Centro Nacional de Memoria Histórica. (2015). *Guerra propia, guerra ajena. Conflicto armados y reconstrucción identitaria en los andes colombianos. El Movimiento Armado Quintín Lame*.  
<https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/quintinLame/quintin-lame-conflictos-armados-y-reconstruccion-identitaria-en-los-andes-colombianos.pdf>
- Centro Nacional de Memoria Histórica. (2016a). *Recorrido por los paisajes de las violencia en Colombia*. Guardia Indígena del norte del Cauca:  
<http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/recorridos-por-paisajes-de-la-violencia/norte-cauca.html>
- Centro Nacional de Memoria Histórica. (2016b). *Tomas y ataques guerrilleros (1965-2013)*.  
<https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/tomas-guerrilleras.pdf>
- Centro Nacional de Memoria Histórica. (2018). *Bloque Calima de las AUC. Depredación paramilitar y narcotráfico en el suroccidente colombiano. Informa No.2*.  
<http://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/bloque-calima-auc.pdf>
- Comisión de la Verdad. (s.f.a). *EN LOS TERRITORIOS | Presencia territorial*.  
<https://comisiondelaverdad.co/en-los-territorios/despliegue-territorial>
- Comisión de la Verdad. (s.f.). <https://comisiondelaverdad.co/la-comision/preguntas-frecuentes>
- Comisión de la Verdad. (2018, 28 de noviembre). *La Comisión inicia su mandato con el primer encuentro por la verdad*. <https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/la-comision-inicia-su-mandato-con-el-primer-encuentro-por-la-verdad>
- Comisión de la Verdad. (2019, 11 de julio). *“Sin nuestras voces, la verdad estará incompleta”*.  
<https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/sin-nuestras-vozes-la-verdad-estara-incompleta>
- Comisión de la Verdad. (2020, 09 de junio). *“Queremos que el mundo escuche nuestra voz, es una deuda histórica con nosotras”*. <https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/queremos-que-el-mundo-escuche-nuestra-voz-es-una-deuda-historica-con-nosotras>

- Comisión de la Verdad. (2020, 29 de mayo). *Gritos de mujeres negras por la libertad, la reparación y la memoria*. <https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/gritos-de-mujeres-negras-por-la-libertad-la-reparacion-y-la-memoria>
- Comisión de la Verdad. (2021, 20 de marzo). <https://www.youtube.com/watch?v=yXDkNwyDkto>
- Comisión de la Verdad y DeJusticia. (2019). *La Comisión de la Verdad y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición: conceptos clave para su mandato*. Dejusticia. <https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2019/08/Conceptos-clave-Sistema-integral-y-CEV.pdf>
- Comisión Para El Esclarecimiento De La Verdad, La Convivencia Y La No Repetición. (2019). *Informe de Gestión I Semestre de 2019*. CEV. [https://comisiondelaverdad.co/images/Informe\\_gestion\\_ISem\\_2019F.pdf.pdf](https://comisiondelaverdad.co/images/Informe_gestion_ISem_2019F.pdf.pdf)
- Comisión de la Verdad. (2018, 01 de diciembre). *Palabras de Aída Quilcué en el primer encuentro por la verdad que dio inicio a la Comisión*. <https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/es-muy-importante-e-historico-para-los-pueblos-indigenas-conocer-la-verdad-pero-una-verdad-donde-empecemos-a-descolonizar-esa-mirada-discriminatoria-y-racista>
- Consejo de Seguridad de la ONU. (2004). *El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos (S/2004/616)*. Organización de las Naciones Unidas.
- DANE. (2018a). *Geoportal*. Geovisor de Autorreconocimiento Étnico: <https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/autorreconocimiento-etnico/?lt=2.145341963878209&lg=-76.8341966894999&z=8>
- DANE. (2018b). *Proyecciones de población a nivel municipal. Periodo 2018-2035*. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion>
- DANE. (s.f.). *Conceptos básicos*. [https://www.dane.gov.co/files/inf\\_geo/4Ge\\_ConceptosBasicos.pdf](https://www.dane.gov.co/files/inf_geo/4Ge_ConceptosBasicos.pdf)
- Departamento Nacional de Planeación. (2006). *BALANCE PLAN COLOMBIA 1999 – 2005*. [https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Justicia%20Seguridad%20y%20Gobierno/Bal\\_plan\\_Col\\_espanol\\_final.pdf](https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Justicia%20Seguridad%20y%20Gobierno/Bal_plan_Col_espanol_final.pdf)
- Departamento Nacional de Planeación. (s.f.). *TerriData*. <https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/19000>
- Jurisdicción Especial para la Paz. (s.f.a). *Conozca la JEP*. <https://www.jep.gov.co/Infografas/conozcalajep.pdf>
- Jurisdicción Especial para la Paz. (s.f.b). *Los grandes casos de la JEP*. <https://www.jep.gov.co/especiales1/macrocasos/index.html>
- Jurisdicción Especial para la Paz. (s.f.c). *La voz de las víctimas cuenta ¡Participa en la JEP!* <https://www.jep.gov.co/Paginas/Participa-en-la-JEP.aspx#:~:text=Los%20informes%20que%20presentan%20las,en%20los%20procesos%20que%20adelanta>

- Jurisdicción Especial para la Paz. (s.f.d). *Los grandes casos de la JEP*. Caso 05 prioriza situación territorial en la región del norte del Cauca y el sur del valle del Cauca.  
<https://www.jep.gov.co/especiales1/macrocasos/05.html>
- Jurisdicción Especial para la Paz y OEA-MAPP. (2020). *Manual para la Participación de las víctimas ante la JEP (Versión corta)*. <https://www.jep.gov.co/Infografas/participacion/manualparticipacion.pdf>
- Jurisdicción Especial para la Paz. (2019a, 23 de abril). *La JEP incorpora cinco municipios del Valle y cuatro del Cauca al caso 005* . <https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-incorpora-cinco-municipios-del-Valle-y-cuatro-del-Cauca-al-caso-005-.aspx>
- Jurisdicción Especial para la Paz. (2019, 21 de febrero). *La JEP se conecta con los pueblos indígenas*.  
<https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-se-conecta-con-los-pueblos-%C3%ADndigenas.aspx#:~:text=La%20Comisi%C3%B3n%20%C3%89tnica%20de%20la%20JEP%20es%20una%20instancia%20permanente,la%20JEP%20y%20las%20diferentes>
- Jurisdicción Especial para la Paz. (2020). *Lineamientos en materia de sanción propia y Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador - Restaurador*. <https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/SiteAssets/Paginas/Conozca-Los-lineamientos-en-materia-de-sanci%C3%B3n-propia-y-Trabajos%2C-Obras-y-Actividades-con-contenido-Reparador---Restaurador/28042020%20VF%20Lineamientos%20Toars%20y%20SP.pdf>
- Jurisdicción Especial para la Paz. (2020, 12 de mayo). *Comunicado 063*. ABC de las Sanciones Propias que impondrá la JEP: <https://www.jep.gov.co/Paginas/ABC-de-las-Sanciones-Propias-que-impondr%C3%A1-la-JEP.aspx>
- Jurisdicción Especial para la Paz. (2021, 09 de abril). *COMUNICADO 043 DE 2021* . La JEP culminó el proceso de notificación con pertinencia étnica y cultural de 55 consejos comunitarios y 5 organizaciones sociales que representan a más de 40.000 víctimas en el Caso 05.  
<https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Termin%C3%B3-notificaci%C3%B3n-con-pertinencia-%C3%A9tnica-y-cultural-a-55-consejos-comunitarios-y-5-organizaciones-sociales-en-el-Caso-05.aspx>
- Ministerio de Cultura. (s.f). *Misak (Guambianos), la gente del agua, del conocimiento y de los sueños*.  
[https://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/noticias/Documents/Caracterizaci%C3%B3n%20del%20Pueblo%20Misak%20\(Guambiano\).pdf](https://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/noticias/Documents/Caracterizaci%C3%B3n%20del%20Pueblo%20Misak%20(Guambiano).pdf)
- Ministerio de Justicia. (s.f.a). *Justicia Transicional*. <http://www.justiciatransicional.gov.co/Justicia-Transicional/Justicia-transicional-en-Colombia>
- Ministerio de Justicia. (s.f.b). *Justicia Transicional*. Ley de víctimas y restitución de tierras.  
<http://www.justiciatransicional.gov.co/ABC/Ley-de-V%C3%ADctimas-y-Restituci%C3%B3n-de-Tierras>
- Ministerio de Justicia. (s.f.c). *Marco Jurídico: la paz como finalidad de los instrumentos de justicia transicional*. <http://www.justiciatransicional.gov.co/ABC/Marco-Jur%C3%ADdico-para-la-paz#:~:text=El%20Marco%20Jur%C3%ADdico%20para%20la%20Paz%20es%20una%20reforma%20constitucional,v%C3%ADctimas%20y%20la%20transici%C3%B3n%20hacia>





Decreto Ley 588 de 2017. (2017, 05 de abril). Presidencia de la República. Diario Oficial No. 50.197.[http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto\\_0588\\_2017.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0588_2017.html)

Decreto Ley 589 de 2017. (2017, 05 de abril). Presidencia de la República. Diario Oficial No. 50.197.[http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto\\_0589\\_2017.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0589_2017.html)

Decreto Ley 893 de 2017. (2017, 28 de mayo). Presidencia de la República. Diario Oficial No. 50.247.  
[http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto\\_0893\\_2017.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0893_2017.html)

Estatuto de roma de la Corte Penal Internacional, 17 de Julio, 1998.  
<https://www.refworld.org.es/docid/50acc1a12.html>

Gobierno Nacional y FARC-EP. (2016, 24 de noviembre). *Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Establece y Duradera*.  
<https://www.jep.gov.co/Documents/Acuerdo%20Final/Acuerdo%20Final%20Firmado.pdf>

Ley 89 de 1890. (1890, 25 de noviembre). Congreso de la República.  
<http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4920>

Ley 70 de 1993. (1993, 31 de agosto). Congreso de la República. Diario Oficial No. 41.013.  
[http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_0070\\_1993.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0070_1993.html)

Ley 160 de 1994. (1994, 5 de agosto). Congreso de la República. Diario Oficial No. 41.479.  
[http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_0160\\_1994.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0160_1994.html)

Ley 975 de 2005. (2005, 25 de julio). Congreso de la República. Diario Oficial No. 45.980.  
[http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_0975\\_2005.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0975_2005.html)

Ley 1424 de 2010. (2010, 29 de diciembre). Congreso de la República. Diario Oficial No. 47.937.  
[http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1424\\_2010.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1424_2010.html)

Ley 1448 de 2011. (2011, 10 de junio). Congreso de la República. Diario Oficial No. 48.096.  
[http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1448\\_2011.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1448_2011.html)

Ley 1592 de 2012. (2012, 03 de diciembre). Congreso de la República. Diario Oficial No. 48.633.  
[http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1592\\_2012.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1592_2012.html)

Ley 1820 de 2016. (2016, 30 de diciembre). Congreso de la República. Diario Oficial No. 50.102.  
[http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1820\\_2016.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1820_2016.html)

Ley 1922 de 2018. (2018, 18 de julio). Congreso de la República. Diario Oficial No. 50.658.  
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87544>

Ley Estatutaria 1957 de 2019. (2019, 06 de junio). Congreso de la República. Diario Oficial No. 50.976.  
[http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1957\\_2019.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1957_2019.html)

Ley 2078 de 2021. (2021, 08 de enero). Congreso de la República. Diario Oficial No. 51.551.  
[http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_2078\\_2021.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2078_2021.html)

## 5. Jurisprudencia

Auto SRVR 078/18. (2018, 08 de noviembre). Jurisdicción Especial para la Paz. (Sala de Reconocimiento de la Verdad). [https://relatoria.jep.gov.co/documentos/providencias/1/1/Auto\\_SRVR-078\\_08-noviembre\\_2018.pdf](https://relatoria.jep.gov.co/documentos/providencias/1/1/Auto_SRVR-078_08-noviembre_2018.pdf)

Auto SRVR 032/19. (2019, 12 de marzo). Jurisdicción Especial para la Paz. (Sala de Reconocimiento de la Verdad). [https://www.coljuristas.org/observatorio\\_jep/documentos/documento.php?id=51](https://www.coljuristas.org/observatorio_jep/documentos/documento.php?id=51)

Auto SRVR 080/19. (2019, 28 de mayo). Jurisdicción Especial para la Paz. (Sala de Reconocimiento de la Verdad). [https://relatoria.jep.gov.co/documentos/provisional/1/Auto\\_SRVR-080\\_28-mayo-2019.pdf](https://relatoria.jep.gov.co/documentos/provisional/1/Auto_SRVR-080_28-mayo-2019.pdf)

Auto SRVR 194/19. (2019, 12 de septiembre). Jurisdicción Especial para la Paz. (Sala de Reconocimiento de la Verdad). [https://relatoria.jep.gov.co/documentos/providencias/1/1/Auto\\_SRVR-194\\_12-septiembre-2019.pdf](https://relatoria.jep.gov.co/documentos/providencias/1/1/Auto_SRVR-194_12-septiembre-2019.pdf)

Auto SRVBIT 079/19. (2019, 12 de noviembre). Jurisdicción Especial para la Paz. (Belkis Izquierdo y Ana Ochoa, M.P). [https://relatoria.jep.gov.co/documentos/provisional/1/Auto\\_SRVR-079\\_12-noviembre-2019.docx](https://relatoria.jep.gov.co/documentos/provisional/1/Auto_SRVR-079_12-noviembre-2019.docx)

Auto SVRV 02/20. (2020, 17 de enero). Jurisdicción Especial para la Paz. (Sala de Reconocimiento de la Verdad). [https://relatoria.jep.gov.co/documentos/providencias/1/1/Auto\\_SRVR-02\\_17-enero-2020.docx](https://relatoria.jep.gov.co/documentos/providencias/1/1/Auto_SRVR-02_17-enero-2020.docx)

Auto SRVR 011/21. (2021, 01 de febrero). Jurisdicción Especial para la Paz. (Sala de Reconocimiento de la Verdad). [https://relatoria.jep.gov.co/documentos/providencias/1/1/Auto\\_SRVR-011\\_01-febrero-2021.docx](https://relatoria.jep.gov.co/documentos/providencias/1/1/Auto_SRVR-011_01-febrero-2021.docx)

Sentencia C-225/95. (1995, 18 de mayo). Corte Constitucional. (Alejandro Martínez Caballero. M.P). <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/c-225-95.htm#:~:text=Sentencia%20No.,C%2D225%2F95&text=El%20derecho%20internacional%20humanitario%20ha,consuetudinario%20de%20los%20pueblos%20civilizados.>

Sentencia C-523/09. (2009, 04 de agosto). Corte Constitucional. (María Victoria Calle Correa. M.P). <https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2009/C-523-09.htm#:~:text=%E2%80%9CQuien%20sufre%20medidas%20cautelares%20cuanta,a%20quien%20solicita%20su%20decreto.%E2%80%9D>

Sentencia C-771/11. (2011, 13 de octubre). Corte Constitucional. (Nilson Pinilla Pinilla. M.P). <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-771-11.htm#:~:text=Encuentra%20la%20Corte%20Constitucional%20que,del%20marco%20de%20la%20justicia>

Sentencia C-052/12. (2012, 08 de febrero). Corte Constitucional. (Jesús Antonio Espitia Marín. M.P). <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-052-12.htm>

Sentencia C-579/13. (2013, 28 de agosto). Corte Constitucional. (Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. M.P). <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-579-13.htm>

Sentencia C-588/19. (2019, 05 de diciembre). Corte Constitucional. (José Fernando Reyes Cuartas. M.P.).  
<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-588-19.htm#:~:text=Por%20la%20cual%20se%20dictan,y%20se%20dictan%20otras%20disposiciones>

Sentencia C-080/18. (2018, 15 de agosto). Corte Constitucional. (Antonio José Lizarazo Ocampo. M.P.).  
<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/c-080-18.htm>

Sentencia interpretativa TP-SA-SENIT 1. (2019, 03 de abril). Jurisdicción Especial para la Paz. (Tribunal para la Paz - Sección de Apelación).  
[https://relatoria.jep.gov.co/documentos/providencias/7/2/Sentencia-interpretativa\\_TP-SA-SENIT-01\\_03-abril-2019.pdf](https://relatoria.jep.gov.co/documentos/providencias/7/2/Sentencia-interpretativa_TP-SA-SENIT-01_03-abril-2019.pdf)

## **6. Entrevistas**

Entrevistado 1. (26 de septiembre de 2019). (A. Gracia, Entrevistadora)

Entrevistado 2. (20 de abril de 2021). (A. Gracia, Entrevistadora)

Entrevistada 3. (22 de abril de 2021). (A. Gracia, Entrevistadora)

Entrevistada 4. (29 de abril de 2021). (A. Gracia, Entrevistadora)

Entrevistado 5. (29 de abril de 2021). (A. Gracia, Entrevistadora)

## **ANEXO 1**

### **1. Base de datos Norte del Cauca**

A continuación se presenta un documento de Excel de elaboración propia, basado en información Oficial del Departamento Nacional de Estadística (DANE), del Departamento Nacional de Planeación y de la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV) dónde se da cuenta de información clave de los municipios que conforman la subregión del Norte del Cauca, esto se realiza en la medida en la que no existe una concentración de datos cualitativos o cuantitativos que dé cuenta de esta zona en específico.

# BASE DE DATOS NORTE DEL CAUCA

Fuente: Elaboración Propia con base en información del DANE (2018a); DANE (2018b); DNP (s.f) y UARIV (2021)

Municipios (Densidad / Hbts Rural / Hbts Urbano)

MUNICIPIO	ÁREA [KM2]	# RESGUARDOS	# CENTROS POBLADOS	DENSIDAD [# HB / KM2]	ALTITUD m.s.n.m	HABITANTES [Hbts] <i>Fuente: elaboración propia con datos del DANE (2018)</i>					
						Cabecera Municipal	% Cabecera	Zona Rural	% Rural	Total # Hbts	Total %
BUENOS AIRES	410	3	10	79	1.823	1.077	3,3%	31.234	96,7%	32.311	7%
CALDONO	373	6	7	113	1.730	1.992	4,7%	40.120	95,3%	42.112	9%
CALOTO	302	3	15	101	1.543	5.227	17,2%	25.230	82,8%	30.457	7%
CORINTO	294	1	7	87	1.867	12.560	49,0%	13.083	51,0%	25.643	6%
GUACHENÉ	97	0	21	208	2.006	6.569	32,6%	13.611	67,4%	20.180	4%
JAMBALÓ	252	1	1	74	1.770	1.861	9,9%	16.859	90,1%	18.720	4%
MIRANDA	212	1	8	153	1.899	18.343	56,7%	14.001	43,3%	32.344	7%
PADILLA	68	0	6	148	1.823	4.474	44,4%	5.598	55,6%	10.072	2%
PUERTO TEJADA	92	0	10	458	1.897	36.074	85,6%	6.052	14,4%	42.126	9%
SANTANDER DE QUILICHAO	444	6	32	257	1.543	52.799	46,3%	61.126	53,7%	113.925	25%
SUÁREZ	370	0	4	89	1.823	6.160	18,8%	26.632	81,2%	32.792	7%
TORIBÍO	412	3	5	90	1.600	2.290	6,2%	34.704	93,8%	36.994	8%
VILLA RICA	77	0	4	279	1.936	14.570	67,8%	6.932	32,2%	21.502	5%
<b>TOTALES</b>	<b>3.403</b>	<b>24</b>	<b>130</b>	<b>135</b>		<b>163.996</b>	<b>35,7%</b>	<b>295.182</b>	<b>64,3%</b>	<b>459.178</b>	<b>100%</b>

**BASE DE DATOS NORTE DEL CAUCA**  
**Fuente: Elaboración Propia con base en información del DANE (2018a); DANE (2018b); DNP (s.f) y UARIV (2021)**  
**Municipios (Víctimas, Distribución Étnica)**  
**Municipios (Población, Distribución Étnica)**

MUNICIPIO	HABITANTES SEGÚN ETNIAS <i>Fuente: elaboración propia con datos del DANE (2018)</i>											
	% Indígenas	INDIGENA	% AFRO	AFRO	% Gitano	Gitanos	% Raizal	Raizal	% Palenquero	Palenquero	% Otro	OTRO
BUENOS AIRES	24,45%	7.900	65,56%	21.183	0,01%	3	0,04%	13	0,01%	3	7,93%	2.562
CALDONO	74,97%	31.571	0,31%	131	0,00%	0	0,00%	0	0,01%	4	24,20%	10.191
CALOTO	50,32%	15.326	25,18%	7.669	0,00%	0	0,02%	6	0,02%	6	23,52%	7.163
CORINTO	40,82%	10.467	11,41%	2.926	0,01%	3	0,02%	5	0,00%	0	45,86%	11.760
GUACHENÉ	0,31%	63	95,43%	19.258	0,00%	0	0,01%	2	0,00%	0	3,84%	775
JAMBALÓ	98,58%	18.454	0,18%	34	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,99%	185
MIRANDA	17,92%	5.796	27,39%	8.859	0,00%	0	0,01%	3	0,00%	0	54,13%	17.508
PADILLA	0,78%	79	94,93%	9.561	0,00%	0	0,00%	0	0,02%	2	3,49%	352
PUERTO TEJADA	0,02%	8	95,27%	40.133	0,00%	0	0,01%	4	0,02%	8	3,88%	1.634
SANTANDER DE QUILCHAO	25,78%	29.370	22,90%	26.089	0,01%	11	0,01%	11	0,01%	11	50,58%	57.623
SUÁREZ	22,79%	7.473	56,13%	18.406	0,01%	3	0,01%	3	0,00%	0	20,75%	6.804
TORIBÍO	97,71%	36.147	10,00%	3.699	0,01%	4	0,00%	0	0,00%	0	1,83%	677
VILLA RICA	0,08%	17	93,71%	20.150	0,00%	0	0,00%	0	0,01%	2	5,73%	1.232
<b>TOTALES</b>	<b>35,43%</b>	<b>162.672</b>	<b>38,79%</b>	<b>178.098</b>	<b>0,01%</b>	<b>24</b>	<b>0,01%</b>	<b>48</b>	<b>0,01%</b>	<b>38</b>	<b>25,80%</b>	<b>118.467</b>

**BASE DE DATOS NORTE DEL CAUCA**  
**Fuente: Elaboración Propia con base en información de UARIV (2021)**  
**Municipios (Población, Distribución Étnica)**

MUNICIPIO	VÍCTIMAS <i>Fuente: elaboración propia con datos del Reporte UARIV (2021)</i>							
	TOTAL # VÍCTIMAS	% del TOTAL Hbts	AFRO # Víctimas	% del Total AFRO	INDÍGENA # Víctimas	% del Total INDÍGENA	OTROS # Víctimas	% del Total Otros Hbts
BUENOS AIRES	21.956	15%	7.858	36%	3.799	17%	10.299	47%
CALDONO	8.088	6%	100	1%	4.332	54%	3.656	45%
CALOTO	12.294	9%	1.542	13%	4.168	34%	6.584	54%
CORINTO	15.590	11%	1.018	7%	3.775	24%	10.797	69%
GUACHENÉ	645	0%	384	60%	12	2%	249	39%
JAMBALÓ	9.613	7%	36	0%	8.301	86%	1.276	13%
MIRANDA	10.440	7%	663	6%	3.013	29%	6.764	65%
PADILLA	687	0%	278	40%	32	5%	377	55%
PUERTO TEJADA	4.365	3%	1.708	39%	47	1%	2.610	60%
SANTANDER DE QUILICHAO	14.075	10%	2.125	15%	2.319	16%	9.631	68%
SUÁREZ	24.811	17%	10.252	41%	6.187	25%	8.372	34%
TORIBÍO	19.591	14%	136	1%	15.340	78%	4.115	21%
VILLA RICA	1.489	1%	856	57%	35	2%	598	40%
<b>TOTALES</b>	<b>143.644</b>	<b>100%</b>	<b>26.956</b>	<b>19%</b>	<b>51.360</b>	<b>36%</b>	<b>65.328</b>	<b>45%</b>



## ANEXO 2

A continuación se relacionan las transcripciones de las entrevistas que se realizaron en el marco de la investigación, cabe resaltar que sobre las últimas dos, al no permitir las personas la grabación, se ponen de presente las preguntas realizadas.

### 1. Entrevista 1

Líder social campesino (*Entrevistado 1*), entrevista en profundidad realizada el 26 de septiembre de 2019.

**Quisiera saber su historia de vida y el contexto en el que se fue desarrollando su vida, porque principalmente su historia tiene que ver con el contexto con el que se ha desarrollado. Quisiera que usted me cuente como ha sido su historia de vida en el contexto del conflicto, en el conflicto de la paz.**

Toda la vida, nací y viví en Caldon, nací en 1960 y la situación de Caldon, era un pueblo muy calmado, donde no se respiraba sino tranquilidad en los años 60 que yo recuerde y lo 80 no pasó nada raro, pero de lo 80 para adelante se dañó todo con la llegada de los grupos armados y la delincuencia común.

El primer grupo armado que llegó fue el M19, yo le decía a la gente que ellos tienen una estrategia de llegar todos. Cuando el M19 llegó a Caldon, en la geografía del municipio le corresponde 27 km sobre la panamericana, la vía internacional que pasa por Ecuador. El grupo m19 llegó y cogía las tractomulas con leche y repartían la leche entre la gente, a toda la gente del pueblo, la gente Salí con olla a recoger leche, entonces la gente decía que el grupo tenía unos ideales muy buenos, era chévere. Eso era para la época de diciembre. Y luego cogía las tractomulas que traían enlatadas, atunes, macarelas y también hacia lo mismo. La gente decía que qué chévere que el grupo hubiera llegado y así fue que se entraron. Después cuando empezaron los asesinatos y todo eso la gente se dio cuenta de que eran un grupo armado y pues que igual los ideales al principio fueron bueno, pero se les dañaron, según los dirigentes.

Luego de eso hay un sitio que es clave en Caldon que se llama pueblo nuevo, es un corregimiento, está a 25 km de la cabecera de Caldon hacia la montaña, o sea hacia el oriente. Y, ese grupo se comenzó a desmovilizar en pueblo nuevo, el M19, y entregó las armas en Toribío, es el municipio más atacado por la guerrilla en Colombia y creo que en el mundo, después de ese sigue Caldon. O sea, cuando en Toribío llevaban 66 tomas guerrilleras, apenas comenzaron en Caldon. O sea, es una diferencia, nosotros llevamos 248 tomas guerrilleras y en Toribío llevan más de 400. Esos dos municipios tienen ese algo en común. El M19 se desmovilizó allá, en ese municipio en una vereda que se llama Santo Domingo, eso fue como en el 86 o el 88. Si mal no recuerdo.

Después de que se desmovilizó el M19 se armó un grupo que se llama CAQL que es Comando Armado Quintín Lame. Ellos, a ver, que hay de especial en ellos, la mayoría son indígenas. Y son de los que se desmovilizaron del M19, es decir, se pasaron a otro bando. Entonces yo les digo es que se cambiaron fue de brazaletes. Ese grupo era muy violento, pero afortunadamente no duró mucho, ellos si se desmovilizaron en Pueblo Nuevo,

**\*¿en el 91 o antes?**

— algo así. O sea, no duraron mucho como 4 o 5 años, pero en ese tiempo cometieron muchos asesinatos, en ese tiempo ellos mataban líderes indígenas e igual líderes campesinos. El

problema de esa época y siempre ha sido, era la tierra. O sea, la falta de tierra es el mayor problema en el Cauca.

**\*O sea por qué la tierra**

- es muy escasa

**\* o sea ¿cómo así? ¿las guerrillas que se han venido tomando el pueblo como tal o que han afectado el pueblo como tal, ¿ha sido por qué? ¿por querer apropiarse de la tierra?**

– Si, claro. Yo digo que el detonante de la violencia en Caldon y en el Norte del Cauca es la falta de tierra, entre paréntesis “falta de tierra”, porque la tierra está muy mal repartida diría yo. Es más, los mismos indígenas, hay muchos de ellos que son latifundistas, tienen una tierra que es improductiva, pero la tienen ahí. O sea, la ideología es tener tierra aunque no produzca, es tener tierra y eso les hace ricos, entre paréntesis. Pero no producen ni para comer lo que ellos necesitan. Entonces nosotros los campesinos somos más pequeños en grupo, pero la tierra que tenemos la producimos, claro. Y entonces se produce más para todos, para nosotros mismo y para vender, para el comercio. Entonces es como esas dos diferencias.

En esa época se dieron como un auge las invasiones, nosotros los campesinos les llamamos invadir la tierra o sea veían la tierra de unos colonos, de unos campesinos propietarios y ellos se le metían ahí hasta que lo desalojaban.

**\* ¿la guerrilla y el Quintín Lame?**

– Era parejo, o sea cualquiera, la mayoría eran indígenas, ellos en el cabildo le llaman no invasión, sino recuperación de la tierra o saneamiento ¿Qué es saneamiento? Que dentro del resguardo no debe haber ningún territorio de campesino. Entonces ellos o le compran o lo sacan, o bueno, pero esas tierras tienen que pasar a manos de un indígena. Pero en la organización, oligarquía le llamo yo, en la organización indígena que es una oligarquía, hay personas marcadas de esa organización indígena que son los que lideran esa recuperación de tierras y ellos son los que se quedan con la mayoría de las tierras que van recuperando. Por eso hay tanto latifundista. \*Se vuelve un negocio. – sí, eso allá internamente, que no lo conoce mucha gente es un negocio. Ellos por ejemplo tienen la intención de coger las tierras productivas del norte del Cauca que es la caña de azúcar, y son emporios, gente que tiene mucho poder económico, entonces es que comienzan los paramilitares.

**\*y en Caldon la población indígena ¿es grande? ¿es poca?**

– es bastante

**\* ¿hay un resguardo cerca?**

– hay 6 resguardos, pero hay 6 cabildos, porque estos los 6 primeros son indígenas y el séptimo es Misak que es el de los guambianos que es el que funciona en Siberia. Entonces eso está ahí calientico porque hay problema entre los indígenas y los guambianos. \*¿y los guambianos son indígenas también? – son indígenas de la etnia de Silvia que tienen un vestido azul y ahí si la diferencia es marcada porque los guambianos en el pedacito de tierra que tiene producen, son como hormiguitas produciendo papá yuca, todo el producido de Silvia usted ve que la parte de arriba es la más productiva. \*y la etnia que es la mayoritaria, qué es la que no produce ¿cómo se llama? – Nasa, o paeces le decimos nosotros. Mire son diferencias muy este y ahí siempre habrá en un grupo, en una organización gente que lidera, pero pal bien particular propio y la demás gente está mal. Es muy difícil a uno le toca vivir esa que uno ve la economía de la gente es muy pobre, no hay proyectos de vivienda, hay gente que legalmente no tiene vivienda, sino que tiene un ranchito y llevan años viviendo en ese ranchito y han

pasado las organizaciones y hay gente que tiene dos, tres casas, hay gente que tiene casa en Popayán, en Cali, de los dirigentes, pero de la base allá, siguen en sus ranchitos. Entonces también hay una, no es que la gente acá tiene ese concepto de que los indígenas son bien y todos están bien, no... es complicado.

**\*sucede lo mismo que con la población que no es indígena, que la oligarquía se queda con la plata, mientras que hay gente que está pasando por necesidades muy complicadas.**

– eso es, es la misma actitud y entonces los de allá critican a los campesinos y bueno eso es un yeitre, pero la situación es la misma no hay salud, no hay educación, no hay vías, los recursos son escasos y la población mayoritariamente acá es la niñez. O sea, las escuelas, todo eso.

**\*Y bueno entonces, me dice que los primeros grupos armados que estuvieron, que afectaron Caldonon fueron el M19 y después el Quintín Lame.**

Bueno, después llegó otro que se llama CRF, es el comando Ricardo Franco, ese grupo yo pienso que llegó como a actuar pagado por el mismo gobierno o por la sociedad y ellos, ese grupo era muy violento, sanguinario, hacia fosas comunes y ahí los mataba los enterraba.

**\*¿y esto no hizo parte de la Autodefensas, sino era diferente?**

– era diferente.

**\*¿o sea era un paramilitar pero diferente?**

– para nosotros este fue o yo digo que fue el primer grupo paramilitar que llegó a Caldonon, gracias a Dios no llegaron más y si usted ve la historia del Cauca está la masacre de Tacueyó, una de las más conocidas de ese grupo y en Pueblo Nuevo hay dos fosas comunes de ese grupo. Esas fosas yo me imagino que son entre soldados, guerrilleros y civiles. Ese grupo alternadamente llegó como en el 85 el 86.

**\*O sea que fue después de la desmovilización del M19.**

– Si ahí ellos estaban ahí, por eso es que uno no sabe. Yo me imagino que había de ambos o de todos. Luego de esos tres es que llegan las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) hasta ahí, no hay EP. Es FARC, este pedacito no más. Y también la entrada de ellos es triunfal (interrupción por una llamada telefónica que le entra a [REDACTED]). Las FARC llegaron y... todavía hay población indígena que dice que las FARC fueron como una bendición, que llegaron. Comenzaron y tal vez ellos acabaron con el CRF, puede que sí, puede que no, pero entonces ellos comenzaron... (interrupción por una llamada telefónica que le entra a [REDACTED]).

**\*Bueno entonces, íbamos en las FARC, estábamos en que todavía no eran EP y que llegan a Caldonon.**

Entonces la gente dice que ellos aplacan todo esto, lo que quedó de los tres y en el último ellos son como la salvación. Pero luego comienzan a hacer lo mismo, o sea, a secuestrar personas, a hacer las famosas cuando le piden plata a la gente **\*la pesca milagrosa.**, se llevaban los niños. Entonces, también fueron un engaño a la entrada y después comenzaron igual que todos. Ellos duraron más, pues imagínese, desde más o menos el 88/90 hasta en Caldonon, hasta el 2014, que todavía no ha terminado porque ahí hay disidencias. \*en Caldonon todavía hay disidencias. – Si, claro hay un grupo. (Interrupción por parte del director del documental).

**\*¿Entonces en Caldonon todavía hay disidencias?**

– Si, claro. Eso es como las brujas, yo no las he visto, pero que las hay las hay. Entonces ahora es complicado por eso. Yo ahora no puedo andar tan tranquilo y la seguridad es pésima, entonces es eso.

**\*Bueno y ¿cómo fue - ya hablando de las FARC como tal- todo ese proceso dentro del municipio y la afectación que hubo a la población civil que vive en el municipio?**

Bueno, a ver las FARC fue de esas 248 tomas guerrilleras al municipio, la mayoría son de ellos porque, que le digo a ver, ya no solamente atacaban el centro, sino todo el municipio, hay tomas guerrilleras en Siberia, en el pital, en la panamericana, en pueblo nuevo, en pioyá, o sea la gente, dice cómo que en pioyá si es la montaña, es lo más alto, pero para que tenga una idea Caldonio (Mostrando en un mapa) digamos este es Caldonio, entonces aquí esta pioyá. De aquí para aquí es Caldonio, aquí está el centro urbano, aquí hay 87 veredas, en todo el municipio y hay 8 corregimientos, este, los corregimientos de la zona alta son plan de zuñiga, la guada, pioyá y pueblo nuevo. Y las FARC andaba todo esto y hacia abajo esta Jambaló que es otro municipio.

**\*Pero digamos esto que es pioyá, pueblo nuevo ¿son corregimientos de Caldonio? O sea, pertenecen al municipio.**

– ajá, y acá esta Silvia, esto es ya el oriente. \*Que es de dónde son los guambianos. – hasta acá, acá está pescador, no, el pital y acá esta la entrada a Caldonio que es pescador, esta es la panamericana, entonces cuando hacen la minga, aquí tapan. Entonces toda esta gente baja aquí, entonces son 12.000 – 15.000 indígenas, quien los guiaba las FARC, entonces acá sigue el norte, acá sigue mondomo y Santander de Quilichao. Entonces esto es un corredor y acá esta Caloto, está corinto, Miranda.

**\*¿y esta zona toda es montañosa?**

– Todo es montaña. Entonces la pregunta es ¿por qué las FARC atacó 248 veces a Caldonio, acá no hay ricos, los ricos están acá en el norte, dónde están los ingenios. Este es un paso, un corredor, le digo yo, un corredor obligado del narcotráfico. Acá esta Corinto, Jambaló, está Toribio, entonces la droga pasa por aquí, acá esta la policía.

**\*claro no la podían pasar por la panamericana entonces la pasaban por la montaña.**

- Entonces cuando el gobierno manda el ejército se hace aquí y este sitio es clave, se llama... hmm, pero aquí se llama ahora me acuerdo. El que llegara primero acá ganaba, entre la guerrilla y el ejército, si el ejército llegaba primero y se hacía aquí. Entonces cuando ellos pasaban el corredor acababan con la guerrilla, pero a los este venía la otra, llegaba primero la guerrilla y acababa con el ejército y en las noticias a penas, hubo 3 soldados muertos, mentiras, no quedó nadie. Eso era parte y parte y población civil. Eso estas zonas son muy afectadas, estos y acá sigue pueblo nuevo, entonces yo tengo una teoría de Caldonio, de Caldonio usted aquí del parque de Caldonio usted puede llegar a Bogotá por la trocha, sin pasar por la Panamericana. O sigue por acá se sube a Silvia, a Mosoco, el Huila, el Tolima y llega a Medellín o a donde quiera. Y mire la panamericana por donde va. Entonces la guerrilla se hizo tan fuerte en eso. \*¿aprovecho Caldonio para el tema del narcotráfico? – y si, y entonces a Caldonio, al principio no lo afectaba, pero después cuando se les metieron los otros grupos ya narcos, claro, ellos empezaron a atacar pa poder, y ya me acordé esto se llama, solapa, si usted revisa las noticias, la guerrilla tumbó un avión un 1000 y H, eso un cazabombarderos, imagínese, era tan fuerte la guerrilla.

**\*¿y eso más o menos en que época fue?**

– yo creo que del 2005 pa delante, donde ya las tomas no eran aquí no más sino en todo el territorio. Por eso, por el poder de este corredor. En eso se desarrolló la vida de Caldon, sostenido con ello. ¿Cuáles eran las armas de ellos? Primero los cilindros. Esos cilindros que uno utiliza del gas para cocinar, ellos los utilizan para eso. Cilindros de 100 libras y de 40. Estos de 100 libras cuando caían, toda la manzana la acababan. No quedaba una sola casa. Entonces mire un pueblito de 6 barrios. **\*destruido, desaparecido.** – Estas tumbaban 5 casas de una, y también las ollas a presión que uno utiliza para cocinar, también. Acá los de acá arriba los guambianos, ellos utilizan las tinas para echar la leche, eso también lo llenaban ellos, eso era más mortal, era peor. O sea, ellos todos lo que esto... y, estos cilindros los llenaban de hierro, clavos, puntillas, piedra, tiner, porque si caía en una parte el tiner se prendía y pues causaba incendio, pero lo que más duro de todo esto que le echaban, era que le echaban el popó, o sea el popó de la gente, es que eso produce en una herida, produce gangrena. O sea, a mi me hace una herida puede ser pequeñita, pero si tiene el popó, le da gangrena y hay que cortar aquí y aquí. Entonces a eso le tenían miedo los soldados y a la gente, imagínese quien quiere tener eso. Esas armas no convencionales fueron muy violentas, y después, implementaron en el 2005, ellos dicen: “estrenaron los tatucos”

**\*tatucos ¿y qué eran los tatucos?**

- los tatucos son de diferentes tamaños, es un tubo de pvc o un tubo de hierro y puede ser de 50 cm, de un metro o del largo que, y los tiraban, por un tubo que era estos cilindros, entonces aquí lo montaban y lo tiraban, o sea, que hacían ellos, una rampla ¿no? Entonces aquí colocaban un palo una horqueta aquí y aquí hacían un hueco y esto lo llenan de pólvora y aquí ponen el cilindro o el tatuco y este sale así por ese tubo.

**\*disparado. Y a dónde fuera.**

– a dónde fuera, eso no tiene dirección, o sea cuando explota así, este tubo que está aquí puede caer pa acá, entonces el disparo en vez de caer al puesto pues caía a las casas, no tenía dirección, ni pa ellos, muchas veces eso estalló y ellos mismos morían, entonces por eso hay gente mutilada. Esto es, el pueblo de Caldon se acostumbró, nos acostumbramos, a los disparos de fusil, no afecta, o sea pa pa pa.

**\* O sea normal y no se sabía quién era.**

Si no, pero la gente está acá y ¡ah! Comenzaron a disparar y usted sigue normal en lo que está haciendo. Nos acostumbramos después de tanto a los cilindros, también, porque uno oía cuando venían y decían: abran la boca y pum, porque si usted cierra la boca se estalla, si usted se tira al piso y pone el estómago en el piso estalla porque la onda explosiva lo estalla. Pero a esto nos acostumbramos, pero a los tatucos si no, estos tatucos iban sin dirección uno no sabía para donde iban. Que obligo con estos, los desplazamientos masivos, fueron muy grandes, creo que unas seis veces el pueblo quedo vacío, porque ya cuando los desplazamientos eran a la madrugada la gente salía como estaba, no les importaba que estuvieran desnudos porque primero la vida y con los niños, bueno eso sí.

En el 2005 fue la toma más violenta que hubo, ya habían pasado por ahí unas 180, 200 tomas y eso fue el 5, no el 3, 4 y 5 de julio de 2005. **\*y fue una parte de...** - De las FARC. Y llevaron estos cositos y con esos tiraron \*los tatucos – sí. Aquí en el centro en el casco urbano de Caldon, hoy hay una venta de gasolina, una estación, aquí cuadraron un carro con todos esos y aquí distribuyeron aquí hay una galería y de aquí tiraban a aquí que quedaba el puesto de policía y al puesto de policía no le pasó nada, pero toda esta zona se acabó. Entonces la gente que pudo se fue, se fue. Fue domingo, lunes y martes, tres días. Que hacía la guerrilla en esos días: don [REDACTED] (toc toc toc) a la puerta, don [REDACTED] lo necesita en comandante de la guerrilla, y

pues tenía que salir porque igual si no salía me sacaban. Don [REDACTED], es que necesitamos que vaya que hay unos heridos para que los vaya a llevar al hospital. O sea, creo que eso me mantiene vivo, yo llevaba a los heridos de la guerrilla del ejército, de la policía y los civiles míos, la gente común. Yo pago decían, no, gracias a dios no murieron muchos.

**\*y el hospital más cercano ¿dónde quedaba?**

– el hospital quedaba a ver, esta es la entrada esta queda como aquí más o menos. Es en el pueblo (se refiere a la zona de la cabecera municipal, la zona más urbana), pero es un hospital de primer nivel. Con seis, yo recuerdo tanto que una vez yo lleve 6 heridos, 6 policías heridos y el hospital colapsó. Bueno, aquí enseguida del hospital hoy, había una escuela urbana de niños. En la primera toma, en la segunda toma, acabaron con esto

**\* en la segunda toma o sea ¿eso fue en los años 80?** – En el 97. O sea la primera fue el 09 de febrero **\* pero de las FARC.**

– Ajá.

**\*Ok, entonces fue en el 97 la primera toma.**

– y destruyeron el puesto de policía, acá arriba, lo acabaron, y, entonces a los 15 días volvieron otra vez, mire, en ese mismo mes dos veces y acabaron con este y el alcalde como ya no había estación paso los policías a este. **\* o sea a la escuela...** - Claro, y acabaron con eso, mataron soldados, policías, personas civiles, guerrilleros, eso hubo de todos, fue una de las tomas que uno no. Esta, mire aquí está es hospital y aquí está pegado, o sea los separa una pared, imagínese pasar heridos de aquí aquí, era más fácil pasar los médicos a curar aquí (dice entre risas) pero no había nada, no quedó sino el piso. Bueno, ahí siguieron las otras tomas y en los dos mil... hay otra que, hay muchas, pero en el 6 de junio de 1989 no de 1999, aquí había, aquí está el puesto de policía, ya no había, aquí había otro colegio, no el otro, este era de niñas, era el más grande, ese día este colegio lo destruyeron y acabaron con todos estos barrios, eso ya no habían dos escuelas, entonces quedaba solamente un colegio acá, el colegio Susana Troches de Vivas que todos los estudiantes de aquí de aquí, aquí terminaron las clases, mientras se volvieron a construir. Pero hay un récord del este alcalde y es que en 6 meses construyó la escuela.

Entonces le cuento ahora sí, así como le estaba explicando acá, aquí en solapa o trincheras, el que llegaba a esa loma primero, ganaba ¿no? Aquí en Caldono, aquí en la cabecera, pasaba lo mismo, aquí en esta loma, aquí hay un camino y esto se llama el cerro de Belén y esto si quiero que lo tenga en cuenta porque para nosotros es muy importante. Es un emblema ahora. La guerrilla llegaba aquí y de aquí hacía lo mismo que acá, tiraba los cilindros (y mire lo cerca que está) y acaba con el pueblo. Entonces esta, si llegaba el ejército primero, eso la pelea era durísima, eso de acá les mandaban igual los que no pegaban acá pasaban acá. Este cerro de belén es un emblema de Caldono porque los caldoreños queremos que ese sea un sitio y estamos lográndolo, un sitio de reconciliación y paz, como fue de guerra, entonces lo estamos transformando.

**\*¿La población civil? O ¿con ayuda de los desmovilizados y del Estado?**

- Aja, a ver el Estado NO.

**\*¿entre ustedes y los desmovilizados?**

– la población civil, los excombatientes, los cabildos ahí si están todos, los campesinos, indígenas, la guardia indígena que usted yo creo que distingue cual es la guardia indígena, es la está de los indígenas y ahí hay niños, mujeres de todo, los colegios van ahí. Hacemos

mingas, trabajamos para subir, como es un alto, hay que subir la piedra, el cemento todo y de unas ONGs son las que nos dan los recursos. \*¿y qué ONGs? – El CINEP, es de aquí de Bogotá, la ARN, que es la Agencia para la renovación y la reincorporación, ¿no?

**\*¿Pero esa es del Estado?**

– si, esa es del Estado, cuando yo le digo que el Estado no, es el Estado de Caldon, el Estado del municipio no ayuda para nada.

**\*Ya, o sea es el ejecutivo de Caldon, la alcaldía no está ayudando. Pero viene todo lo que se ha implementado para la paz, esa agencia para la renovación y la reconciliación ¿tiene que ver con el acuerdo de paz?**

– Si, claro. ARN, es, también va la ART, entonces con ellos hemos hecho cosas y por ejemplo yo, me encanta lo que estamos haciendo, y como yo no estuve el pasado viernes, hicieron la inauguración de la segunda etapa. De ese, de Belén. Y ellos me mandaban cosas y decían Farid, y yo no, no puedo estar, yo estoy muy lejos, pero háganle que eso no es mío, eso es... aquí no ha ayudado bastante un padre que es un peladito como de 32 años. A él le tocó la violencia en Caldon, entonces está \*¿y él es de Caldon? – sí, él es de Caldon, él es como el hombre de confianza mío, yo consigo la plata y él es como tenga mijo la plata, ejecútela. Y es un grupo que no uy, y es muy honesto y a pesar de ser muy jovencito uno sabe que él es como la clave. (me estaba intentando mostrar en su celular las fotos del cerro de belén, pero no tenía espacio en su celular entonces no cargaban las fotos). Ellos, cerro de belén tienen una cosa especial (un grupo en whatsapp), eh, aquí está. Mire, se llama yo amo a Caldon, entonces todo esto es belén, entonces todo esto es lo de la guerra y hay unas gradas, entonces estas gradas a penas las inauguraron el día este que pasó, entonces me mandaban las imágenes. Esto para nosotros tiene un valor muy, como muy importante, no, no sé.

**\*Y entonces ¿han trabajado en equipo?**

– Si, ahí hemos reunido a todos. Ahh las iglesias evangélicas también están ahí, o sea no se quedó nadie por fuera. No, es que la paz tenemos que buscarla entre todos. No, pues ese es mi lema

**\*¿y excombatientes también?**

– También, sí. Mire que los excombatientes, los comandantes, ellos, yo subo a Pueblo Nuevo, digamos el domingo o voy a estar si dios quiere en Pueblo Nuevo y ellos me dan hasta remesa. Mandan gente a trabajar, es que vos sos loco me dicen. Aquí si está, mire (me muestra en su celular las fotos del cerro de Belén de lo que han ido trabajando entre todos). Las gradas, entonces por aquí, es para que la gente adulta se apoye y suba y baje, son. **\*O sea es como un sendero para subir al cerro.** – eso, es un sendero para subir al cerro, y necesito es hacer la puerta, pues ahí hay una portada, pero quiero hacer una puerta de madera bien bonita. Eso es. ¿Qué quiero hacer arriba? Un mirador, me dicen que yo estoy loco, pero hay que hacerlo. El mirador quiero hacerlo allí arriba una torre bien alta, una donde pueda la gente, este es... (me muestra una foto de cómo está quedando el sendero). **\*Si, está quedando muy bonito.** – Claro, al ver la gente y le damos un informe, se llegó tanta plata, nos la mandó tal persona, recogimos. Yo por ejemplo el día sábado voy y recojo remesa en la galería para la minga del lunes. La gente que me da plata, entonces yo apunto el nombre, con eso compramos la gasolina que haga falta, se paga a los trabajadores. **\*Materiales...** - Todo, yo le digo al padre que a la gente lo que le interesa es saber... **\*Como se está invirtiendo eso.** – Esa es la clave, usted no puede coger y no recoja plata y no... **\*Actuar con transparencia.** – Yo creo que esa es la clave de todo.

**\*Bueno entonces, y cómo tal de la implementación de lo que a nivel nacional está en los acuerdos de paz, no sé cómo se vea reflejado allá en Caldonó el tema de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la JEP ¿Cómo se ha venido manejando todo ese tema en el interior del municipio?**

– Mire que la JEP, la JEP fue la primera que llegó a Caldonó, o sea, yo me encargué de llevar un señor, él es amigo mío que trabaja allá en Popayán, se llama Álvaro. Yo creo que el lleva por ahí entre unos dos y tres años, él si ha estado conmigo allá y bueno yo, todos estos proyectos él le dice al padre: padre, ¿a usted ya lo bautizaron? Es pequeño, pero es muy este. Entonces el comenzó. La JEP fue la primera que llegó allá y en las reuniones de víctimas y en el campamento, yo lo llevé allá, o sea el está muy pendiente. Cuando llegó el gobierno, este nuevo gobierno de Iván Duque, se acuerda que había seis objeciones para la JEP. **\*Si.** – Yo denuncié eso, pero nadie sabe que yo lo denuncié. Yo sostengo que, si se acaba la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, se acaba el proceso de paz. No puede acabarse, y hace antes de venirme, hace 15 días estuve reunido con la Comisión de la Verdad, o sea que es la primera vez que llega. **\*¿Hasta ahora llegó a Caldonó?** – Hasta ahora a penas. **\*Eso fue hace 15 días, como la primera semana se septiembre.** – Ajá, más o menos. O sea, mire la lentitud con la que se maneja las cosas en Caldonó. **\* ¿y cómo es el mecanismo ya en la comisión de la verdad? ¿qué le preguntan? ¿qué soluciones le dan? ¿qué le dicen?** – Todavía no sé. **\* O sea, ¿simplemente se entrevistó con ellos?** – Si. **\*¿y ya?** – y ya, o sea, por ejemplo, me dicen ahora, me llaman que tengo que organizar, de cada grupo de víctimas 5 representantes que digan, que cuenten. Y yo con eso no estoy de acuerdo, pienso que tiene que ser cada persona, así sean mil o 10 mil hay que, porque cada uno tiene su verdad y yo no puede decir, yo soy, yo me creo un líder de Caldonó o no soy que me crea, me volvieron líder, yo no puedo contar los que 4... yo soy de 460 familias víctima, que están en mi grupo yo no puedo contar lo de 460 familias, ni siquiera de una de esas familias, ni de la mía porque cada uno siente o sintió la guerra de manera diferente y en sitios diferentes, entonces yo quiero es que eso lo hagan... entonces le ponen a uno el problema que la plata, a ni no me importa, que el tiempo. No, esa comisión de la verdad tiene que ir y es individualmente y con el tiempo necesario, y que también tenga un apoyo psicosocial porque es que no es fácil contar la verdad. En el grupo que yo tengo y es muy claro que los psicólogos, yo los felicito y son parte muy activa, pero un psicólogo pretende en dos minutos solucionar lo que la gente vivió en cincuenta y pico de años. **\*Claro, es un proceso.** – Es un proceso, y, a penas la otra, o sea que está sería la segunda, y la otra a penas empezamos a organizarla y eso que cuando subíamos con don Álvaro en de la JEP al campamento.

**\*¿Cuándo usted se refiere al campamento, se refiere a lo que en un principio eran las zonas veredales?**

– ETCR, a las zonas veredales, ahora son ETCR (Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación). **\*Eso es lo que eran las zonas veredales.** – Las zonas veredales eran Zonas Veredales Transitorias de Normalización, pasaron a ser eso, ahora que se van a acabar los ETCR les cambiaran el nombre. Ayer cuando estaba allá les decía lo único que el gobierno hace es cambiar de nombre, pero es la misma cosa. No hacen nada.

**\*Ok ¿y ahora por qué les van a cambiar el nombre?**

– es que ahora que pretende. A ver en Caldonó no hay una sino hay dos. Una, la que arrancó de primero está en San Antonio, eso queda en Pueblo Nuevo, acá arriba San Antonio, Pueblo Nuevo. Esa es la zona veredal una **\*¿y la segunda?** – la segunda está acá cerquita a Caldonó, cerca de Belén se llama Santa Rosa, esa es la otra. Entonces en lugar de una hay dos.



**\*¿y cómo han funcionado las cosas en esos espacios?**

– pues con este señor de la JEP, con DIPAZ, con PaxHolanda, MenColdes y con universidades nosotros subimos allá y nosotros llamamos y capacitamos a la gente, ya luego llegó el SENA, luego llegó el Bienestar Familiar, la Registraduría y le dimos un poco de organización y apoyo a ellos. Yo luché mucho fue por los niños a mí me preocupaban los niños porque es que la guerrilla le hizo un gol al Estado, cuando comenzó eso, se acuerda que eran, el tema del proceso de paz era por días, que el día 180, que el día 190. **\*Si, y por puntos también.** – Cuando ellos llegaron y dijeron que aquí no hay días porque ustedes no habían tenido en cuenta la guerrilla ya normalmente como hombres y mujeres tenían relaciones familiares, digo yo y entonces ya tenía niños y el Estado nunca contó con esos niños. **\*Los niños que son de matrimonio entre ellos** – o de uniones libres. Entonces con esos niños no contaron. Yo recuerdo que eran 63 niños, ese fue el primer problema para el Estado y entonces yo recuerdo que estaba yo con un periodista de acá de Bogotá, de la presidencia y le dije que me ayudara a conseguir filtros para por lo menos esos niños agua potable. Y fue lo primero gracias a dios que logramos. Y, luego vine a Popayán y ahí viene al ICBF y con ellos ya nos fuimos, miren que son niños... Y hay otra entidad que se llama con lo de los niños, algo no recuerdo ahorita, ellos también estuvieron allá. Entonces ya también empezaron a repartir para ellos y para los grandes también. Pero ya llegó Bienestar y ya exigió una casa para solamente para estos niños. **\*dentro del espacio.** – Dentro del espacio. Y esa casa no sé, ahí si yo no sé si todavía la paga Bienestar porque es arrendada.

**\*¿pero ya la construyeron? Ah bueno ok, la arrendaron**

– yo no sé eso ahora como funcione. \* O sea que los niños no viven con los papás. – no, no.

**\*¿o no se sabe cómo funciona eso?**

– yo más bien ahorita que son ETRC sí, porque ya hay casas unas casas que hicieron, pero eso se demoró mucho. Cuando le digo yo de esta casa como una cuna, sala cuna, digamos. \*

**Si, digamos como una guardería.**

– Si, exacto como una guardería, yo le estoy hablando de los primeros días de eso, se imagina que subía con Jaap, la mayoría de las veces subía solo. O sea, los comandantes creo yo que me tienen un aprecio es por eso. Ellos vivían todavía en esos cambuches, con plásticos y el piso la camita era puro helecho, pura hierba. Entonces imagínese a mí me dolía que estos niños también estuvieran ahí. **\*En esas mismas condiciones.** – y en ese invierno que tocó. \*¿Eso más o menos en qué época fue? ¿fue el año pasado? – No mami, eso fue el primer año cuando comenzó, como en el 2016. O sea, el gobierno pintaba acá el wuff y el Colombia y el mundo, la guerrilla está en hoteles 5 estrellas. \*Estaban en el monte. – Estaban en el monte.

**\*Y... esto de los niños que usted me dice ¿en qué año ya se hizo efectivo?**

– en ese año, en el 2016 comenzamos.

**\*O sea, todo fue gracias a la gestión que ustedes hicieron.**

– lo primero fue con ellos y... comenzar a capacitar a esta gente grande con el SENA, con ellos. O sea, usted sabe que lo primero que le llama a uno la atención es los computadores, es a manejar eso y el SENA ahí se fue metiendo y estos de estas dipaz y estas iban llevando otras capacitaciones. O sea, era mantener a los excombatientes ocupados ahí toda la semana. Porque el día sábado y domingo usted no encuentra a nadie, todos se van para las casas. Es que una cosa que no le he dicho es que la mayoría de ellos eran, o son de Caldono, entonces ¿pa dónde se van a ir? Y por eso es que al gobierno le fracasa, le tiene que fracasar ese

intento que tienen de acabar con estos ETCRs y llevarse a toda la gente de acá para Santander de Quilichao ¿por qué? La pregunta mía es ¿por qué ahora si se los quieren llevar?

**\* O sea, ¿quieren acabar esos dos espacios que hay y fusionarlos en uno solo, y moverlo a otra parte?**

– y, en primer lugar, yo soy muy atrevido y pienso que hay algo de corrupción ahí ya, porque no es la seguridad y el bienestar de los excombatientes, sino que deber haber dinero por debajo. Atrevidamente lo digo así. Lo otro, la mayoría son indígenas. Indígenas nasa que han vivido su está allá y los van a traer acá en medio de los afros, que no tengo nada contra los afros tampoco, porque es otra etnia que también ha sufrido las mismas condiciones, pero no, ellos nunca se van a llevar a cabo, ellos nunca han hecho una empatía. O sea, los indígenas y los afros no se llevan bien. **\*Como el agua y el aceite.** – y eso no es de ahora, eso es por generaciones. Entonces el gobierno no piensa en eso. Ahora, las condiciones, mire allá en Caldono el clima es templado y acá en Santander es muy caliente. Bueno, son muchas las condiciones.

**\*¿Cuáles son las razones que da el gobierno para querer trasladar?**

– eso estoy averiguando.

**\*O sea no hay un argumento que uno diga...**

- es que los vamos a ayudar, o algo así. Yo me iría siempre y cuando me dijeron es que ya les tenemos las casas listas, vea la casa suya es esta, la de y así, tal vez. Pero, la desventaja más grande fuera de la vivienda y del estudio es que, históricamente la comunidad indígena es agricultora, o sea, vive de la tierra, en Santander dónde hay tierra para que toda esa gente... **\*Haga lo que siempre ha hecho...** - Jmmm. No tiene razón de ser, entonces no sé. **\*Pero usted...** tengo una pregunta... como un poco más personal ¿usted tiene ascendencia indígena o...? – ujumm. Yo, por ideales digo que soy campesino, pero yo soy indígena y yo nunca lo he negado, yo soy. Lo que pasa es que yo digo que no estoy de acuerdo con muchas de las ideologías indígenas. Mmm, yo riño, peleo contra los ideales indígenas de que una niña que cumpa una cierta edad ya tiene que conseguir marido o tiene que conseguir marido, estoy muy en desacuerdo con eso, no me gusta. La niña, la mujer tiene que conseguir marido cuando a ella le dé la gana, no cuando le impongan, o sea, la cuestión ancestral para mí no es una camisa de fuerza. Que la niña si ya hace quinto de primaria ya tiene derecho a tener marido y tiene que conseguir marido, tampoco estoy de acuerdo con eso. Yo digo que eso es algo contra los derechos humanos y yo lucho por los derechos humanos de todos y más de los niños. Las niñas qué tienen que hacer perder los quintos, perder el quinto, perder el quinto para poder mantenerse virgen, libre, no, es que eso no. Lo ancestral, la tradición está a favor de los violadores, digo yo. Eso no me gusta. Y lo otro lo de los violadores me llama más, eso es lo que más me duele de la raza indígena porque es como una alcahuetería que el papá viole las niñas, las propias hijas y que no pase nada mano, esa no es, no, ellos tienen una concepción muy diferente, pero pa mi eso no es. Entonces yo por eso digo no soy indígena, yo soy campesino, porque yo me gusta la tierra y me gusta producir la tierra por lo menos lo que me voy a comer, aunque sea la hortaliza. Yo respeto los derechos humanos de la gente, de las mujeres más y de los niños, esa es mi diferencia. No tengo nada en contra de la organización indígena es chévere, pero estoy muy en contra de la corrupción porque también ya. **\*Como todo.** – No, no es porque lo diga yo es porque ya es un hecho, y hay mucha corrupción, imagínese, los peores llegan al senado.

**\*Bueno, y tengo otra pregunta... A mi Angela me había contado lo del documental, yo no he tenido la fortuna de verlo, pero me había contado más o menos de qué iba entonces**

**yo quisiera saber cómo ha manejado usted la información que tenía con respecto a los diarios que usted manejaba de las tomas guerrilleras, si eso se fue a la comisión para el esclarecimiento de la verdad, si se lo van a recibir, cómo es el manejo de esa documentación digamos a nivel, de claro, la medidas que se establecieron sobre verdad o si eso va a afectar en alguna medida la verdad, o si se va a tener en cuenta.**

– Yo pienso, no sé, hasta ahora no. Usted es la primera que me pregunta todo eso. A mi hasta ahora la comisión no se si lo irán a utilizar o de qué manera, no sé. Pero si, yo me dediqué, cada que había una toma guerrillera o estaba en una toma, mi herramienta es el lapicero y tener una agenda, un cuaderno, un libro y yo apuntaba todo, la hora, la fecha, todo. Pero hasta ahora no. No me han dicho que va a pasar con eso.

**\*¿Pero ellos tienen conocimiento de que ese material existe?**

– Si, claro. La mayoría la tienen. Hubo una como 4 hojitas que saqué, entre paréntesis, un abogado amigo me lo... o sea le colocó el nombre como si él lo hubiera hecho. Ahorita yo hice un proyecto y me tocó registrarlo y ya miré, hasta en eso, yo pensaba que la corrupción hasta allá no llegaba y si... Entonces ahora yo escribo y escribo con fechas diferentes y esa fue la prueba de que cuando yo le digo a usted de que la primera toma guerrillera fue, la primera toma de Caldonio fue el 9 de febrero del 97 y la segunda fue el 23 de ese mismo mes y de ese mismo año. Y el señor que me copió esto es tan bobo que yo dije que, yo no di la fecha, sino que dije que 15 días después la segunda en el 89. **\*y anotó lo mismo.** – (Farid entre risas dice) sí, así he hecho varias cosas, no es que sea tan bobo. Entonces que le digo, me gustaría que la comisión de la verdad tuviera esos documentos porque son...

**\*¿pero y qué fue lo que pasó con ese señor?**

– el me dijo que si yo tenía los datos en medio digital y yo no los tenía así entonces me dijo: “yo te los paso a un...” y el utilizo la herramienta de la sistematización en computador y como yo no, entonces lo organizó bien bonito. Pero claro, lo primero que acá decía hechos violentos más relevantes del municipio de Caldonio y decía el nombre de él y yo ayy no... y con eso el trabajó en la alcaldía y todo eso. Entonces claro, me dio como mucha rabia, entonces yo ahorita cuido todo, no le presto nada a nadie, es más como usted me dice, yo le doy una información como usted quiera y entonces yo la autorizo para que grabe, pero no presto nada escrito. Estoy escribiendo es un libro, llevo más de tres años escribiéndolo.

**\*¿sobre todo ese tema?**

– sobre todo ese tema, pero no sé cuándo lo acabe. Pero es chévere que la gente... ¿por qué lo hago? Creo que la gente debe y las nuevas generaciones sobre todo mis hijos y mis nietos que es para quienes yo hago todo, que conozcan de verdad todo lo que sucedió en Caldonio. Eso es lo primero. Ese es el mismo tema del documental. En el documental yo no digo nada de la guerrilla porque no es algo que me toca a mí, y ellos dicen que ellos y yo pienso que la privacidad es algo muy importante, entonces los que aparecen en el documental es porque ellos quisieron, a nadie se obligó. El documental no muestra nada de violencia, pero se nota toda la violencia que vivió Caldonio por eso en todos los países a donde hemos ido, las salas se llenan. En Berlín había un teatro del centro como con 14 salas de cine y la mayoría estaban llenas, en varios como le dijera yo, allá es una ciudad grandísima en varias estas, nosotros cogíamos hasta 4 trenes para llegar allá y había a las 6, a las 8, a las 9, o sea iban varias funciones, todos los días.

**\*¿y acá en Colombia no lo van a volver a repetir?**

– Yo creo que sí, ahorita estábamos hablando con Jaap, hay que pasarlo en Caldon, en Caldon la gente no lo ha visto, lo han visto las víctimas que se eligieron, pero en noviembre, lo más seguro es que la segunda semana de noviembre se proyecte en Caldon, el pueblo nuevo, en Siberia en cerro alto y acá en la cabecera. Estamos consiguiendo las pantallas gigantes para hacer eso. Yo pienso que es un derecho que tiene la población de ver ese documental y yo también a les estoy pidiendo que lo proyecten en la parte suroccidente de Colombia porque se presentó en Bogotá, Soacha, Medellín, Pereira, Cartagena y Barranquilla. Ya entonces e la parte de acá también lo presenten y ahorita hay una presentación, están fijando fecha para Inglaterra y ya lo vendieron para Noruega y para Japón, y están negociándolo con Rusia. Yo pienso que ha sido de gran impacto y lo que me alegra es que ya a Caldon lo conoce mucha gente. Al principio era desconocido, a Caldon lo conocían era por estas tomas guerrilleras no más, en televisión salía uhh otra noche de terror en Caldon, y yo decía, no, eso no es Caldon, Caldon es otra cosa, en Caldon hay gente noble, amable. Con el documental también yo quiero inspirar el turismo y con este del cerro de Belén: yo amo a Caldon, esto, en Caldon también hay turismo y acá quiero hacer si yo le digo a la gente que es como un Monserrate pequeñito, que allá hay unas caséticas y todo eso y la gente ya sube.

**\*Que caminen y todo.** – que caminen y conozcan, ahí hay unas vallas, unos de estos donde se cuentan las fechas, hay unas frases que yo he dicho, están ahí escritas, que van a salir en el libro, que están en el documental. Pienso que este Cerro de Belén es un ejemplo para el mundo y a que me he dedicado yo a la ay como se llama, a que no se pierda la memoria, la memoria histórica para mi es muy importante, yo creo que uno puede perdonar, pero no puede olvidar, son cosas muy diferentes, hay que prepararse para perdonar y yo por eso insistió en la reconciliación, el perdón la convivencia y por eso hago lo de la un torneo de futbol, estoy organizándolo, ahorita que me estaban llamando, me llamaban es para eso. Todos los domingos se juega futbol y la mayoría de persona juegan, desde los 6 años los niños ya están jugando, tres categorías hasta los 16 y de ahí pa arriba hasta las mujeres y hay equipos de niñas, en los que también juegan niñas y niños. Los grandes hay más o menos en este momento 320 equipos. **\*Uff es un torneo grande.** – Si, es un torneo grandísimo y ahorita esta mañana antes de que usted me llamara me llamó un señor de Bogotá que me está ayudando, él trabaja en la alcaldía de Bogotá, para una entrevista con el señor de Coldeportes, es señor Mario Ernesto Lucena, a ver si él me ayuda. Económicamente no tengo quien me ayude pero bueno, en Berlín me regalaron dos balones y quedaron otros de enviar más balones. Cada que una persona me regale un balón en un equipo de un niño que... \*puede jugar... - porque los niños no tienen nada y estoy convocando a los jugadores de la selección Colombia, a James y a todos ellos para que me ayuden, yo sé que dios nunca me ha dejado solo y me va a ayudar, con esto del deporte, yo he leído mucho la historia y Nelson Mandela dice que el deporte es el único que puede hacer que la gente se una y puedan hacer algo unidos y hay unas reglas, así como en las reglas de la guerra aquí también hay unas reglas que hay que cumplirlas. Si se pierde, si se gana o se empata, no más, entonces estoy en eso gracias a dios y me ha ido bien y en cada vereda de estás 87 que le nombre hay un líder que me ayuda a mí a manejarla, porque hay domingo en los que voy a 2, 3 o 4 veredas y no alcanzo a ir a todas.

**\*Si, y digamos el tema ahí que usted mencionaba de lo del apoyo de la alcaldía y todo eso ¿nada?**

– Nada, antes me negó tres canchas. La cancha del estadio de Caldon, aquí, no pudieron jugar, incluso que hace 8 días comenzó otro torneo. Cuando comencé el mío ellos arrancaron uno de mayores de 45 años, 10 equipos jugando, era como a ponerme problemas, pero yo sé que yo para adelante.

**\*¿Y qué razones le dan? O sea ¿qué le dicen? ¿cuál es el motivo?**

– el señor me dijo que el... ¡ay como se llama, hombre! El director de planeación me dijo que yo antes de hacer algo tenía que pedirle permiso a él. Un peladito que cuando la guerra y todo estaba en pañales y hoy viene a... no fue sino que se le subió el cargo. Y el alcalde desafortunadamente yo dije que era el candidato y le hice la campaña y ahora no me quiere ni ver, pero no importa, igual el 27 ya hay un nuevo alcalde, gracias a dios no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Pienso que cualquier de los 4 candidatos que hay va a ser buen alcalde y pueda que piense diferente, yo sigo con el proceso de paz, la reconciliación, la convivencia y me extraña que una persona que tiene el manejo del municipio no piense así, yo no estoy ganándome un peso, nadie me paga, todos los procesos los hago con las uñas, yo no me gano un peso porque yo cuando necesito plata, yo pido y me dan. **\*Claro, acude a las organizaciones.** – Sii, y me dan, por ejemplo en cinep me dio 40 millones inicialmente, después ahora me dio 20 y ya me llamaron dos Farid vamos a estar la evaluación y yo sí, voy a estar ahí que llegue y es seguir, seguir con ese proyecto del cerro de Belén y siempre, dándole la información a la gente de en qué se gasta la plata, que se ha hecho, que falta, que se debe y que hay que hacer. Eso me gusta hacerlo así, todo claro, por eso no comulgo con muchas organizaciones. Cuando a la plata no se le da el uso que se necesita no sirve, pienso que yo no me creo pobre, no tengo plata es muy diferente, pero yo soy muy rico de pensamiento, yo sé hacer muchas cosas, lidero la gente para bien. Cuando me fuí la primera vez para Holanda en marzo, estaban en la Minga, o sea la vía estaba tapada y yo siendo el líder de ellos me tocó salir por la trocha, me daba temor salir por la vía y en un maletín que siempre cargo ahí eché la ropa y la llevaba aquí arriba porque me atravesé un río, el río Mondomo, pero yo dije eso no me va a detener, yo tengo que llegar a Holanda como sea. La cooperativa de Caldono de Comultra de transportadores me regaló por medio del señor Holmes Sandoval me regaló 400 millones sin yo pedirselos y yo lo único que llevaba eran 300 pesos. Luego un amigo de acá del cav, John Betancur me giró una plata también dijo: “█████ cuando llegues a Bogotá vas y ahí ya está tu plata. Entonces como le digo, ahorita yo fui con Jaap a Berlín más de 8 días y no gasté una moneda y andaba con la plata y la plata no sirve allá porque allá es con euros todo y me siento muy contento de ir a un país tan organizados, pero sobre todo porque me regalaron unas 4/5 estaciones de tren que eran mías no me cobraban... (Aquí ██████ empieza a hacer alusión a su viaje a Europa, cuenta varias anécdotas y esto transcurre desde el minuto 1:10 hasta el 1:16)

**\*Yo quiero hacerle otra pregunta ¿qué recepción tuvo en esas culturas tan distintas el documental? ¿o sea qué decía la gente? ¿qué comentarios hubo? ¿qué debates hubo?**

– Hubo mucha. La película, el documental dura 56 minutos y más me demoro respondiendo las preguntas de ellos, la gente es muy culta, o sea, no son preguntas bobas como diría uno, no, son muy especiales y la pregunta primero ¿qué lo llevó a usted a hacer ese documental? Y yo les digo que mostrar la situación real de Colombia en el mundo, no solamente de Caldono, Caldono es como una muestra. El gobierno colombiano presenta antes el mundo como que Colombia está en paz, cuando el proceso de paz está en pañales, está en el papel nada más, y el documental la gente expresa lo que siente. Me dicen ¿cómo ha cambiado la vida mía? Y yo les digo que en mucho. Lo que más les preocupa a ellos es la seguridad mía y sí, yo sé que a mí el único que me cuida es dios y mi familia y mi gente. Ya la vida mía ha cambiado mucho en ese tema porque la UNP solamente me da dos escoltas y un carro blindado, pero yo tengo que...

**\*¿En el municipio?**

– ujum, eso no es vida y yo no tengo plata, no tengo trabajo.

**\*¿La UNP cuál es?**

– la Unidad Nacional de Protección. Entonces no sé. ¿y acá en Bogotá usted ahorita tiene protección? – No, por eso usted ve a Jaap, el me da de comer y todo, a mí me da miedo salir y quedare aquí y en agosto que estuvimos en Bogotá presentando el documental aquí se nos metieron y este televisor de aquí se lo llevaron. Aquí yo decía, pero si estamos en Bogotá y a cuantas cuadras del centro. Este televisor la gente de aquí de arriba de este piso y de por ahí lo rescató allá en la otra cuadra. **\*Que nervios.** – y entonces yo decía dios mío, ya no dormía, yo con un bate y uno con un bate, con un palo y ellos tienen armas, bueno, entonces la diferencia. Entonces me siento mejor en general en mi casa, en mi pueblo.

**\*¿y qué tal está el tema de la seguridad en general allá?**

– No, eso está en una calma ahí. Cuando está en esa calma el municipio es muy peligroso. Los excombatientes están más asustados porque imagínese, el gobierno se limita a rodearlos con un batallón, ahí no hay nada. Hay otro grupo disidente que no se sabe dónde están, no tienen mando, bueno no sé. Y lo que yo le comento del narcotráfico, eso es horrible, hay mucha drogadicción en Caldon, ha habido muchos muertos. Y lo otro que me preocupa es la delincuencia común, eso en toda parte y Caldon no es la excepción, eso siempre va a haber, eso ya de noche yo mejor no ando, ya las fiestas se acabaron, bueno, aunque no es que me gusten mucho, pero me siento limitado. Por ejemplo, aquí, no crea cuando usted me llamó que venía, yo ay gracias a dios alguien viene a verme yo quisiera salirme, yo me asomo en ese balcón y quisiera irme, y yo los primeros días quería salirme y me decían no [REDACTED] usted no se puede ir así no más, aquí también hay inseguridad de otra clase.

**\*No, y que es muy grande, Bogotá es muy grande. Entonces claro cuándo usted me decía dígame a dónde llego, pero yo no conozco Bogotá, yo tampoco conozco bien Bogotá (entre risas) entonces yo prefiero llegar a un punto fijo, en el que sé que usted va a estar bien y pues que a mí me queda fácil llegar**

– Claro, yo, es que mire que en... y me pasa siempre, cuando estuve en La Haya me perdí así como usted una estudiante de Alemania, ella está haciendo un doctorado... (Me cuenta toda la historia de cuando se perdió en Holanda – hasta el minuto 1:25:20).

**\* ¿y su familia vive en Caldon también?**

– sí, en Caldon también. Pero chévere, conocer el mundo es muy chévere, conocer otras culturas y siempre me felicitaban, don [REDACTED] usted es muy ¿no le da miedo? Si me da miedo. Y otra era ¿van a hacer la segunda parte? Si, hay que hacer la segunda parte del documental ¿las escenas son reales? Si, si, yo no soy actor, estoy contando una historia, todo es real. Pero la gente es muy culta, hacían preguntas muy chéveres ¿qué ha ganado con el documental? Si Caldon, con el documental mucha gente ha visitado Caldon, nos conocen, Organizaciones de derechos humanos, todos: [REDACTED] le vamos a ayudar. Por ejemplo, el domingo me voy con 75 estudiantes unos de aquí de Bogotá y otros de Cali acá a san Antonio en pueblo nuevo y yo lo único que les digo es ayúdenme con el campeonato, regálenme un baloncito, un uniforme, es por lo este de los niños y por el deporte. Yo sé que con el deporte voy a lograr la paz la reconciliación, porque no eso la guerra no deja si no problemas.

**\*¿y qué expectativa se tiene... bueno, usted al principio mencionaba lo de las objeciones de la JEP, o sea, qué expectativas se tienen con este nuevo gobierno sobre la situación del proceso de paz en el municipio?**

– por eso es que tengo afán de llegar la otra semana, porque la otra semana hay un debate con los 4 candidatos y esas son las preguntas mías. \*¿de la alcaldía? – De la alcaldía, ya con el candidato que esta no pasa nada, pero con los 4 que están aspirando, entonces primero yo quiero leer el programa de gobierno de ellos y qué están planteando por la reconciliación, por la

paz, por el respeto, el medio ambiente, me interesa el cuidado del medio ambiente, del agua, o sea caldono es una potencia en fuentes hídricas, pero no las estamos cuidando y es otro tema que me diferencia de los indígenas, ellos dicen que “somos cuidadores del agua”, pero quemaron, en este mes hubieron quemados que vea, me tocó quitar el agua para evitar que no siguiera quemando, llevar la gente de las mingas a apagar con agua con baldes con ollas, si eso es cuidar el agua entonces estamos jodidos, y yo les digo, el agua en Caldono es más cara que la gasolina y la gente no cree. Un galón de gasolina en Caldono vale 10.000 pesos y un vasito de agua de 200 gramos, de 200 mililitros, vale 2000 pesos y sumen, llenen un galón y verá que usted se gasta más de 20.000 pesos intentando llenar ese galón con agua.

**\*¿y allá hay agua potable y todo en Caldono?**

– Si, claro, pero solamente en la cabecera. \*

**¿O sea en los corregimientos no?**

– No, en ninguno. El agua llega a las casas como viene de la fuente, del río o de la quebrada. Ese es otro, yo por ejemplo en, o sea yo donde voy llevo es proyectos, me llevé uno de reforestación y sé que Alemania, ellos en Berlín son campeones diría yo en reforestación y hay varios ONG's que me van a ayudar con eso, con el tema de reforestación porque le digo que fueron cantidades de hectáreas que se quemaron, y la mayoría fueron las bocatomas, o sea donde están los nacimientos de agua que van a los acueductos, eso me pareció como una cosa también muy, como de locos, como le va a meter uno candela a donde uno se toma el agua. Entonces ya hay gente que está, la tengo organizada con los grupos que tengo para hacer mingas, hacer trabajos, ir y comenzar, dicen que ya comenzó a llover y era que no llovía, entonces me alegra que haya comenzado a llover. \*Claro, la sequía. – Es que hay que comenzar a sembrar árboles y esas hectáreas que se quemaron que eran de yo pienso de más de 200 años, donde no le miento, el este, el cumulo de me daba aquí (se refiere a la llama del fuego, y señala como lo sobrepasaba). Pues claro, por eso demoraba tanto en apagarse. Una cosa es apagar un incendio a donde todo está ardiendo, uno echa el agua acá arriba pero allá abajo a 2 metros está la candela, entonces cuando usted se va, ya vuelve y se prende, el agua que baja allá antes, como tiene oxígeno ayuda a prender.

**\*Bueno y otra pregunta que tenía es un poco más relacionada con el tema de las víctimas, o sea, cómo desde su percepción qué considera usted una víctima... ¿cómo se le ha dado tratamiento a las víctimas dentro del conflicto? ¿hubo alguna diferencia sobre el concepto de víctima, sobre el quién es víctima desde los acuerdos de paz hasta hoy en día?**

– Ayyy, le cuento que, yo tengo una organización de 460 familias víctimas del conflicto armado, pero no es, la gente piensa que es solamente de la guerrilla y no, son víctimas de los soldados, de la policía, de la fuerza pública, o sea víctimas de todos. Y ahí si usted creo que usted es una de las preguntas claves, el gobierno local manejó el tema de víctimas con una rosca tan grande, con una rosca que es pequeña, donde las asociaciones que tienen 30, 60, 100, les dieron todo y les repitieron, o sea, los proyectos de víctimas se repartieron entre 3 asociaciones, donde les dieron gallinas, pollos, marranos, café y hay personas que recibieron 3/4 de esos proyectos y... recibieron ayudas económicas, y... para rematar algunas fueron indemnizadas y de esas personas indemnizadas la mayoría no fueron afectadas por el conflicto armado, ni siquiera vivían en Caldono en esa época, se hicieron pasar, con ayuda de las Unidades de Víctimas y de Popayán como desplazados, sabiendo que ellos antes del conflicto ya se habían venido.

**\*¿para Bogotá?**

– Para Bogotá, para Cali, varias partes. Buscando un futuro mejor, eso no se lo niego a nadie, pero ellos aprovecharon el momento y se presentaron como víctimas y se llevaron los recursos, de los que en realidad fuimos víctimas, no tenemos nada, del grupo mío que son 460 familias solo hay 4 personas que son las únicas que recibieron porque estaban en la rosca.

**\*¿Cuántas familias?** – son 460 familias.

**\*¿y cuantas recibieron?**

– 4, 4 personas no 4 familias. Pero porque estaban en esa rosca. ¿de la unidad de víctimas? – Si, y de los de la personería porque el personero no funcionó. Los personeros en Caldon no funcionaron. Los personeros son las personas que yo más detesto en este momento porque hubo un personero en la época dura, que nos tocaba... ellos manejan 4 años y hubo un personero que era tan descarado, perdóneme la palabra, que llegaba una mujer que había sido violada y decía tiene que traerme el video o la foto de la... para yo poder creerle. Yo digo, donde está la fe, donde está la... \*ética. – Si, es muy descarado y ay no, desgraciadamente es de Caldon, esos funcionarios no deberían de no sé.

**\*Bueno, peor y ese reconocimiento de víctimas del que usted me habla es de qué momento ¿de ahorita con el acuerdo de paz? ¿o de los que pasó con justicia y paz?**

– Antes, en el 2012, yo ya tenía la resolución. Y ahora me dicen que esa resolución no sirve.

**\*O sea la resolución de la organización de víctimas es del 2012.**

– Ajá, del 6 de marzo de 2012.

**\*¿y frente a quien se constituyó esa resolución?**

– frente a la unidad de víctimas. Yo hice una declaración en la personería y... esa declaración me la dio, esa resolución me la dio la unidad de víctimas aquí en Bogotá, estaba de representante la doctora Gaviria, uy me olvidé del nombre de ella ahorita.

**\*¿y por qué me dice que ahora le dicen que esa resolución ya no es válida?**

– ya he recibido unas resoluciones, en que varios de los integrantes de mi grupo, incluido yo, que dicen que yo ya no soy víctima. \*

**Ok. Pero entonces no me queda algo claro. Esa resolución es del 2012 y ¿usted cuándo declaró? ¿antes?**

– Varias veces \*

**Pero... ¿antes del 2012?**

– aja.

**\*Es que lo que pasa es que se creó una ley que es la ley de víctimas... - la 1448 \*Que es del 2011. Entonces ustedes intentaron adherirse a esa ley... - Pero entramos. \*Entraron... ¿pero los repararon en algún momento? –**

No, a ver no, a ver, cómo le explico... el 27 de febrero de 2012 hubo una toma guerrillera en el Cerro de Belén. Esa toma, provocó mucho desplazamiento, me dieron 6 días para declarar, o sea que más o menos el 3 de marzo, entre el 3 y 6 de marzo yo declaré ante la personería de esta resolución.



**\*O sea, la declaración fue más o menos el 3 de marzo de 2011, 2012, después de la toma guerrillera.**

– Ajá. Entonces yo declaré en representación de todas las víctimas, o sea colectivo, ¿cómo se llama? \*

**No sé, tal vez acción de grupo.**

– Si, o sea porque pasaba lo que le estoy contando, entonces tal vez porque a mí, yo declaré eso, hice todo el trámite en Popayán y luego pa Bogotá. Paso el tiempo y no pasaba nada entonces en una venida a Bogotá yo me pasé por donde la doctora Gaviria y entonces me dijo: “la resolución ya salió, hace meses que salió. Eso ahí ya está en la personería de Caldonó”. \*

**Y en esa resolución les dan el reconocimiento como víctimas.**

– a ver juepuchica, hombre, bueno no recuerdo el nombre de pronto ahora me acuerdo. Entonces me dijo ella, cuando llegue a Bogotá (Caldono) le coloca una recarga a su celular y va entra a la oficina de la personería y que este la secretaria y que este el personero, cuando esté ahí me timbra a la doctora Gaviria acá, y así hice. Entonces, le timbre ya estoy aquí en la personería, entonces me dijo pásame al señor personero y yo le dije señor personero lo llaman de Bogotá y me dijo quién es y yo no sé llámelo, conteste. Le dijo hágame el favor, ustedes en su oficina, tienen la resolución número tal y tal que está a nombre del señor [REDACTED], entonces por qué no lo han notificado. Entonces ahora se da cuenta que yo digo con criterio por qué lo manejaban todo y ahorita hace 15 días que estuve en Caldonó, pasó lo mismo con una sobrina mía. La resolución había llegado en junio y hace 15 días ya era septiembre y pasó lo mismo.

**\*¿y por qué están reteniendo esas resoluciones?**

– esa es la pregunta, por qué retienen, o sea, la comunicación no es efectiva y se maneja por debajo de cuerda, a este si, a este no. Luego de esto han llegado varias resoluciones en las que dicen que yo no soy víctima, entonces la gente dice: “si [REDACTED] no es víctima, entonces nadie es víctima en Caldonó”. Y yo sostengo lo contrario, todos en Caldonó somos víctimas. De esas personas, a varios ya les ha llegado, mis hijos no tienen derecho a nada porque... sabe qué dice en una resolución tan este... que porque ellos lograron superar como decir con las uñas de nosotros, logramos reponer, lo que debió haber hecho el gobierno por nosotros, o sea yo pienso que eso es como. \*O sea hoy por hoy han salido... en esa resolución les han el reconocimiento como víctimas, pero esa resolución ha sido desestimada por otras resoluciones individuales, que dicen que ustedes... - Ya no somos víctimas. \*¿Y frente a eso... no sé, usted cuándo fue a la Comisión de la Verdad, le dijeron algo? – No, todavía no. O sea, yo estoy esperando a que nos reunamos, creo que, en octubre, nos reunimos. Y es eso, uno de los temas. Y entonces a este señor de la JEP, yo le pasé esto y él se está reuniendo con nosotros, entonces ellos y paxHolanda están haciendo una investigación sobre ese tema porque ellos dicen que esto lo van a denunciar a nivel internacional, porque es que es el colmo. \*Claro. – Y no es solamente el Caldonó, es en varios municipios, en Santa Rosa, al sur del Cauca, está pasando igual. Pues algún día algo tendrá que salir, pero esa es la manera. Entonces en la misma ley 1448 dice que la persona que declare y declare como falso hay una retaliación. Me gustaría que pasara eso porque hay gente en Caldonó que aparece desplazada y vive en Caldonó, hay gente que, ahí en Caldonó hay gente de Tumaco, del Huila, del Tolima que aparecen acá (Bogotá), pero viven en Caldonó. No sé. \*Hay muchas inconsistencias... - No sé cómo se maneja eso. Hay un señor que este, yo le digo que el no es desplazado sino refugiado. Este, aquí es el puesto de policía y aquí al ladito esta la casa de un señor que se llama Victo Velasco. Desde que tumbaron el primer puesto, esta casa la dañaron. La mayoría

de los policías se refugiaron en esta casa y salvaron la vida. Esta casa ha sufrido todos los ataques y todo eso. El dueño de esta casa no puede vivir aquí, dígame quien quiere vivir ahí y a él le toca pagar el impuesto y todo de esta casa, el agua, la energía, pero él vive en otra parte. Y cada que hay un nuevo comandante del ejército, un nuevo Ministro de Defensa, un nuevo presidente, nosotros mandamos oficio, hay un nuevo alcalde, hay un nuevo un nuevo personero y no pasa nada. Casos como es donde uno dice, la justicia no existe. Y aquí quien habita, la policía y el ejército. Y aquí en seguida, era una de las casas más bonitas de Caldon y acá está la calle y aquí está otra casa y acá es madre Laura. Esta casa, en la toma del 9 de febrero de 1997 quedo vuelta nada y así está y hay otras 3 o 4 casa que las han reparado varias veces con plata del Estado y a estas casas no les ha pasado nada. Esta casa de acá debe ya más de 10 millones de servicio de energía. \*Ok, es selectivo también eso. – Si, uno se da cuenta de que en Caldon hay una rosca, el problema entonces es no estar en ella, es una rosca que es efectiva y que es brava y es verdad. A estas víctimas que les dieron 1500 matas, 2000, 3000 matas de café para sembrar y no tienen una cuarta de tierra. **\*Si, dónde las van a sembrar...** - o sea yo les digo, es un proyecto mal hecho y les dieron gallinas y les dieron... entonces tienen que meter las gallinas debajo de la cama y sembrar en café encima de la cama, no sé cómo harán, pero eso se da. Y el malo soy yo porque denuncié todo.

**\*No, pero está bien. Y o sea que de lo que se dijo en el punto 5 del acuerdo de las víctimas y eso del acuerdo de paz, todavía no...**

- en Caldon no ha pasado nada, o para algunos no ha pasado nada, para otros no.

**\*¿Pero hay gente que si se está viendo beneficiada?** – Si, claro. Uyy hubo gente que con la plata se fue para San Andrés y a estar, siquiera se hubieran comprado una casa por lo menos, pero noo. Y la gente que, de estas casas, no sé...

**\*y en teoría, se estipula que tengan que hacerles de nuevo un reconocimiento como víctimas del conflicto, adicionalmente a lo que pasa, a la resolución que usted ya tiene pero que le dijeron que no ¿debe pasar algo similar?**

– claro, yo me imagino que si porque ya no somos víctimas sino revictimizados, porque nos atropelló la violencia, las FARC, los grupos armados, pero el Estado nos sigue peor. Entonces sí. A penas la discriminación de la víctima en Caldon es fuerte, es fatal. Y ahora sí, yo le estoy hablando aquí víctimas de las que yo tengo, pero de las víctimas de por aquí de estos pedacitos donde hubo peor, a estas personas ni siquiera las tienen en el registro. Yo por lo menos tengo el registro, pero acá ni siquiera esa, entonces ahorita yo estoy tratando de irlas trayendo, irlas trayendo y el problema se dificulta aquí, ellos hablan en un dialecto. El dialecto, el idioma páez, si yo que se alegar y peleo y peleo y no, como serán estas personas que, entonces claro, cuando les decían usted tiene que traer, mami, que usted llegue, usted es una indígena y se siente mal y violada y todo, no más que una violación no es fácil, y usted llega a donde el personero y le dice que le traiga la foto y usted no sabe que es una foto que es... Ahora yo le digo mami, si están en una toma y viene uno de estos cilindros que yo le contaba y cae sobre esta casa y usted esta acá debajo y usted tiene el mejor celular o la cámara, una pentax, ¿usted sale corriendo a tomar la foto? ¿sí o no? **\*No hay tiempo.** – Noo, usted en ese momento que fotos, usted ese momento solo piensa en la vida, en sobrevivir. Como cuando yo le cuento que la gente salía desnuda, es verdad, a ellos no les importaba que los vieran, es estamos vivos, que nos vean y después uno se tapa. **\*Es lo de menos. es sobrevivencia** - ¿por qué no hay tantos muertos en Caldon. Hay sino 63 víctimas, yo no sé si le dije, de los indígenas, hay sino 63 víctimas de la violencia y de los campesinos 48, están son las cifras que yo manejo, el gobierno maneja unas más poquitas. Para el gobierno, en Caldon hay solamente como 34 tomas guerrilleras. **\*¿y eso el gobierno en dónde lo ha estipulado? ¿sabe?** – No, ellos no. Por ejemplo, para que estas tomas que yo tengo registradas, yo iba a la

defensoría del pueblo, primero a Popayán, les pedías constancias a la Policía y al ejército, y, yo tengo, como se llama, periódicos para decir que esto fue real, porque el gobierno, no son están, as demás no fueron registrados, es así. O sea que si el gobierno, esa del 27 de febrero del 2012 al gobierno no le da la gana de decir, no es, no fue, no pasó. \*O sea, en la Defensoría del Pueblo solo están reconocidas 34 tomas de guerrilleras de las 248 ¿sí? – sí, eso es más o menos la esta. O sea, el gobierno se da sus mañas. No es comandante no informo, no y no fue una toma sino un hostigamiento. Una toma es cuando entran todas estas armas y un hostigamiento es cuando entran solamente a disparar y disparar, pero cuando uste ya, de tantas tomas guerrilleras y luego llega un hostigamiento que son los disparos, la cuestión psicológica, es igual. Porque a usted no le están diciendo tiraron 5 tiros no más o explotaron 20, no. En una toma mi hija, mi hija tenía como 15 años, en una hora lanzaron 45 cilindros. \*en una hora. – y las tomas empezaban a las 10 de la mañana y eran las 9 de la mañana del otro día y todavía están dándole. Y el ejército, el apoyo aéreo y todo eso llegaba por ahí a las 3, 4 de la tarde y era, no, ya se fueron. Viendo ahorita, los documentales que he visto donde he ido, yo me quedo aterrado de algo, yo lucho por la resistencia de Caldono, porque tantas tomas guerrilleras, yo creo que nosotros no debimos volver al pueblo, y hacer como por allá, trasladen el pueblo para otra parte. No, nos quedamos ahí, incluso el 12 de noviembre de 2001 hicimos una resistencia civil. La primera resistencia civil que se ha hecho en el mundo a un grupo armado, esta fue la primera, y en esta fecha yo siempre hago una conmemoración, porque no puedo dejar olvidar eso. ¿Qué es otra cosa? ¿por qué nos reconoce el mundo afuera? – por la resiliencia ¿es? – \*Si, resiliencia. – con “S” ¿no? resiliencia. Porque nosotros fuimos, a pesar de todo eso que el gobierno nos falló, que la rosca si, que el otro no. Nosotros seguimos adelante y no nos quedamos en el este... y por eso las obras. Ahora estamos pensando hacer otro mirador en otro alto que hay. Y todo con el trabajo de la comunidad, entonces para mí esto es muy importante, y, todo esto con el respeto de los niños y de las mujeres porque en ultimas me parece que es el grupo, lo de género es lo más duro en una toma guerrillera. Hay el caso de una señora que se lo tengo a la comisión de la verdad cuando vaya. Que, en Siberia, en otro centro poblado. La niña tenía, decirle la edad segura, ella estaba haciendo el último año de bachillerato y ella era la personera y ella manejaba la plata para los grados, para ir a un, cuando se van... \*¿un paseo o algo así? – eso un paseo, ella tenía la plata, llevo la guerrilla y se tomó el pueblo y se metieron a esa casa y ella vivía sola con la mamá en esa casa. ¿Qué hicieron? Las mujeres guerrilleras se les robaron todo, hasta mami, las toallas higiénicas, porque las guerrilleras no usaban toallas higiénicas porque como andan en el monte, en ese momento ellas se ponían hojas de algo, de plantas. Entonces para ellas el papel higiénico, la crema dental, el cepillo suyo, no importa, ellas se lo llevaban. Entonces yo decía, la miseria en la que vivía la guerrilla ¿y por qué se metían allá? Bueno, ¿qué hicieron estas mujeres? Robaron se llevaron todo y ahí quedo esta platica. Los hombres a la niña la cogieron aquí y a la mamá la cogieron acá y todos las violaron y de aquí pasaban para acá y de acá para aquí. Ella me cuenta todo eso, yo soy la mama corazón en Caldono, allá me cuenta esto, la niña, porque la mamá no es capaz y voy donde el personero descarado este y cuando le pregunto no, me dijo que le trajera las fotos y testigos. Eso y no dios mío, a ese señor, a ese personero yo le decía hasta de que se iba a morir delante del escolta porque es que a mí la rabia me da tanta fuerza que yo no. Dígame cómo esta niña va a hacerse tomar unas fotos y esta mamá... qué le violan a la mamá, no sé si sufre más por lo de la mamá o por ella... **\*es complicado.** – y este un desgraciado que estudió y “personero”. Yo este, porque yo fui personero en la época del 86 entonces me tocaron muchas cosas.

**\*es complicado porque precisamente la misión del personero es salvaguardar los derechos humanos.**

– y yo iba allá ¿y sabe qué me daba la procuraduría? Un pedacito de este y frasquito donde me daban alcohol y yo con eso tenía que ir, entonces yo viví eso y por eso me duele. De tantos casos este me duele y hay gente que le cuenta a uno y uy... entonces por eso lucho por eso de la Comisión de la Verdad, la JEP, todo eso que hoy en día tiene que pasar. Que hagan esa investigación y que los que tienen que no cumplieron con el deber paguen. Ese es mi pueblo, mami. Cuando ustedes me llaman yo por eso les pregunto qué hacen, porque a mí me interesa, sé que algún día de estos alguno de ustedes va a lograr hacer algo y que lleguen allá son bienvenidos. **\*Si, con seguridad.** – eso es el futuro, y luchar contra todo sin plata, sin recursos, no, eso es duro. Y el poder está ahí.

**\*bueno, yo creo que realmente me contó más de lo que tenía esperado, o sea muy bien porque realmente nunca había hecho una entrevista y me dio mucha seguridad.**

– ¡Ah no! Yo si soy especialista en hacer entrevistas, el documental es entrevistas que yo le digo a la gente y no, tiene que verlo mami.

## **2. Entrevista 2**

Líder social afrodescendiente (*Entrevistado 2*), entrevista semiestructurada realizada el 20 de abril del 2021.

**Bueno, la idea es que en un primer momento usted me cuente quien es usted, el trabajo que ha tenido en la comunidad, y el desenvolvimiento que ha tenido en mecanismos de justicia transicional, si los ha tenido**

Yo soy [REDACTED], actualmente soy autoridad del Consejo Comunitario de Pandamo del municipio de Caloto (Cauca). Fui consejero mayor de la asociación de consejo comunitarios que reúne a 43 comunidades de 10 municipios de esta región, del año 2013 hasta marzo del 2020.

Te cuento con respecto a la participación en justicia transicional, bueno, yo, tuve la oportunidad primer de participar en la delegación de los consejos comunitarios del norte del cauca a la plataforma nacional que se creó que el consejo nacional de paz afrocolombiano, por delegación del consejo nacional de paz afrocolombiano y posteriormente la comisión étnica de paz conformada por el CONPA que son 9 organizaciones del país donde está el PCN, ACONC, tabiri, Boro fish de Chocó, entre otras organizaciones que están en la plataforma del CONPA.

Con el CONPA y con la ONIC (Organización Nacional Indígena) y Gobierno Mayor, se creó la comisión étnica de paz para lo derechos étnicos territoriales. A partir de la delegación del CONPA y de la Comisión étnica tuve la oportunidad de participar en varios diálogos en Cuba, en la Habana con la mesa de negociación de los acuerdos de paz y producto de esos diálogos repvios se dio la audiencia que logramos y en esa audiencia salió el mandato de la construcción del capítulo étnico de paz en los acuerdos de la habana, que deja salvaguardas en todos los puntos de los acuerdos de paz, para los derechos étnicos de Colombia y pues no es ajeno al punto de justicia, de justicia transicional y en eso se logró que quedara una coordinación – bueno, en el papel quedó- que se debía coordinar con los diferentes sistemas de justicia étnica y ancestral, en el caso del norte del cauca, pues nosotros tenemos un sistema de justicia propia, ancestral como comunidades negras, las comunidades indígenas también tiene, y en el caso de nosotros pues tenemos el tribunal de ética y justicia ancestral regional, donde está adscrito la guardia cimarrona que también quedo mencionada en los acuerdo de paz. Estoy hablando más de los acuerdos con las FARC porque es donde más tengo claridad sobre el tema de justicia transicional.

A partir de allí, el CONPA ha tenido varios diálogos con la JEP en cabeza del CONPA y también de una instancia que salió de los acuerdos de paz, del capítulo étnico que es la IAMPE (bueno, no me acuerdo de lo que significa, pero lo puedes buscar en internet), es la instancia que tienen los pueblos étnicos para la interlocución con la CESIDI (Comisión de Seguimiento a la Implementación de los acuerdos de paz). En ese orden de ideas hemos tenido varios diálogos y esos diálogos han llevado a que nosotros como comunidad negra podamos tener una comunicación un poco fluida con la JEP y con la comisión de la verdad que hace parte de lo global de la parte del sistema de justicia y de verdad.

En ese orden de ideas con la Comisión de la Verdad se ha logrado presentar varios informes desde las organizaciones y los pueblos étnicos (negros) de Colombia y como CONPA también se presentó un informe en diciembre del año pasado. Con la JEP, hemos tenido una coordinación que ha llevado a tener, primero, un representante jurídico ante la jurisdicción, se ha logrado en el caso del norte del cauca (porque no tengo el dato de todo el país) se ha logrado como norte del cauca entrar en el caso 05 con la jurisdicción y nuestro representante jurídico es Hileros, que es la única corporación afrodescendiente que después de concursar quedó como encargada de hacer representación jurídica de los pueblos negros del país, algunos entes trabajando con hileros, otros no, en el caso nuestro en el norte del cauca pues nosotros como pueblo negro le dimos el poder a Hileros para que nos represente y eso ha garantizado la participación de las autoridades y sus delegados en varias audiencias donde se han presentado los comparecientes que ha hecho parte de afectaciones por parte de las FARC al norte del cauca, eso en términos generales por parte de la convocatoria a las audiencias por parte de la JEP.

Por otro lado, nosotros también hemos tenido incidencias de ellos para avanzar en unas medidas cautelares, desafortunadamente eso no se ha hecho efectivo, pero se sigue insistiendo en que se concedan las medidas cautelares para seguir participando en la audiencias y en todo el proceso, por toda la crisis humanitaria que se vive en el departamento del Cauca y el Norte del Cauca. Entonces, eso en términos de participación con la justicia transicional.

Cabe acuñaarte que nuestro sistema de justicia ancestral en cabeza o liderado por el tribunal de ética y justicia ancestral de ACON ha logrado resolver algunas situaciones en los territorios, pero también ha avanzado en la sistematización de las violaciones de derechos humanos y cómo las autoridades propias (autoridades étnicas) de los consejo comunitarios y de las comunidades negras de esa región han hecho el ejercicio con autonomía y han administrado justicia en los territorios, incluso, lograron resolver algunas situaciones en las comunidades que ni la Fiscalía ni la justicia occidental ha logrado resolver, quería decirte eso en términos de nuestra justicia propia que para nosotros fue un eslabón importante al acceso de la justicia como comunidades. No sé qué quieres que profundice en términos de la justicia transicional.

**Listo, realmente me hiciste un abre bocas y yo lo que quisiera ahora es hacerte una pregunta sobre cada uno de los mecanismos. Entonces, sobre la CEV esa facilidad que ustedes han tenido para acudir por ejemplo a las casas de la verdad que se instituyó que debían estar en territorio porque esa era la idea y si en esas casa de la verdad y en esos equipos que se han trasladado a territorio la CEV ha permitido y ha facilitado la participación de las personas que han sido victimizadas, y además si se ha implementado realmente ese enfoque étnico que en un principio pues es un mandato también de la CEV.**

Mira te voy a contar esto de la siguiente forma, tuve la oportunidad de ser parte del equipo del CONPA con recursos de cooperación que se hizo el informe a la CEV, por la confianza y por el trabajo que tengo, realicé 45 entrevistas, entre ellas como 37 a personas individuales y las

otras fueron colectivas, entre grupos focales y algunos entrevistas a autoridades o sea a las juntas de los consejos comunitarios que por un formato de la CEV se manejaba diferente. Mira, de este número de personas, que ese número de entrevistas ascendió como a unas 70 personas incluyendo los grupos focales, ninguno había sido entrevistado por la CEV de la casa de la verdad que para el caso del cauca está en Popayán, nosotros por estar en el norte tenemos mucha más cercanía territorial e incluso de comunicación y de acceso a Cali que al mismo Popayán. Ni a mí, para decirte de esta forma, ni a mí que fui consejero mayor de ACONC durante 6 años y unos meses y fui integrante activo del CONPA y de la comisión de la verdad ni siquiera me entrevistaron, modestia aparte, lo que te quiero decir es, ese enfoque étnico, en el caso del norte del cauca para las comunidades del pueblo negro para mí eso no fue tal cual, si, para mí eso no se dio, claro, la CEV puede justificarlo hoy con el trabajo que hicimos nosotros como CONPA y está bien, eso se integra al trabajo que ellos hicieron, pero como estructura central de la CEV, porque lo que nosotros hicimos lo hicimos por aparte, pero dándole la información a ellos, no se dio tal cual. Yo no sé en otras partes del país yo no puedo hablar por ellas, pero como me dices que tu investigación está centrada en el norte del cauca, que ese tal enfoque étnico para las comunidades étnicas, porque no puedo hablar por las comunidades indígenas, a las comunidades negras, no se dio. O sea así concreto lo puedo citar y me da mucha pena con los comisionados y con las comisionadas y con la gente que está allí, pero para mí no fue así.

**Perfecto, es importante también revisar esto porque claro, la CEV también se nutrido de cosas que las mismas comunidades han puesto a disposición de ella, entonces también es importante tener esta perspectiva y que realmente es el motivo por el que lo estoy entrevistando a usted, porque tiene conocimiento directo de cómo fueron las cosas.**

**Hay un componente de los mecanismos que se plantearon en el acuerdo de paz que es la UBPD entonces yo quisiera saber si en el norte del cauca primero hay un despliegue territorial de la UBPD y que además realmente se le esté prestando ese apoyo integral a las buscadoras y buscadores porque claro, es un componente que es importante y que se hizo aparte de la CEV precisamente dada la importancia que tiene las búsqueda de las personas desaparecidas, entonces yo quisiera si efectivamente ha funcionado algo de la UBPD allá.**

Bueno, te voy a contestar también de la siguiente manera, yo, entiendo que la institucionalidad a veces coordina cosas directamente con los consejos comunitarios ¿no? Pero que yo conozca que se haya hecho en territorio ancestral de las comunidades negras, de nosotros, que yo conozca, no se ha hecho. No sé si hayan coordinado algo de forma directa con los consejos comunitarios, pero no tengo ahorita tanta facilidad de averiguarlo, o sea hasta marzo del año pasado que yo fui consejero mayor de ACON, nunca se me reportó sobre eso, si se me reportó sobre el desminado en los territorios, pero de la búsqueda de desaparecidos no.

Y pues no sé, me da la impresión de que eso no se ha hecho porque nuestra guardia cimarrona, que además es la que siempre se involucra en eso, algunos coordinadores y algunas autoridades no están prestas a apoyar en eso porque es que el conflicto del norte del Cauca nunca se ha ido, entonces, también hay unos riegos agarrados a eso que las comunidades y los líderes y las autoridades también tienen sus propios riesgos y sus propios miedos, entonces, te contesto de esa manera, pero la verdad no estoy enterado, no sé si se haya hecho, de lo que yo conozco no se ha hecho.

**Listo, perfecto. Ahora si la pregunta es relación a la JEP, yo sé que este capítulo de la participación de las víctimas se vino a reglamentar un poco mejor en diciembre del año pasado con el manual que saco la JEP, sin embargo, yo quisiera saber si dentro del proceso que se lleva ahorita en el caso 05 y teniendo en cuenta la interlocución que**

**usted ha podido tener allá ¿Cuáles han sido las dificultades que se han presentado para que las víctimas tanto individual como colectivamente puedan tener una participación efectiva dentro de la JEP?**

Bueno, mira, en las audiencias en las que yo he estado, pero también lo que he escuchado de las otras autoridades que han asistido y de los delegados que he mandado, hay una queja generalizada que es, bueno, primero la JEP si está garantizando lo logístico y pues las condiciones básicas de conectividad porque se están haciendo virtuales, entonces por el lado de lo logístico yo no creo que haya que quejarse porque siento que ha funcionado, pero la mayoría de los comparecientes no reconocen hechos que han victimizado a las comunidades negras del norte del cauca, es decir, casi siempre hablan de cosas en las que han participado, solo para territorios de comunidades indígenas y de comunidades mestizas o de campesinos, en ese orden de ideas yo creo que eso no ha ayudado a avanzar en que se conozca las versiones de lo que sucedió en los territorios de las comunidades negras. Entonces por un lado eso ha sido una queja reiterada en todas las audiencias, yo hasta ahora no he escuchado una audiencia en la que se diga sí se reconoció esto y cuando la comunidad por medio de su representante jurídico hace la pregunta, no hay respuesta a ello, entonces eso te podría decir en términos generales, pero si se ha estado garantizando en términos de logística y la participación, lo que sí creo es que hay poquitos... Hileros tiene poquitos funcionarios y eso depende de la JEP y de la capacidad económica porque tienen un solo abogado para todo el norte del cauca y el sur del valle de cauca, imagínate son 59 consejo comunitarios, entonces analizar el caso y todos los expedientes para una sola persona es una cosa muy complicada, entonces por ahí también se puede dejar de hacer un apoyo más contundente de representación jurídica y una de las cosas que si le solicitamos en una de las actividades que se realizó, no era una audiencia, pero vino un magistrado de la JEP con sus asistente, se le pidió que revisaran eso de la cantidad de abogados que hay asignados al caso 05, porque son muchos consejos comunitarios, además, eso sin contar las víctimas individuales que no tomaron la decisión de ser representados por Hileros, entonces son demasiado las víctimas para atender esa situación de los victimarios que no se da abasto, entonces quería decirte eso.

**Otra pregunta con respecto a la JEP ¿cómo ha sido el tema de la acreditación? De cara a las facilidades que ha puesto la JEP para que se dé ¿ha sido difícil que las acrediten? ¿han podido tener un enfoque dialógico? ¿las víctimas han podido tener un contacto de tu a tu con los comparecientes en el marco de la audiencias? Saber un poco si eso ha sido ha sido fácil o si no se siente satisfecha de participación en esos contextos.**

Te cuento, en cuanto a la acreditación se hizo un primer evento en el 2019, en ese tiempo no estábamos con esta crisis de la pandemia, lo que facilitó la acreditación de los representantes legales de los consejos comunitarios y de algunas víctimas individuales, sin embargo, eso no se hizo con un enfoque étnico, y cosa que solo hasta este año se logró, creo que era ese tema de hacer acreditación con enfoque étnico del evento que te hablaba ahora, donde se hicieron, nosotros trabajamos con microcuencas, se hicieron 5 reuniones, una por cada microcuenca, pero se hizo virtual y el magistrado solo estuvo por decirlo así en el punto central de donde se transmitió para todas la microcuencas.

El tema de participar en las audiencias y todo esto, se ha hecho por medio del representante jurídico, en este caso de los delegados de Hileros, pero no se ha hecho de forma directa con las víctimas por los riesgos, y ese orden de ideas, con lo concertado por las comunidades hasta ahora se ha cumplido, yo creo que en un 80%, no ha habido tanto dificultad en ese término tanto de la acreditación como de la participación en las audiencias.

**Y otra pregunta que yo tenía de la JEP es si ustedes ya tienen conocimiento de cómo se está manejando el tema de los TOAR que son trabajo, obras, reparaciones con enfoque**

**restaurativo dentro de la JEP, es decir, si ya se ha mencionado este tema, si saben cómo se va a ejecutar o cómo se va a hacer.**

De eso no conozco, pero te puedo compartir el número de dos personas, a ver si ellos te dan la entrevista para que tengas más información de ese punto, porque la verdad no lo conozco y no te quiero contestar algo que no conozca.

**Listo no tranquilo. Y ahora ya el último punto que son las medidas, yo tengo entendido que en el acuerdo de paz se propusieron varias medidas de reparación y de no repetición y que no están relacionadas con el temas de justicia, es decir, la JEP no va a realizar reparaciones económicas a las comunidades, entonces se crearon una medidas específicas que hay una parte colectiva y que está relacionada con la configuración de los PDET en territorio y yo entendido que en el norte del cauca está configurado uno de los PDET, entonces yo quisiera saber primero si las medidas de reparación se han visto en algun sentido y también si esa implementación de los PDET ha facilitado la participación de las victimas teniendo en cuenta un enfoque étnico hibrido y es que las personas han sido victimizadas y que además hacen parte de un grupo étnico.**

Mira, con respecto a eso, el tema de las medidas de reparación simbólica y económica no se han visto en el norte del cauca, más allá de las reparaciones individuales que hacían antes de todo el proceso de paz e incluso antes del mismo cumplimiento del decreto 4635 que reconoce 36 sujetos colectivos de reparación que son 36 consejos comunitarios de los 43 que existen, pero eso tampoco ha avanzado más allá de tener solamente la resolución de víctimas, entonces te concluyo así concreto que no ha habido ningún proceso de reparación colectiva ni económica ni simbólicamente.

Lo segundo, con respecto a los PDET, en un inicio entre comillas diría yo hubo una participación de las comunidades negras y digo entre comillas porque nosotros tenemos como ACON un plan de buen vivir que se discutió que se trabajó con los consejos comunitarios, pero a la hora de implementar el dialogo y decir que tuvieran en cuenta ese ejercicio de planificación, no se hizo, con el argumento de que tenía que hacerse un trabajo vereda a vereda donde el enfoque étnico realmente no estaba diseñado o bueno no, implementado, lo que ellos tenían diseñado en el papel. Con la IAMPE tampoco se cumplió y ya luego le dieron fue un enfoque veredal y cuando subió al nivel municipal, quedaba ya un tema de participación por veredas y por comunidades, mas no con las características propias del enfoque étnico, obvio, hay veredas que en 90% son afrodescendientes, entonces la excusa es que están participando como afro, pero la metodología no permitía ese enfoque y más teniendo en cuenta lo planificado y la cosmovisión propia de la gente, sino que nos llevaron a un nivel en donde sentaron a todo el mundo con empresarios, comunidades indígenas, incluso, muchos proyectos de los empresarios fueron los que tuvieron más fuerza a la hora de la discusión municipal y que decir en el nivel regional, cuando se trabajó todo el Norte del Cauca y del Alto Patía que cogen dos municipios del Valle, 5 de Nariño y 17 de Cauca, en el caso del nuestro, fue peor. Los empresarios volvieron a participar con más fuerza, los alcaldes con más fuerza y las comunidades solo eran para que dieran la venia a lo que se discutía allí, esa es mi reflexión. Hoy, en términos de implementación, incluso, de unas obras rápidas que había y eso, eso no se dio, se quedó en el papel y los proyectos que la gente priorizó también se desaparecieron en términos de que salieron priorizados otro tipo de proyectos pensados por otras comisiones y otros componentes de las sociedad y no netamente las comunidad negra, en el caso de nosotros, las comunidades indígenas creo que presentaron las mismas dificultades.

**La última pregunta está relacionada con la No Repetición, en el acuerdo de paz se dice que es Estado debe garantizar y debe fortalecer los mecanismos de promoción y protección de los derechos humanos en el posacuerdo, yo quisiera saber si eso se ha**



**hecho, yo se que es una pregunta que uno ve las noticias y se da cuenta de que no, pero sin embargo quisiera tener una aproximación a eso, y adicionalmente, eso ligado a si esa participación que ustedes han tenido como comunidades que han sido victimizadas en los mecanismos de justicia en tiempos de transición tiene alguna relación directa con lo que está sucediendo con los líderes y lideresas social y defensores y defensores de derechos humanos en el norte del cauca. Es decir, saber si esa participación de pronto puede estar ligada a este tema de la crisis humanitaria que usted me mencionaba en un punto.**

Bueno, empezando por lo último que mencionaste, yo creo que hay que ser sincero, la mayoría de los casos de masacres y situaciones que se han presentado en los últimos días, no están relacionados directamente con la participación en los mecanismos de justicia transicional. Sin embargo, si han sido comuneras y comuneros de las comunidades que son representadas por su autoridades étnicas ante estas instancias, pero como el acuerdo es integral y no se puede hablar de no repetición si no se trabajan todos los frentes, muchas de esas cosas están asociadas a las los cultivos de uso ilícitos, a las economías ilegales en términos de incluso de personas que denuncia que no están de acuerdo con esto, pero también de personas que desafortunadamente han sido cautivadas y engañadas para que entren a este círculo de las economías ilegales, entonces, eso en términos de los cultivos de uso ilícito, si los PNIS no funcionaron, pues entonces esto se redunda en la sustitución. Mira, el monocultivo de uso ilícito de la coca se ha encendido más en los últimos 2 años, que incluso antes de los acuerdos de paz, y hoy se encuentra el sembrado en muchas partes que antes ni se imaginaba uno que pudiera estar sembrado, alrededor y cerca de las vías principales de acceso público a los municipios, en los casos de Buenos Aires y Suárez, eso se está viendo mucho. Entonces eso es muy preocupante porque como el gobierno no actuó pues la no repetición es lo que va de paseo porque hoy se ha repetido incluso con mayor fuerza muchas de las situaciones que se vivían antes del acuerdo de paz. El actual gobierno, corporativo ajeno a la realidad de los territorios, creyendo que todo se hace solo desde Bogotá, pues no, lo que ha hecho es por omisión y por acción agudizar esta situación, la crisis humanitaria, pero también agudizar esta situación de que se sigue repitiendo con mucha más fuerza lo que se vivía antes. Entonces quería decirte eso y eso es lo que tengo para decirte respecto del tema.

### **3. Entrevista 3**

Líderesa social indígena, entrevista semiestructurada realizada el 22 de abril del 2021.

**Como le comentaba, en un primer momento la idea es que usted me comente quién es usted, qué hace, y si ha tenido algún acercamiento con los mecanismos de justicia en tiempos de transición, dónde está ubicada también es importante.**

Ah, ya, pues a ver, qué le digo... Mi nombre es [REDACTED], vivo en el departamento del Cauca, zona centro y frente a la pregunta pues... frente a los mecanismos de participación... pues ellos salen de todo el proceso de paz y pues eso no ha sido posible, mejor dicho, eso más que promesas y cumplimientos nada, eso es como lo que uno percibe dentro de los territorios, y ahora más cuando el gobierno no apoya el proceso de paz entonces usted ya se puede imaginar lo que pasa en los territorios, entonces por ahí no hay ninguna garantía.

**Según lo que le entiendo, el problema más grande a la hora de implementar el acuerdo es son las garantías de lo repetición ¿cierto?**

Claro que sí.

**Y ya entrando en materia, yo quisiera saber si la CEV ha tenido un acercamiento con ustedes directamente o cómo ha sido el acercamiento que la CEV ha tenido, sobre todo con los pueblos indígenas.**

Pues la CEV ha trabajado con algunas compañeras de aquí del Cauca y ellas conocen el territorio y lo han caminado, ha habido algún acercamiento, pero el tiempo que ellas tienen es muy cortico y de igual forma ellas ya están diciendo que con ese tiempo que ya se acaba ahora en noviembre y ellas dicen que no van a alcanzar a hacer nada y tendríamos una verdad otra vez a medias porque el tiempo que le dieron a ellas no va a ser suficiente y fueron 50/60 años de guerra y apenas dieron como dos o tres añitos para la CEV que se cumplen ahora en noviembre, entonces imagínate no más el hecho y el trecho de la magnitud de lo que le estoy hablando. 50/ 60 años de guerra para 3 años de verdad eso es absolutamente nada.

**¿En la zona en la que usted se encuentra hay alguna Casa de la Verdad? O ¿cómo ha sido ese acercamiento con la CEV? ¿por intermedio de las asociaciones o de las comunidades que ya existían y que empezaron a mandar informes a la CEV? o ¿Esta en algún momento se entrevistó con la población habló con la población o cómo fue eso?**

Pues acá hay un Casa de la Verdad, pero yo no la conozco, en el departamento del Cauca hay una que nos han invitado, pero no hemos ido, nosotros lo que hemos hecho es entregarles a ellos y a la JEP, lo hemos hecho directamente como resguardo y que se les entregó directamente porque vinieron de Bogotá.

Pero bueno, la verdad si se ha hecho trabajo dentro de los territorios y pues de alguna forma, lo hemos enviado, lo poco y nada que hemos podido hacer.

**¿usted hace parte de qué resguardo?**

Nosotros somos comunidad Nasa, de departamento del Cauca zona norte, pero ubicado en el centro del departamento, el resguardo se llama Kiwe Kitek.

**Bueno, con el acuerdo de paz también se creó otro mecanismo que es la UBDP, yo quisiera saber si la unidad ha hecho presencia en esta zona del Cauca y si realmente se le ha prestado un apoyo a los buscadores y a las buscadoras para que tengan un acompañamiento en la búsqueda de sus familiares desaparecidos.**

La UBDP no esta y decir que hay sido como tan efectivo, no sé, de pronto han hecho algunos ejercicios de pronto en Montes de María o en Medellín, pero pues acá en el Cauca también ha sido muy poquita la búsqueda, de pronto porque no se hizo bien la caracterización y eso también ha sido muy mínima esa búsqueda y de hecho pues las familias están allí a la espera y de verdad que hay familias desaparecidas, hijos, papas, mama, hermanos, entonces pues y eso no ha sido posible.

**O sea que la UBDP no ha hecho un presencia en el territorio tipo que usted diga, bueno voy a ir a la UBDP a que me presten apoyo ya sea psicosocial o en la búsqueda, eso no ha pasado.**

Pues no porque ellos también ponen una condición, ellos dicen que entrarían con ejército, con la policía, pues como mecanismos de precaución y la comunidad indígena siempre les dijo, no, nosotros tenemos la guardia, ustedes pueden llevar sus forenses, a medicina legal, ustedes los pueden llevar y nosotros hacemos el acompañamiento, la seguridad con la guardia indígena, pero pues ellos dicen que no, que tiene que ser con ejército y policía y entonces en eso tampoco hubo consenso, no hubo acuerdo y nos quedamos entonces como se dice a la espera.

**¿O sea que se trata de un tema que no se ha podido coordinar con la autoridades ancestrales de ustedes?**

Si, más o menos fue por ese lado, porque cuando yo participé quedaron en eso más o menos, además pues los territorios pues uno los conoces. Aunque ahoritica si pa que intentarlo si uno no sabe ni con quien ando ni con quien se cruza. Sino que cuando se le hizo la propuesta a ellos de que se fueron con la guardia indígena pues conocíamos el territorio, por lo que ellos hacen control territorial y no quisieron... entonces yo creo que eso ahorita está más difícil porque ahora se ha agudizado mucho la violencia en los territorios, entonces yo creo que sería más difícil entrar a buscar esos seres que están allá embolados, los cuerpos.

**El siguiente mecanismo es la JEP, entonces la primera pregunta que yo quisiera hacerle es ¿qué dificultades han encontrado ustedes a la hora de participar de manera colectiva en el marco del caso 05 que está abierto en la JEP que es sobre el Norte del Cauca? No sé si la comunidad a la que usted hace parte esta priorizada en esa caso o no, o cómo ha sido ese proceso ahí.**

Pues en ese le cuento que en eso estamos, porque hay unas versiones libres y eso lo maneja acá la organización, pero no es mucho lo que garantice porque ellos no quieren hacerse responsables, cuando uno les pregunta por tal hecho o por tal persona ellos dicen ay, no, es que al que le tocaba o el que estaba al mando pues ya se murió, lo mataron, o no lo han capturado, entonces los que están allí respondiendo no están diciendo absolutamente nada de lo que nosotros queremos saber, no están colaborando. De hecho nosotros ya le dijimos a la autoridad, a la changualadi que no están haciendo el reconocimiento de esas verdades, ya nosotros dijimos que ellos no están diciendo la verdad y que hay que buscar entonces el mecanismo para que ellos la digan. Y muchas veces cuando ellos están hablando pues la persona que fue testigo en el momento no están para decir, si aquí paso esto o esto, entonces ahí no hemos podido encontrar esa verdad, y esa verdad, mientras nosotros no encontremos, yo siempre lo digo, así: “esas verdades detrás de un espejo” y no se haga cara a cara con la gente, así no va a pasar nada, porque siempre se hace en esos audiovisuales que lo colocan a uno y que los colocan a ellos, en esa pantalla, allí no va haber ninguna verdad, porque ellos van a decir lo que ellos quieren.

**Listo, entonces el principal problema ha sido el reconocimiento de la verdad. Ahora ¿en el marco de esas audiencia que usted me cuenta que se han hecho, ustedes han podido participar directamente o lo han hecho con por medio de la representación legal que tienen... o lo han hecho por intermedio de las autoridades étnicas o cómo ha sido.**

Allí quien está a cargo de eso es la autoridad, nuestros abogados, los magistrados indígenas aquí en el territorio, las familias, bueno, ellos siempre han tratado de que este la representatividad allí, pero como te digo, cuando les tocan cierto puntos, ciertos temas ellos dicen “ah eso yo no lo sé, yo no lo tuve, fue en el año tal, pero ese alias se murió, o en otras no se sabe, está desaparecido”, entonces si ni ellos saben dónde está la persona pues imagínese nosotros menos vamos a saber dónde anda. Entonces eso lo deja decepcionado a uno, entonces no es lo que nosotros queremos, de nada sirve que ellos estén ahí sentados, pero nosotros estamos cansados y a la expectativa de encontrar esa verdad, pero ahí no la vamos a encontrar.

**Y... qué facilidad tuvieron ustedes para presentar los informes... supongo que el de ustedes fue colectivo al ser una comunidad indígenas ¿fue fácil presentarlo? ¿la JEP acreditó a las víctimas? ¿Sabe cómo fue eso?**

No entendí me repites la pregunta por favor.

**Ustedes como pueblo étnico supongo que presentaron un informe colectivo donde dan cuenta de todas la victimizaciones que sufrieron, entonces yo quisiera saber la presentación de ese informe como fue ¿fue fácil? Si la JEP la recibió fácil, si se acreditaron a todas la víctimas, es un poco eso.**

Frente a ese proceso que se está haciendo con la JEP ninguna víctima ha sido acreditada porque eso apenas está empezando, se va en el paso de escuchar las versiones, ahí luego de que acaben las versiones y haya reconocimiento entonces ahí es donde ya la (creo) no estoy segura como irá a hacer, ahí la Unidad de Víctimas dirá bueno, porque ella es la que acredita y lo sube a un sistema para la posible reparación, pero pues no, eso ha sido una suma ilusión.

**Si, y pues también eso es un tema diferente porque eso fue lo que se estableció con la ley de víctimas entonces, si entonces usted no tiene conocimiento de cómo hacen esa acreditación en la JEP o sí?**

No, no sé porque yo de todas maneras yo me cansé de buscar, de mirar y no, y saber que eso no pasaba nada, como le digo, eso para mí era una decepción. Yo veía por las víctimas de desaparición que ellas preguntaban y uno les contaba y eso era lastimarles los sentimientos también a los compañeritos y uno salía más decepcionado, entonces nosotros no volvimos. Esta semana que nos están volviendo a llamar otra vez para que lleváramos, porque dicen -yo hace como dos meses no voy- que se están tocando algunos temas, como el Cauca es tan grandes, entonces ha hablado del Norte, del Sur, del Centro, oriente y nosotros estamos por la cordillera occidental que fue donde ocurrieron los hechos, entre Cauca y Valle, entonces esos temas como que apenas los van a volver a tocar estas semanas. Esta semana me volvieron a mandar el mensaje y ahí lo estoy pensando, no sé si mandarles el teléfono para que estén pendientes, porque fijo tocan el tema y me dicen que por qué no les avisé, entonces estoy pensando mandarles el teléfono para que ellos llamen y puedan asistir a la sala.

**Ahora, lo último es sobre la reparación. En el acuerdo de paz se estableció que las reparaciones no iban a ser económicas ni de restitución. Lo que planteó aparte es que iban a darse una serie de medidas de reparación colectiva. Entonces yo quisiera saber si se ha hecho algo e materia de reparación colectiva, ya sea por ejemplo el reconocimiento de responsabilidades públicas, algo simbólico, si se ha hecho algo en materia de restitución, si se ha trabajado con población desplazada, pero con el acuerdo de paz, no son la ley de víctimas.**

Pues no, hasta ahora no, supongo yo que primero irán a recoger todas la versiones, irán a hacer todo eso, no sé cómo lo estarán haciendo, pues sí, yo sé que en algunos casos debe ser simbólica y todo el mundo lo sabe, pero ya si se tratara de un tema económico, eso sería muy mínimo porque ahora están pidiendo tener 70, 80, 90 o estar enfermo como se dice rápidamente, pero si eres joven y no tiene dolencia y eso frente al conflicto armado pues tampoco te van a reparar porque si una persona presenta por ejemplo, cuando fueron los bombardeos y les dañaron los oídos, las vistas, tuvieron algún tema cardio y todos ellos presentaron certificados médicos, certificados por la salud porque así lo piden y ni así, entonces por eso yo te digo, eso es una norma, pero quedate allí esperando y ni se sabe hasta cuando, entonces ahorita algunos que han podido han tenido que meter abogado y el abogado no lo va a hacer gratis, porque la unidad de víctimas dice que no se necesita tener abogado, pero sin embargo ellos tampoco ayudan a sacar el proceso adelante, entonces hay muchos que han optado por contratar abogado y el abogado se ha encargado de que lo saca lo saca, entonces mira cómo es aprovechamiento de los dolores de las victimas también que los tratan de esa forma. Entonces no, es que Colombia es otros cuento.

**Entonces las FARC o la Fuerza Pública, no han hecho ningún reconocimiento en la zona de nada, ni de si van a reparar, no han mostrado un programa de reparación que vayan a tener con la comunidades.**

No pues hasta ahorita que yo haya escuchado, ninguno, y eso que son víctimas de FARC, imagínate y es que el conflicto armado fueron, uno ejército, policía -lo que llaman fuerza pública-, otro fue paramilitares que el contacto tampoco es muy lejos de lo militar, de lo policial y ahora, la guerrilla, entonces pues no todo eso es bastante complicado en ese proceso y el recrudecimiento de la violencia en el territorio es mucho más fuerte y mirar reparación y eso pues no, yo lo veo un poquito lejos, no sé los que están ahí al frente porque cada uno hace su análisis, y uno también como víctima también pues se cansa, se cansa de ir y venir y voltear y averiguar y te dicen la misma cosa, entonces ya la gente se cansa y ya opta por no volver.

**¿Y ustedes han tenido conocimiento sobre la implementación de los PDET?**

Pues eso es otro cuento, los PDET pasaron por los municipios en los que fue más crudo el accionar del conflicto armado y cogió algunos municipios, pero en eso se han quedado, porque hubo muchos municipios que acá en el Norte del Cauca fueron muy golpeados por el conflicto armado y aun todavía, pero eso no ha pasado a grande ni decir ni reparación ni voltearlos a ver, ni siquiera que hayan dicho venga échele piedra a la vía para que por lo menos puedan andar, de eso absolutamente nada, es más si le contara que esos proceso hace unos días participé en uno y todo ese proceso lo único que ha dejado es hay gente que ha montado su oficina y luego le dicen, venga que trabajamos el tema del PDET, que no sé qué, qué esto por aquí y por allá, pero tienen tremenda oficina y están pues manejando este tema de los PDET, que por una parte uno dice bueno al menos se ve en los ojos de uno, pero por otro, ellos sacan como el recurso y a usted lo mandan bien empapelado para su casa, con cartillas, con todos los acuerdos, los cinco puntos que a usted le queda la cabeza grandota, y uno queda como bueno, pero y esto como se baja al territorio... pues no, resulta que uno lee la información y luego la oficinas desaparecen porque se acaba el recurso y eran oficinas con 8 10 personas allí mientras les dura el proyecto y luego las oficinas desaparecen. Y yo entonces no se ni como llamarle a eso, tal vez aprovechamiento de las personas que están metidas de lleno en ese proceso, y en cambio uno se queda con los papeles en la mano y pensando bueno y ahora qué. Eso ha sido algo muy terrible.

**Entonces no ha habido una participación de ustedes, o sea ¿a ustedes no se les preguntó? ¿hubo una aplicación del enfoque étnico?... ¿se les preguntó qué proyectos tenían y que eran importante desarrollar o cómo se iba a impactar a la comunidad? Porque siento que esa era la idea en un principio, concertar con las comunidades para ver cómo se podía trabajar con ellas.**

Pues claro, de eso se trataba, imagínese, yo creo y estoy muy segura, el único municipio que se puso como se dice, se apretó la faja, porque en ese entonces la alcaldesa lo hizo todo, fue Jambaló, nosotras hasta la acompañamos, ella hizo todo el proceso del PNIS, así se llama y qué pasó, allí a duras penas... ella por lo menos se quitó que el problema de encima, que es fue el narcotráfico, porque fue ella y la comunidad las que pusieron el esfuerzo, se ganó un poco de enemigos, pero ella logró sacar el narcotráfico de su municipio en eso sí, es lo único que a mí me queda como se dice de experiencia y de un buen ejemplo acá en la zona norte del cauca, porque de resto, unos que no creyeron, otros que dijeron ah no, eso es pura mentira, porque como usted sabe el gobierno se arma cuentos y luego no cumple, entonces prefirieron sembrar coca, amapola, marihuana y ahora ese es el problema en los territorios, entonces pero fue todo del acuerdo del proceso de paz y se decía, ya eran otro temas con los reinsertados, entonces ellos decían que no le gusta que le digan reinsertados sino “somos guerrilla, somos FARC”, pero mentira, ellos estaban cada uno por su lado, por su cuenta construyendo varios

grupos, entonces como le decía hoy en día uno ni sabe con quién está ni quien está al lado de uno, por eso es que ha sido tan complicado el recrudecimiento del conflicto armado en los territorios, porque eso se agravó, si habían tres grupos y uno podía hablar y los conocía, ahora sí que peor, uno no sabe ni con quien anda. Pero eso fue todo al no acuerdo a las políticas de los acuerdos que habían hecho gobierno y FARC, eso sí lo tenemos muy claro.

**¿Y cerca a dónde usted vive había algún ETCR?**

¿Cómo me dice?

**Que si dónde usted vive hay algún ETCR, uno de estos espacio transitorios de reclusión.**

Ah sí, sí, ya sé que así se llama, pues no, como te parece que había uno cerca, pero que le tocó hacer a los muchachos porque hoy en día desarmados, civiles, porque con el arma pues bueno se defendían, pero bueno le apostaron ahí al proceso de paz y los empezaron a matar uno a uno hasta que les tocó abandonar ese sitio de concentración y unirse a otro sitio de concentración que está acá mismo en la zona norte del cauca porque donde estaban los estaban matando y ahora pues sí, para que ellos hicieron sus cultivos, y para qué, le problema es que el gobierno tampoco les ha prestado esa seguridad que se comprometió a prestarles, es que todo fue promesa y se comprometió a cuidarlos y no sé en qué punto estaba del acuerdo que decía que se comprometía a cuidarlos, de protegerlos, de darles unos recursos para sacar sus proyectos productivos y darles empleo o vivienda, bueno, yo no sé qué más era para ellos... y resulta que nada de eso se cumplió, esos muchachos se cansaron, los estaban matando y ya estaban quedando era mujeres solas porque ellas decidieron tener sus hijos, tener sus familias y resolvieron que ese sitio quedo abandonado y se unieron a otro acá en la zona del norte del cauca porque acá habían 3 sitios abandonaron uno y el otro se trasladó. Entonces a ellos por seguridad del toco irse, y a uno entonces como población civil o como comunidad, como nosotros nos identificamos, sabemos que ellos sin armas pues no tienen con qué defenderse y eso para respetar, pero cuando ellos decidieron apostarle al proceso de paz y dejaron las armas y fueron cogiendo la zona aquí, pues nosotras tampoco estuvimos de acuerdo y pues nos quejamos frente a ellos, pero bueno ahí, no resultó nunca en nada.

**y bueno, yo quisiera saber, con el acuerdo de paz se le apostó al fortalecimiento en los mecanismos de promoción y protección de derechos humanos y yo quisiera saber si eso en alguna medida se ha hecho por parte del gobierno en el norte de cauca.**

Ah no, hay sí que fue peor porque si usted se va a la historia entre 2016-2020, cuantos lideres defensores y defensoras de derechos humanos no han muerto... ¿por qué? porque fueron los años en donde vino flaqueando el proceso de paz y comenzaron con los líderes y las lideresas, aquí también están pues los combatientes porque ellos ya habían entregado también pues sus armas, ya estaban apostándole a otro proceso de vida y los que defendemos los derechos humanos pues son amenazas y amenazas y escóndase y corra para allá corra para acá, entonces si usted mira en esos años fue donde más subieron muertes de líderes sociales y amenazas y hasta hoy en día continúa ¿por qué? Porque bueno, siempre se dice que la UNP es el encargado desde el gobierno para la protección y la seguridad de los líderes, defensores de derechos humanos, pero ellos siempre dicen no, es que eso es mucha gente, mucha amenaza y no se puede protegerlos a todos, y bueno, hasta razón tendrán, porque las medidas son muy, por no decirlo, mediocres, le dan un chaleco y un teléfono, así, como, o sino un botón de pánico, no se ese cómo funciona, pero está dentro de las medidas y entonces no, eso de la carrera y del susto no sabe si va a marca o no va a marcar, eso ha sido mejor dicho muy complicado, algunos han optado por, los que más han defendido su territorio, por defender su territorio ya sea de los cultivos ilícitos o de la minería, la gente se ha tenido que ir del país... u obrar por allá bien calladito. Y nosotros los que defendemos el territorio y queremos el buen

vivir para nosotros los pueblos, pues mire no lo podemos hacer porque mire, el primero que levante la voz lo están matando, no importa que sea hombre o mujer. Ahora les están duro a las autoridades a nuestras autoridades indígenas y a los autoridades de estos años son todas han sido jóvenes y son los jóvenes que están cayendo en este conflicto y por defender el territorio y no dejar que las disidencias sigan con los cultivos ilícitos, entonces mira esto cada día está más difícil en el territorio.

**Y ya la última pregunta está relacionada con eso que usted menciona de los asesinatos de líderes y lideresas sociales que se han presentado desde la firma del acuerdo, yo quisiera saber si usted cree que está relacionada con la participación que ustedes han tenido en los ya se en mecanismos de justicia transicional, o sea en el SIVJNR o en el acuerdo de paz en general, o sea si usted cree que esas muertes están relacionadas con la implementación del acuerdo de paz.**

Yo siempre digo que eso es general, uno porque el gobierno no cumplió con lo que se pactó, y bueno, pues eso se sabía porque el que firmo fue un presidente y luego entró el otro pues allí se rompió todo. Eso es lo que uno mira, entonces en ese sentido esto tenía que pasar y como yo le decía, en el marco del proceso general los muchachos que habían entregado sus armas se rearmaron, y se rearmaron fue para meterse en los territorios y coger el tema del narcotráfico, eso hay que dejarlo claro también, y por eso ellos se adueñaron del narcotráfico y cuando la comunidad fue a reclamarles, entonces como quien dice ellos eran los dueños y señores porque ellos ya se habían rearmado ya se habían apoderado de los territorios y así si como se dice el que reclama no llega a la casa porque ellos los buscan, lo matan como le dijera, como un ejemplo, lo usan como un perrito y cuando pueden lo matan. Entonces yo le digo para que nos dejen hacer nuestra economía todo tiene que ver con el narcotráfico. Lo otro es que el narcotráfico también se apodero de las familias y las familias también pensaron que eso es el único sustento económico que ellas tienen, entonces, allí fue donde están matando muchos jóvenes, muchas familias y pues este momento es muy difícil decir que por qué está pasando eso o por qué sucede, lo único que nosotros sabemos y entendemos es el tema del narcotráfico porque se apoderaron y si llega otro pues a comprarlo o a querer encontrar, como ya hay algunos allá entonces esos son los que mandan, entonces ahí estamos en medio de ese conflicto, porque antes no se veía, porque los que se vinieron a rearmar escogieron los territorios donde no había casi matas de coca y ellos empezaron a traer la marihuana y dijeron “vamos a sembrar esto” que nosotros cuidamos y nosotros mismos lo vendemos y lo sacamos, entonces ahí es donde nosotras las autoridades dijimos y permiso la autonomía del territorio porque como te digo, el que reclama y exige a ese lo van matando, entonces hasta allá nosotros no podemos ni lo que vamos a hacer y bueno, ya después se va dejando todo.

#### **4. Entrevista 4**

Defensor de Derechos Humanos Afrodescendiente, entrevista semiestructurada realizada el 29 de abril del 2021 – Se ponen de presente solo las preguntas que se le realizaron debido a que no permitió la grabación de la entrevista.

- 1. La idea es que yo le voy a hacer una serie de preguntas que permitan dar cuenta de cómo ha sido la participación que ustedes han tenido en los mecanismos de justicia en tiempos de transición que se plantearon con el acuerdo de paz, entonces, el primero está relacionado con la CEV. Yo quisiera saber cómo fue esa llegada de la CEV al territorio y si se ha implementado el enfoque diferencial étnico en la CEV y cómo ha sido ese trabajo con las comunidades y la CEV. No sé si de pronto quiere empezar don Adelmo debido al corto tiempo que tiene disponible para la entrevista.**

2. Según lo que le entiendo ustedes se han centrado específicamente en un mecanismo de justicia en tiempos de transición que es la JEP, entiendo es lo que me expresa usted ¿sí?
3. Las preguntas las voy a enfocar más hacia la JEP y a un tema que me interesa sobre todo desde la perspectiva que ustedes han tenido en territorio que tiene que ver con las reparaciones y las garantías de no repetición, que en cierta medida están relacionadas con lo que pasa en la JEP. Entonces las preguntas ya como tal de la JEP serían, en esa marco del caso 05 que está abierto y que cubre al Norte del Cauca y al Sur del Valle del Cauca, qué dificultades ha presentado la participación colectiva de las personas victimizadas en este macrocaso, y qué tan complejas han sido las actuaciones en las que les permiten participar como comunidad étnica victimizada.
4. ¿La justicia ancestral afro ha realizado un trabajo mancomunado con la JEP?
5. Respecto de las sanciones propias que se van a determinar ¿se están construyendo anticipadamente los TOAR?
6. ¿Cómo se está llevando a cabo ese enfoque restaurativo de la justicia?
7. ¿Se han establecido medidas cautelares para mitigar las garantías de no repetición en el Norte del Cauca, teniendo en cuenta la sistematicidad de asesinatos a líderes y lidereas que se han perpetrado en la zona?

## **5. Entrevista 5**

Defensora de Derechos Humanos Afrodescendiente, entrevista semiestructurada realizada el 29 de abril del 2021 – Se ponen de presente solo las preguntas que se le realizaron debido a que no permitió la grabación de la entrevista.

1. ¿Cómo fue ese proceso que tuvo la comunidad afro del Norte del Cauca en el marco del conflicto y el paso a la justicia en tiempos de transición?
2. ¿Qué actores armados fueron los que más incidencia tuvieron en la zona?
3. Quisiera saber cómo se están llevando a cabo una construcción colaborativa de los TOAR
4. ¿Qué perspectiva tiene de la creación de los PDET? ¿Cómo fue la interlocución con la comunidades étnicas para la elaboración de estos? ¿cómo ve la funcionalidad y la implementación de estos?
5. ¿Cómo ve usted la utilización del PDET como mecanismo de reparación colectiva?
6. Quisiera hacerte dos preguntas sobre los otros dos mecanismos de justicia en tiempos de transición ¿cómo ha sido el funcionamiento de la CEV y de la UBPD?
7. ¿Más allá de los PDET en alguna medida se dieron las reparaciones simbólicas colectivas?
8. ¿Cuáles son las expectativas que tiene la población en términos de reparación?





David Bondia Garcia <bondia@ub.edu>

Wed 6/2/2021 3:11 PM

To: You



Buenas noches Angie,

Mediante el presente mail dejo constancia que tu TFM, con el título: "La voz de la población victimizada: un análisis de la implementación de los mecanismos de justicia en tiempos de transición en el norte del Cauca colombiano", reúne todas la condiciones para poder ser depositado y defendido.

Te felicito por el gran trabajo realizado,

Un cordial saludo,

David Bondia

Aquest missatge, i els fitxers adjunts que hi pugui haver, pot contenir informació confidencial o protegida legalment i s'adreça exclusivament a la persona o entitat destinatària. Si no consteu com a destinatari final o no teniu l'encàrrec de rebre'l, no esteu autoritzat a llegir-lo, retenir-lo, modificar-lo, distribuir-lo, copiar-lo ni a revelar-ne el contingut. Si l'heu rebut per error, informeu-ne el remitent i elimineu del sistema tant el missatge com els fitxers adjunts que hi pugui haver.

Este mensaje, y los ficheros adjuntos que pueda incluir, puede contener información confidencial o legalmente protegida y está exclusivamente dirigido a la persona o entidad destinataria. Si usted no consta como destinatario final ni es la persona encargada de recibirlo, no está autorizado a leerlo, retenerlo, modificarlo, distribuirlo o copiarlo, ni a revelar su contenido. Si lo ha recibido por error, informe de ello al remitente y elimine del sistema tanto el mensaje como los ficheros adjuntos que pueda contener.

## ANGIE LORENA GRACIA RAMIREZ

### ABOGADA

Máster Oficial en Criminología, Política Criminal y Sociología Jurídico-Penal de la Universidad de Barcelona (en curso). Abogada bilingüe -inglés y español-, con más de dos años de experiencia laboral y de voluntariado en Derechos Humanos, asesorando jurídicamente población en condición de vulnerabilidad -víctimas del conflicto armado y personas privadas de la libertad-. Con profundo interés a nivel práctico e investigativo en la implementación de la dimensión restaurativa de la justicia, tanto en el ámbito del derecho penal como en el de construcción de paz.

### CONTACTO

+57314-334-0817

angiegracia22@gmail.com

www.linkedin.com/in/angie-lorena-gracia

Con disponibilidad para  
cambiar de domicilio y para  
viajar.

### IDIOMAS

Español - Nativo.

Inglés - B2 - FCE/ILAC

Italiano - A2

### VOLUNTARIADO

**LÍDER DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO** |  
enero 2021 - actualidad.

**Fundación Transformación Sin Fronteras**

- Se lidera el grupo de abogadas voluntarias; se hace seguimiento de los casos que llevan y se realizan informes periódicos sobre la gestión jurídica realizada.
- Se asesora y asiste en materia legal a población privada de la libertad y a sus familias, así como a población pospenada en el marco de una alianza que tiene la fundación con Casa Libertad. Se elaboran documentos como memoriales, peticiones, tutelas, habeas corpus, etc.
- Se organizan y moderan conversatorios sobre temas de DDHH.

**VOLUNTARIA STAFF** | enero 2020 -  
diciembre 2020.

**Red de Voluntariado Tú Sirves**

- Se organizó la logística para la ejecución del proyecto de impacto social "Voces para la libertad", un podcast dirigido a población privada de la libertad en tiempos de pandemia, los episodios salían una vez a la semana por el canal de YouTube y de Spotify de la Pastoral Penitenciaria.
- Con el equipo Staff se dirigió y capacitó a un grupo multidisciplinario de 45 voluntarios con quienes se produjeron más de 30 podcasts.

### EDUCACIÓN

Universitat de Barcelona – (en curso) - **Máster Oficial en Criminología, Política Criminal y Sociología Jurídico-Penal** - Promedio 8.9.

**Trabajo de Fin de Máster:** "La voz de la población victimizada: un análisis de la implementación de los mecanismos de justicia en tiempos de transición en el Norte del Cauca colombiano".

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá - 2018 -  
**Abogada** - Promedio 4.3.

### EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA

- Fundación Internacionalista de Bolivia/ Konrad Adenauer Stiftung - 2021 – **Becaria del programa en relaciones internacionales.**
- PlayGround / Learning by Helping - 2021 - **Máster en Innovación Social.**
- Pontificia Universidad Javeriana - 2020 - **Diplomado en acción humanitaria, reconciliación y construcción de cultura de paz.**
- Pontificia Universidad Javeriana (Edx) - 2020 - **MOOC: CLVx: Comisión de la Verdad Colombia.**
- Universidad Nacional de Colombia y Jurisdicción Especial para la Paz - 2020- **ABC de la JEP.**
- Cruz Roja Colombiana - 2020 - **Curso en Derecho Internacional Humanitario DIH.**
- Universitat de Barcelona - 2019 - **Curso de extensión universitaria: Derechos humanos y privación de libertad.**
- The University of Queensland (Edx) - 2018 – **Curso: Crime101x: The Psychology of Criminal Justice.**
- Amnesty International (Edx) - 2017 - **Curso: Rights2xES: Derechos Humanos: Los Derechos de las personas refugiadas.**

### EXPERIENCIA

**ASESORA JURÍDICA** | agosto 2019 - diciembre 2020.  
**Fundación para la Protección de los Derechos de las Víctimas de Secuestro, Desaparición Forzada y Otros Hechos Victimizantes (FUNVIDES)**

- Se coordinó un equipo interdisciplinar de 4 personas con el que se elaboró el informe sobre desaparición en el marco del secuestro, el cual fue presentado a la JEP el 23 de abril de 2021.
- Se identificaron más de 2000 casos de desaparición, se recopiló la información mediante entrevistas en profundidad, visitas a las comunidades y revisión documental; se organizó la información en bases de datos que dieran cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cada caso, entre otros datos; se analizó la información y se construyó el informe, en este se presentan 1000 casos de desaparición, los cuales se busca sean acreditados en el caso 01 de la JEP.
- Se brindó asistencia y asesoría jurídica a víctimas del conflicto armado sobre los derechos, rutas, medidas y recursos con los que cuentan en el SNARIV y en el SIVJNR, con el fin de que pudieran acceder a estos.
- Se realizaron conceptos e investigaciones sobre participación de las víctimas mujeres (buscadoras) en el SIVJNR, medidas de reparación integral por parte de la fuerza pública en casos de ejecuciones extrajudiciales, enfoque de género en el marco del conflicto armado, temas relevantes para la fundación.

**ASISTENTE JURÍDICA** | julio 2017 - enero 2018.

**Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Zipaquirá.**

Responsable de la Oficina de investigaciones Internas:

- Con el fin de agilizar las investigaciones internas se creó una base de datos en Excel donde se compilaban todos los casos, enfatizando en la etapa de la investigación en la que se encontraban.
- Se organizaron y lideraron 6 reuniones con el Consejo de Disciplina de la cárcel con el fin de poder proyectar los actos administrativos sancionatorios o absolutorios, de tal forma que dicha información fuera recibida rápidamente por las áreas de tratamiento y jurídica para que actualizaran el sistema.



**FACULTAD DE DERECHO**  
**ENSEÑANZA OFICIAL DE MÁSTER UNIVERSITARIO DE CRIMINOLOGÍA, POLÍTICA CRIMINAL**  
**Y SOCIOLOGÍA JURÍDICO-PENAL**

ANGIE LORENA GRACIA RAMIREZ, con DNI o pasaporte AO762618, accedió a esta enseñanza con los siguientes datos:

Tipo: acceso ordinario a máster oficial  
Vía: título extranjero no homologado  
Titulación: Derecho  
Superado/ada: 2018  
Universidad: Universidad extranjera  
País: Colombia

y ha cursado las asignaturas que se relacionan en la especialidad: Política Criminal

Asignaturas	Idioma Docencia	Tipo	Créditos	Curso	Calificación/ Calif. ECTS
<b>MDD624 Materia: Delincuencia, Criminología y Sociedad</b>					
569996 Desviación, Control y Cambio Social	spa	1	3,0	2018-19	9,0 (SB) /A
569997 Control Social y Punitivo. El Pensamiento Criminológico	spa	1	3,0	2018-19	9,5 (SB) /C
<b>MDD625 Materia: Género y Sistema Penal</b>					
570000 Violencia de Género	spa	1	3,0	2018-19	8,7 (NT) /B
572140 Mujeres y Sistema Penal: Discriminaciones de Género y Estereotipos	spa	1	3,0	2018-19	8,8 (NT) /B
<b>MDD626 Materia: Sistema Penal y Política Criminal</b>					
570001 Sistema Penal Estático y Dinámico: Globalización y Perspectivas Internacionales	spa	1	3,0	2018-19	9,0 (SB) /C
570002 Estructura, Elementos y Funciones de las Normas Jurídico-penales	spa	1	3,0	2018-19	7,5 (NT) /C
570003 Política Criminal Contemporánea	spa	1	3,0	2018-19	9,0 (SB) /B
<b>MDD627 Materia: Técnicas de Investigación en Criminología</b>					
570004 Técnicas de Investigación en Criminología	spa	1	3,0	2018-19	8,8 (NT) /C
570005 Taller de Investigación	spa	1	3,0	2018-19	9,0 (SB) /C
<b>MDD628 Materia: Política Criminal I</b>					
570006 Delincuencia Organizada y de Cuello Blanco	eng	2	3,0	2018-19	9,5 (SB) /A
570007 Análisis y Evaluación de Políticas de Seguridad	spa	2	3,0	2018-19	8,8 (NT) /C
570008 Evaluación y Tratamiento de Delincuentes de Alto Riesgo	spa	2	3,0	2018-19	8,5 (NT) /B
570009 Enjuiciamiento Criminal: Procesos y Garantías	spa	2	3,0	2018-19	10,0 (SB) /A



Asignaturas	Idioma Docencia	Tipo	Créditos	Curso	Calificación/ Calif. ECTS
570010 Criminología Avanzada	cat	2	3,0	2018-19	9,0 (SB) /A
570011 Delincuencia Sexual	nc	2	3,0	2018-19	7,0 (NT) /E
570012 Ejecución Penal y Medidas Alternativas	spa	2	3,0	2018-19	9,0 (SB) /C
570034 Comunidad, Entorno y Prevención	spa	2	3,0	2018-19	8,9 (NT) /B
570035 Mediación	spa	2	3,0	2018-19	10,0 (SB) /A
<b>MDD62B Materia:Política Criminal II</b>					
570023 Medicina Legal y Criminalística	spa	2	3,0	2018-19	9,5 (SB) /A
<b>MDD62D Materia:Criminología Especial</b>					
570028 Excepcionalismo y Tratamiento de la Inmigración	spa	2	3,0	2018-19	9,0 (SB) /B
570030 Tecnología, Cibercriminalidad y Seguridad	spa	2	3,0	2018-19	9,3 (SB) /nq
572138 Victimización y Sistema Penal: la Experiencia del Sujeto	spa	2	3,0	2018-19	8,1 (NT) /C
572141 Justicia para y sobre los Niños y Jóvenes	spa	2	3,0	2018-19	9,0 (SB) /D
<b>MDD62F Materia:Trabajo Final de Máster</b>					
570033 Trabajo Final de Máster	-	1	18,0	2020-21	PC
<b>MDD62W Materia:Sociología Jurídico-penal I</b>					
572142 Políticas de Drogas y Derechos Humanos: Prohibicionismo versus Regulación	spa	2	3,0	2018-19	8,0 (NT) /C

Idiomas de la docencia (Norma ISO-639-3):

cat: catalán | spa: español | eng: inglés | -: sin valor | nc: no consta

#: asignatura cursada en otra universidad

1: Obligatoria | 2: Optativa

PC: Pendiente de calificación | RC: Reconocida | CN: Convalidada | NP: No presentado

El sistema de calificaciones se regula en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, y se expresa de acuerdo con la escala numérica siguiente, del cero al diez.

0,0 – 4,9: (SS) suspenso

5,0 – 6,9: (AP) aprobado

7,0 – 8,9: (NT) notable

9,0 – 10: (SB) sobresaliente o (MH) matrícula de honor

Total créditos a superar por el alumno para la obtención del título: 90,0

Total créditos superados: 72,0

Nota media ponderada: 8,9

El sistema de calificaciones ECTS de la UB muestra la calificación del estudiante en relación a los resultados del alumnado que ha superado la misma asignatura de los dos cursos anteriores, de acuerdo con la escala siguiente:

Los estudiantes que han superado una asignatura se dividen en cinco grupos: al 10% mejor se le concede una calificación A, al siguiente 25% B, al siguiente 30% C, al siguiente 25% D y al 10% final E; "nq" en el caso que sea no cuantificable.



El Máster Oficial de Criminología, Política Criminal y Sociología Jurídico-penal de la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona tiene una carga lectiva de créditos:

Créditos mínimos: 90,0 créditos

Créditos máximos: 90,0 créditos

***Este documento sólo es válido a efectos: Hacer trámites internos en la UB***

Barcelona, 3 de junio de 2021

Código seguro de verificación: zoRZEwtWKrLNWHNDBgEk